Ciudadanía y representación política : Argentina en perspectiva comparada

Isidoro Cheresky, Olivier Dabène

▶ **To cite this version:**

Isidoro Cheresky, Olivier Dabène (Dir.). Ciudadanía y representación política : Argentina en perspectiva comparada. Facultad de Ciencias Sociales; Centre de recherches internationales, pp.176, 2013. hal-03456341

HAL Id: hal-03456341
https://sciencespo.hal.science/hal-03456341

Submitted on 30 Nov 2021

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives 4.0 International License

Ciudadanía y representación política
Argentina en perspectiva comparada

Isidoro Cheresky
Olivier Dabène
(compiladores)

Rocío Annunziata
Osvaldo Iazzetta
Julieta Lenarduzzi
Lucas Martín
Victoria Ortiz de Rozas
Hugo Quiroga
Dolores Rocca Rivarola
Darío Rodríguez
Maricel Rodríguez Blanco

SciencesPo. | opalc
Centro de Estudios Políticos
Equipo Las Nuevas Formas Políticas
Universidad de Buenos Aires

ECOS-MINCYT

Ciudadanía y representación política

Argentina en perspectiva comparada

Citoyenneté et représentation politique

Argentine en perspective compararée

Isidoro Cheresky & Olivier Dabène
Compiladores / Compilateurs

Índice

Nota preliminar 3

Representación política y "contrademocracia"
Isidoro Cheresky..... 4

Reflexiones preliminares sobre la ciudadanía en el MERCOSUR
Olivier Dabène..... 14

Ciudadanía y democracia. Problemas de representación en América latina
Hugo Quiroga..... 21

Luces y sombras del regreso del estado en Argentina
Osvaldo Iazzetta..... 29

Escenificaciones ciudadanas, publicidad y legitimidad democrática en la Argentina contemporánea (discusiones teóricas)
Lucas Martín..... 41

« Être présent » et « re-présenter »: Peut-on parler d'une « politique de la présence »?
Rocío Annunziata..... 59

De la contestation sociale à la prestation de services ciblés : l'organisation « piquetera » Tupac Amaru en Argentine
Maricel Rodríguez Blanco..... 79

Política provincial y mediadores políticos. Un aporte al estudio de los partidos políticos en el territorio
Victoria Ortiz de Rozas..... 109

¿Partido oficial o actor relegado? El PJ y el PT durante el gobierno de Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva
Dolores Rocca Rivarola..... 122

Cambios en la vida política argentina y la constitución de los liderazgos de Carlos Menem (1989-1995) y Néstor Kirchner (2003-2007)
Darío Rodríguez..... 141

Como si el poder estuviera en otro lugar: reflexiones en torno a la "renovación" y la "nueva política" en la Argentina contemporánea
Julieta Lenarduzzi..... 158

Nota preliminar

La presente compilación, resultado de un trabajo colaborativo iniciado en 2009, ofrece diversas interpretaciones acerca de las mutaciones contemporáneas de la democracia argentina, haciendo hincapié en dos dimensiones de este fenómeno: por un lado, los cambios en la representación, ligados a nuevos tipos de liderazgo, nuevos formatos organizativos, actores y formas de legitimidad; por otro lado, las transformaciones en la ciudadanía, sus formas de figuración, expresión y aparición en el espacio público y los cambios en el Estado de derecho. Dado que ambas dimensiones se encuentran entrelazadas, los interrogantes que recorren esta obra son: ¿Cómo ha cambiado el vínculo representativo? y, dados estos cambios ¿Cómo caracterizar a la ciudadanía, a los representantes y a la democracia? A partir de la exploración comparativa de diversas experiencias en nacionales y locales, este libro conjunto busca contribuir a una indagación más profunda del nuevo formato democrático que se está consolidando en la actualidad.

El libro condensa los avances de investigación de los miembros del proyecto "Ciudadanía y representación política. Argentina en perspectiva comparada", que han llevado adelante conjuntamente el Observatoire Politique de l'Amérique Latine et les Caraïbes (CERI-Sciences Po) y el Equipo Las nuevas formas políticas (Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA). Este proyecto ha sido posible gracias al programa ECOS-MINCyT, que ha permitido llevar adelante intercambios entre investigadores y becarios argentinos y franceses durante el período 2010-2012. Dado que se trato de un proyecto entre dos países y dos lenguas, al recorrer las páginas el lector se encontrará con artículos escritos en español o francés.

Representación política y "contrademocracia"

Isidoro Cheresky

La vida política ha experimentado transformaciones significativas en las sociedades contemporáneas y particularmente en América Latina. Hace ya dos décadas, Bernard Manin argumentó que asistíamos a una transición de la "democracia de partidos", que habría sido típica en el siglo veinte, a una "democracia de audiencia" (que llamó también "democracia de lo público") que sería característica de nuestro tiempo, con mayor libertad de los líderes políticos en la búsqueda de líneas de diferenciación política que ya no provendrían "naturalmente" de la conflictividad social. Pierre Rosanvallon, en *La contre démocratie* (2006) y en *La legitimité démocratique* (2008), desarrolló un diagnóstico según el cual se estaría produciendo una transición de un régimen con predominio del sistema representativo a otro de coexistencia de éste con una institucionalidad formal e informal –alimentada por la desconfianza ciudadana en los gobernantes- que relativizaría y hasta contrarrestaría la legitimidad electoral; se requeriría para gobernar atender a una ciudadanía activada por otras legitimidades y representaciones. En otras palabras, la consagración de gobernantes en el acto electoral sería un momento –necesario pero insuficiente- de una democracia continua en que la ciudadanía no deja de pronunciarse y fluctúa en sus alineamientos. Continuar una indagación en la línea apuntada requiere examinar algunos conceptos de referencia del régimen político (representación, deliberación, participación).

En el período más reciente se han presentado una diversidad de situaciones en América Latina: transiciones a la democracia prolongadas y problemáticas (particularmente en México y Chile), emergencia de regímenes fundacionales (en Bolivia, Venezuela y Ecuador), y en otro casos la vida política ha transcurrido por canales inusuales y renovados (aún en Uruguay la desarticulación del bipartidismo que llevaba sus años ha sido una gran novedad). Los recursos de la política y los liderazgos (las elites políticas) son considerablemente diferentes a las del pasado. Términos acuñados en contextos generales a los que hemos aludido precedentemente como "democracia de lo público" o coexistencia de representación y "contrademocracia" han sido entonces empleados en la región para definir lo que es considerado una verdadera mutación democrática.

En el contexto latinoamericano, con frecuencia, se considera a los regímenes políticos imperantes como "democracias electorales". Pese a que en muchos casos se registran deficiencias, de significación variable, en los comicios (México, el más reciente en las presidenciales de 2006), o en la legislación que los regula (Venezuela con la distribución muy desigual de los legisladores por distritos, Chile con el sistema binominal de atribución de bancas de diputados, etc.), se reconoce que las elecciones son las que instalan gobernantes legítimos (en los países de la región no hay otros en el poder que aquellos consagrados en las urnas), y que incluso son el recurso para dilucidar crisis y encaminar el antagonismo con un mínimo encuadre de pacificación social. Pero esa referencia se asocia, desde ópticas diversas, a su descalificación, pues se la considera un estadio de "democracia

elemental". Esta perspectiva apunta a poner de relieve que el resultado electoral puede habilitar el ejercicio de un poder presidencial concentrado y desconocedor de las restricciones institucionales dado que con frecuencia en estas sociedades el marco republicano (la división de poderes, los órganos públicos de auditoria, irrestrictas libertades públicas, y la legalidad en general) es débil. Puede ser, en ese contexto, que se coarten las libertades públicas al menos en la modalidad hasta entonces existente y que el líder/ Presidente y su entorno procuren eternizarse en el poder valiéndose de los recursos que les da el control del aparato de Estado.

Puede objetarse a esa perspectiva una generalización apresurada que asocie la democracia electoral con la culminación de proyectos hegemónicos en el monopolio *sine die* de poder, porque aunque en muchos casos estas democracias presentan déficits institucionales, continúan, sin embargo, siendo competitivas. Lo cierto es que los proyectos que ambicionan perpetuarse en el poder son el resultado de procesos electorales efectivos y en tanto esta característica se mantenga, el eternizarse en el poder encarnándolo en un movimiento o en un líder, persiste como pretensión. Los ciudadanos, los electores, convalidan el ejercicio del poder y con frecuencia en el caso de los regímenes de pretensión fundacional, esto se da con apoyos muy significativos. En varios de los regímenes existentes – fundacionales o no fundacionales- en paralelo a la declinación de la institucionalidad tradicional se ha expandido una movilización de nuevas características (en algunos casos en el registro "popular" más conocido y en otras con modalidades "ciudadanas" inéditas) y aún una institucionalidad informal.

De modo que las "democracias electorales" en sus diversas variantes no deberían ser consideradas simplemente como democracias incompletas, evaluadas así tomando como unidad de medida el paradigma clásico de democracia. Esta óptica del "desvío" de las democracias de la senda institucional subraya falencias ciertas referidas a que los viejos regímenes que se resquebrajan habilitan con frecuencia escenas políticas donde se burlan las leyes y las Constituciones, pero dicha óptica no percibe los cambios societales y culturales que han modificado radicalmente la vida política y particularmente la relación de los ciudadanos con los gobiernos y los Estados. De modo que ese análisis político tradicional interpreta el presente como si los "desvíos" actuales fueran a ser superados por un encarrilamiento que conduciría a los canales institucionales clásicos, que si bien fueron infrecuentes en América Latina, eran el modelo que proveían las democracias del Hemisferio Norte y los manuales de ciencia política.

Se puede considerar sin embargo que la "mutación democrática" a la que asistimos, -no en sus derivaciones circunstanciales, sino en sus condicionamientos históricos y sociales- es irreversible. Si así fuese, el desafío sería no el de juzgar cuán conforme a la tradición es la evolución actual, sino el de identificar la posible evolución futura de la descomposición del sistema representativo. Para que ello sea posible conviene percatarse que este cambio de época se registra también en los países de tradicionales democracias maduras así como en las sociedades que emprenden su democratización (como las de parte del mundo árabe), pero bajo modalidades inéditas. La descomposición del sistema representativo tradicional y la emergencia de formas más efímeras de representación electoral y no electoral e incluso de autorepresentación y una sociabilidad posibilitada por las nuevas tecnologías de comunicación bastante sustraídas a las posiciones en el mundo del trabajo parecen ser rasgos comunes, con características variables, de la referida mutación en las diferentes latitudes.

En síntesis, para abrir los ojos a lo que sucede debería ser posible no identificar a la democracia con un momento de su historia y con un dispositivo institucional particular.

Ello no quiere decir que la mentada mutación democrática sea una creación *ex nihilo* y no se reconozcan continuidades.

I. La elección, para consagrar gobernantes legales

El electoralismo se ha extendido en América Latina, no sólo en el ámbito de la representación política sino también en la vida asociativa, gremial y aún en las protestas *ad hoc*. Es la reafirmación de un principio de igualdad ciudadana que se encuentra por doquier.

Pero, en el ámbito específicamente político, la vigencia de las elecciones –a veces atenuada por la desafección ciudadana traducida en abstencionismo- reviste un carácter paradójico. Las elecciones dan sustento a un gobierno reconocido y son también la oportunidad, a veces, para dirimir pacíficamente rumbos políticos en contextos de antagonismo o de crisis, pero su alcance se ha limitado a atribuir legalidad a los gobernantes. Es cada vez menos frecuente que la postulación para las responsabilidades ejecutivas se acompañe de un programa de gobierno, y aún cuando ello sucede tiene pocas implicancias para la ulterior relación gobernantes/gobernados. Las propias circunstancias cambiantes obligan a los gobernantes a redefinir rumbos y con frecuencia a archivar promesas. De modo que el voto es una opción en una escena en que se eligen gobernantes entre ofertas que aspirar a ganar la confianza y en la que algunos o muchos electores con frecuencia optan por efecto de negatividad (se vota la alternativa a un adversario o el castigo a una acción de gobierno). De modo que en los tiempos presentes parecen revalidarse las teorías de los pensadores elitistas.

Este debilitamiento del mandato o del voto programático puede estar acompañado de un sentido consistente. Es lo que sucede con el pronunciamiento ciudadano en el inicio de los ciclos en que se han presentado alternativas generales de rumbo político: la coalición antidictatorial (La Concertación en Chile luego que Pinochet perdiera el plebiscito), la salida de una crisis profunda (la Argentina luego de la debacle 2001/2002), la alternativa crítica que encarna el derrumbe de un sistema político (Venezuela, Bolivia, Ecuador luego del fracaso de sus democracias limitadas). Sin embargo, aún en esos casos el voto ha tenido un componente variable de negatividad y eventualmente el apoyo a un rumbo genérico más que a un programa de gobierno.

Aunque las elecciones consagran gobernantes legítimos o más estrechamente investidos de una legalidad que no es puesta en duda, las decisiones de gobierno más significativas, las que se sitúan en el centro de la agenda pública, requieren de una legitimidad específica. Del voto no se deriva una lealtad con los representantes que vaya a sostener cada una de sus decisiones. Debe entenderse que la legalidad de los gobernantes sólo es puesta en cuestión en situación de crisis extrema, y ello es infrecuente (con la importante salvedad de los gobernantes que ha debido dejar el poder por la desafección ciudadana: Collor de Melo en Brasil, Sánchez de Lozada en Bolivia, Fujimori en Perú, Bucaram y Gutiérrez en Ecuador, De la Rúa en Argentina), y está disociada de la legitimidad de los actos de gobierno que son motivo de un pronunciamiento ciudadano implícito o explícito en cada caso (como se ha visto con los vetos ciudadanos en los años recientes, por ejemplo en Bolivia con el reajuste de precios de los hidrocarburos; en Argentina con el incremento de los gravámenes a las exportaciones agropecuarias; en Chile con el sistema de transporte Transantiago y luego con las reformas educativas).

En términos generales puede constatarse un desplazamiento en los atributos de los gobernantes. A la vez que se refuerza la tendencia a la concentración del poder en el líder/Presidente y su libertad de acción, se han vigorizado instituciones pre existentes o recientemente creadas que asumen funciones de control o de veto y cuya "función representativa" se deriva de la pretensión de imparcialidad de la que están investidas y del reconocimiento ciudadano a ese desempeño. Estas autoridades tienen pertinencia para el respeto de las reglas de juego (electorales y de competencia política u otras), en la protección de derechos (cortes constitucionales o comisiones sobre una variedad de derechos desde los ambientales hasta los de salud) o en el ámbito de la preservación de la verosimilitud pública (diferentes ONGs, medios de comunicación u otras que denuncian o llaman la atención de la opinión pública sobre la información que circula) .
De modo que, junto a la representación que surge de una voluntad mayoritaria expresada en las urnas, se despliegan instituciones de representación, legales unas e informales otras, que actúan en nombre de una imparcialidad que procura preservar los principios generales constitutivos de la comunidad política (los derechos, la vigencia de principios constitucionales o su interpretación ampliatoria) satisfaciendo una aspiración de consenso, presente en las sociedades democráticas a la par del reconocimiento a la irreductible de la adversatividad política, aspiración que se reaviva cuando la institucionalidad representativa tradicional se ha debilitado o resquebrajado (partidos políticos, Congreso).

Precisamente, otra paradoja es que en tanto las elecciones marcan la vida pública, los principales recursos del dispositivo de la representación se hallan debilitados o desarticulados. Es decir que con frecuencia a la hora de la renovación periódica de los representantes, no se registra una continuidad ni en las identidades políticas partidarias, ni en las alianzas y los alineamientos ciudadanos. La competencia política, que en el pasado tenía como referente al sistema de partidos, en muchos casos no lo tiene más y aún en donde persiste cierta continuidad institucional, ésta se halla jaqueada o desequilibrada por las identidades emergentes (en las últimas elecciones presidenciales en Chile con la candidaturas de Henriquez Ominami y Arrate, en Colombia con la de Mockus).
Los liderazgos de popularidad emergentes, a nivel nacional pero también provincial o distrital, dan la tónica de un proceso de reconfiguración de identidades de tipo personalista. Estos líderes son instituyentes ya sea porque suscitan un lazo representativo para competir electoralmente, o a veces porque luego de acceder al poder reformulan ese lazo representativo sobre bases diferentes (Kirchner en Argentina, quizás Rousseff en Brasil y Bachelet en Chile en sus primeros tiempos.). En todo caso los liderazgos son cada vez más los depositarios de la iniciativa política y los que configuran las alianzas y la oferta electoral. Los partidos, o con frecuencia lo que queda de ellos (las redes territoriales) son un recurso necesario, pero subordinado. No son los que fijan la agenda pública, ni los recursos principales para la comunicación política (aunque esta afirmación no es igualmente válida para las grandes ciudades que para los pequeños poblados). La red territorial ha disminuido su significación, pero aún la mantiene para animar "en vivo" la campaña electoral, para fiscalizar los actos electorales (según el sistema de votación vigente) y -sin dudas- para gobernar.
Puede argüirse que las tradiciones políticas siguen de algún modo vigentes y que la institución de nuevos vínculos representativos no es una pura creación *ex nihilo*, pero ellas ya no están identificadas o monopolizada por una organización o un líder. Cuando guardan vigencia son objeto de disputa y apropiación por unos y otros y aún así para

crecientes sectores ciudadanos los sentidos polémicos del presente tiene primacía por sobre los heredados.
De modo que en esta tendencia –por cierto variable según los casos nacionales- la proximidad de las elecciones inaugura un tiempo de constitución de identidades o, más modestamente, de formación de coaliciones electorales. En muchos casos en vísperas electorales emergen o continúan líderes que tienen o adquieren la capacidad de construir un vínculo representativo y competir. La competencia más desligada de sostenes territoriales y partidarios es la nacional – aunque no desligada de condicionamientos por parte de los poderes fácticos-, y la puja más ilustrativa de los nuevos tiempos es la presidencial.
Dadas las condiciones de desinstitucionalizacion mencionadas, en el escenario preelectoral se configuran identidades y coaliciones en torno a los líderes de popularidad, quienes pueden articular adhesiones porque son locomotoras electorales. La intervención de estos líderes puede proponerse incidir en la consagración de su sucesor (es el caso de Lula Da Silva al promover activamente la candidatura de Dilma Rousseff) o en condicionar las elecciones locales. Se ha subrayado que la débil identificación o aún la desidentificación de los ciudadanos con las fuerzas políticas existentes en cada escena, posibilita la fluctuación en los alineamientos al constituirse la oferta política, cuando se aproximan las fechas electorales. Pero la contrapartida del ciudadano independiente es cada vez más la fluctuación de propio personal político. Sin que se pueda aún hacer referencia a una "clase política" única que se redistribuiría periódicamente, sí puede indicarse que los criterios pragmáticos de alineamiento con tal o cual fuerza política y, para quienes pueden, la creación una nueva etiqueta política, prevalecen por sobre las historias personales y organizacionales y las identificaciones ideológicas. Y ello es cada vez mas cierto aún en aquellas escenas políticas polarizadas.
El carácter cada vez menos programático de las campañas electorales hace que las disputas estén muy relacionadas con la acción del gobierno saliente o de la coalición gobernante –para sostenerla o para buscar su desplazamiento- (es notoria la disociación entre la valoración electoral de la acción del gobernante y la de su fuerza política en el caso de Chile, en donde la popularidad de Bachelet estaba disociada de la de la Concertación). En consecuencia, la novedad de la identidad suele venir por el lado de las oposiciones o de las disidencias (Mockus en Colombia; Piñera y Henriquez Ominami en Chile; López Obrador en México). Con frecuencia se invocan en el lenguaje político partidario las nuevas condiciones de la política con el afán de conquistar las simpatías del electorado: la renovación dirigencial, la democracia ciudadana.
Por sobre todo, cada vez más los candidatos procuran devenir líderes populares actuando con una lógica de proximidad, creando redes alternativas a las partidarias y promoviendo prácticas de contacto directo de tipo identificatorio.

De modo que las campañas electorales cuentan, pues en su transcurso se constituye una escena y suelen configurarse capitales políticos inesperados. Ya no se puede dar por suficiente un voto identitario o cautivo para triunfar. Por el contrario, con frecuencia la campaña puede revertir las expectativas iniciales. Ha sido el caso de varios candidatos que al comienzo de las campañas lideraban las encuestas y luego fueron derrotados: Toledo en Perú, Serra en Brazil, López Obrador en México.
Se configuran coaliciones en torno a los líderes de popularidad en pugna, quienes son los verdaderos referentes de la escena electoral. Estas coaliciones pueden ser formalizadas en compromisos (el caso de Humala en Perú entre la primera y segunda vuelta), pero

también pueden ser solamente aparentes, es decir en verdad actos de cooptación o alianzas de facto obra del poder vertical del líder que incorpora o excluye aliados sin mediar acuerdos formales o institucionales.

Como se señaló, la divisoria de aguas entre oficialistas y opositores se deriva de la evaluación de la gestión de gobierno, pero en los "regímenes fundacionales" puede intentarse o producirse efectivamente un desplazamiento: quienes gobiernan alegan no detentar el poder o estar en disputa por él con los poderes fácticos. La denuncia de las corporaciones, del capitalismo, del mundo de los negocios, o de los monopolios que controlan los medios de comunicación, procura colocar a los gobiernos (sea la revolución ciudadana, la democracia participativa, el socialismo del siglo veintiuno o la Nación multiétnica) en un antagonismo ante los poderes mencionados. Si esa escena se instala, si se hace verosímil, las oposiciones políticas cuando son de "derechas" son tildadas de aliados de los poderes fácticos y si son de "izquierda" son calificadas de instrumentos de los poderosos que debilitan la contradicción principal.

Esta polarización, en donde se han producido reformas sociales o han irrumpido nuevos actores populares en la escena pública, pretende reducir la representación a los dos campos "estructurales " u "objetivos", uno de los cuales está connotado como tributario de la injusticia y eventualmente destinado a desaparecer. La representación del pueblo o de la ciudadanía frente a los poderes fácticos procura simplificar la vida política: la representación ya no es múltiple y construida y reconstruida en la competencia política – donde las identidades nacen y mueren en tanto que ciertos principios generales como la libertad, la igualdad, la justicia social son objeto de permanente reformulación en su adecuación al presente– y, en consecuencia, no se reconocen como legítimas las restricciones al ejercicio absoluto de la pretendida voluntad popular. Los poderes de imparcialidad (en particular las Cortes Constitucionales) o los mediáticos son ignorados o imputados por su pretendido -y a veces real- alineamiento con el campo de los poderes fácticos que quieren detener las reformas. Existe con todo un límite que ha sido operante hasta ahora en preservar la competencia y evitar la encarnación de los principios en actores políticos específicos: el pronunciamiento electoral ciudadano.

Sin embargo, puede registrarse el sesgo particular de la lucha política en el escenario descripto. El polo fundacional pretende ser la encarnación de principios transformadores, y el modo de ejercicio del poder es conforme a la encarnación: poco deliberativo y muy decisionista. El polo "crítico" suele ser una amalgama entre sectores democráticos hostiles al arrasamiento institucional y al autoritarismo, y sectores hostiles a las reformas sociales y a la ampliación democrática que conllevan. Con frecuencia estos últimos son los mas activos y pueden dar la tónica de la oposición al proyecto fundacional, que justifique la interpretación que hace hincapié en la naturaleza social de la confrontación en detrimento de su carácter político y democrático.

II. La "contrademocracia": de la representación tradicional a la democracia continua

En las democracias de América Latina, como en muchas de las del Hemisferio Occidental y aún en otros territorios (el mundo árabe recientemente) la mutación democrática ha significado una ampliación y desplazamiento del eje de la vida política. La expresión de la voluntad popular o ciudadana por medio de la representación ha sido relativizada por la expansión de los "poderes indirectos" (Rosanvallon, 2006). Es decir que se han instalado otras legitimidades que relativizan el mandato atribuido por la mayoría electoral, y que

apuntan a proteger el derecho de todos, a asegurar la contemplación de los reclamos en un mundo de diversidad y a prestar atención a las particularidades emergentes. Puede concebirse de este modo una democracia continua: la ciudadanía no es tan sólo electorado y el poder no está concentrado en los representantes; la expresión ciudadana (pasiva o activa) va más allá del acto electoral. La representación ejercida por los organismos de control verosímiles para los ciudadanos, las autoridades investidas de autoridad moral, los observatorios y otras instituciones que argumentan sobre iniciativas y decisiones, así como simplemente las encuestas de opinión o las formas de auto representación por medio de protestas, configuran un segundo polo de la vida política que tiene un carácter permanente aunque algunas de sus expresiones sean episódicas.

Esta proliferación de instituciones y de grupos emergentes, verdadera fragmentación del mundo socio político, ha justificado la relativización de la referencia al pueblo como sujeto eventual y aún como ideal de unificación de una voluntad común, y ha derivado en nombrar a los individuos de las sociedades contemporáneas en términos de ciudadanía (individuos tributarios de derechos que fluctúan en sus adhesiones asociativas y en sus identificaciones políticas) y de minorías (que corresponden a grupos específicos que requieren palear carencias en la atención social, o reconocimiento en vistas a su inclusión explícita en el universo de los iguales).

Ya al considerar el sistema representativo se ha mencionado el debilitamiento o extinción de los partidos y de las identificaciones que les daban una argamasa de leales o representados, y la expansión en su lugar de redes en que los referentes tienen poca capacidad disciplinadora y tienden más bien a reflejar las fluctuaciones de su micro mundo de clientes o adherentes en las articulaciones coalicionales en las que se inscriben. Los líderes de popularidad que emergen, instituyentes, son la contracara de la ciudadanía compuesta por individuos y minorías. En la política, en consecuencia, la ilustración de esa nueva sociabilidad la provee la centralidad de los liderazgos y la conformación en torno a ellos de coaliciones o alianzas. En términos más generales podemos decir que coexisten formas partidarias, con liderazgos que tienen con frecuencia una centralidad superior a las estructuras organizacionales, y la configuración más abarcadora, sobretodo ahí donde el sistema de partidos sufrió una severa crisis, de movimientos en los que convergen diferentes sensibilidades, tradiciones e intereses en torno a una acción emprendida por el líder (los casos de los oficialismos boliviano y argentino son particularmente ilustrativos de ello).

Las masas "encuadradas" del pasado tienen una cierta continuidad en las redes de asistidos de los sectores más carenciados que a veces permanecen disciplinados, y en las identidades comunitaristas. Pero lo que emerge con fuerza en el espacio público son los actores mas espontáneos e informales de intensidad política. La nueva militancia juvenil que se auto convoca por las redes sociales de Internet o por la telefonía celular. La intensidad política, la visibilidad en las plazas y calles o en el cyberespacio bajo esta nueva modalidad, ha cobrado un gran relieve en la vida pública.

Estos nuevos actores emergen en paralelo a un resquebrajamiento del mundo corporativo y asociativo más tradicional. Los sindicatos también se desagregan y la disciplina de los líderes patriarcales o electos está sometida a la deliberación de asambleas de los movilizados en los conflictos o a la disidencia de sectores de actividad disconformes.

En términos generales se registra una diversidad de movilizados, pero lo más notorio es la coexistencia de dos calles o dos presencias sensibles: por una parte, la popular, de reclamos en términos de necesidades usualmente con epicentro en los excluidos y motorizada por el activismo social; y, por otra parte, la ciudadana, la de las clases medias

urbanas -más espontanea y frecuentemente de veto- que a veces reclama en forma convergente y otras fragmentada.

El veto o rechazo a ciertas decisiones de gobierno y el estallido, cuando se trata de un descontento general, pueden abarcar a unos y otros; pero debe considerarse que los sectores medios juveniles, urbanos y profesionales se han convertido en los actores más innovadores y "amenazantes" (no, por cierto, por sus modos de expresión generalmente pacíficos) del espacio público. Probablemente no por una virtud de su condición social en el sentido tradicional, sino porque están más incluidos en los circuitos de comunicación política, más informados y en cierto sentido han adquirido autonomía respecto a las restricciones propias de todo anclaje social.

Un cambio que merece atención (cosa que excede estas líneas) es la gran transformación sociológica propiciada por la vertiginosa expansión de las nuevas tecnologías de la comunicación, algunas ya tradicionales como la televisión y otras más recientes como la telefonía celular, sobre todo Internet y las redes sociales. Esta transformación tecnológica favorece un nuevo tejido de relaciones sociales, las de vínculos de un espacio público sostenido en los medios de comunicación. Como se ha indicado, surgen nuevos actores en las redes sociales y en los blogs.

Los excluidos, como ha sido el caso de los "piqueteros" y de otras denominaciones de la pobreza y la exclusión, se constituyen en el espacio público por medio del bloqueo y el corte de ruta. Allí, en esa acción que interfiere la "normalidad de la circulación" y que resuena por la difusión que le dan los medios de comunicación, cobran existencia los piqueteros y otras identidades que revelan un reclamo social pero que, con frecuencia, no provienen de ninguna localización o condición social homogénea, sino que son aglutinados por la propia acción de reclamo o protesta.

El impacto de estas acciones, ejecutadas a veces por pequeños grupos, no repercute tan sólo ni principalmente en quienes presencian la acción disruptiva y resultan afectados. Es sobre todo el espacio televisivo, radial y la prensa gráfica que les da visibilidad nacional e internacional y de ese modo las demandas y la identidad novedosa se alojan en la agenda pública. En resumen, perturbación funcional (de la circulación de personas y de provisiones) pero sobre todo visibilidad, sensibilización de una "opinión ciudadana" que no los conocía[1].

Otros sectores más heterogéneos, espontáneos y probablemente con sede en las capas medias urbanas, comunicados principalmente a través de Internet emergen y se instalan en otro espacio público. Expresan con frecuencia más un veto, o un descontento o una denuncia que una demanda específica. Estos nuevos cyber sujetos, con presencia visible ocasional cuando se reúnen y manifiestan, constituyen una trama de igualdad e intensidad subjetiva. Con su expansión se produce un significativo desplazamiento en la comunicación política, al menos para un sector mas juvenil de la sociedad. En el ámbito público virtual que se genera rige un principio que coloca a cada uno de los integrantes en pie de igualdad; pareciera que se alcanza de ese modo un ideal de la libertad y espontaneidad deliberativa, pese a que en verdad las jerarquías y reconocimiento de la sociabilidad habitual continúan siendo operantes. Sin embargo, lo que ocurre en este ámbito es novedoso. La relatividad de la opinión tiende a adquirir un rango de verdad pues, lo que se emite esta avalado por la intensidad subjetiva (Sarlo, 2011). De modo que una lógica de autenticidad se impone naciendo de rumores, impresiones y conjeturas,

[1] Estas prácticas de protesta disruptiva se han extendido a otros grupos sociales que juzgan su acceso habitual al espacio público insuficiente. Aumenta la tentación de acudir a ellas como modo de hacerse oír.

certezas que animan la cohesión de grupos que pueden devenir actuantes. De modo que un espacio fuera de toda regulación es propenso a recoger el descontento ciudadano característico de nuestro tiempo (Rosanvallon, 2006), favoreciendo la amplia libertad de expresión, pero también convalidando certezas, hilvanando la trama de teorías conspirativas, etc.

Esta nueva sociabilidad en expansión encierra en consecuencia una promesa de libertad y una amenaza de arbitrariedad. Cuando la diversidad de opiniones individuales y grupales deviene una certeza mayoritaria o colectiva con más sustento emocional que argumentativo, se perfila una forma de clausura del espacio público con el predomino de una forma novedosa de "la masa" como figura opuesta a la ciudadanía deliberativa. Se esboza así la evolución hacia un espacio sin contorno ni epicentro, con redes múltiples en donde predomina la auto representación aunque se pueden reconocer en las redes la diferencia entre emisores privilegiados y seguidores (ambos probablemente transitorios) .

Como se ha señalado, el espacio público descrito constituye un desafío para el futuro democrático. Puede acentuar la fragmentación ciudadana y recoger la negatividad (veto), todo ello en desmedro de una comunidad política que se reconozca en dilemas o alternativas comunes. Es decir: puede prevalecer una expresividad generalidad que no vaya mas allá de sí misma, que se fije como impolítica. No es inevitable que ello suceda. Una evolución que dé productividad democrática a esta ampliación de sus principios constitutivos (libertad e igualdad) pueden sobrellevar las "falencias de la espontaneidad", si la diversidad apuntada alterna con instituciones formales e informales acreditadas por la verosimilitud de sus informaciones y por la posibilidad de procurar algún ordenamiento de los debates y algún encaminamiento de lo que haya de reclamos hacia canales normativos y legislativos. Asimismo, la vida política no puede prosperar si sólo impera la espontaneidad y la fragmentación; los actores que deberían alentar el debate estratégico están debilitados y deberían reconstituirse en consonancia con la realidad de nuestro tiempo.

Bibliografía

Cheresky, I. (2006a). La ciudadanía en el centro de la escena. En I. Cheresky (comp.) *Ciudadanía, sociedad civil y participación política*. Buenos Aires: Miño y Dávila.

---------- (2006b). *Poder presidencial, opinión pública y exclusión social*. Buenos Aires: Manantial.

Dagnino, E., A. Olvera y A. Panfichi (2006/2010). *La disputa por la construcción democrática en América Latina*. México D.F.: CIESAS/UV.

Gonzalez, H. (2011). *Kirchnerismo, una controversia cultural.* Buenos Aires: Colihue.

Hardt, M. y A. Negri (2004). *Multitud. Guerra y democracia en la era del imperio*. Barcelona: Debate.

Manin, B. (1995). *Principes du gouvernement représentatif*. París: Calmann-Levy.

Mouffe, C. (2007). *En torno a lo político*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

O'Donnell, G. (1993). Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas conceptuales. Una perspectiva latinoamericana con referencias a países poscomunistas. *Desarrollo Económico* 33 (130).

Olvera, A. (2006). *Democratización, Rendición de Cuentas y Sociedad Civil: Participación Ciudadana y Control Social*. México: Miguel Ángel Porrúa/CIESAS/Universidad Veracruzana.

---------- (2010). *La Democratización Frustrada: Limitaciones Institucionales y Colonización Política de las Instituciones Garantes de Derechos y de Participación Ciudadana en México.* México: CIESAS/UV.

Rancière, J. (1998). *Aux bords du politique*. París: La fabrique.

Rosanvallon, P. (2006). *La contre-démocratie*. París: Seuil.

---------- (2008). *La legitimité démocratique*. París: Seuil.

Rouquié, A. (2009). *La démocratie en Amérique Latine. À l'ombre des dictatures*. París: Calmann-Levy.

Sarlo, B. (2011). *La audacia y el cálculo*. Buenos Aires: Sudamericana.

Schnapper, D. (2002). *La démocratie providentielle*. París: Gallimard.

Reflexiones preliminares sobre la ciudadanía en el MERCOSUR

Olivier Dabène

La ciudadanía se define generalmente como un conjunto de derechos y deberes que permite a los miembros de una comunidad política participar a los asuntos públicos. Esta definición muy general puede desagregarse en diferentes componentes. Como conjunto de derechos y deberes, tiene un componente político y jurídico, que es función de la correlación de fuerzas políticas imperante y de la secuencia histórica[1] en la que se encuentra la comunidad. Como participación, tiene un componente identitario (sentimiento de pertenencia a una comunidad política), simbólico (representación del interés general) y social (disposición a participar).

Cualquiera que sea el enfoque, se ha vuelto sentido común hacer observar que la globalización ha producido una serie de consecuencias sobre el ejercicio de la ciudadanía, en particular en lo que se refiere a los *niveles y grados de pertenencia a diferentes comunidades políticas*. Con la aceleración del tiempo y el achicamiento del espacio, se consolida el sentimiento de pertenecer a una "aldea global". Adicionalmente, cada vez más las decisiones importantes que afectan el nivel y la calidad de vida de los ciudadanos se toman al nivel internacional o multilateral, que sea en la política o en la economía. De ahí la toma de conciencia que el juego democrático que se desarrolla a los niveles local y nacional pierde sentido.

En reacción contra esas tendencias globales, se puede observar un resurgimiento de un cierto localismo. Lo local funciona como un refugio en tiempos de dilución de las identidades, al mismo tiempo que se desarrollan experiencias participativas donde los actores buscan solucionar sus problemas colectivos. La representación del interés general se consolida de forma facilitada al nivel local.

Otro tipo de reacción, los movimientos sociales que han surgido a lo largo de los años 90 contra la globalización neoliberal, han contribuido a conformar redes transnacionales con raíces locales.[2] Tanto el mensaje, "Piensa global, actúa local" o también "Piensa local, actúa global", como la metodología, i.e. el efecto boomerang (Keck y Sikkink, 1998), apuntan a un universo de sentido (*frame*) que une diferentes niveles de orden político.

Ahora bien, entre lo nacional residual, lo global victorioso y lo local resucitado, aparece también un orden político al nivel regional que se vislumbra como otro espacio de identificación y de construcción de políticas públicas mediante los procesos de integración regional. De tal manera que debemos *pensar una ciudadanía multi-nivel, asociando de forma compleja cuatro niveles, local, nacional, regional y global, con derechos diferenciados y espacios de identificación y participación distintos.*

[1] La famosa secuencia derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales de Thomas Humphrey Marshall.
[2] La figura clave del « rooted cosmopolitan » de Sydney Tarrow (2005).

En este artículo, vamos a considerar el nivel regional, que ha sido poco estudiado en el MERCOSUR, y tratar de identificar elementos de ciudadanía a ese nivel. Lo vamos a hacer "desde arriba", estudiando los derechos otorgados, y "desde abajo", analizando procesos de interacción entre los actores sobre una base transnacional. En ausencia de fuente seria de conflicto entre los países, postulamos que todo tipo de interacción creciente entre actores provenientes de diferentes países aumenta el sentimiento de pertenecer a una misma región. Sentimiento que difícilmente se puede medir, sino a través de encuesta de opinión (segunda razón por la cual mi estudio es preliminar, no incluye este tipo de medida).

Esas interacciones crecientes pueden medirse a través de la movilidad espontánea de personas (flujos de turistas, estudiantes y profesores, empresarios e inversionistas, artistas…) y lo que la puede acompañar (aprendizaje de idiomas, matrimonios mixtos…) y facilitar (normas comunitarias). También se pueden identificar espacios institucionalizados de interacción, donde se organiza una deliberación con el propósito de construir un interés general al nivel regional. En esa categoría entran los parlamentos regionales o los foros y consejos consultivos.

En lo que sigue, vamos a revisar en primer lugar la normativa del MERCOSUR que de alguna manera puede contribuir a la construcción de una ciudadanía mercosuriana. En segundo lugar, nos detendremos sobre el Foro consultivo económico social (FCES), que tiene más años de existencia que el Parlamento del MERCOSUR.

I. Ciudadanía y normas comunitarias

La diferentes normas que han sido adoptadas a lo largo de los casi veinte años de existencia del MERCOSUR tienen como propósito principal precisar las modalidades de implementación de los objetivos fijados en el Tratado de Asunción (TA 91) y después el Protocolo de Ouro Preto (POP 94). Dichos textos han sido adoptados en una época dominada por una concepción despolitizada de la integración, o sea muy centrada en el libre comercio.

De tal forma que no debe sorprender el hecho de que los avances iniciales registrados en términos de ciudadanía regional hayan sido un simple derrame del avance del libre comercio. Es interesante, en ese sentido, relevar que el TA91 menciona en su artículo 1 que el Mercado común implica "la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países", sin referirse a las personas. Sin embargo, las autoridades del MERCOSUR tardaron menos de un año a darse cuenta que no puede haber comercio sin comerciantes. Tal como lo indica el preámbulo de la decisión CMC 12/91:

> CONSIDERANDO:
> Que es necesario avanzar en la implementación progresiva de la integración, que implica un espacio regional donde pueden circular libremente los ciudadanos y residentes de los Estados Partes del Mercado Común, así como sus bienes, servicios y factores productivos,
> Que en consecuencia es necesario armonizar las medidas aduaneras y migratorias para garantizar la mayor fluidez en el tránsito entre los Estados Partes…/…
> DEC.12/91

A partir de esa decisión 12/91, el MERCOSUR inaugura una serie de medidas destinadas a otorgar derechos tendientes a facilitar la circulación dentro de la zona.
Sin embargo, al inicio son derechos diferenciados, ya que favorecen ciertos sectores profesionales. El MERCOSUR tiene un sesgo favorable a la comunidad académica y científica de un lado, y a la comunidad empresarial del otro. Para los demás, el MERCOSUR se limita a ofrecer una mención en el pasaporte y un corredor en los aeropuertos, y se queda lejos de organizar un espacio regional de libre-circulación.
El caso de la comunidad académica merece una mención especial, ya que no solo se busca facilitar los intercambios (cosa que por otra parte hace de forma espontánea la comunidad mediante el Grupo de Montevideo), sino que también organiza un sistema de reconocimiento de título para dar sentido a la constitución de un mercado de trabajo ampliado.
En los últimos años, se registra una nueva evolución, hacia un espacio de libre circulación para todos y no solamente categorías particulares de la población. La decisión 18/08 busca:

> Perfeccionar la normativa MERCOSUR relativa a los documentos que habilitan el tránsito de personas en el territorio de los Estados partes y asociados del MERCOSUR con miras a generar las condiciones para la libre circulación de las personas en el ámbito comunitario.
> DEC.18/08

En conformidad con los derechos que tienden a organizar la libre-circulación, existe también una voluntad de ofrecer a los ciudadanos de los países miembros la posibilidad de "acceder a la justicia en igualdad de condiciones". Por lo tanto, lo que se busca es "simplificar y allanar las tramitaciones jurisdiccionales, en materia civil, comercial, laboral y administrativa entre los Estados Partes" (DEC. 05/92).
Esa preocupación por la "seguridad jurídica", tiene también mucho que ver con la voluntad de facilitar el libre-comercio, pero tiene obviamente un impacto en términos de ciudadanía regional.
Se han adoptado varios protocolos importantes, sobre cooperación y asistencia (DEC. 05/92), en materia de responsabilidad civil emergente de accidentes de transito (DEC.01/96), sobre asistencia jurídica en asuntos penales (DEC. 02/96) o sobre traslado de personas sujetas a regimenes especiales (DEC. 13/05). También se han adoptados acuerdos en la misma línea. Se tratan de textos que otorgan un derecho de protección.
En esa misma categoría puede entrar, aunque de forma indirecta, la normativa que busca asegurar la seguridad regional del MERCOSUR. En la DEC. 05/98 se esboza un "Plan de cooperación y asistencia recíproca para la seguridad regional", que ha sido complementado varias veces, y que tiene un impacto potencial sobre la seguridad de las personas.
Pasando a dimensiones más políticas, como previamente mencionado, el TA91 es mudo, a pesar de la preocupación por la defensa de la democracia al inicio del acercamiento entre Brasil y Argentina en los años 1984-1989. Con motivo del intento de golpe de estado de Lino Oviedo en Paraguay en 1996, el MERCOSUR aborda el tema y adopta el Protocolo de Ushuaia en 1998. Y después del relanzamiento pos crisis argentina en 2002, se inicia un periodo de reflexión sobre la defensa de los derechos humanos. Siguiendo el trabajo realizado por el Grupo ad hoc sobre derechos humanos, se crea una Reunión de altas autoridades sobre derechos humanos (DEC. 40/04) y se adopta el Protocolo de Asunción

sobre compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos (DEC.17/05). Más recientemente, se creó un Observatorio de la democracia (DEC. 05/07) y un Instituto de políticas públicas de derechos humanos (DEC. 14/09).
Otra evolución destacable de los últimos años, que tiene que ver con la orientación política de los gobiernos (el famoso giro a la izquierda), es la preocupación por la dimensión social de la integración. Ya en 1997 se había firmado un acuerdo multilateral de seguridad social (DEC. 9/97), reconociendo a los trabajadores que trabajan en cualquier país los mismos derechos que los nacionales. Era un típico derrame del libre-comercio. A partir de 2006, hay una nueva ambición de ir hacia una integración más positiva, con la "estrategia de crecimiento del empleo" (DEC. 04/06) que prevé la "articulación de políticas macro-meso y micro económicas con las laborales, sociales y educativas, con el objetivo de generar condiciones de creación de empresas y de empleo digno". El año siguiente se crea el Instituto social (ISM). La meta parece ser diseñar políticas sociales regionales.
La evolución que se acaba de describir retomando la clasificación de Maschall pone en evidencia una ambición creciente. El MERCOSUR ha otorgado sucesivamente derechos civiles, políticos y sociales. Entre las tres categorías, la más débil parece ser la política, sobre todo en cuanto a la vertiente representativa/participativa.
Sin embargo, existe una última categoría de derechos que vale la pena mencionar. Responden a una preocupación de fortalecer la identidad del MERCOSUR. Se han creado los símbolos del MERCOSUR (DEC. 17/02), el dominio MERCOSUR (DEC. 09/06) y se ha incorporado el Guaraní como idioma oficial (DEC. 35/06).
De hecho, varias otras normas entran también en esa categoría. La decisión 33/00 que instala un grupo de trabajo sobre la circulación vial de transporte no comercial menciona: "El impacto positivo que la armonización y difusión de normas de tránsito pueden tener en la percepción de una identidad MERCOSUR entre los habitantes de la región." El caso del Guaraní es interesante porque hace eco (tímidamente) a las evoluciones mas recientes de la ciudadanía en los países "plurinacionales". Muchos países han enriquecido la ciudadanía con el derecho a la diferencia (Bolivia…)
Ahora bien, cabe preguntarse si este conjunto de derechos son conocidos y utilizados. No conozco estudios al respeto, así que no puedo opinar. Pero sospecho que, como siempre en el Mercosur, hay una distancia entre el texto y la práctica. Si en algo puede servir una comparación con Europa: la Ciudadanía europea es mencionada por primera vez en el tratado de Maastricht de 1992. Consiste básicamente en 3 derechos:

- el derecho de voto y elegibilidad para las elecciones locales y europeas para cualquier ciudadano en cualquier país
- el derecho de protección
- el derecho de petición, por el intermedio del Parlamento
-

Son derechos poco conocido y poco utilizados. La participación a las elecciones europeas, por ejemplo, ha bajado constantemente entre 1979 (62%) y 2009 (43%). Sin embargo, es un componente identitario importante.
El Mercosur siendo joven, es poco probable que logre rápidamente consolidar su identidad. Y aun menos cuando surgen iniciativas más globales como la UNASUR. El Preámbulo del tratado (23 de mayo, 2008):

> "Afirman su determinación de construir una identidad y ciudadanía suramericanas y desarrollar un espacio integrado en lo político, económico,

> social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura para contribuir al fortalecimiento de la unidad de América latina y el Caribe".

El Artículo 25 de la Declaración de Quito (10 de agosto, 2009):

> los Presidentes "reafirman su compromiso de avanzar en la construcción de la ciudadanía suramericana, abordando el tema de la migración con un enfoque integral y comprensivo, bajo el respeto irrestricto de los Derechos humanos de los migrantes y sus familias, conforme lo dispuesto en la Declaración de Cochabamba de diciembre de 2006".

II. El FCES como espacio de deliberación (POP 94, Sección V, art. 28 a 30)

Sección V Del Foro Consultivo Económico-Social
Artículo 28 El Foro Consultivo Económico-Social es el órgano de representación de los sectores económicos y sociales y estará integrado por igual número de representantes de cada Estado Parte.
Artículo 29 El Foro Consultivo Económico-Social tendrá función consultiva y se manifestará mediante Recomendaciones al Grupo Mercado Común.
Artículo 30 El Foro Consultivo Económico-Social someterá su Reglamento Interno al Grupo Mercado Común para su homologación.

Diferentes estudios han demostrado que la sociedad civil ha sido muy activa desde el inicio del proceso de integración. A tal punto que, en un estudio previo, me refiero a una integración "desde abajo" (Dabène 2009).
Varios ejemplos incluyen la manera en que actores movilizados de la sociedad civil lograron imponer ciertos temas en la agenda comunitaria y dar lugar a la creación de instituciones, en particular subgrupos de trabajo (SGT) del Grupo Mercado Común (GMC). Así por ejemplo, los sectores sindicales lograron imponer el tema laboral en la agenda oficial, dando origen a la creación en 1991 del SGT 11. De la misma forma, los sectores cooperativistas fueron funcionales para la creación de la Reunión especializada de cooperativas. Otros ejemplos se refieren a la constitución de grupos de presión, como por ejemplo la Cámara industrial del MERCOSUR en 1994, y su participación al SGT 7 sobre política industrial y tecnología.
En otros casos, sectores de la sociedad civil tomaron iniciativas para organizar actividades al nivel del MERCOSUR, sin preocuparse por la estructura orgánica del MERCOSUR, como en el caso de las universidades públicas que crearon el Grupo de Montevideo en 1997, o en el caso de los artistas que crearon la Bienal del MERCOSUR.
Paralelamente a esas iniciativas, el MERCOSUR ha incluido en su estructura orgánica una serie de dispositivos participativos para representantes de la sociedad civil. Los SGT mencionados previamente son ejemplos. El Foro consultivo económico y social (FCES), creado en 1994, es también interesante. En lo que sigue, vamos a concentrarnos en él.
La problemática es la siguiente: ¿Como se teje el interés general mediante sesiones repetidas de deliberación? El interés general debe sobrepasar los intereses particulares. En el caso del FCES, significa examinar como y cuando se borran los clivajes nacionales e sectoriales.

El FCES esta compuesto de un máximo de 36 representantes, 9 por países, y cada sección nacional puede decidir quién lo integra, con un esquema 4+4+1 (4 para el sector empresarial, 4 para los sindicatos, 1 para el tercer sector). Se reúne 2 veces por semestre y emite recomendaciones (desde el 2000) al GMC. Ha realizados 42 recomendaciones entre 1997 y 2010 y una sola solicitada (en 1998). O sea una institución poco valorada en la estructura institucional (única institución sin presupuesto).
La Résolution GMC 35/00 que la da al FCES un papel articulador para las propuesatas de la sociedad civil. Competencia con Somos Mercosur o los Foros sociales. Los clivajes existentes entre los sectores son: libre-circulación de las personas: sindicatos a favor, empresarios en contra. FCES vota en contra en 2008, y a favor en 2010, pero centrado en los trabajadores y no en los ciudadanos. Y los clivajes entre países son los siguientes: licencias de importación: Brasil y Uruguay a favor, Argentina en contra. FCES vota en contra en 2009. Va a votar de nuevo (y aprobar) en 2010.
El proceso (deliberativo) más interesante que el impacto (difícil de medir). Para los empresarios, más fácil influenciar los gobiernos. Lo mismo ocurre con los sindicatos que tienen la CCSCS. Sin embargo, todos valoran el ejercicio.

Otros dispositivos de participación:

- Traité de Montevideo de 1960 (ALALC), Article 43 (Comité : órgano permanente)
A fin de facilitar el estudio de problemas específicos, el Comité podrá establecer comisiones consultivas integradas por representantes de los diversos sectores de las actividades económicas de cada una de las Partes Contratantes.

- Tratado de Montevideo de 1980 (ALADI), Artículo 42
Se establecerán órganos auxiliares de consulta, asesoramiento y apoyo técnico. En particular, uno integrado por funcionarios responsables de la política de integración de los países miembros. Se establecerán, asimismo, órganos auxiliares de carácter consultivo, integrados por representantes de los diversos sectores de la actividad económica de cada uno de los países miembros.

- Acuerdo de Cartagena de 1969 (GRAN), Artículo 22
Habrá un Comité Asesor Económico y Social integrado por representantes de los empresarios y de los trabajadores de los Países Miembros. La Comisión, dentro del primer año de vigencia del Acuerdo, establecerá su composición, el procedimiento para integrarlo y fijará sus funciones.

- Tratado de Brasilia de 2008 (UNASUR), Artículo 18 (Participación ciudadana)
Se promoverá la participación plena de la ciudadanía en el proceso de la integración y la unión suramericanas, a través del diálogo y la interacción amplia, democrática, transparente, pluralista, diversa e independiente con los diversos actores sociales, estableciendo canales efectivos de información, consulta y seguimiento en las diferentes instancias de UNASUR.
Los Estados Miembros y los órganos de UNASUR generarán mecanismos y espacios innovadores que incentiven la discusión de los diferentes temas garantizando que las propuestas que hayan sido presentadas por la ciudadanía, reciban una adecuada consideración y respuesta.

Bibliografía

Tarrow, S. (2005). *The new transnacional activism*. Cambridge: Cambridge University Press.

Margaret Keck, M. y K. Sikkink (1998). *Activists beyond borders*. Cornell university press.

Ciudadanía y democracia.
Problemas de representación en América latina

Hugo Quiroga

I. Introducción

Quisiera comenzar mis reflexiones con una aclaración. Mi intervención tiene como universo de referencia la Argentina, aunque muchas de las cuestiones que voy a analizar ofrecen pistas que pueden resultar comunes a otros países de América latina.

Ante todo, lo sabido. América latina continúa siendo la región que presenta mayor desigualdad en todo el mundo. La gran concentración de riqueza la ubica como aquel lugar del planeta en el que la injusta redistribución del ingreso se ha transformado en un fenómeno estructural. Por consiguiente, la pobreza extrema y la marginación social se han instalado con raíces profundas. Sin embargo, según el último informe de la CEPAL, de noviembre de 2010, se ha reducido la pobreza en América latina, y la región se sobrepone al efecto de la crisis de 2008 y 2009[1]. A pesar de estas mejoras, continúa siendo muy elevado el número de personas que no logran cubrir sus necesidades básicas: hay 180 millones en situación de pobreza, de lo cuales 72 millones viven en la indigencia.

Quizá el dato histórico más relevante es que la democracia se ha extendido por todo el continente en los últimos años, y en 2011 todos los gobiernos son democráticos, más allá del frustrado golpe de Estado en Ecuador en 2010. El último libro de Alain Rouquié es muy ilustrativo sobre el histórico movimiento pendular *dictadura/democracia*, donde la victoria de la democracia nunca es absoluta, en tanto las democracias latinoamericanas son herederas de las dictaduras, cuando no son sus prisioneras. En su concepción, la sombra de la dictadura sobrevuela la democracia (Rouquié, 2010).

A pesar del crecimiento económico actual no ha descendido el nivel del malestar de los ciudadanos con la representación. Las transformaciones de la política contemporánea, y el surgimiento de nuevos movimientos de protesta social, abren la puerta a una *democracia informal*, contracara de la democracia representativa. La *política del ejecutivo* y la *política de la calle* parecen ser los resortes centrales de la democracia actual, ante la crisis del sistema de partidos, la debilidad del parlamento, y el aumento del poder de los medios de comunicación.

II. Los ejes fundamentales del debate teórico político

Bajo ese telón de fondo, cinco cuestiones, íntimamente asociadas, parecen estar presentes (entre otras) en el actual debate teórico-político de la región, a las que voy a referirme muy brevemente.

[1] *La Nación*, 1/12/10

La primera se relaciona con ciertos *vacíos políticos*. Democracia, ciudadanía y representación son tres conceptos estrechamente vinculados. El malestar con la representación muestra la debilidad (o ausencia en algunos casos) de una real instancia de mediación entre los ciudadanos y el Estado. Se han generado vacíos políticos a partir de la crisis de los partidos y de la dilución de las identidades políticas tradicionales.

Los partidos no han desaparecido pero ya no representan lo mismo. La novedad es que la política se ha convertido en *política-rating*. El reconocimiento del gran público da vida a los candidatos, su selección depende de las encuestas, de su índice de popularidad, más allá del talento político y de los programas partidarios. De esta manera, nace un electorado fluctuante como nuevo protagonista, a causa del debilitamiento de las identidades partidarias, de la televisión como foro de la discusión pública, y de las nuevas tecnologías de la comunicación: Internet, las redes virtuales, las transmisiones por celulares, televisión móvil a través de celulares.

Por otra parte, el denominado *voto zapping* es el resultado de los cambios culturales que inciden en la acción política. Transitamos, en fin, una época en la cual la política se reestructura y organiza, como nunca, en torno a la opinión pública, lo que ha afectado el propio *relato* de los partidos. Cada vez menos la vida pública queda en manos de los partidos, con su antiguo formato, lo que abre paso a la pérdida del monopolio del espacio político para compartirlo con las nuevas tecnologías de la comunicación, las organizaciones cívicas y los movimientos informales.

Esta nueva situación ha modificado la relación de los liderazgos gubernamentales con la sociedad. No hay dudas, y ésa es la enseñanza de Max Weber, de que los líderes democráticos son necesarios para hacer posibles las decisiones gubernamentales. El gobierno exclusivo de la ley, el gobierno anónimo de la ley, no deja de ser una utopía. El problema consiste en los abusos y en las arbitrariedades de los ejecutivos que no respetan el Estado de derecho democrático.

La segunda, el surgimiento de nuevos *liderazgos* caracterizados, en mi opinión, como "líderes decisionistas". Lo que ha prevalecido en estos últimos años, en algunos países, es una legitimidad "decisionista" antes que una verdadera legitimidad constitucional. El poder del líder "decisionista", avalado por el principio de la mayoría, no es la única fuente de legitimidad de las decisiones, porque el ejercicio de ese poder no es ilimitado y está sujeto al contrato constitucional, y sus derechos fundamentales, que son también fuente de legitimidad de las mismas.

Ese modo de legitimación está más interesado por el dominio de los hombres y la aplicación de la regla de la mayoría que por la plena vigencia del Estado de derecho democrático, el que plantea el nexo entre soberanía popular y normas constitucionales. El resultado es un *Estado de derecho atenuado*. La cuestión pasa por el *modo* de ejercer el poder en la vida política republicana. Por esa ruta se desemboca directamente en una democracia plebiscitaria, en donde la "decisión" enfrenta a la "norma", y la atenúa. Asoma la idea de una política del poder estatal, de un Estado que es ante todo poder, que oculta su mejor rostro que es la del Estado de derecho.

Ese líder busca subordinar al congreso y al poder judicial, y erosiona cualquier forma de control de las democracias representativas. Exige de sus seguidores (ministros, legisladores, gobernadores) lealtad y obediencia absolutas, manejándose además con "relaciones informales" que revelan una falta de transparencia y el aumento de sus poderes discrecionales. De este modo, el campo político se escinde entre amigos y enemigos y la teoría de la conspiración está ahí siempre presente. La gama de matices que caracterizan las nuevas realidades de gestión del poder pueden captarse en Argentina con el gobierno

de los Kirchner, en Ecuador con Correa, en Nicaragua con Ortega, en Perú con García, en Venezuela con Chávez, en Colombia con Uribe.

En rigor, la diversidad ideológica y política distingue hoy a América latina, gobernada por líderes que se reconocen como integrantes de familias políticas diversas: de izquierda, de derecha, de centro. Lo significativo de este proceso es la continuidad de la legitimidad democrática. Se ha señalado de manera reiterada el ascenso de la izquierda en la región, principalmente en el Cono Sur. La izquierda se ha fortalecido con la reelección de Rafael Correa en Ecuador y de Evo Morales en Bolivia. También con las victorias de José Mugica en Uruguay, de Mauricio Funes en El Salvador, y Dilma Rousseff en Brasil. Por su parte, la derecha y el centroderecha se ha reafirmado con Ricardo Martinelli en Panamá, Porfirio Lobos en Honduras, con los triunfos de Sebastián Piñera en Chile, Juan Manuel de Santos en Colombia y Laura Chinchilla en Costa Rica. En Chile se ha producido una alternancia en el poder que puso fin a 20 años de gobiernos de la Concertación.

La tercera, hace referencia a la rendición de cuenta como fundamento de la democracia. Toda política democrática se define tanto por el principio de *deliberación* como por el ejercicio de la *decisión*. Es cierto que gobernar es una actividad deliberativa, pero su función no se agota con la pura deliberación. La acción política estatal es, sobre todo, ejercicio de la toma de decisiones. Pero las decisiones no están exentas del control ciudadano y del control institucional. En este último sentido, las decisiones se enmarcan en el Estado de derecho democrático, en definitiva, en una ley, que define el poder, lo distribuye y lo limita.

En consecuencia, las decisiones políticas tienen que ser el resultado de la deliberación institucional y del diseño de prácticas y diálogos en el espacio público, en tanto ámbito de una acción común de los ciudadanos, que adquiere relevancia política. La decisión debería transitar un doble camino: la deliberación institucional y la deliberación informal. En breve, la actividad deliberativa trasciende las instituciones representativas, hasta alcanzar espacios informales y no institucionalizados.

La gran preocupación de la democracia contemporánea es, como antes, la limitación del poder. La separación de poderes, unida al control judicial de la legalidad de las decisiones políticas, y a las elecciones competitivas, ha configurado la idea del Estado de derecho democrático. Desde 1989, luego de los momentos más difíciles de la transición política, la democracia argentina no pudo prescindir del ejercicio de los poderes excepcionales y se alejó de aquella concepción que proclama la separación de poderes y los controles mutuos, que regula los posibles excesos de los gobiernos de turno. A esta *práctica de gobierno* la he denominado *decisionismo democrático*.

Cuando se ensancha la esfera del ejecutivo se desplaza el debate público, el parlamento pierde poder y capacidad de control. Con esa práctica, los gobiernos no suspenden el Estado de derecho, como lo indicaría una perspectiva decisionista schmitttina, pero lo atenúan. Es un modo no republicano de ejercicio del poder. El decisionismo democrático no sólo es un modo de tomar decisiones. La voluntad política del líder decisionista se antepone a las instituciones y sus reglas, y a los contextos deliberativos. Se trata, pues, de una verdadera práctica de gobierno que le rinde culto al altar de los plenos poderes. El decisionismo democrático es esencialmente un *gobierno del ejecutivo*, que le incorpora poderes incontrolados al presidencialismo. Sin embargo, la decisión es un proceso o actividad que es compartida, de modo complicado y diverso, por dos sujetos institucionales: el ejecutivo y el parlamento.

El decisionismo democrático se vale de la Constitución para desarrollar plenos poderes, mediante la delegación legislativa, el veto parcial y los decretos de necesidad y urgencia.

En este sentido, la democracia argentina vive desde 1989 en *emergencia permanente*, lo que abre la sospecha de problemas estructurales. En fin, el decisionismo democrático no es una mera sustracción de los poderes del parlamento, ni una pura acción del ejecutivo que "roba" o despoja al órgano deliberativo de sus decisiones políticas para trasladarlas a la esfera presidencial. Es mucho más que eso, involucra a los poderes públicos y a los ciudadanos. El decisionismo democrático es una *combinación del gobierno de los hombres*, *del gobierno atenuado del Estado de derecho y de la ausencia de poder de contralor*.

La cuarta, el asociacionismo social no ha reemplazado el rol de los partidos en crisis (quizá a excepción de Bolivia), ni ha llenado el vacío de la disgregación de las identidades políticas. Nos referimos con ello, fundamentalmente, al asociacionismo civil, que se despliega en el amplio espacio de lo público, que motiva a los ciudadanos a asociarse para los más diversos objetivos. En su último libro, Charles Tilly estudia la relación entre la democracia y los movimientos sociales, y partir de esa inquietud formula los siguientes apreciaciones: "Bajo qué condiciones, y de qué modo, minan los movimientos sociales la democracia". Según Tilly (2010: 245-246), si bien hay una amplia correspondencia entre democratización y movimientos sociales, la historia ha demostrado que esos movimientos no fomentan ni defienden necesariamente a la democracia; interrogante que retomaremos más adelante.

Los movimientos informales (movimientos sociales, movimientos "piqueteros", grupos cívicos) conforman la otra cara de la vida democrática, que extiende el clásico campo de la acción política más allá de las formas representativas tradicionales. La democracia de nuestros días enfrenta un doble desafío: la superioridad del ejecutivo y la intervención de los actores informales.

Ese movimiento de protesta informal, que desfila en la calle, da muestra de su distancia de las representaciones instituidas (los partidos tradicionales, los sindicatos, los legisladores), amplía la esfera política y abre vías para el intercambio democrático no tradicional. Los movimientos informales son los *contrapesos sociales* (contrapoderes sociales) de la representación política clásica. En verdad, los contrapoderes sociales constituyen un complejo conjunto de intereses y demandas, que obedece a la acción de ciudadanos y movimientos que levantan un sistema no formalizado de protesta, control y bloqueo de las decisiones, con pujanza y fuerza propia. En otras palabras, la democracia informal es el contrapeso de la democracia representativa. El espacio público democrático se constituye tanto por las representaciones oficiales como por los movimientos informales.

Los contrapoderes sociales carecen de reglas institucionales para actuar como instancias formales de coordinación social. El *riesgo* es que la informalidad extrema de la política, con su capacidad de veto y bloqueo, pueda *vaciar* de contenido a las instituciones representativas. No obstante, los movimientos informales son el emergente de una nueva gramática de la acción pública que deben ser tomados con seriedad y responsabilidad. En consecuencia, la representación "oficial" es puesta en tela de juicio por el furor de la manifestación de protesta, difícil de regular, vinculada a un contexto social excepcional que desamparó a millones de ciudadanos, dejados a su suerte casi sin protección estatal.

La quinta, se refiere al poder electoral. Entre las grandes instituciones de poder de la sociedad, emerge en algún momento, con mucha más contundencia, el *poder electoral*. Las urnas pueden ser el ámbito donde los ciudadanos demuestren que las elecciones no solo son un método para *nombrar* a los dirigentes, sino que pueden ser también un dispositivo institucional capaz de dar respuesta a una crisis profunda, como la que vivió la Argentina desde diciembre de 2001 hasta el año 2003. En esa especial circunstancia histórica, *la relación de la ciudadanía con la política pasó principalmente por el voto*.

En nuestra argumentación, el voto democrático adquiere un carácter simbólico por encima del nombramiento de los gobernantes, porque no está disociado del universo de representación de los ciudadanos, y porque toda elección implica, además, un acto de cierta confianza entre electores y elegidos, que si bien no encierra un mandato imperativo permite establecer un diálogo implícito o explícito entre gobernantes y gobernados en la esfera pública, mediante las promesas electorales, la acción de gobierno, y las demandas por el cumplimiento de las promesas. Ahora bien, este argumento no se entiende sin la fragmentación del régimen de partidos, la dilución de las identidades políticas masivas, la personalización de la política y la volatilidad electoral, fenómenos que asoman en muchos países de la región.

En definitiva, la función del voto simboliza algo más de lo que interpreta la concepción schumpeteriana de democracia, esto es, crear gobierno, en la que de ninguna manera los electores fiscalizan a los gobernantes, a no ser que se nieguen a reelegirlos.

Si las elecciones significan un voto de confianza entre representantes y representados, llama la atención, entonces, que en la "era de la desconfianza en la política", como lo ha caracterizado Rosanvallon (2007), el sufragio pueda transformarse en un dispositivo que representa (aun simbólicamente) la participación más orgánica e institucionalizada de los ciudadanos, sin dejar de reconocer los caminos no convencionales por los que transita igualmente la política: la calle y los movimientos informales. Es cierto, el espacio político no se reduce a las urnas. Pero el voto democrático no tiene por única función regular la relación entre sociedad y poder; es también, el "símbolo de la sociedad política misma que asegura los lazos sociales y traza el destino de la colectividad" (Schnapper, 1994: 140).

Sin embargo, tengamos en cuenta algunos matices, sobre el *civismo electoral*. Aún en países donde el voto es obligatorio, la concurrencia electoral ha descendido y ha aumentado el voto en blanco, en los últimos años, como ocurre en la Argentina. Ahora, votar no es un hecho irrelevante en América latina si se tiene en cuenta su larga historia de discontinuidad institucional. Pero no se trata únicamente de votar, sino de organizar mejor el espacio público y el poder democrático, que es un poder esparcido en la sociedad.

III. Algunas conclusiones

Para finalizar, los cambios en cierne nos motivan una pregunta fundamental: ¿cómo pensar estas democracias latinoamericanas en un marco filosófico más abarcativo? La democracia representativa resulta un marco conceptual e institucional muy restringido para comprender la dinámica de los nuevos actores, su modo de intervención, el poder de la calle, el auge del espacio público mediático, la demandas de otros contextos deliberativos, la fragmentación del sistema de partidos y la dispersión de las identidades políticas masivas. Esto exige repensar filosóficamente la democracia, vista como democracia electoral, no con el propósito de crear nuevos rótulos, sino tratando de describir y comprender la dinámica democrática, sus interacciones, las formas reales de tomar decisiones que crean obligaciones políticas.

La *normalidad*, como una situación opuesta a la emergencia permanente, entraña un juego político institucionalizado, respeto irrestricto a las normas y al procedimiento deliberativo, y un trato comunicativo y civilizado entre el Estado y los actores políticos y sociales. Esto no implica negar la competencia política ni el conflicto, o la búsqueda del poder, sino emplazar la acción política por carriles que la lleven a adoptar las mejores decisiones para todos, en el marco del diálogo y de reglas previamente acordadas. Con el

decisionismo democrático hay un cambio en la *base del poder*, tanto en épocas de normalidad como en períodos de excepción.
Las dificultades para repensar la democracia no son pocas, y además son de difícil resolución.
Por un lado, la actividad deliberativa trasciende las instituciones representativas, hasta alcanzar espacios informales y no institucionalizados. Hay un conjunto de actividades que componen el concepto política, que exceden (además de la deliberación) la idea de razón, ellas son: la pasión, el conflicto y la competitividad. Por eso, la pregunta de Walzer (2010): ¿cómo encaja la deliberación en un proceso político que es eminentemente no deliberativo?, o también ¿cómo hacen para "razonar juntos" millones de ciudadanos, de una manera mínimamente convincente? En definitiva, la toma democrática de decisiones es la solución lenta del amplio y complejo problema del gobierno, que no es otro que conciliar las libertades fundamentales con un sistema de igualdad social.
Por el otro, ¿cómo resolver el problema del gobierno en su totalidad, lo que implica reconocer que vivimos en una sociedad capitalista? Las complejas sociedades en las que vivimos no pueden ser pensadas solamente en términos de teoría democrática. En este sentido es oportuno recordar lo que desde hace tiempo viene advirtiendo Robert Heilbroner (1996: 128) sobre la naturaleza capitalista de las sociedades que acostumbramos a describir como únicamente democráticas.
La política es la estructura del saber "vivir juntos", en la paradoja del consenso y del disenso que nos une y nos separa en el conflicto, tras un ordenamiento colectivo. Desde el punto de vista estrictamente institucional la democracia se ordena y se legitima por la actividad electoral, pero ésta resulta insuficiente para constituirse en su fundamento único. En cambio, desde el punto de vista de la interacción social, la noción de democracia se amplía, no se limita a la transmisión legítima del poder, en cuanto contiene otras formas de expresión no institucionalizadas, que dan lugar a nuevas formas de representación de carácter informal. En otras palabras, la democracia organiza la *gestión pública del poder* (y se conecta con el Estado de derecho) y expresa, a la vez, la *acción pública* de los ciudadanos (y se conecta con el deseo de vivir en una comunidad política).
Por tanto, es preferible hablar de *vida democrática* para hacer referencia a un concepto más amplio que la actividad electoral, que contiene formas de expresión de los ciudadanos no institucionalizada, que debería ser analizada en el marco del *espacio público democrático*, situado en el ámbito de la sociedad civil. Aludo con ello a la democracia como experiencia de vida, pero también a la definición de democracia como buen gobierno. La acepción vida democrática remite a la idea de que la democracia se vive también desde lo cotidiano, sin que haya que perder de vista los procedimientos. Las transformaciones políticas de la democracia actual abren las puertas a una *democracia informal*, contracara de la democracia representativa.
Me interesa remarcar, ahora, la relación entre ciudadanía y opinión pública en el nuevo espacio de lo público.
Sabemos que el ciudadano es el que tiene derecho a participar personalmente o por sus representantes en el gobierno de la ciudad. Pero una cosa es el *derecho* a la ciudadanía que tienen todas las personas y otra es el *ejercicio* efectivo, concreto, de ese derecho. Es cierto que la ciudadanía no es un concepto económico, el derecho del voto no depende del pago de impuestos ni de la posesión de un trabajo. Sin embargo, parece innegable que el ejercicio de la ciudadanía sufre condicionamientos económicos, al menos en nuestras sociedades.

El ejercicio de la ciudadanía en América latina se halla manifiestamente condicionado por la *marginación* y las *políticas clientelares*, dos términos inequívocamente enlazados en nuestra realidad social. Entonces. Los derechos de ciudadanía no están desvinculados de la condiciones de existencia material de los individuos. ¿Se puede construir ciudadanía autónoma con marginación o apatía cívica? Los excluidos sociales, ¿Cuándo votan lo hacen en las mismas condiciones de igualdad que el resto de los ciudadanos?, ¿su voto es libre o acaso está condicionado por las adversas circunstancias sociales y culturales que les impide ser individuos totalmente autónomos?

El clientelismo político crea vínculos involuntarios, vínculos forzosos que vuelven vulnerables a los ciudadanos, sometidos como están por la despreciable distribución de prebendas sociales. La idea de un ciudadano autónomo parece alejarse. Las razones igualitarias de la ciudadanía moderna no suprimieron la pobreza, al contrario, la hicieron más legible.

Lo anterior, no implica negar una creciente tendencia a la autonomía ciudadanía que se constata en nuestras sociedades, principalmente en las clases medias urbanas. Ese fenómeno en expansión se puede observar a partir de la crisis de los partidos, de la crisis del régimen de representación y de la dilución de las identidades políticas de masas. Es por eso que habría que matizar el concepto de una ciudadanía autónoma.

Pero el espacio público se relaciona también con la opinión pública. Frente a un problema tan complejo uno de los problemas consiste en saber cómo se forma la opinión pública. Ella se forma básicamente por la televisión y los sondeos. Ahora bien, la significación que ha alcanzado la opinión pública en la actualidad ¿no pone acaso en cuestión a un modelo de ciudadanía activa y a una concepción de democracia de partidos a la que supuestamente atribuye legitimidad? Entre opinión pública y poder hay una relación ambivalente, pues aquella es siempre volátil e inestable.

En el presente hablamos de "gobiernos de la opinión pública", que invocan la opinión o la hacen jugar contra las *representaciones instituidas*. El riesgo institucional reside en que la opinión pública no es una opinión formada en el interior de las representaciones políticas, está situada fuera de esas representaciones. Además, es cambiante, inestable, sin un lugar propio (no es una asamblea de ciudadanos ni foro de discusión permanente), no habla en nombre propio y es invocada necesariamente por terceros.

Los conceptos de ciudadanía y opinión pública no son coincidentes. Una cosa son los ciudadanos reunidos en foros, asambleas, asociaciones múltiples, en manifestación por las calles, y otra es el anonimato de la opinión pública, que no habla en primera persona, sino en tercera persona, como dice Derrida (1992), a la cual se invoca y se la hace hablar. La opinión pública es un misterio difícil de descifrar, los ciudadanos son actores de carne y hueso, interesados en asuntos concretos. ¿Qué decide la opinión pública? ¿Ejerce una función fiscalizadora? No delibera ni decide, no tiene un lugar propio. Es un fantasma, según la atinada calificación de Walter Lippman (2011). Pero hay un problema adicional. Cuando los dirigentes creen que la opinión pública es omnipotente y que el poder político deriva exclusivamente de ella, se descuida el ejercicio republicano del poder que opaca al Estado de derecho, en el cual se enmarca institucionalmente la democracia.

A fines de los años treinta del siglo pasado, MacIver (1942: 73) identificaba a la democracia por dos caracteres que resultan relevantes y aclaratorios de mi pensamiento: 1) la democracia reafirma la distinción entre Estado y comunidad, y 2) la democracia se basa en el libre juego de las opiniones contrarias. Interpretando libremente estas ideas cabe agregar que la democracia no funciona en el vacío, está enmarcada por los mecanismos institucionales del Estado de derecho, que regulan el poder de la mayoría para que sus

decisiones no lesionen los derechos fundamentales y para que se respete el principio de la legalidad. La comunidad política representa un espacio heterogéneo en el cual los ciudadanos comparten una vida en común, el vivir juntos, que trasciende las diferencias étnicas, lingüísticas y culturales, sobre la base de su reconocimiento. Se forja de esta manera una identidad política, sin negar la diversidad cultural, a partir de una misma preocupación pública. La fuerza de la democracia reside en el intercambio de opiniones, que supone una intensa discusión de los asuntos comunes, que tiene lugar en el espacio público. En un espacio público global, que reconoce las dimensiones del interés común, la participación colectiva y la visibilidad. La democracia es, en fin, conflicto y confrontación de opiniones e intereses contrarios, que construyen la argumentación pública y la decisión política.

Es evidente que el *hacer democrático* deber ser renovado. De ahí el surge un nuevo interrogante: ¿cómo resolver el problema del gobierno en su totalidad, cuando ello implica reconocer que vivimos en una sociedad capitalista? Las complejas sociedades en las que vivimos no pueden ser pensadas solamente en términos de teoría democrática. En definitiva, el poder de la democracia representativa de nuestros días debe enfrentar múltiples desafíos: la superioridad del ejecutivo, la intervención de los actores informales, el rol creciente de los medios de comunicación, y las desigualdades sociales inaceptables. Esto nos exige una teoría política de la democracia pensada en otros términos. Los límites del concepto de ciudadanía, el rol de los *mass-medias* electrónicos, el poder de la opinión pública y los movimientos informales, replantean la discusión sobre los principios de la democracia, sobre sus *fundamentos*, y no sólo sobre su funcionamiento.

Bibliografía

Derrida, J. (1992). *El otro cabo. La democracia, para otro día*. Barcelona: Ediciones del Serbal.

Heilbroner, R. (1996). *Visiones del futuro*. Barcelona: Paidós.

Lippman, W. (2011). *El público fantasma*. Murcia: Genueve Ediciones.

MacIver, R.M. (1942). *El monstruo del Estado*. México: FCE.

Rosanvallon, P. (2007). *La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza*. Buenos Aires: Manantial.

Rouquié, A. (2010). *À L'ombre des dictatures. La democratie en Amerique latine*. Paris : Albin Michel.

Schnapper, D. (1994). *La communauté des citoyens*. Sur l'idée moderne de nation. Paris : Gallimard.

Tilly, C. y J. Lesley (2010). *Los movimientos sociales*, *1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook*. Barcelona: Crítica.

Walzer, M. (2010). *Pensar políticamente.* Barcelona: Paidós.

Luces y sombras del regreso del estado en Argentina

Osvaldo Iazzetta

I. Del descubrimiento del mercado al redescubrimiento del estado

Como ha destacado un reciente Informe del PNUD (véase Muñoz, 2011:11), "el estado está de regreso en el centro del debate político y en la agenda gubernamental de América Latina. En nuestra región se busca más estado, incluyendo más y mejor gasto público".
También añade que en los últimos años se han registrado "cambios relevantes en el rol e imagen pública del estado en algunos aspectos revirtiendo la década de hegemonía del pensamiento centrado en el mercado" (PNUD, 2011:13). Una demanda por más estado –en materia de seguridad, empleo, educación y salud-, parece expresar el desencanto de la ciudadanía con las políticas privatizadoras impulsadas en las décadas anteriores.
Interrogados sobre la satisfacción con el funcionamiento de los servicios públicos luego de su privatización, el 65,17% de los encuestados manifestó que estaba menos o mucho menos satisfecho, al tiempo que aumenta el porcentaje de ciudadanos que confían en la capacidad del estado para resolver sus problemas (PNUD, 2011:67-70).
Esa percepción se mantiene en el informe de 2011 de Latinobarómetro (2011:99) marcando un cambio en la valoración de la ciudadanía respecto al rol del estado. Ello se aprecia especialmente en el alto nivel de aprobación que muestran los ciudadanos al responder a la pregunta: "¿en qué medida el estado puede solucionar los problemas…?" (de delincuencia, narcotráfico, pobreza y corrupción). La expectativa de que el estado resolverá "todo el problema" o "gran parte del problema", promedia los 75 puntos en Argentina y 74 en Uruguay.[1]
De modo tal que en un corto lapso, nuestra región ha oscilado del desencanto y demonización del estado a su redescubrimiento y recuperación.
Sin embargo, este regreso es motivo de controversia entre quienes por un lado celebran la revisión de las políticas pro-mercado que hoy impulsan diferentes gobiernos de la región y quienes por el otro, observan con inquietud cierta voluntad de sobre-regulación por parte de aquéllos. Si los primeros aluden críticamente al *neoliberalismo* de los 90, los segundos miran en cambio con recelo el *neoestatismo* que vino a sustituirlo en este nuevo siglo.
Pese a esa divergencia, en términos generales prevalece cierto consenso respecto a la necesidad de devolver al estado roles y responsabilidades arrebatados en el pasado reciente. Este nuevo clima le asigna ahora un lugar decisivo como instancia de coordinación, regulación y redistribución, dejando atrás ideas y políticas públicas que

[1] Vale aclarar que Argentina encabeza este ranking y le siguen -con escasa diferencia-, Uruguay, Paraguay y Brasil, acompañados muy cerca por Venezuela y Chile. En el extremo inferior llega a 36 en México, 30 en Honduras y 21 en Guatemala. Véase *Informe 2011*, Corporación Latinobarómetro (2011:91). Tal es la relevancia que este tema ha cobrado en los últimos años que el informe declara haber incorporado nuevas preguntas para registrar las variaciones que muestra la valoración de la ciudadanía sobre el estado (Corporación Latinobarómetro, 2011:94).

alentaron su reducción y repliegue. Ya no está en discusión si el estado resulta necesario, sino los ámbitos y modalidades bajo las que debe actuar.

Este cambio de percepción se refleja tanto en políticas públicas que le reservan mayor presencia en espacios antes cedidos al mercado, como en el giro de una opinión pública que aprueba su retorno a funciones de las que fue apartado en el pasado reciente.

Ello puede apreciarse en la voluntad de revisar las privatizaciones ejecutadas en las décadas anteriores -como lo muestran las re-estatizaciones de áreas estratégicas en Bolivia, Ecuador, Venezuela y Argentina-, así como en la implementación de políticas redistributivas destinadas a ampliar derechos atendiendo a consideraciones sociales, étnicas y de género.[2]

Asegurar los derechos ciudadanos representa un deber para el estado y en una región que aún convive con desigualdades sociales extremas –es la más desigual del planeta de acuerdo a su distribución de ingresos-, esa deuda le reclama un activo rol como agente redistribuidor.

Para asegurar un umbral mínimo de ciudadanía el estado necesita recursos que obtiene por vía fiscal. Aunque la literatura clásica ha destacado ampliamente la relevancia de la dimensión fiscal para el estado contemporáneo (Schumpeter, 2000; Elias, 1993), no se ha enfatizado suficientemente su importancia para la democracia. En otros términos, sin impuestos no hay estado, pero tampoco democracia. Ésta no es gratuita pues los derechos que debe garantizar tienen un costo y ello exige un estado provisto de recursos que le permitan cumplir esa promesa (véase Holmes y Sunstein, 2011).

Sin embargo, sostener tales derechos no es una tarea desprovista de tensiones pues ese estado debe estar dispuesto a extraer recursos a ciertos grupos sociales para transferírselos a otros. Si toda política pública siempre encierra una distribución de poder, ella asume mayor conflictividad aún cuando se propone extender nuevos derechos ciudadanos a quienes permanecían privados de este beneficio.

A su vez, los procesos de inclusión que este mayor activismo del estado ha permitido en algunos países de nuestra región, se dan en el marco de un escenario en el que nuevas formas de acción colectiva desbordan –sin anular- las instituciones representativas, planteando demandas por el reconocimiento de identidades y derechos y por la distribución de recursos y empleos que vienen acompañadas de un reencantamiento de la política como espacio de participación (Arditi, 2011).

Como contracara inseparable de estas conquistas, los gobiernos que llevan adelante estos procesos se sienten portadores de una "misión reparadora" (Rouquié, 2011:274) frente al déficit de derechos acumulado durante los anteriores gobiernos y están movidos por propósitos refundacionales que encuentra amparo en una perspectiva antiliberal que instala ciertas tensiones en el vínculo entre *estado* y *democracia*.

Este es un dato que no puede soslayarse pues si bien corresponde celebrar la adquisición de derechos sociales y culturales que beneficia a nuevos actores en varios países de la región, ella resultará insuficiente si no viene acompañada de mejoras en la rendición de cuentas, acceso a la información pública y mayor autonomía de las organizaciones de la sociedad civil frente al estado.

Como destaca Peruzzotti (2012b), "…una agenda progresista que promueva un estado más intervencionista en términos de políticas sociales o económicas no puede prescindir

[2] El Informe del PNUD (2011:13) antes mencionado señala un importante incremento en su Índice de Ciudadanía Social (ICS) en la gran mayoría de los países, aunque esta mejora se manifiesta más en salud y educación que en el resto de los derechos.

del papel crucial que cumplen las instituciones de rendición de cuentas". En un período en que el discurso progresista propone la idea de un estado fuerte como antídoto a los dramáticos efectos del neoliberalismo "…sería contraproducente intentar dicha reconstrucción promoviendo una institucionalidad de cuño antiliberal organizada alrededor de la figura de un ejecutivo discrecional y omnipresente" (Peruzzotti, 2012a).
La construcción de una estatalidad propiamente democrática –agrega Peruzzotti (2012b)- supone la preservación y fortalecimiento del constitucionalismo y los mecanismos de rendición de cuentas legal y requiere por ende de posiciones políticas *post* y no *antiliberales*.
El desafío por consiguiente, es *ir más allá* de aquellas instituciones, sin anular ni desconocer las potencialidades que contiene la idea de rendición de cuentas para contribuir a un mayor control y desconcentración del poder.
Aunque esta inquietud parece más pertinente para aquellos procesos refundadores que han impulsado reformas constitucionales (Venezuela, Ecuador y Bolivia)[3], también resulta válida para la Argentina reciente pues la celebración por el retorno del estado convive allí con un marcado debilitamiento de los mecanismos de rendición de cuentas y de las posibilidades de ejercer un mejor control sobre aquél, precisamente cuando más amplía sus responsabilidades y esferas de acción.
No se puede pensar el estado sólo como un *aparato* (administrativo, legal, económico, etc.) eximido de compromisos y ataduras con la democracia -como sucedió en los '90-, ni confiar en que basta simplemente aumentar sus tareas y dimensiones para revertir la indiferencia que las políticas pro-mercado mostraron frente a la calidad de la democracia. Si bien advertimos una saludable rectificación de aquella experiencia impulsando la reparación de derechos conculcados en aquellos años, también resulta preciso contemplar otras dimensiones del estado que ayuden a construir una estatalidad democrática.
El derecho a un buen estado no sólo le exige a éste garantizar los derechos prometidos por la democracia, sino también tornarse amigable y consistente con ésta, despojándose de la opacidad, secreto y natural inclinación a concentrar recursos de poder que lo distingue, en tanto entidad monopólica y centralizada que emite decisiones colectivas vinculantes.

II. El retorno del estado en la experiencia argentina reciente

La crisis desatada en Argentina a fines del 2001 –inédita por su profundidad- provocó un cambio de percepción en la ciudadanía que se tradujo en un creciente reclamo de reconstrucción e intervención del estado. Si el clima dominante a comienzos de los '90 reflejaba un amplio apoyo hacia las políticas pro-mercado, a partir de la crisis del 2001 se inició un giro, no sólo en la orientación de las políticas públicas –primero con Eduardo Duhalde y luego con Kirchner desde el 2003-, sino también de la opinión pública que demandaba un mayor rol interventor del estado con fines regulatorios y redistributivos.
Pese a que el estado argentino estaba seriamente cuestionado y desacreditado ese juicio coexistía con la aspiración de rehabilitarlo, observándose una evolución de la opinión pública favorable a la intervención reguladora del estado (Cheresky, 2002:117-118). Con los años, esta aprobación a una intervención más activa del estado fue creciendo y en el

[3] El informe del PNUD antes citado (2011:106) habla de procesos de "refundación estatal" en los casos de Bolivia y Ecuador, donde no sólo han surgido nuevas constituciones sino también se han iniciado complejos procesos de reingeniería sociopolítica (estado plurinacional en el caso de Bolivia, multiétnico en el de Ecuador).

2007 comprendía a siete de cada diez ciudadanos (Cheresky, 2008:20-21).[4] Esa postura se ha mantenido –e incluso incrementado ligeramente- en los años posteriores. Tal como muestra el informe de Latinobarómetro del 2011, Argentina se ubica al tope del ranking de la región cuando se interroga a la ciudadanía sobre la capacidad del estado para resolver "todo el problema" o "gran parte del problema" en diferentes rubros. Esa expectativa ascendía en el 2011 a 75 puntos sobre un total de 100.

El desencanto con las políticas neoliberales ilustra el clima de época que enmarcó a los gobiernos de Duhalde primero, y Kirchner después, y explica los esfuerzos por diferenciar sus gestiones de aquellas que impulsaron políticas pro-mercado en los años 90. En especial, durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y los de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015), el estado recuperó un rol más activo interviniendo en el control de precios, regulando las tarifas de servicios básicos (electricidad, gas, combustible y transporte), el comercio externo y el mercado cambiario. Sin embargo, ese giro se aprecia primordialmente en la re-estatización de diversos servicios públicos y empresas, retomando el control de áreas decisivas que habían sido privatizadas en los 90.[5] La más resonante de todas estas iniciativas –por su alto valor estratégico, el porte de la empresa y los procedimientos empleados para su expropiación- ha sido la re-estatización parcial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) impulsada por el Ejecutivo y sancionada por el Congreso Nacional el 3 de mayo de 2012.

Otra dimensión –no menos relevante- que prueba este retorno del estado se advierte en la voluntad de reparar derechos arrasados por gobiernos anteriores. Vale recordar que la experiencia democrática abierta en 1983 ha mostrado cierto desbalance y vaivenes en materia de derechos ciudadanos. Si bien los derechos políticos disponen desde entonces de una relativa universalidad, no existe una homogeneidad (social y territorial) equivalente en materia de derechos civiles, en tanto los derechos sociales sufrieron un marcado retroceso tras las reformas pro-mercado aplicadas durante el ciclo menemista iniciado a fines de los '80.

En cierto modo, los gobiernos que se sucedieron desde el 2003 han actuado como una "comunidad reparadora de derechos conculcados", marcando una ruptura con las violaciones registradas bajo el régimen autoritario (1976-1983) como así también, con las privaciones de derechos sociales registradas bajo la oleada neoliberal de los 90 (Aboy Carlés, 2005:136-146).

La reapertura de los juicios sobre violaciones de derechos humanos, la extensión de beneficios jubilatorios a dos millones y medio de pasivos, la asignación universal por hijo (3 millones y medio de beneficiarios) y la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, son parte de la extensión de derechos registrada en estos años que también explican la amplia y heterogénea base social que sostiene a estos gobiernos. Aunque las

[4] Según la encuesta de la Corporación Latinobarómetro efectuada en el segundo semestre del 2009 sobre 18 países de la región, Argentina figuró entre los países que menos se inclinan por el mercado como mecanismo más eficiente para regular la economía y apenas un 18% opinó que la privatización de las empresas estatales fueron beneficiosas para el país (véase "Apoyo a la democracia y la libertad de los medios", *Clarín*, 13 de diciembre de 2009).

[5] Entre las más importantes re-estatizaciones destacamos los casos de Correo Argentino, Aguas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, Aerolíneas Argentinas y a fines del 2008 –ya bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner- fueron disueltas las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones –AFJPs- creadas en 1993 como parte del programa de privatización del sistema provisional impulsado por el gobierno de Carlos Menem.

"políticas de reparación social"[6] explican la adhesión de los sectores más necesitados, otras "reparaciones" destinadas a otros públicos –como la reanudación de los juicios sobre violaciones a los derechos humanos o el matrimonio entre personas del mismo sexo-, contribuyeron a ampliar el espectro y diversidad socio-cultural de los sectores identificados con sus políticas y también permiten comprender buena parte del 54% de los votos que hicieron posible a reelección de la presidenta Fernández de Kirchner en octubre del 2011.

III. Otra dimensión del vínculo estado-democracia

La revisión que acabamos de presentar nos ilustra sobre una dimensión del estado que resulta crucial para la democracia pues alude a su capacidad para garantizar los derechos prometidos por ésta. Sin embargo, estado y democracia mantienen una tensa y compleja relación de doble mano: aunque aquella *necesita del estado para tornar efectiva su promesa de ciudadanía*, también le impone a éste *un modo de operar* que mantenga consonancia con la expectativa de desconcentrar –y democratizar- el enorme poder que reúne. En otros términos, no cualquier estado resulta consistente con la democracia.

Esta mirada sobre el vínculo que el estado mantiene con la democracia procura destacar que ésta no expresa sólo *un modo de acceso* al poder sino también *un modo singular de ejercerlo* (Mazzuca, 2002).

Vale recordar que este ciclo de la democracia argentina está signado por crisis económicas recurrentes (1989 y 2001) que favorecieron la irrupción de fuertes liderazgos que, amparados en el contexto de emergencia en que se gestaron, fortalecieron el rol del Ejecutivo y la concentración de recursos de poder. La búsqueda de autonomía decisoria frente a los otros poderes y órganos de control pronto derivó en una ecuación que se distinguió *por maximizar los mecanismos estatales* que permiten la concentración y efectividad de las decisiones y *minimizar* aquellos relativos a la transparencia y rendición de cuentas.[7]

Las implicancias de este desequilibrio permiten apreciar un aspecto del estado que resulta decisivo para juzgar su vínculo con la democracia: nos referimos a la concentración/dispersión del poder estatal, una dimensión tan crucial como la vigencia de los derechos ciudadanos para evaluar la sintonía entre ambos.

Aunque existen muchas vías de entrada posibles para considerar esta relación, la que acabamos de escoger nos permite recuperar la idea de que la democracia no sólo representa un mecanismo para acceder al poder, sino también como sugiere Ian Shapiro (cit. Ackerman, 2008:22) "…un medio para manejar las relaciones de poder con el fin de minimizar la dominación".[8]

---

[6] Este aspecto ha sido destacado por María Pía López, *La Nación*, "Pasado y presente de la política argentina" (24/10/2011).

[7] Véase Guillermo O'Donnell en la entrevista efectuada por José Natanson "Sobre los tipos y calidades de democracia". *Página 12*, (27 de febrero de 2006).

[8] Ackerman (2008:22) sostiene –siguiendo a Shapiro- que una democracia "es disfuncional si no camina hacia la liberación de la humanidad del autoritarismo y la pobreza. Y aquí juegan un papel central las reformas dirigidas a mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y el Estado de Derecho, siempre y cuando estén inspiradas por este propósito más amplio". Shapiro (2011:25) sostiene que "…la legitimidad democrática depende de la posibilidad que la democracia reduzca la dominación. Si las personas que sufrieron opresión bajo el apartheid o el comunismo no experimentan que los posteriores regímenes democráticos aportan mejoras a sus vidas, no debería sorprendernos que su fidelidad a la democracia se resienta. Y si los grupos

Colocar la idea de poder en el centro del concepto de democracia nos exige observar, entre otras cosas, si ésta es capaz de asegurar que los gobernantes, una vez electos, no abusen de su poder legalmente autorizado para imponerse sobre la voluntad de los ciudadanos (Vargas Cullell, 2011:73).
En un texto anterior (Iazzetta, 2011), hemos analizado la Argentina de los últimos años evaluando la concentración/dispersión del poder estatal, pero en esta ocasión realizaremos un ejercicio similar tomando en cuenta tres clivajes:

- la separación gobierno/estado,
- la autonomía de la sociedad civil frente al estado,
- la separación público/privado,

A continuación haremos un breve repaso de la democracia argentina teniendo en mente los tres ejes expuestos arriba:
Las enormes dificultades y condicionamientos que vienen padeciendo diversos órganos de control del estado, no sólo han condenado a la mayoría de ellos a la inacción sino que los ha colocado al borde mismo de la parálisis.[9] El único órgano de contralor que aún se mantiene activo y dotado de autonomía frente al Ejecutivo es la Auditoría General de la Nación (AGN) aunque su labor no ha estado desprovista de obstáculos, como lo prueba el retaceo de información pública por parte de otros órganos del estado[10], o las presiones y maniobras sufridas por su titular, Leandro Despouy, para desplazarlo del cargo que ejerce desde el 2002.[11]

El mismo ocultamiento y escamoteo de información del que ha sido objeto la AGN en su tarea de control, se completa con la ausencia de una ley de acceso a la información pública que consagre ese derecho a todos los ciudadanos. Aunque existe un decreto promulgado durante el mandato de Néstor Kirchner que permite el acceso a la información del Ejecutivo, está en mora la sanción de una ley que recoja el propósito de aquella iniciativa y

---

desfavorecidos de las democracias establecidas comprueban que ningún gobierno alivia su opresión, también ellos van a encontrar estímulos crecientes para abandonar la causa. El mejor procedimiento para los demócratas (….) es diseñar y promover variantes de la democracia capaces de reducir la dominación. Es seguro que no todas las formas de democracia posibles van a poder conseguirlo, pero algunas se manejarán mejor que otras. El reto creativo es descubrir cuáles son y cómo orientar las cosas en su dirección".

[9] Destacamos los casos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas que derivó en marzo del 2009, en la renuncia del funcionario a cargo de ella -Manuel Garrido- tras revelar recortes en sus competencias por parte del Procurador General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación (AGN), un órgano externo creado por la Constitución Nacional de 1994 para controlar al Poder Ejecutivo –sobre todo los gastos de la administración- que depende del Congreso Nacional. Su titular ha denunciado las dificultades que enfrenta este organismo para acceder a la información oficial que necesita para cumplir con su rol de contralor del estado (véase el editorial del diario *La Nación*, "Vaciamiento institucional", 14 de febrero de 2010 y "Righi salió al cruce de Garrido: 'No tengo idea de por qué renunció'", *Clarín*, 14 de marzo de 2009).

[10] La labor de la AGN se ha visto obstaculizada por la negativa de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) –dependiente del Poder Ejecutivo- a entregarle trescientos informes, entre los cuales figuran algunos que comprometen al gobierno nacional en casos de corrupción. Véase el editorial titulado "Déficit en los controles de los actos de gobierno", *Clarín*, 25 de julio de 2010.

[11] En la primera semana de octubre del 2012 hubo una infructuosa embestida de los representantes del oficialismo para desplazar a Despouy, un hecho que mereció amplia cobertura en los medios de prensa y motivó un acto en su respaldo en el Senado de la Nación en el que participaron dirigentes de todo el arco político opositor.

lo amplíe a otros ámbitos del estado.[12] No sólo existen restricciones para acceder a la información pública sino que también se acumulan evidencias de manipulación en la producción de información estratégica por parte de algunas reparticiones cruciales del estado como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), distorsionando índices de precios, pobreza e indigencia, que despojan de confiabilidad a un insumo vital para el diseño y evaluación de las políticas públicas. En suma, existen severos déficit tanto en la generación como en el acceso a la información pública.

En materia de organizaciones de la sociedad civil también observamos signos de alerta que ponen en cuestión la autonomía que algunas de ellas mantienen frente al estado. Si los '90 nos mostraron un variado abanico de organizaciones que ejercían novedosas formas de control social sobre aquél[13], el escenario de estos últimos años nos devuelve una imagen distinta, pues muchas de ellas parecen más próximas al estado, al que por definición deberían monitorear, que a la sociedad civil de la que forman parte.

Esta "estatización" de ciertas organizaciones, algunas de ellas poseedoras de un gran prestigio adquirido en la lucha por los derechos humanos durante el pasado régimen autoritario, revela otra manera de posicionarse frente al estado que ha partido a este espacio –tal como lo testimonia la fractura al interior del movimiento de derechos humanos[14]- entre aquellas que mantienen estrecha proximidad con el gobierno y aquellas que aún conservan distancia y autonomía, aún a riesgo de soportar un hostigamiento oficial que apuesta a su desgaste y desaliento.[15]

La estrecha proximidad -y en algunos casos dependencia material- de algunas organizaciones con el estado, así como la hostilidad oficial que deben sobrellevar aquellas que no renuncian a su tarea de control, no resulta indistinto para juzgar la vitalidad de una democracia pues ésta exige tanto organizaciones sociales autónomas como un genuino compromiso del estado a aceptar esa condición.

---

[12] En su Informe del 2010 sobre *Derechos humanos en Argentina* el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) destaca que una de "…las asignaturas pendientes en esta materia es la sanción de una ley nacional de acceso a la información pública y una normativa que regularice y transparente la asignación de la pauta publicitaria oficial". Puede consultarse el Informe Ejecutivo en www.cels.org.ar/common/documentos/Informe_CELS_2010.pdf. La mora en la sanción de una ley de acceso a la información pública se da en un contexto en que ya existe un proyecto aprobado en una comisión de la Cámara de Diputados desde el 2010 pero ha sido demorado en otras comisiones del mismo cuerpo.

[13] Peruzzotti y Smulovitz (2002) retrataron esta modalidad de acción colectiva mediante el concepto de *accountability* social.

[14] Un ejemplo de ello lo hallamos en la fractura que se ha generado en lo últimos años al interior del movimiento de derechos humanos pues si bien el gobierno ha logrado contar con el apoyo de organizaciones como Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, otros organismos –Madres Línea Fundadora y el SERPAJ, conducido por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel- han mantenido distancia del gobierno y han cuestionado la desnaturalización de su tarea original. La situación de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, tras conocerse irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas populares -hoy investigada por la justicia- es una manifestación palmaria de ese giro. El gobierno admite que a las Madres les dio $ 765 millones. Véase Luis Alberto Romero, "La corrupción está rondando a las Madres", *Clarín,* 9 de junio de 2011.

[15] Tal es lo que sucede con ciertas asociaciones de defensa del consumidor que incomodan al gobierno cuestionando la validez de los índices de precios oficiales, pese a que éstos vienen siendo desautorizados por todas las mediciones privadas y de organismos estadísticos provinciales. La suspensión de la asociación Consumidores Libres –que dirige el ex diputado nacional Héctor Polino- y el maltrato sufrido por la titular de Adecua, Sandra González, en una reunión convocada por el Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, son algunas evidencias de ese clima hostil al que aludimos en el texto (véase la entrevista de Natalia Muscatelli a Héctor Polino, "'No quieren que se hable de aumentos'", *Clarín*, 23 de septiembre de 2012).

Como bien sugiere Garretón (2000:90) "…en vez de fusión entre estado, partidos y sociedad, que fue lo típico de América Latina, se trata de ir a una matriz de tensión, autonomía, fortaleza y complementariedad sin absorción, entre estado, partidos y actores sociales".

Aunque esta idea condensa una aspiración legítima, no parece ser la dirección adoptada por la Argentina en los últimos años. La confusión entre partido gobernante y estado, la asignación discrecional de la pauta publicitaria oficial para sostener una red de medios de comunicación para-estatales, y el uso faccionalista de los medios de comunicación oficiales, son algunos signos que revelan una alarmante evaporación de la dimensión pública del estado.

La necesaria y deseable autonomía del estado parece haber sucumbido ante un gobierno que no repara en aumentar sus recursos a expensas de un estado que ve erosionar su carácter público, vaciando de sentido aquellos espacios que expresan lo que es común a todos. En suma, existen múltiples evidencias de que el gobierno se está devorando al estado.[16]

Un estado no es autónomo si sus áreas son colonizadas por sectores, corporaciones e intereses privados pero también cuando el gobierno de turno usa para fines particulares, espacios y recursos públicos comunes a todos, tal como sucede cuando emplea abusiva y discrecionalmente los medios de comunicación estatales para propósitos partidarios y propagandísticos.

En suma, observamos una manera de concebir el ejercicio del poder que no muestra incomodidad al confundir sistemáticamente gobierno y estado y que se encamina a naturalizar la idea de que éste, en tanto reserva y expresión de lo que es común a todos, puede ser manipulado y usado sin disimulos ni restricciones por parte de la facción gobernante.

Por último, esta presencia del estado -tan necesaria a la hora de garantizar bienes públicos, regulación y derechos ciudadanos efectivos-, no siempre logra asociarse con la promoción de una sociedad civil autónoma y existen indicios de una inquietante "estatización" de sus organizaciones que debilita las expectativas de que controlen eficazmente los actos del estado.

Para cerrar este apartado, compartimos la expectativa que alberga Garretón (2000:89-90) cuando señala que "…el futuro de la democracia en América Latina va a depender fundamentalmente de la capacidad de construcción de una legitimidad de la política que permita a su vez estado, partidos y actores sociales fuertes, autónomos entre sí, pero complementarios". Un estado fuerte –agrega- "…requiere un control social del mismo…" que debe hacerse a través del sistema de partidos pero a su vez, "…tanto un estado como un sistema de partido fuertes tienen que ser controlados por la ciudadanía y eso supone actores y redes sociales fuertes y autónomos de las otras dos instancias".

Aunque este párrafo tal vez resuene demasiado normativo, no deja de resultar esclarecedor para entender ciertos límites que enfrentan algunas experiencias de nuestra región para encaminarse a una estatalidad propiamente democrática.

[16] Véase al respecto el artículo de Luis A. Romero, "El gobierno se comió al Estado", *La Nación*, (13/07/12).

IV. Breves conclusiones

Esta dimensión del estado nos recuerda que éste está sometido a ciertas exigencias bajo una democracia y el balance que acabamos de efectuar en el apartado anterior ensombrece en parte, la extendida celebración frente a su retorno.

En una entrevista efectuada a Guillermo O'Donnell en el 2003, un periodista le señalaba que tras el fracaso de la experiencia neoliberal había una "mayor demanda de estado". O'Donnell respondió: "es verdad que ahora hay más demanda de estado en Argentina y hay más predisposición por parte del gobierno a hacer el estado, pero aún no he oído la discusión sobre *qué* estado y *para quién* (…) Lo primero que hay que preguntarse –agregaba- es: un estado *para qué* y *para quién*".[17]

Según lo que pudimos conocer en sus trabajos posteriores, O'Donnell (2008; 2010) tenía en mente un estado *en* y *para* la democracia. Esa valoración sobre el estado no le impidió ignorar los riesgos potenciales que éste encierra para una democracia cuando sus funcionarios -en posesión del poder público-, se presentan como algo que existe *por afuera* y *encima* de la sociedad que le ha dado origen (O'Donnell, 2010). En cierto modo, nos alertaba sobre la tentación a hipostasiarlo y desconfiaba de la ilusión –tan extendida en la región- de que *a más estado, mejor democracia*. La democracia necesita del estado, es cierto, pero más estado no implica necesariamente mejor democracia.

Es preciso retener esta advertencia pues el nuevo clima ideológico instalado tras el fracaso de las políticas neoliberales tiende a presentar su regreso como si ello bastase para perfeccionar a nuestras democracias. El estado no tiende inherentemente a la democratización ni es por esencia progresista. Ambas cualidades son contingentes y que ello resulte posible dependerá de otras variables que no se reducen simplemente a sus dimensiones y activismo.

Sin renunciar a su defensa, resulta prudente evitar todo *esencialismo* que dé por sentado que, por su propia naturaleza, el estado sólo podría cumplir funciones progresistas. La sociogénesis del estado y la experiencia autoritaria desatada en los '70, nos recuerdan que éste no está destinado "…por esencia al desempeño de tareas históricamente progresistas ni es un ente que por su naturaleza acompañe favorablemente el desarrollo y emancipación de los grupos dominados" (Flisfisch, Lechner y Moulián, 1985:94).

El retorno del estado al que hoy asistimos, no asegura *per se* el sello progresista al que aspiran muchos de los gobiernos de la región si esta mayor presencia estatal viene acompañada de desconfianza y desdén frente a las demandas de control público. Su progresismo no puede cifrarse sólo en ocupar espacios que hasta hace poco estuvieron en manos privadas sino también en la visibilidad y publicidad que muestre a medida que aumenta sus responsabilidades y dimensiones.

Para que el actual retorno del estado no se convierta en una nueva oportunidad desperdiciada, deberá ser algo más que un simple reverso de la euforia privatizadora que se extendió en los '90. Es posible y necesaria otra mirada sobre el estado pues de lo contrario nos arriesgamos a que aquella oleada privatista sea hoy reemplazada por una actitud meramente reactiva –como un simple espejo invertido de aquella- pero manteniendo prácticas, reductos y enclaves, tan poco consonantes con la vida democrática, como los que dos décadas atrás, acompañaron su desmantelamiento.[18]

---

[17] Véase "Nuestra democracia me pone furioso", *La Capital*, 7 de diciembre de 2003. La cursiva es nuestra.

[18] No deja de resultar curioso cierto repertorio de situaciones que desafortunadamente se reiteran, tales como el debilitamiento de los órganos de control, la tentación re-reeleccionista, el *per saltum* de la Corte Suprema impulsado por senadores oficialistas, entre otros datos de la actualidad política reciente.

Cuando en los años '90 se discutía –y aún desconocíamos en toda su dimensión- el impacto de las reformas pro-mercado sobre nuestras democracias, Mario dos Santos (1993:136) señalaba que "el estado es tanto forma política como aparato…" y que por tanto, las políticas en torno a éste no debían evaluarse en sus propios términos sino considerando si "…contribuyen o no a un mejoramiento del régimen político, o sea a su contenido institucional; a cuánto amplían o restringen el espacio público; a cuánto vuelven más o menos transparente la acción estatal; si buscan o no acumular capacidades estatales".
Bastaría cambiar las fechas y la dirección de esas políticas –entonces destinadas a reducir el papel del estado, ahora a aumentarlo- para que estas mismas preguntas nos permitan interrogarnos hoy cuánto ha contribuido el retorno del estado a mejorar nuestra democracia.

Bibliografía

Aboy Carlés, G. (2005). Populismo y democracia en la Argentina contemporánea. Entre el hegemonismo y la refundación. *Estudios Sociales. Revista Universitaria Semestral* 28: 125-149.

Ackerman, J. (2008). Introducción: Más allá del acceso a la información. en *Más allá del acceso a la información. Transparencia, rendición de cuentas y estado de derecho*. México: Siglo XXI.

Arditi, B. (2011). El reencantamiento de la política como espacio de participación ciudadana. en *Sentido de pertenencia en sociedades fragmentadas. América Latina desde una perspectiva global*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores - Cepal.

CELS (2010). *Derechos Humanos en Argentina: Informe 2010*. [en línea]. Disponible en www.cels.org.ar/common/documentos/Informe_CELS_2010.pdf

Cheresky, I. (2002). Autoridad política debilitada y presencia ciudadana de rumbo incierto. *Nueva Sociedad* 179: 112-129.

Cheresky, I. (2008). "Percepciones ciudadanas sobre el rol del Estado y su funcionamiento. en PNUD *Las capacidades del Estado y las demandas ciudadanas. Condiciones políticas para la igualdad de derechos*. Buenos Aires: Proyecto de Análisis Político y Escenarios Prospectivos (*PAPEP-PNUD*)

Corporación Latinobarómetro (2011). *Informe* 2011. Disponible en www.latinobarometro.org

Dos Santos, M. (1993). ¿Atajos o rodeos para una reestructuración progresiva? en *Los que quedaron afuera. Educación. Empleo. Gasto social. Políticas sociales*. Buenos Aires: Ediciones Unidos y Fundación Friedrich Ebert Argentina.

Elias, N. (1993). *El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Flisfisch, A., Lechner, N. y Moulián, T. (1985). Problemas de la democracia y la política democrática en América Latina. en *Democracia y desarrollo en América Latina*. Buenos Aires: Grupo Editor de América Latina.

Garretón, M. A. (2000). *Política y sociedad entre dos épocas. América Latina en el cambio de siglo*. Rosario: Homo Sapiens.

Holmes, S. y Sunstein, C. (2011). *Por qué la libertad depende de los impuestos*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno editores.

Iazzetta, O. (2011). Estado, democracia y ciudadanía en la Argentina poscrisis 2001. en I. Cheresky *Ciudadanía y legitimidad democrática en América Latina*. Buenos Aires: Prometeo, Clacso.

Mazzuca, S. (2002). ¿Democratización o burocratización? Inestabilidad del acceso al poder y estabilidad del ejercicio del poder en América Latina. *Aracauria* 7: 23-47.

Muñoz, H. (2011). "Prólogo". en *El Estado de Ciudadanía. Transformaciones, logros y desafíos del Estado en América Latina en el siglo XXI*. Buenos Aires: Sudamericana-PNUD.

O'Donnell, G. (2008). Hacia un Estado de y para la democracia. En *Democracia/Estado/Ciudadanía. Hacia un Estado* de y para *la Democracia en América Latina*. Lima: PNUD.

O'Donnell, G. (2010). *Democracia, agencia y estado. Teoría con intención comparativa*. Buenos Aires: Prometeo.

Peruzzotti, E. (2012a). El derecho a un buen estado. *Temas y Debates* 24 (en prensa).

Peruzzotti, E. (2012b). Estado y rendición de cuentas: El derecho a un buen Estado. *Escenarios Alternativos*. Disponible en www.escenariosalternativos.org/default.asp?seccion=coyuntura1&subseccion=coyuntura1&nota=4299

Peruzzotti, E. y Smulovitz, C. (2002). *Accountability* social: la otra cara del control. en E. Peruzzotti y C. Smulovitz (eds.) *Controlando la política. Ciudadanos y medios en las nuevas democracias latinoamericanas*. Buenos Aires: Temas.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2011). *El Estado de Ciudadanía. Transformaciones, logros y desafíos del Estado en América Latina en el siglo XXI*. Buenos Aires: Sudamericana-PNUD.

Rouquié, A. (2011). *A la sombra de las dictaduras. La democracia en América Latina*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Shapiro, I. (2011). *La teoría de la democracia en el mundo real*. Madrid: Marcial Pons.

Schumpeter, J. (2000). La crisis del Estado fiscal. [en línea] *Revista Española de Control Externo* 5: 147-192. Disponible en www.dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo

Vargas Cullell, J. (2011). La calidad de la democracia y el estudio comparado de la democratización. *Revista Latinoamericana de Política Comparada* 5: 7-24.

Escenificaciones ciudadanas, publicidad y legitimidad democrática en la Argentina contemporánea (discusiones teóricas)

Lucas Martín

I. Introducción

El presente ensayo se propone examinar una variedad de manifestaciones públicas de sectores de la sociedad desde la óptica de la ciudadanía. El carácter público y la implicación política de esas manifestaciones llevan implícito una apelación a la legitimidad de las mismas en términos de la igualdad ciudadana –el derecho a la voz pública y a ser oído de cualquier miembro de la comunidad. Es en este sentido que podemos hablar de escenificaciones ciudadanas, es decir, como la puesta en escena pública de un reclamo o una opinión en nombre del principio democrático que rige para la comunidad.

En ese marco, el objetivo es analizar una tensión: aquella que se da entre la legitimidad de toda manifestación pública de ciudadanos *qua* ciudadanos y la legitimidad de las instituciones del régimen democrático constitucional que son desafiadas por las mencionadas manifestaciones a la vez que tienen por finalidad garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía. Dicho en otros términos, las preguntas que nos hacemos al indagar la mencionada tensión son: ¿en qué consiste el reaseguro institucional de la ciudadanía plena frente a una ciudadanía que, en su activación pública, escenifica la significación de su plenitud? y ¿qué formas de ciudadanía, cuáles de sus manifestaciones, y en qué sentido contribuyen a una ampliación de la institucionalidad democrática antes que a la erosión de los reaseguros institucionales que garantizan esas mismas manifestaciones? Estas preguntas son una reformulación de una preocupación de larga data sobre cuál es el modo de mantener en el tiempo un régimen de libertad (qué instituciones) asumiendo la indeterminación propia de las acciones inspiradas en esa misma libertad (qué ciudadanía) –preocupación, no está de más aclarar, propia de la tradición republicana.

Nuestro propósito se inscribe, por otra parte, en un problema más amplio de la legitimidad política moderna, a saber, el problema de dar un fundamento a un orden político que, siendo un *constructo* social, carece de otro fundamento que el que le otorgan sus propios miembros (Dotti, Lefort). Asimismo, el problema ha sido planteado últimamente, por ejemplo, a propósito de la tensión entre una ciudadanía que instaura una igualdad formal ligada a la pertenencia a una entidad universal y trascendente, la república, y una ciudadanía particularista que exige permanentemente la igualación en diversas condiciones concretas de existencia (Schnapper 2004).

Pero de lo que se trata aquí, no es la tensión entre una forma universal, que sería la república o el Estado democrático de derecho, y la exigencia de bienes particulares en términos de derechos, sino de la tensión entre dos formas o, si se quiere, entre dos universales: entre las instituciones de nuestras democracias liberales como formas

históricas de la moderna comunidad de ciudadanos y las formas en que la ciudadanía escenifica su membresía *qua* ciudadanos. En otros términos: entre las formas institucionales y las formas de acción ciudadana o, como dijimos antes, entre la legitimidad de las manifestaciones de ciudadanos *qua* ciudadanos y la legitimidad de las instituciones democráticas[1].

Esta formulación del problema deja de lado los "contenidos" de las demandas ciudadanas y, con ellos, las pretendidas distinciones entre una ciudadanía o una democracia "formales" y una ciudadanía o una democracia "reales". Pondremos entre paréntesis, hasta donde sea posible, el hecho de que las escenificaciones de la ciudadanía conlleven reclamos sobre vivienda, depósitos bancarios, planes sociales, retenciones, trabajo, salarios, etc.. Sabemos que esta restricción puede resultar ilegítima en la medida en que reconocemos en nuestro planteo la naturaleza histórica tanto de las instituciones como de las manifestaciones ciudadanas y que, por lo tanto, no sabríamos descifrar la significación de unas y otras sin indagar en la densidad histórica los motivos en que se fundan y se comprenden unas y otras. Como sugerimos antes, si la legitimidad política carece de un principio extra-humano que la fundamente, si no existe por fuera de las instituciones que sostienen los hombres y las acciones que éstos emprenden un fundamento último e inapelable al cual recurrir para conocer, comprender y juzgar instituciones y acciones en términos de legitimidad, en fin, si la *legitimidad* política moderna es el fruto, el *constructo*, derivado de la institución de la legitimidad *como problema*, entonces no sabríamos comprender la tensión entre instituciones y ciudadanía haciendo abstracción de su circunstancia histórica –circunstancia que incluye, ciertamente, los motivos o los principios que generan tal o cual escenificación de la tensión, tal o cual tensión específica y tal o cual re-forma institucional o innovación en la forma de acción ciudadana. Con todo, nuestra perspectiva opta por poner el acento en la historicidad de las formas de la ciudadanía en términos de escenificaciones[2] históricas de principios universales que dan sentido –y exigen la pregunta por el sentido- a un mundo humano sin fundamento último (son, básicamente, los principios de libertad, igualdad y democracia).

La idea de escenificación de la ciudadanía permite examinar desde una perspectiva fenomenológica la forma histórica que adquieren el concepto y la experiencia de la vida ciudadana. No se trata de establecer un concepto y compararlo con la realidad desde una teoría normativa ni de elaborar el concepto a partir de la observación de una evidencia empírica con fuerza de evidencia, a la manera del positivismo clásico o del neopositivismo; ni se trata tampoco de develar una realidad que estaría detrás de la noción de ciudadanía y de la experiencia que lleva ese nombre, según alguna de las variantes estructuralistas, realidad que sería en última instancia el objeto a estudiar y respecto de la cual la ciudadanía sería una escenografía antes que una escenificación. La idea de escenificación de la ciudadanía nos permite indagar el sentido que históricamente cobra la ciudadanía por medio de su propia acción y su propia (auto)interpretación. En este sentido, nuestra perspectiva no niega la parte de verdad que tienen otras visiones; la reconoce, pero cifrada en términos de una escenificación histórica dada y abierta a la renovación tanto teórico-conceptual como práctica nuevas. Reconocemos así, por ejemplo, que puede hablarse de "ciudadanía-como-condición-legal" o status y "ciudadanía-como-actividad-deseable" o virtud, que hay algo de identidad y de pertenencia en la idea y la experiencia de ciudadanía y que hay en ella una referencia al Estado y a la democracia (Kymlicka y

[1] Nuestro planteo se inspira en los trabajos del equipo de investigación *Nuevas Formas Políticas*, del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Véase, por ejemplo, Cheresky 2006, pp. 28-29, 41-42.

[2] La idea de "escenificación" la elaboramos a partir de la idea de "mise en scène" de Lefort.

Norman, 1997; Levín, 2004; Marshall, 1997). Pero ninguna de esas 'determinaciones' agota el potencial de la idea de ciudadanía, potencial de apertura a nuevas experiencias, nuevas escenificaciones, nuevas formas, que adquirió con las revoluciones democráticas modernas. En efecto, en nuestras democracias, donde no existe un fundamento último de legitimidad al cual los hombres puedan apelar para clausurar el debate sobre lo legítimo e ilegítimo, "ciudadanía" designa al nombre del miembro de esa comunidad sin fundamento, es decir, a una membresía cuya condición de pertenencia carece de fundamento último –o, lo que es lo mismo, tiene como único fundamento la igualdad de cualquiera con cualquiera, para decirlo en términos de J. Rancière. Esto quiere decir que el sentido de la ciudadanía debe ser indagado en las acciones de los hombres; en otras palabras, que la condición de ciudadano ha de ser indagada en términos de sus escenificaciones históricas.

Una última advertencia. El lector habrá detectado, en el planteo de una tensión instituciones/ciudadanía, la ausencia de toda referencia a una instancia de mediación entre ambos polos, la ausencia, en particular, de la instancia de mediación política por antonomasia: los partidos políticos. Este tema, como el tema anejo de la representación, será retomado hacia el final de estas páginas. Pero es necesario argumentar nuestra decisión: los partidos políticos, se ha dicho, ya no son lo que solían ser (Cheresky, 2006); las identidades sobre las que reposaba su capacidad instituyente y representativa se han desarticulado; de modo que la denominada crisis de representación, o mejor, crisis de una forma de representación o metamorfosis de la representación (Manin), recae sobre quienes ocupaban un lugar principal en la mediación política o en la generación de identidades políticas: los partidos políticos.

En consecuencia, indagar la relación entre la ciudadanía y las instituciones de la democracia, tiene su justificación en esta crisis de los partidos políticos como instancias mediadoras en el proceso político de legitimación de los gobiernos y de sus decisiones. Cabe decir igualmente que, hasta fecha reciente, los partidos políticos eran le medio principal de escenificación pública de la ciudadanía. En Argentina, podemos observar que el momento de la crisis de fines de 2001 cristaliza una transformación en la relación entre partidos políticos y ciudadanía, transformación cuyos inicios coinciden con la recuperación democrática[3] y cuya evolución aun permanece bajo un signo de interrogación.

En las páginas que sigue examinaremos tres formas de escenificación pública de la ciudadanía. En primer lugar, veremos las nuevas formas de protesta social, particularmente los piquetes o cortes de rutas, calles o puentes. Analizaremos aquí principalmente algunos de los argumentos de D. Merklen sobre los "pobres ciudadanos". Luego, analizaremos la escenificación de la ciudadanía como opinión pública, tal como esta es presentada por las encuestas y los sondeos y publicada por los medios de comunicación masiva. Retomaremos aquí los trabajos de I. Cheresky y del equipo de investigación "Nuevas Formas Políticas". En tercer lugar, examinaremos una escenificación por vía institucional: el recurso a la invocación de derechos antes la justicia para vetar decisiones o leyes o para exigir la efectivización de derechos. Recurriremos especialmente para este debate a los trabajos de C. Smulovitz. Estas tres formas de escenificación ciudadana abrirán el interrogante sobre la tensión entre ciudadanía e institucionalidad. En cuarto lugar, entonces, partiendo de los trabajos de M. Abensour y C. Lefort, examinaremos las dos

[3] Es menester admitir que la restauración democrática de 1983 trajo aparejado un apogeo de los partidos políticos que fue puesto en escena en los masivos actos partidarios y en las igualmente masivas afiliaciones. Sin embargo, como bien señala J. C. Torre, encontramos allí también un movimiento ciudadano ajeno a los partidos y con un lugar de relevancia de primer orden en esa nueva instauración de la democracia.

formas de relación con la institucionalidad que puede asumir la ciudadanía a partir de una distinción entre la estatalidad, como reducción institucional de la política, y la democracia "insurgente", como principio carente de fundamento que pone en discusión toda forma institucional. Finalmente, en las conclusiones propondremos algunas hipótesis de interpretación para dar cuenta de una tensión que aparece, en principio, irresoluble.

II. ¿Nuevos repertorios de protesta o nuevas escenificaciones ciudadanas?

En su libro *Pobres ciudadanos*, Denis Merklen nos propone una ampliación del concepto de lo político. En una discusión con el modo en que la teoría política argentina concibió, según su lectura[4], la autonomía de lo político respecto de lo social y asimiló política y ciudadanía a la vez que opuso a ambas a la intervención antipolítica de manifestaciones sociales organizadas, Merklen propone definir la politicidad como algo ligado a la sociabilidad[5], en particular, puesto que su crítica se funda en su interpretación elaborada a partir de una investigación empírica, propone que la politicidad de los sectores populares está ligada a la sociabilidad popular.

Según Merklen, a partir de 1983 se genera un consenso acerca de que la buena política pasa por la ciudadanía y por los partidos como articuladores de la representación, de ideas y sentidos, siendo el voto el acto político por excelencia (Merklen, 2005: 32-33). La calle, los intereses sociales, la sociedad, quedan al margen del ámbito de una política así autonomizada o, en el caso extremo, aparecen como sinónimos de negatividad, de anomia y de antipolítica[6]. La finalidad era estabilizar las reglas democráticas para dar mayor autonomía al espacio político respecto de la sociedad (Merklen, 2005: 35-36).

En este marco teórico, se dejaban de lado las transformaciones económicas y sociales iniciadas en 1976 y profundizadas de manera radical en los años 90, y se perdía de vista los efectos que esas transformaciones tenían sobre los sectores populares y sobre el modo en que estos sectores generaban una politicidad propia al margen del ideal de ciudadanía contemplado por la mencionada "teoría política"[7]. Esa nueva politicidad es plasmada, según Merklen, en un nuevo 'repertorio' de protesta que "no se correspondía en nada a la visón estilizada de la política que la teoría política estaba construyendo." (Merklen 2005: 36).

---

[4] Lectura con la que, en parte, disentimos. Pues entendemos que la crítica que hace depende, por un lado, de una construcción un tanto arbitraria de la "teoría política" y, por otro, de un desplazamiento temporal en su argumento que es, a nuestro parecer, ilegítimo: critica la teoría política de los 80 como si ésta estuviera confrontada a los problemas de los 90, cuando en realidad enfrentaban el legado de problemas de los 70. Finalmente, supone que los teóricos políticos a los que se refiere no aceptarían sus tesis –algo que, creemos, no necesariamente sería el caso. Podemos ver en la discusión un nuevo y estimulante round del viejo debate entre la sociología y la teoría política. Como veremos más adelante, los argumentos de Merklen podrán ser de utilidad para nuestro análisis; asimismo, entendemos que un examen más atento de las distinciones de teoría política y de las experiencias a las que esas distinciones se refieren hubiera sido una herramienta de utilidad para la argumentación de Merklen, tal como también esperamos quede en claro en lo que sigue. En efecto, la crítica y la argumentación de Merklen pierden asidero al no distinguir términos como politicidad, estado, sistema político, democracia.

[5] Denis Merklen, *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)*, prólogo de Silvia Sigal, Editorial Gorla, 2005, Buenos Aires, p. 24.

[6] Id., pp. 32-35, 38.

[7] "Todos parecen olvidar el carácter político de las transformaciones socioeconómicas, y el consecuente carácter político de la movilización popular (bajo todas sus formas)." (Id., p. 39)

En lo que atañe a nuestra argumentación, lo que interesa subrayar es la oposición que encuentra Merklen entre dos formas de politicidad: una, ciudadana, que se caracteriza por una estilización de la política desligada de lo social y reducida a sus manifestaciones electorales, institucionales, partidarias, en el marco del ideal de la democracia liberal y de un espacio público deliberativo; y la otra, la de la protesta social, caracterizada por el descontento, por su origen social, por su ligazón a una nueva sociabilidad arraigada territorialmente y generada por los sectores cada vez más marginados y por un conjunto de nuevas formas de acción más o menos públicas pero siempre en el borde externo de la legalidad vigente: asentamientos, saqueos, estallidos y piquetes[8].

Los asentamientos, los saqueos, los estallidos y los piquetes, no parecían ensanchar la democracia, al menos no en los términos en que la "teoría política" entendía la democracia, según la lectura de Merklen[9]. Pero en cambio, Merklen expone cómo el *asentamiento*, de origen en los años 80, generan en sus inicios "un auténtico espacio público local" y democrático que se fue deteriorando a medida que el Estado penetraba en las organizaciones populares que los llevaban adelante al transformarlas en instancias de ejecución de políticas sociales[10]; cómo los *saqueos* de 1989 y 2001 constituyen un acción desesperada, pero nutrida de cierto grado de organización o sociabilidad, que podía blandir una amenaza contra la democracia pero que, principalmente, escenificaba una revuelta contra el orden injusto existente hasta el momento[11]; cómo los *estallidos* que, a partir de 1992, destituyen gobiernos en Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Corrientes, constituyeron revueltas contra la representación política nacidas de una sociabilidad y una politicidad preexistentes[12] (Merklen, 2005: 53); y cómo los *piquetes*, surgidos en 1996, se consolidaron como forma de protesta y reforzaron las organizaciones sociales identificadas, a partir de 2000, como piqueteros[13].

Se trata, entonces, según Merklen, de reconocer una nueva politicidad, una politicidad positiva y simbólicamente productiva, diferente de la politicidad ciudadana, y cuya evolución transcurre en un proceso de varios años, a un nivel local, territorial, y sin una gran visibilidad a nivel del espacio público nacional, salvo irrupciones esporádicas, hasta el año 2000, cuando esa politicidad se transforma –aunque Merklen no lo diga en estos términos– en una politicidad pública a la par, en un mismo nivel, de la ciudadanía "limpia" e ideal, de tenor liberal, que canaliza sus expresiones por las vías institucionales de la democracia liberal, principalmente a través del voto. Esa politicidad de los "pobres ciudadanos", en su expresión mayoritaria, articula demandas sociales en el nivel estatal: manteniendo una relación de protesta y diálogo con las diferentes instancias de gobierno, las organizaciones piqueteras (particularmente, las englobadas en la FTV y en la CCC, ligadas a su vez a la CTA) logran presentar demandas que dan lugar a políticas sociales que son gestionadas por las organizaciones territoriales propias. Hay allí un reconocimiento de

[8] Id., pp. 36-42; para la cita: p. 36.
[9] Id., p. 36.
[10] Id., p. 51.
[11] Id., p. 52.
[12] Id., p. 53.
[13] Id., pp. 53-55. Sin duda debemos apreciar la diferencia entre las distintas acciones del repertorio de protesta social. Los estallidos y los saqueos, aun cuando hayan sido emergentes de una sociabilidad previa y de una acción más o menos organizada, no han establecido un lazo social o político en el tiempo, como tampoco, consecuentemente, una forma de acción permanente. Los asentamientos y los piquetes, en cambio, sí han logrado mantener una organización en el tiempo y han buscado una legitimidad de sus identidades y de sus formas de acción.

derechos, una articulación con el Estado y una visibilidad política, que coronan la politicidad largamente elaborada en el nivel local.

Ahora bien, es este modo de articulación política con el Estado y el sistema político, y no la politicidad local inicial o el la legitimidad ciudadana de las acciones de su repertorio, lo que vuelve más oscuro el carácter ciudadano de la politicidad de las organizaciones piqueteros (que es a las que particularmente se refiere Merklen). ¿Qué ciudadanía es aquélla cuya politicidad (y positividad) depende del reconocimiento del Estado? ¿Qué visibilidad y que potencial de transformación política (ergo, de politicidad) para quienes se transforman en gestores de una política social asistencialista? No está de más insistir: nos interesa las formas de manifestación de la ciudadanía y no la legitimidad de sus demandas –y tampoco está de más aclarar, que las demandas de las que aquí hablamos nos parecen legítimas.

Entendemos que en el planteo de Merklen hay un debate disciplinario, de matriz disciplinar, para decirlo en términos de Th. Kuhn, entre un abordaje sociológico y un abordaje de teoría política. Asumimos, por nuestra parte, un perspectivismo que nos permite aceptar varios de los argumentos de Merklen, principalmente aquél que le permite rescatar las nuevas prácticas de sectores populares en nombre de una politicidad popular positiva[14]. Pero, como sugerimos antes, hay un punto en que las perspectivas se tocan y entran en debate. Ese punto es el de la noción de politicidad y su relación con la democracia, con el sistema político y con el Estado. Es decir: si antes coincidimos en la existencia de dos politicidades, la de la "ciudadanía limpia", como gusta denominarla Merklen, y la de los sectores populares, no podemos coincidir en la referencia indiferenciada de la noción de politicidad a tres formas de institución política como son el Estado, el sistema político y la democracia[15]. Por eso, una vez aceptadas las dos politicidades, ciudadana y popular, politicidades que coinciden en designar modos de escenificación de los representados y, por qué no, según lo entendemos nosotros, modos de escenificación de la ciudadanía, es necesario responder a las preguntas que venimos de hacernos. En otros términos, ¿de qué modo estas escenificaciones piqueteras de la ciudadanía logran articularse en tanto que manifestaciones ciudadanas con la legitimidad propia de la democracia, la igualdad de todos los ciudadanos, y con las formas institucionales que garantizan esa legitimidad, esa igualdad? Dicho esquemáticamente: ¿cuánto contribuyen esas escenificaciones al mantenimiento de la legitimidad de la que dependen?

---

[14] En el mismo sentido, coincidimos los argumentos de Semán (2006), retomados por Merklen. Por lo demás, hay coincidencias entre el planteo de Merklen y algunos de los principales planteos de teoría política que él critica. Por mencionar algunas: el diagnóstico de un cambio en el repertorio de acción colectiva a partir de los 90, la negación de la politicidad como simple reflejo de una situación social (lo que implica algún grado de autonomía de la política respecto de lo social, idea con la que, al principio, Merklen parece estar fuertemente en desacuerdo), que a nivel popular-territorial puede generarse una ciudadanía no necesariamente clientelística sino que es posible hallar allí también una experiencia que puede describirse en términos de ciudadanía (lo que sugerimos con esta última coincidencia es que la "ciudadanía limpia" que Merklen atribuye a la teoría política es en realidad una caricatura que conviene a su argumento y que en muchos casos no sería admitida por los "teóricos políticos").

[15] Según dijimos antes, en estas páginas, abordamos el debate en términos de escenificación de la ciudadanía según el supuesto de que la ciudadanía designa el miembro de una comunidad democrática cuyo principio es el principio de igualdad y cuya prueba cabal se da por medio de la acción. Esta concepción, que reconoce su afiliación a las ideas de autores como Arendt, Lefort y Rancière –por mencionar sólo autores contemporáneos–, es muy distinta de otras varias conceptualizaciones de la ciudadanía que la ligan al Estado en tanto que fuente exclusivo de reconocimiento de derechos y paradigma por excelencia de lo político (y la politicidad), como las de Th. Marshall y R. Bendix, entre los más reconocidos (para discusiones en torno a estos temas, cf. Levín 2004, Kymlicka y Norman 1997).

Entendemos que muy diferente es una articulación en el espacio público, fruto de una visibilidad ganada por la irrupción, el corte, el piquete, de una articulación menos visible, centrada en la gestión, con las agencias del Estado a través de funcionarios y representantes. Politicidad en el espacio público y politicidad ligada al Estado son cosas bien distintas; y si bien ambas tienen en el piquete el modo de visibilización por excelencia, el significado de ese modo de acción cambia. En buena medida, los piquetes han aparecido como instrumento de reclamo por la inclusión en, o por la ampliación de, los planes sociales del Estado[16].

Nuestra hipótesis es que mientras la primera contiene un potencial de ampliación democrática, la segunda, en cambio, tiende a reforzar el orden estatal y, particularmente, al Estado como fuente de reconocimiento de derechos (volveremos sobre el tema). Esta hipótesis permite una mejor comprensión de las escenificaciones ciudadanas y de la importancia que tiene el espacio público tanto en la búsqueda de legitimación de reclamos sociales como en la conformación (la puesta en forma, configuración o "mise en forme") de las acciones colectivas. Es desde esta perspectiva que puede observarse la legitimidad de dichas escenificaciones y su tensión con la institucionalidad vigente establecer una comparación con el recurso a piquetes por parte de otros movimientos ciudadanos de acción directa: el movimiento ambientalista, con sus reclamos contra las industrias papeleras instaladas en el borde del río Uruguay o del movimiento de protesta agrario contra la modificación en el sistema de retenciones a las exportaciones, e incluso por organizaciones sindicales en reclamo de mejoras en las condiciones laborales. Es desde esta perspectiva que permite la comparación que debe juzgarse, a nuestro entender, la naturaleza ciudadana y la politicidad de los cortes de calle y los piquetes. Y es en este mismo sentido que nos propusimos desde el inicio indagar las escenificaciones ciudadanas, las formas de manifestación pública de la ciudadanía, más allá de la legitimidad y los contenidos de las demandas[17].

Cabe decir de todas estas escenificaciones, que comparten el corte de calles, rutas o puentes, como forma de dramatización de su reclamo de manera de llamar la atención pública. La interrupción de vías *públicas* de circulación obliga la atención del público que circula o que depende de esa circulación (especialmente, en la medida en que los cortes impiden el traslado de alimentos, combustibles, así como impide o lentifica la asistencia al trabajo en las zonas urbanas). Y en esta dramatización pública se pone en escena a su vez la ineficacia de los representantes y de las vías institucionales en las que esos representantes actúan para dar lugar a la voz del reclamo. En este sentido, todo corte de ruta, de calle o de puente, aun cuando cuente con ciertos liderazgos que cumplen un rol representativo en las instituciones políticas o gremiales, es en primer lugar una escenificación ciudadana *directa*, que conlleva una crítica a las *mediaciones* institucionales existentes.

---

[16] Merklen, Id. Ver, por ejemplo, en prensa "Los piqueteros esperarán una respuesta hasta el 15" (*Perfil*, 5/12/2009; también *Clarín*, 16/02/2010). En febrero de 2010, Luis D'Elía, líder de la organización "piquetera" FTV y ex-diputado por el FpV, criticó la falta de comunicación del gobierno con su organización, la pérdida de programas de empleo comunitario y la canalización de planes sociales a través de intentendetes (ver declaraciones en su programa de radio, en Radio Cooperativa, reproducidas en "La Mañana", Radio Continental, 10/02/2010; y *Clarín* 10/02/2010).

[17] Para un planteo similar, que sí pone en juego la legitimidad de las demandas, véase de Vicente Palermo: "¿Hasta dónde hay derecho a la protesta?", en *Ñ. Revista de cultura*, n° 128, 11 de marzo de 2006, Buenos Aires, pp. 12-14.

III. La ciudadanía como opinión pública: medios y mediciones

Se ha dicho que desde hace un tiempo hay un proceso de metamorfosis de la representación en curso (Manin 1998). Las instancias tradicionales de representación, principalmente los partidos políticos, han perdido su poder mediador, otrora exclusivo, en la escena política[18]. Esta metamorfosis cobra forma a través de una transformación y una ampliación del espacio público: éste, en otros tiempos escena de demostración de capacidad de movilización de los paridos políticos, es cada vez más el lugar de escenificación directa de la ciudadanía. Si antes mencionamos la acción directa en la calle, la ruta o el puente, o en la plaza, de grupos de ciudadanos que con su *presencia* efectiva se auto-representan en nombre de sus reclamos públicamente y por fuera de los canales institucionales, la influencia de los medios de comunicación y, a través de ellos, de las encuestas y sondeos de opinión nos permiten indagar otro tipo de escenificación, esta vez *virtual*, de la ciudadanía.

La encuesta permite realizar un nuevo tipo de inscripción de la ciudadanía, de sus deseos, preocupaciones e intereses, en la escena pública, diferente del modo tradicional de inscripción partidaria. Mientras que la encuesta genera una figuración de la ciudadanía virtual, directa, sin mediaciones[19] y efímera, la figuración partidaria es una mediación, que se sostiene en la movilización o el compromiso de afiliados y adherentes y asume su lugar de parte y su aspiración al poder legitimado por el todo. Es entonces, la encuesta, un recurso nuevo para los representantes, que pueden gracias a ella ganar espacios políticos aun careciendo de los recursos partidarios tradicionales (carrera política, base territorial, etc.); y, por otra parte, la encuesta es un recurso político porque en primer lugar es un modo de escenificación de la ciudadanía – modo sin dudas sujeto a disputas, polémico, objeto de manipulaciones… en suma, con todos los condimentos de cualquier mediación o escenificación política[20].

En virtud de la visibilización pública que tienen, la encuesta y el sondeo constituyen, no un mero instrumento técnico de información para asesores políticos y expertos en campañas (en cuyo caso, carecerían de visibilidad), sino una forma de publicidad de acontecimientos, demandas, actores, opiniones, deseos, etc. En este sentido, la encuesta y el sondeo públicos son una forma de escenificación de la ciudadanía, pues los ciudadanos se dan por su intermedio una semi-representación del estado de sus opiniones a nivel agregado. Esta semi-representación, podemos decir, tiene tres dimensiones: por un lado, escenifica de manera agregada homogeneidades de una *ciudadanía plural*, por medio de cuestionarios aplicados de manera privada y anónima que producen informaciones agregadas que son expuestas públicamente para generar o alimentar el debate político; por otro lado**,** genera un estímulo para el *debate*, sea porque grupos de ciudadanos o representantes se activan para defender o contestar las opiniones e informaciones plasmadas en las encuestas, sea porque quieren modificarlas, sea porque existen divergencias entre las encuestas; finalmente, encuestas y sondeos ponen en escena la primacía de la *opinión*, la idea de democracia como régimen de la opinión, pues más allá de que es un procedimiento técnico, la encuesta, por un lado, recoge opiniones y, por otro lado, tiene una publicidad que le otorga un carácter más político que científico en la medida en que es fuente de

[18] Sigo aquí Cheresky 2006a, 2006b y 2008.

[19] En principio, la encuesta es un medio, pero es un instrumento técnico, neutral, como si fuera un megáfono y no, como en el caso de la mediación partidaria, un medio abierto a la participación y al debate, al sincretismo y la deliberación, y definido en torno a una idea o causa y una identidad [ver].

[20] Cfr. Vommaro 2008; Cheresky 2006.

debates, de reacciones, de cambios o refuerzos de opiniones, etc.; en otros términos, la noción mertoniana de profecías auto-cumplidas y profecías suicidas[21] cobra todo su sentido a la vez que pierde toda su utilidad en las encuestas públicas de opinión: cobran todo su sentido porque la permanencia en el tiempo y de manera reiterada, casi cotidiana, del recurso a encuestas para informar el debate público y la actividad partidaria, señala la aceptación condicional de sus resultados[22], y pierde toda su utilidad en la medida en que se sabe y se espera la reacción que la encuesta suscita, a un punto tal que la encuesta en su uso público lleva implícita la idea mertoniana, como rasgo intrínseco antes que como limitación técnica.

Pluralidad, debate y primacía de la opinión son los rasgos salientes del uso público y mediatizado de encuestas y sondeos de opinión. El espacio público de opinión cobra así una dimensión virtual y permanente que da una siempre renovada vitalidad a la política. La democracia, en este sentido, ya no necesita, para sostenerse, de la vitalidad de individuos virtuosos que sostengan en espacio público de acción y palabra, como ocurriera en las repúblicas pre-modernas. Ciertamente, no se trata de un espacio deliberativo ideal, en el sentido en que el intercambio racional de argumentos permite generar consensos legítimos y excluir la violencia y la fuerza de la esfera política. Pero la permanencia de temas de debate en la esfera pública, permanencia sostenida por la eficacia de la semi-representación de la ciudadanía virtual en la forma o escenificación de la *opinión pública*, permite mantener el espacio público abierto a la intervención de acciones y palabras en busca de legitimación, es decir, acciones y palabras que, por someterse de ese modo al juicio de la opinión pública, contribuyen por su sola escenificación a dar forma a la democracia -en tanto que régimen sin fundamento último- y a la ciudadanía en tanto que pertenencia a una comunidad de iguales.

IV. Reclamos judiciales: ¿la ciudadanía por otros medios?

Judicialización de la política, politización de la justicia, son expresiones que denotan un fenómeno relativamente nuevo, ligado a la consolidación de la democracia y del estado de derecho como valores compartidos por la ciudadanía. Son expresiones, también, con sentidos diversos e incluso opuestos. Judicializar la política puede significar sustraer los asuntos comunes del debate público sometiéndolos a la decisión de un tribunal. Así, por ejemplo, la llamada *criminalización* de la protesta sería la versión penal de este sentido de la judicialización, que ciñe las nuevas formas de protesta a la legislación vigente, niega legalidad a su modalidad de acción, rechaza la pretensión de legitimidad implícita en su carácter público y le concede trato exclusivo en dependencias tribunalicias. O también, judicializar puede significar activar uno de los poderes públicos, cuando los otros no dan lugar, con el fin de legitimar reclamos, hacer oír la propia voz o reclamar por derechos adquiridos. Paralelamente, politizar la justicia puede querer decir o bien someter a ésta al escrutinio de la ciudadanía, o bien amenazar la independencia de los jueces y, con ella, los derechos y las garantías de la ciudadanía.

[21] Cf. de Robert K. Merton, Parte II, cap. XI, "La profecía que se cumple a sí misma", en *Teoría y estructura sociales*, FCE, 1964 [primera ed. inglés, 1949; edición revisada y aumentada, 1957], México.

[22] Aceptación condicional expresada, por ejemplo, en las interpretaciones que acompañan los datos agregados, en el reconocimiento de los límites temporales de la fiabilidad de los datos y de los márgenes de error y en la aceptación en el caso de las encuestas de intención de voto de que el momento de la elección es el momento de la verdad (Vommaro 2006).

Ninguno de los dos procesos, como tampoco los diversos significados que puede asignarse a cada uno de ellos, puede comprenderse si no se asume la efectiva relevancia que tiene la nueva publicidad instituida en forma de un espacio público abierto, informal, poroso, pero con una innegable influencia sobre el sistema político, incluidos los poderes del Estado, los partidos políticos y los representantes tomados individualmente[23]. En este sentido, al observar Argentina podemos decir que si la dependencia de la justicia respecto del poder político es tan añeja que es difícil hallar evidencia histórica de un Poder Judicial independiente –especialmente, en los niveles más altos de ese Poder–, actualmente la subordinación de la Justicia al poder político tiene costos políticos que antes no existían o no se veían (Smulovitz, 1995: 73; 2008).

Los cambios sociales, económicos y políticos de los últimos años, y la llamada crisis de la representación, han indudablemente contribuido a que este fenómeno se vuelva visible y se profundice. La invocación de derechos ante la justicia como vía "para hacer política por otros medios" se ha manifestado en forma creciente desde la vuelta a la democracia (Smulovitz, 2005; 2008). El acceso a la instancia judicial se ha visto facilitada por diversas vías (entre ellas, organizaciones de la sociedad civil que promueven, o asesoran sobre, la iniciación de causas) y prescinde de la generación de consensos colectivos.

En los últimos tiempos, las decisiones más relevantes de la política nacional, elaboradas tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo, han sido objeto de revisión y veto en sede judicial. La pesificación, la anulación de los indultos y las leyes que limitaban la prosecución penal de los criminales de la última dictadura, la libertad de agremiación y la personería gremial, los problemas ambientales, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA)[24], la llamada Ley de Reforma Política, el uso de reservas del Banco Central para el pago de deuda[25], e incluso la conformación de comisiones legislativas, se cuentan entre los casos más resonantes. Los jueces pueden, a través de sus fallos, limitar o vetar decisiones o dar forma a políticas e instituciones elaboradas por los otros poderes del Estado (se ha hablado, en este sentido, de litigios estructurales y de litigios de interés público) (Smulovitz, 1995: 96-99; Bergallo, 2005; Aldao, 2009).

Tanto la judicialización de la política como la politización de la justicia pueden hablarnos del lazo representativo, de la ciudadanía y de la democracia. Los ejemplos que hemos mencionado antes, incluyen demandas y recursos judiciales de actores sociales de peso (como el multimedios *Clarín*, para el caso de la LSCA) o de representantes políticos (como en los reclamos sobre conformación de comisiones parlamentarias, sobre temas de coparticipación, y también contra la LSCA[26]). Esto ya nos da un indicio de que la vía judicial como continuación de la política "por otros medios" no es exclusiva del común de la ciudadanía o de los representados.

El acceso a la justicia como vía para reclamar derechos es en principio desigual. Depende de la posesión de recursos materiales y de tiempo. Lo primero, puede ser suplido por las asociaciones que promueven litigios. Lo que en cambio no puede asegurado por la estructura judicial ni por las mencionadas asociaciones es el conocimiento de esta vía, su

[23] Según la ya clásica definición de Habermas, el espacio público como esfera de opinión pública no es ni una institución ni una organización ni un sistema, ni conjunto de roles, pertenencias o competencia, ni un agregado estadístico de opiniones, sino una "red para la comunicación" de opiniones que condensan en torno a temas y que "se caracteriza por horizontes abiertos, porosos y desplazables hacia el exterior." (Habermas 2001: 441).

[24] *La Nación*, 09/03/2010; *Página 12*, 22/12/2009.

[25] *Perfil*, 9/01/2010; *Página 12*, 07/01/2010, 05/03/2010; *La Nación*, 06/01/2010).

[26] *Página 12*, 18/12/2009, *Clarín*, 23/12/2010.

visibilidad. Para amplios estratos de la población que carecen de acceso a este tipo de asociaciones, a abogados o, en fin, a la vida asociativa organizada en torno al derecho, la vía judicial no aparece como opción. Pero si efectivamente, como parece ser, tiene lugar hoy en Argentina este tipo de prácticas reivindicatoria de derechos, eso significa que contamos con un conjunto de redes asociativas que permiten acceder al reclamo de derechos en sede judicial. Cabe contar en esta red, no sólo las asociaciones específicas de patrocinio legal, sino los servicios legales de otros tipos de organizaciones, como las orientadas a combatir la violencia familiar, los gremios, las mutuales barriales o los centros de jubilados[27]. Por otra parte, la difusión mediática de las causas llevadas a la justicia implica, aun en su faceta de desconfianza ciudadana respecto del Poder Judicial, una visibilidad que contribuye al acceso a la vía judicial y al control del desarrollo de los procesos.

La defensa de derechos individuales aparece así, desde esta perspectiva, con un privilegio respecto de la legitimidad electoral y del principio mayoritario, que definen a la democracia como forma de gobierno (Smulovitz, 2008; Walter, 2007) – y por cierto, los fallos también pueden hacer lugar a reclamos de carácter colectivo, como los referidos al medio ambiente o a los problemas sociales. Pero la persistente visibilidad pública, por la que se reconoce en el Poder judicial una nueva y efectiva instancia de poder para la ciudadanía, puede devolver al escrutinio de la mayoría cualquier tema llevado a la Justicia[28].

La ciudadanía puede descubrir y de hecho descubre, en ese marco, las potencialidades del *Poder* Judicial. Y las instancias representativas, el poder político y las dirigencias partidarias, pueden reconocer allí una interpelación más o menos indirecta respecto de su desempeño. A su vez, entendemos que el Poder Judicial ha ganado una visibilidad sin precedente, y esto implica la exigencia de una nueva forma de legitimación, pública, visible, que antes no tenía.

[27] Cabe decir que, en el estado actual del sistema judicial argentino, la vía judicial muchas veces no es garantía de nada. En mis conversaciones informales con miembros del poder judicial y con algunos litigantes, destacaba el dato de que gran parte de los juicios perdidos por los demandantes se debía a errores procesales de los abogados (ejem.: una demanda mal hecha, la presentación de pruebas fuera de término, etc.). Tratándose en estas conversaciones, en general, de casos de derecho laboral en los que el trabajador demandaba al empleador, podría suponerse que la diferencia de recursos entre las partes influía sobre la calidad de los abogados, o incluso la cantidad de abogados, o las condiciones en que éstos debían trabajar. Como sea, el dato del error técnico en el reclamo de derechos deja inerme al reclamante. Al menos, como me sugirió un juez, hasta tanto los juicios por mala praxis dejen de concentrarse en la medicina y se vuelvan sobre los propios profesionales del derecho. Desconozco si hay estudios sobre la pérdida de derechos por errores procesales de los abogados.

[28] A propósito de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre temas de derechos humanos, su actual presidente (2010), Ricardo Lorenzetti, daba cuenta en una entrevista del modo en que el desempeño de la Justicia depende del escrutinio público y ciudadano sobre el tema: "En los últimos diez años se incrementó mucho la conciencia colectiva y este es un gran logro del pueblo argentino. La sociedad hoy tiene una idea clara del tema de los derechos humanos, en el sentido de delitos de lesa humanidad más que de derechos humanos en general. Si no existiera ese ambiente social, ninguno de os tres poderes del Estado habría avanzado." (*Perfil*, 06/06/2010)

V. La ciudadanía contra el Estado y el potencial de la democracia y los derechos humanos

Los trabajos de M. Abensour y C. Lefort permiten iluminar nuestra indagación por dos razones: por un lado, piensan la política en su historicidad y la democracia moderna como el régimen que por excelencia asume su propia historicidad, de modo que la sociedad democrática no podría (auto)comprenderse sino en términos de escenificaciones sobre un trasfondo de debate permanente en torno a la legitimidad; por otro lado, y como consecuencia de lo anterior, rechazan cualquier forma de teleología, como cualquier reducción conceptual en términos positivistas, en virtud de lo cual examinan los fenómenos políticos en los términos de sentido que esos mismos fenómenos proponen y abren el pensamiento a diferentes *formas políticas* o, para decirlo en los términos de Merklen, diferentes *politicidades*. Es por la vía de este segundo aspecto que retomaremos los elementos de los autores mencionados para nuestro argumento.

Una de las maneras de pensar la capacidad de auto-institución de las sociedades y la ausencia de fundamento último de lo instituido es, según Miguel Abensour, el modo en que Pierre Clastres analizó las comunidades primitivas americanas (en particular, las tribus guaraníes). El antropólogo francés pensó esas sociedades primitivas sin someterlas a la reducción eurocéntrica que entiende la política como sinónimo de Estado. La hipótesis de una *société contre l'état*, una sociedad contra el Estado, rechaza identificar la carencia de Estado con la carencia de política, y entiende la institución de una sociedad sin estado como forma una positiva (P. Clastres), y no una sociedad con una falta, una incompletitud, un desarrollo embrionario negativo. La positividad se da en esa institución política de una sociedad *contra*, que no quiere, o mejor, que quiere no tener estado. Sin estado o contra el estado no significa sin política. La universalidad de la política no significa la universalidad del estado. Estado y política, en Clastres como en Abensour, son diferenciados. El Estado sería entonces una configuración regional del poder (oculta tras un etnocentrismo del pensamiento político occidental) (Abensour, 1987: 122)[29].

Ahora bien, la estatalidad no constituye la forma inexorable de de pensar y experimentar la política en las sociedades occidentales contemporáneas. Tal como hemos venido sugiriendo en estas páginas, la revolución democrática marca un punto de inflexión en la historia política occidental diluyendo todo zócalo de certeza en el debate múltiple y permanente entre hombres y mujeres acerca de lo legítimo y lo ilegítimo, lo verdadero y lo falso, lo correcto y lo incorrecto. En este sentido, la democracia tiene algo de anarquía, de rechazo de todo principio fundamental, de todo *arché*, de toda reducción estatal de la política[30]. La democracia o, como prefiere M. Abensour, la democracia salvaje, de Lefort descansa sobre la disolución de los referentes de certidumbre, es decir, sobre la experiencia de la ausencia de fundamento y de indeterminación radical. Experiencia del *être-ensemble* democrático que se instituye en un movimiento *contra el Estado*.

El carácter salvaje de la democracia se experimenta en la reivindicación de nuevos derechos. Los *derechos humanos* crean, por ejemplo, una dinámica generadora de libertad. Abensour señala, sin embargo, que hay un riesgo cuando se arrima la democracia salvaje a

[29] Cf. también, a propósito de la oposición de este pensamiento al de Th. Hobbes, Abensour 1987: 127, 125-126, y sobre cómo, a diferencia del filósofo inglés, Clastres encuentra en la guerra no el motivo (previo) que conduce a una paz estatal homogénea sino la institución misma (coetánea) de una sociedad de lo múltiple orientada contra el surgimiento del Uno (Id.: 129-130). En efecto, si en Hobbes el Estado es instituido contra la guerra, en Clastres la guerra es una forma de auto-institución contra el Estado (Abensour 1987: 138).

[30] Sobre esta idea, cf. Abensour 1993: 129-130; 2004a y 2004b; Rancière, 1996, 2005.

la idea de derechos, puesto que estas luchas por nuevos derechos están orientadas en última instancia al reconocimiento y la sanción por parte del Estado. Por cierto, C. Lefort señala las historias diferentes, paralelas, del Estado y la democracia, y subraya la ausencia de fundamento último que sancione la legitimidad o ilegitimidad de los reclamos de derechos y el privilegio del principio del "derecho a tener derechos" –retomado de Arendt, aunque dándole una potencialidad simbólica superior a la que ella le otorgaba– como principio abierto e indeterminado con carácter fundante por fuera del Poder; pero al mismo tiempo que por esta vía C. Lefort da cuenta del cuestionamiento que el Derecho imprime al orden establecido, el autor francés propone una descripción en términos de la diferencia entre "Estado democrático" y "Estado de derecho" (Lefort, 1990: 25-26, 29). De manera paradójica, la lucha por la reivindicación de nuevos derechos que dinamiza la democracia salvaje conduce al fortalecimiento del Estado moderno, a pesar del impulso anti-estatal que la origina[31] (Breaugh, 2006: 87).

Para sortear este aparentemente inexorable vínculo de la exigencia de derechos con el Estado, y al Estado como marco insuperable [*indépassable*] de la democracia, Abensour propone la idea de democracia *insurgente*. ¿En qué consiste esta "democracia insurgente", qué la diferencia de la democracia salvaje y, finalmente, qué pueden decirnos estos conceptos de la ciudadanía, sus manifestaciones históricas y las tensiones que engendra en las instituciones democrático-liberales?

M. Abensour atribuye tres rasgos característicos a su nuevo concepto de democracia. En primer lugar, el conflicto que ella engendra *no se desarrolla en los límites del Estado*, dentro del encuadramiento estatal del disenso político. Esto quiere decir, puntualmente, que el conflicto democrático insurgente *no retrocede ante la ruptura*, pues entiende que no hay verdadera democracia si no se pone en cuestión toda forma de *arché*, de principio, y el Estado, como forma política que centraliza el poder y la organización de la sociedad a la vez que, con ese fin, instaura una escisión entre gobernantes y gobernados, es la manifestación de un principio, principio que podríamos llamar principio de estatalizad o principio del Estado-nación. En segundo lugar, la democracia insurgente supone una especie particular de temporalidad: la de la brecha [*césure*]. Elemento manifiestamente arendtiano, la temporalidad de la brecha o de la apertura describe una *lucha en dos frentes*: contra lo que ya no es y contra lo que todavía no es, contra el Antiguo Régimen que desaparece y el Nuevo Estado que viene a sustituirlo. Se trata de *intentar de mantener abierta la brecha*. En tercer lugar, la democracia insurgente desplaza los términos de las discusiones políticas fundamentales. No piensa la emancipación como el triunfo de lo social sobre lo político sino que opone la comunidad política al estado, negándose a reducir la política al Estado y recordando el carácter contingente del Estado en tanto que forma política (Abensour, 2004a y 2004b; Breaugh, 2006). El rechazo de la idea de emancipación como triunfo de lo social y la diferenciación entre política y Estado evitan que la democracia sea leída tanto en términos liberales o conservadores como en términos marxistas. Pues efectivamente estas corrientes de pensamiento suponen que el sentido de la política reside en una dimensión extra política, pre-política, que es la sociedad o la economía, y que la política, identificada y reducida al Estado, es sólo un medio para asegurar esa dimensión previa, o un reflejo de ella.

[31] Esta es la interpretación que por momentos propone Abensour, aunque en última instancia reconoce que el "derecho a tener derechos" y los "derechos humanos" que enuncian ese principio exceden el marco de la estatalizad. Entiendo que se trata, antes que una crítica a C. Lefort, una crítica o una prevención a los usos que se hacen de los argumentos lefortianos.

¿Qué política entonces por fuera del estado y contra el Estado y que, en tanto política, no pueda ser reducida al privilegio de la vida social y privada del liberalismo al fin de la política en una comunidad transparente y administrada del marxismo, ni al Estado como marco inexorable de la política? La política que exige la democracia insurgente de Abensour, aunque este autor no la defina en estos términos, cuenta con un concepto político y una experiencia política tan antiguos como la idea de política e igualmente renovados, como fue renovada la noción de política, a partir del Renacimiento y con las revoluciones modernas: el concepto y la experiencia de la *ciudadanía*.
El modo de comprensión de las transformaciones impulsadas por la indeterminación propia de la democracia moderna nos remite así a tres elementos:

1. La idea de *democracia insurgente* como principio an-árquico de auto-institución de nuestras sociedades modernas.

2. La noción de los *derechos humanos* como institución simbólica (ergo, fruto del poder humano) de una instancia separada del poder, aquélla del "derecho a tener derechos", pero a la vez imbricada con ese mismo poder por su carácter fundante y por su indeterminación.

3. La naturaleza *activa* de que supone el carácter auto-instituyente de las sociedades democráticas y la dinámica de unos derechos instituidos sobre el principio del "derecho a tener derechos", exige el complemente de un actor que porte en sí la misma indeterminación de los conceptos anteriores. Ese actor, político por definición, es el *ciudadano*. Se recupera así una concepción activa de la ciudadanía, en la línea de la tradición democrático-republicana y de las reflexiones de Hannah Arendt[32].

¿Cómo interpretar las tres escenificaciones examinadas anteriormente a la luz de estos elementos y cómo pensar la institucionalidad que requiere toda democracia afín de evitar su propia decadencia y su deriva en el autoritarismo?

VI. Para concluir: Ciudadanía, institucionalidad y democracia contra el Estado

Según el desarrollo seguido en estas páginas, las nuevas movilizaciones de protesta que desafían la legalidad vigente tienen una escenificación pública y una articulación estatal. La opinión pública medida y mediatizada, por su parte, pone en escena una semi-representación de la opinión de la ciudadanía o una presencia virtual ciudadana en términos de una influencia sobre la agenda pública y de un escrutinio permanente del desempeño de los representantes. Finalmente, el recurso a la vía judicial para definir, modificar o vetar políticas públicas, aparece como una forma institucionalizada de las escenificaciones ciudadanas. Resumidamente, ilegalidad, virtualidad e institucionalidad son los rasgos distintivos de cada una de estas tres formas de acción ciudadana que, por otra parte, comparten la apelación a la publicidad como instancia de legitimación.
A la luz de los argumentos vertidos en el parágrafo V, podemos decir que estas tres escenificaciones de la ciudadanía ponen en juego la tensión entre institucionalidad y acción ciudadana en términos de una tensión entre la apertura del principio democrático y

[32] Cf. Arendt 1996; para una elaboración arendtiana de la ciudadanía cf. Tassin 1999 y 2003.

la reducción del principio estatalista. Así, los cortes de ruta pretenden una legitimidad en el espacio público contra la legalidad vigente (básicamente, el derecho de libre circulación garantizado por la Constitución), aunque pueden perder parte esa legitimidad al articularse con las agencias del Estado; la opinión pública medida y mediatizada da lugar a la permanencia de un espacio público abierto, aunque virtual y de eficacia práctica incierta, pero corre el riesgo de rutinizarse y volverse un medio de legitimación de representantes del momento, sin lograr una apertura que desafíe al *statu quo*, convirtiéndose en un medio de certezas y de reaseguro de quienes manejan los resortes del Estado; y la judicialización de la política puede convertir al Poder Judicial en instancia estatal de reconocimiento de derechos en la medida en que pierda su visibilidad pública.

Inversamente, en la medida en que cada una de estas formas de acción ciudadana mantenga la alta visibilidad que les provee el espacio público y, consecuentemente, realimenten la apertura a la indeterminación que alimenta a éste, entonces devendrán una fuente de desafío al orden estatuido y su performance dará vida al la indeterminación propia de la democracia. El riesgo, de esta parte, es, sin embargo, también el de una reducción, que podemos denominar "faccionalista". Es el riesgo implícito en el poder generado públicamente y que Arendt ilustraba con una frase de Mirabeau «diez hombres unidos para la acción pueden hacer temblar a cien mil.» (Arendt, 1988: 255, 116). Como bien sabía Arendt, el poder generado en la acción pública no depende del número o los recursos. Eso es motivo de optimismo para los defensores de la libertad contra la opresión. Pero también puede significar que un pequeño grupo organizado puede hacer valer sus intereses por sobre grandes estratos de la sociedad.

Podría decirse que las escenificaciones de la ciudadanía dependen de una atenta vigilia pública que las preserve de esos dos tipos de reducciones, la estatal y la social. Esto puede esclarecer el tipo de tensiones entre ciudadanía e institucionalidad pero no resolverla. El nombre de ciudadanía es, sin embargo, el nombre de una institución humana que no se deja reducir a una procedencia social, porque es la institución de la igualdad de cualquiera con cualquiera, y es también el nombre de una acción pública que puede entenderse como *ciudadanía contra el Estado*. La inscripción en el horizonte de la democracia ha de interpretarse en cada caso, en cada escenificación puntual[33], en el marco del principio del "derecho a tener derechos" que en Argentina, como en otras latitudes, se ha dado en nombre de los derechos humanos. Democracia, ciudadanía y derechos humanos, escenificados una y otra vez de manera activa, dejan su huella en las instituciones políticas –en el derecho, básicamente–, pero la vitalidad de estas instituciones depende a su vez de su permanente reactivación pública y ciudadana. Y dependen también de una narratividad que las recupere de las reducciones académicas que las explican en términos de procesos sociales y de continuidades estatales.

Bibliografía

AAVV. (1995). *Juicio, castigo y memorias. Derechos humanos y justicia en la política argentina*. Buenos Aires: Nueva Visión.

[33] Por escenificaciones puntuales quiero decir en cada reclamo y no en cada tipo de manifestación, de modo que el piquete, la opinión pública o el juicio de hoy no asegura la legitimidad del piquete, la opinión o el juicio de mañana.

Abensour, M. (éd.) (1987). *Le Contre Hobbes* de Pierre Clastres. En *L'Esprit des lois sauvages : Pierre Clastres, ou, une nouvelle anthropologie politique*. Paris: Seuil.

Abensour, M. (1993). Réflexions sur les deux interprétations du totalitarisme chez C. Lefort. En C. Habib et C. Mouchard (dirs.) *La démocratie à l »œuvre. Autour de Claude Lefort*. Paris : Editions Esprit.

Abensour, M. (2004a). De la démocratie insurgeante. Préface à la seconde édition, *La démocratie contre l'État. Marx et le moment maquiavelien*. Paris : Editions du félin.

Abensour, M. (2004b). « Démocratie sauvge » et « principe d'anarchie ». Annexe à *La démocratie contre l'État. Marx et le moment maquiavelien*, seconde édition. Paris : Editions du félin.

Aldao, M. M. (2009): "La esfera pública escindida: los límites del Estado como lugar de la democracia", ponencia presentada en las 5ª Jornadas de Jóvenes Investigadores, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires.

Arendt, H. (1988). *Sobre la Revolución*. Madrid: Alianza Universidad.

Bergallo, P. (2005). Justicia y experimentalismo: la función remedial del poder judicial en el litigio de derecho público en Argentina. http://islandia.law.yale.edu/sela/SELA%202005/Paola%20Bergallo%20(Final%20Spanish%20Version)%20v%201.0.pdf

Breaugh, M. (2006). Le lien social entre utopie et démocratie. En A. Kupiec et E. Tassin (dirs.) *Critique de la politique. Autour de Miguel Abensour*. Paris : Sens & Tonka.

Cheresky, I. (comp.) (2006a). *Ciudadanía, Sociedad Civil y Participación Política*. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.

Cheresky, I. (comp.) (2006b). *La política después de los partidos*. Buenos Aires: Prometeo.

Cheresky, I. (2008). *Poder presidencial, opinión pública y exclusión social*. Buenos Aires: Clacso/Manatial.

Dotti, J. (1994). Pensamiento político moderno. En E. de Olazo (ed.) *Del Renacimiento a la Ilustración* I. Madrid: Trotta.

Habermas, J. (1994). *Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública*. Barcelona: Ediciones G. Gili.

Habermas, J. (2001). VIII. Sobre el papel de la sociedad civil y de la opinión pública política. *Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso*. Madrid: Trotta.

Kymlicka, W. y W. Norman (1997). El retorno del ciudadano. *Agora. Cuaderno de Estudios Políticos* 7 (3).

Lefort, C. (1985). El problema de la democracia. *Opciones* 6.

Lefort, C. (1987). Los Derechos Humanos y el Estado de Bienestar. *Revista Vuelta* 12: 34-43.

Lefort, C. (1990). Derechos del hombre y política. En *La invención democrática*. Buenos Aires: Nueva Visión.

Levín, S. (2004). Los desafíos de la ciudadanía en las sociedades contemporáneas. *Revista SAAP. Publicación de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político* 2 (1).

Manin, B. (1998). *Los principios del gobierno representativo*. Madrid: Alianza Editorial.

Marshall, Th. H. (1997). Ciudadanía y Clase Social, *REIS. Revista Española de Investigación Social* 79.

Merklen, D. (2005). *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)*. prólogo de Silvia Sigal. Buenos Aires: Editorial Gorla.

Merton, R. K. (1964). Parte II, cap. XI, La profecía que se cumple a sí misma. En *Teoría y estructura sociales*. México: FCE [primera ed. inglés, 1949; edición revisada y aumentada, 1957].

Rancière, J. (1996). *El desacuerdo. Política y filosofía*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

Rancière, J. (2005). *La haine de la démocratie*. Paris: La Fabrique éditions.

Schnapper, D. (2004). *La democracia providencial. Ensayo sobre la igualdad contemporánea*. Buenos Aires: Homo Sapiens Ediciones.

Semán, P. (2006). *Bajo continuo. Exploraciones descentradas sobre cultura popular y masiva*. Buenos Aires: Editorial Gorla.

Smulovitz, C. (1995). Capítulo 2. Constitución y Poder Judicial en la nueva democracia argentina. La experiencia de las instituciones. En Carlos H. Acuña (comp.) *La nueva matriz política argentina*. Buenos Aires: Nueva Visión.

Smulovitz, C. (2008). La política por otros medios. Judicialización y movilización legal en la Argentina. *Desarrollo Económico* 48 (189-190): 287-305.

Tassin, E. (1999). Identidad, ciudadanía y comunidad política: ¿qué es un sujeto político?. En H. Quiroga, S. Villavicencio y P. Vermeren (comps.) *Filosofías de la ciudadanía. Sujeto político y democracia*. Rosario: Homo Sapiens Editores.

Tassin, E. (2003). *Un monde commun. Pour une cosmo-politique des conflits*. Paris : Éditions du Seuil.

Vommaro, G. (2008). *"Lo que quiere la gente". Los sondeos de opinión y el espacio de la comunicación política en Argentina (1983-1999)*. Buenos Aires: Prometeo.

Walzer, M. (2007). Philosophy and Democracy . En D. Miller (ed.) *Thinking Politically. Essays* New Haven and London: Yale University Press, New Heaven and London.

« Être présent » et « re-présenter »: Peut-on parler d'une « politique de la présence »?

Rocío Annunziata

I. La « légitimité de proximité » et les transformations de la représentation politique

« Le fait d'*être* présent a remplacé le projet de *rendre* présent (*repraesentare*) », affirme Pierre Rosanvallon (2008 : 295) dans un de ses travaux les plus récents, attirant l'attention sur un phénomène saillant de la politique contemporaine qui a été cependant très peu remarqué dans les études actuelles. En effet, la présence des candidats et des gouvernants sur le terrain est devenue un aspect central des activités politiques et des expectatives citoyennes. Cette trouvaille de Pierre Rosanvallon sur l'importance de la présence dans la vie politique actuelle, a ouvert, en ce sens, un champ d'exploration particulièrement riche. L'auteur a souligné le rôle des médias dans la monstration des hommes politiques qui sont *toujours là*. La présence est ainsi conçue comme une forme politique qui bouleverse le régime de la représentation, de sorte que le mandat et l'obligation entre gouvernants et gouvernés ne sont plus alors les clés du processus, au profit de la manifestation par les hommes politiques de ce qu'eux, comprennent et partagent les vécus des citoyens. La présence offre une consistance « immédiate et effective » des liens qui pouvaient, autrefois, s'appuyer sur l'engagement électoral, et qui le font de nos jours de moins en moins.

Cette revalorisation de la présence des « hommes politiques » sur le terrain survient dans un contexte de mutation de la légitimité démocratique. En effet, les démocraties contemporaines sont traversées, un peu partout, par des multiples transformations: les partis politiques se fragmentent, et nombre de leurs fonctions traditionnelles déclinent, tandis que les leaderships médiatiques et personnels acquièrent un caractère central et que les formes d'expression de la citoyenneté se multiplient et se diversifient. La légitimité issue des urnes ne semble pas suffire pour gouverner ; les gouvernants peuvent avoir à faire face à des vetos citoyens opposés à des décisions qu'ils prennent au lendemain des élections (Rosanvallon, 2006 ; Cheresky, 2011). Ils deviennent la cible de la défiance citoyenne, du rejet de l'existence d'une « classe politique » qui apparaît comme « séparée » et « éloignée » des citoyens (Schnapper, 2002 ; Rosanvallon, 2006). On a beaucoup entendu parler, ces dernières années, de la « crise de la représentation » et du « divorce » entre les citoyens et la politique. Ce qu'on attend des gouvernants est qu'ils prêtent attention aux expériences singulières des citoyens, qu'ils les « écoutent », qu'ils partagent leurs vécus et parcourent leurs territoires, qu'ils « soient présents » dans les quartiers où les hommes ordinaires vivent leurs vies quotidiennes. On attend d'eux qu'ils reconnaissent la particularité des situations des citoyens. D'autre part, l'espace local, l'environnement immédiat et la résolution de problèmes concrets, semblent incarner le modèle de la bonne politique. C'est dans ce contexte que les « hommes politiques » s'efforcent de se présenter

comme des « hommes ordinaires », d'apparaître dissociés d'une « classe politique » discréditée, et d'offrir l'image de gens semblables aux électeurs, accessibles aux simples citoyens qui veulent leur parler, pour écouter ce que ceux-ci ont à dire et pour partager leurs expériences. Aujourd'hui, « être plus proche » des citoyens semble la voie d'être plus démocratiquement légitime. Pour devenir un « homme politique » légitime, que l'on exerce déjà un poste de pouvoir ou que l'on soit candidat, il convient de s'afficher en public comme quelqu'un d'éloigné de la « politique traditionnelle », qui provient du dehors des partis politiques et qui instaure une communication directe avec les « vrais gens ». Il convient de dissimuler la qualité d' « homme politique », soit d'homme de parti, soit de leader charismatique et inaccessible. Il est préférable de se montrer comme quelqu'un qui comprend la quotidienneté de la vie des gens ordinaires, qui a aussi une vie quotidienne et ordinaire, une intimité semblable à celle de n'importe qui. Il apparaît, en effet, que toute la conception des qualités d'un leader démocratiquement légitime a changé : celui-ci doit être capable d'écouter plutôt que capable de proposer ; il doit s'appuyer sur son expérience d'homme ordinaire plutôt que sur sa carrière politique ; il doit être présent et être empathique plutôt que représenter l'ensemble des citoyens ; il doit être « sincère » et « authentique » plutôt qu'engagé avec une vision de la société juste.

En Argentine, dix ans après l'extraordinaire « éclatement » citoyen de décembre 2001, qui exprima un fort rejet de la « classe politique » avec la consigne « qu'ils s'en aillent tous, que personne ne reste », toutes ces transformations semblent prendre un sens plus clair. On a l'impression de pouvoir les concevoir dans une même direction comme la manifestation d'une mutation de la légitimité démocratique. Les dernières campagnes électorales et les discours publics des gouvernants, emplis d'affichages de leur empathie, d'appels aux histoires de vie des gens ordinaires, de contacts avec le terrain et les *vecinos*, de stratégies d'identification avec les citoyens à qui on adresse, de manière récurrente, le message « je suis vous », ne font que prouver que ce qui pouvait paraître un mouvement passager, caractéristique d'une situation de crise politique et économique forte, est arrivé pour demeurer, au moins quelque temps, dans la vie politique.

Par conséquent, nous pouvons affirmer que ces dernières années, la légitimité démocratique s'est transformée et renouvelée. Si la légitimité des gouvernants et des représentants démocratiques a toujours supposé une combinaison des principes de distance ou grandeur (différenciation par rapport aux gouvernés) et de proximité (ressemblance par rapport à ces mêmes gouvernés), on constate que le deuxième de ces principes tend aujourd'hui à être mis en avant dans les liens politiques. Nous concevons cette tendance comme un mouvement vers une « légitimité de proximité ». Nous partons donc du constat d'une mutation contemporaine de la légitimité démocratique, qui fait émerger une nouvelle forme de légitimité, dénommée ici *légitimité de proximité* (Annunziata, 2012).

Il est possible de définir la *légitimité de proximité* comme une forme de la légitimité démocratique concernant les attributs des hommes politiques dont ils se servent pour construire une identification anti-charismatique aux hommes ordinaires (Annunziata, 2012). S'il faut parler d'une « identification anti-charismatique », c'est parce que les hommes politiques doivent, de plus en plus, se montrer comme n'ayant rien d'extraordinaire ou de différent par rapport aux citoyens. Tandis que la dimension charismatique des leaders implique l'existence d'une qualité extra-quotidienne et extraordinaire, la *légitimité de proximité* incite les dirigeants politiques (gouvernants et candidats) à se ressembler aux citoyens dans ce qu'ils ont d'ordinaire, de simple, de quotidien, dans ce qu'ils ont de privé et d'intime. L'empathie, la compassion et la mise en

visibilité de l'intime véhiculent cette identification entre les hommes politiques et les hommes ordinaires. L'identification à l'œuvre est donc une identification de nouveau type : elle n'implique pas l'identification corrélative avec un collectif tel que le peuple ou la masse, mais une collection d'expériences singulières et particulières.

D'un côté, la légitimité de proximité encourage une affirmation du caractère singulier de la participation. Tout un ensemble de dispositifs participatifs sont mis en œuvre actuellement, qui se présentent comme des espaces pour l'écoute des expériences singulières, et c'est à partir de la singularité de l'expérience que les citoyens participent. Cet élément les distingue des autres formes de participation, anciennes et contemporaines. Mais de l'autre côté, la légitimité de proximité s'imprime sur la représentation politique, par le biais d'une exacerbation du principe d'identité sur le principe de distinction ; d'où ce qu'on pourrait appeler la « négation du caractère instituant de la représentation ». La représentation dissimule son caractère créateur par rapport à ce qui est représenté. Une « représentation de proximité » émerge ainsi, dont le rôle de la présence des représentants est l'un des aspects ou indicateurs les plus significatifs.

Nous avons analysé ailleurs (Annunziata, 2012) comment ce rôle de la présence apparaît dans la participation à partir de l'étude des dispositifs participatifs tels que la Banca Abierta à Morón et du Concejo en los Barrios à Morón et à Rosario, en Argentine. Nous les avons pris comme illustration d'un type de dispositif participatif que nous dénommons « dispositifs de participation-présence ». Ce type de dispositif se caractérise par la production d'une *présence inhabituelle* qui contribue à opérer une identification entre les « hommes politiques » et les *vecinos*, résultant performative d'un *vecino-concejal* et d'un *concejal-vecino*. L'étude de la présence dans les dispositifs participatifs est aussi une étude d'une forme institutionnalisée du rôle de la présence, par opposition au présent travail, centré sur le lien de représentation politique. Nous avons pu parler d'une « politique de la présence », comme une mise en évidence de la subversion du protocole de la distance représentative, en essayant de montrer comment cet aspect de la « légitimité de proximité » trouve dans ces dispositifs participatifs une forme institutionnelle.

Mais, de même que les transformations dans la légitimité démocratique, la « politique de la présence » va bien au-delà de ses formes cristallisées dans des institutions. Nous voyons qu'elle s'exprime dans les campagnes électorales mais aussi dans la manière de gouverner: les déplacements des gouvernants et des candidats sur le terrain, le contact physique établi avec les hommes ordinaires dans leurs réalités quotidiennes, remplissent un rôle majeur dans les liens politiques. En effet, de manière toujours plus croissante, dans les campagnes électorales, il devient indispensable de produire une image de proximité, d'appeler aussi à des campagnes de type « tête-à-tête » ou « porte-à-porte », au cours desquelles les repas, les promenades et les caravanes de voitures avec les *vecinos* se substituent aux traditionnels *meetings* politiques et partisans, révélant l'importance du contact direct entre représentants et représentés (Annunziata, 2009 a). Les gouvernants font montre eux aussi de leur préoccupation ou de leur compassion pour une population en se rendant su le terrain, en visitant un quartier ou les victimes d'une tragédie.

Or, la présence des gouvernants ou des candidats sur le terrain n'est pas vraiment nouvelle ; elle participe au contraire des formes de mise en visibilité et de mise en scène dont le pouvoir a toujours eu besoin (Mariot, 2005 ; Fleurdorge, 2005)[1]. Mais en distinguant

[1] La visibilité d'une proximité peut être produite –et l'a fait au long de l'histoire- autrement que par la présence corporelle effective du pouvoir : par le biais des portraits, des discours, de la télévision et des représentants des gouvernants. (Le Bart, 2005). Si cela est certain, nous constatons que, de nos jours, la présence semble avoir besoin d'une littéralité, tel que nous le verrons dans les pages qui suivent.

les formes de la présence des hommes politiques sur le terrain, nous pourrons mieux conceptualiser les nouveautés contemporaines, qui nous font parler d'une « politique de la présence ». On essayera donc ensuite de distinguer analytiquement les formes de la présence des « hommes politiques » sur le terrain.

II. Les formes de la présence des « hommes politiques » sur le terrain

On voit aisément que les gouvernants se sont toujours déplacés pour le territoire. L'une des formes de ces déplacements sur le terrain sont, par exemple, les inaugurations de toute sorte, les ouvertures d'événements artistiques, culturels, sportifs ou des œuvres publiques importantes pour la communauté. Les hommes politiques se déplacent ainsi dans le cadre d'un strict protocole et leur présence est fortement codifiée et cérémoniale. Mais, historiquement, on a vu aussi toujours les hommes politiques se déplacer d'une manière plus informelle pour se rapprocher de déterminées populations, de certaines localités, pour amener leur charisme au territoire. On connaît donc des exemples des leaders politiques marchant avec les gens ordinaires, serrant dans leurs bras quelques uns, embrassant quelques enfants, dans un contact plus direct et plus physique. L'exemple de leaders fortement charismatiques comme ceux de Juan Domingo Perón ou de « Evita » en Argentine nous viennent à la tête. Ni l'une ni l'autre de ces types de présence ne peuvent être vues comme nouvelles. Elles sont cependant très différentes. Si dans le premier cas, prédomine le protocole renforçant la fonction, l'autorité du poste, dans le second, c'est l'informalité et le contact qui prédomine, et le leader touchant les gens ordinaires en leur donnant une sorte de bénédiction. Tandis que nous pourrions concevoir la première forme comme protocolaire, on pourrait penser la seconde comme « thaumaturgique ». En effet, nous pouvons emprunter au célèbre travail de Marc Bloch (1983) sur « les rois thaumaturgiques » cette idée du pouvoir qui se déplace pour toucher et guérir les malades. Bien sûr, nous le prenons métaphoriquement –puisqu'il ne s'agit pas dans un contexte moderne et démocratique d'une vraie illusion de guérison impliquant une vision magique et donc métaphysique du pouvoir-, mais cette notion sert à souligner le fait que ce contact de l'ordre du don de soi avec la population a une histoire de longue date.

Ce qu'elles ont en commun ces deux premières formes, c'est qu'elles sont toutes les deux des présences porteuses de charisme. On dirait que le protocole et la codification attachés à la première nous parlent d'un charisme de la fonction ou du poste ; le contact direct investi par la seconde nous parle plutôt d'un charisme de la personne.

Mais il y a aussi d'autres formes de la présence des hommes politiques sur le terrain qui ne véhiculent pas un charisme. Si nous songeons, par exemple, aux parcours de terrain des gouvernants pour entendre ce que les citoyens ont à dire, quels sont les problèmes qu'ils subissent dans ce territoire, quelles sont leurs doléances, nous pouvons voir qu'il s'agit dans ces cas-là d'une présence attachée à la fonction puisque seul le fonctionnaire dispose d'un pouvoir de décision et des moyens de résolution des problèmes relevés. À la fois, il s'agit ici d'un homme politique qui rend visite pour écouter les gens ordinaires et non pour donner un discours ou pour inaugurer une œuvre publique. La somptuosité de l'autorité n'est pas mise de relief. Cette forme de présence est centrée sur l'écoute. D'autre part, il y a une forme de la présence où le trait saillant est le contact du leader, de la personne, avec les gens ordinaires, mais dans laquelle le pouvoir n'est pas en position de guérison sinon

de partage des souffrances des autres. C'est le cas, d'une manière paradigmatique, des visites rendues pour les hommes politiques aux victimes d'une tragédie. Cette forme de présence est centrée sur l'empathie et la compassion, et les hommes politiques viennent ici à témoigner qu'ils comprennent et partagent les expériences des hommes ordinaires. Ils n'apparaissent pas comme des hommes extraordinaires transmettant par le contact une partie de charisme, mais, en revanche, ils apparaissent à côté de ceux qui souffrent en faisant montre qu'ils peuvent souffrir, eux-aussi, en tant qu'hommes ordinaires. En effet, plus liée à la fonction l'une et plus liée à un leadership personnalisé l'autre, ces deux formes de la présence ont en commun le fait que l'homme politique se déplace sur le terrain dans le cadre d'un geste d'humilité du pouvoir et non d'un renforcement, rituel ou magique, du charisme.

En distinguant ainsi ces formes de présence nous pouvons identifier deux variables nous permettant d'esquisser une typologie. Nous avons d'un côté les présences où le charisme joue un rôle central et les présences anti-charismatiques, par le biais desquelles les hommes politiques agissent en tant qu'« hommes ordinaires ». De l'autre côté, nous avons les présences où la fonction ou le poste sont mis de relief et les présences où la personnalité du leader est dans le centre de la scène. Cette différentiation nous habilite à construire quatre idéaux-types de la présence des hommes politiques sur le terrain. Comme idéaux-types, ces formes de la présence n'existent jamais en état pur dans la réalité, mais l'exacerbation de certains traits au moyen de la construction typologique peut contribuer à analyser les cas concrets comme des combinaisons des éléments de différents types. La synthèse de cette typologie pourrait être schématisée dans un tableau comme le suivant :

Tableau 1 : Formes de la présence des hommes politiques sur le terrain

	Charismatique	Anti-charismatique
Fonction	**Présence Protocolaire**	**Présence d'écoute**
Personne	**Présence Thaumaturgique**	**Présence d'empathie**

Evidement, les cas concrets des déplacements des hommes politiques sur le terrain sont toujours des cas mixtes. Cela s'avère inséparable de la nature de la représentation politique démocratique elle-même. Tel que nous l'avons signalé plus haut, la représentation s'appuie toujours sur la double base de la distinction et de la ressemblance. Les représentants démocratiques sont toujours des « hommes ordinaires » et des « citoyens distingués » simultanément. Et, comme dans la forme de société démocratique le pouvoir est un lieu vide, impossible d'incarner (Lefort, 1986), la fonction et la personne sont toujours dissociées et combinées dans la représentation. La représentation se déroule dans un *entre* la distinction et la ressemblance, et dans un *entre* la fonction et la personne. D'où que, dans la pratique politique, la visite d'un gouverneur à une victime de l'insécurité, par exemple, soit surtout une présence d'empathie, mais ne puisse pas se passer absolument du fait que le gouverneur est le porteur des moyens d'action attachés au poste qu'il détient et du fait qu'il dispose des capacités dans ce sens extraordinaires. La construction de ces quatre idéaux-types sert à mieux distinguer, au moyen de l'exagération d'éléments, quelques traits des expériences pratiques.

La présence protocolaire

Les présences protocolaires configurent des scènes ritualisées du pouvoir. Les inaugurations peuvent être l'exemple paradigmatique. La présence de l'homme politique sur le terrain fait partie dans ce cas-là d'une cérémonie, il coupe le ruban, il monte sur une estrade, il offre un discours institutionnelle. Il est accompagné d'autres hommes politiques qui l'entourent et qui ont aussi une signification institutionnelle. Voyons pourquoi faudrait-il caractériser ces présences comme des scènes rituelles.

Les études sur les rituels politiques sont nombreuses. Prenons, par exemple, un article de Marc Abélès (1989). L'auteur signale quatre éléments, selon lui, constitutifs des rituels: la sacralité, la tradition, l'effacement relatif de l'individu qui devient plutôt le support des valeurs collectifs, la territorialisation des pratiques. En premier lieu, le rituel politique a une forte dimension religieuse, il « met en scène une relation au sacré » (Abélès, 1989 : 140). Deuxièmement, le rituel politique est une pratique répétée toujours avec une codification des actions inchangée. Troisièmement, les personnes comptent moins que leur rôle ou fonction puisque le rituel demeure et les individus changent, le collectif l'emporte sur l'individuel. Enfin l'espace du rituel est inhérent au rituel, la disposition de l'espace, les symboles qui participent de la scène, et cette localisation du rituel s'accompagne de l'exigence de la *présence physique* des participants. Par ailleurs, toujours selon l'auteur, les rituels combinent des paroles et des symboles non verbaux : « comportements gestuels, manipulations d'objets à valeur symbolique, le tout dans une mise en scène qui intègre conventionnellement l'ensemble action/discours » (Abélès, 1989 : 133). Si les éléments constitutifs des rituels sont, pour l'auteur, typiques des sociétés traditionnelles, il entend montrer que les rituels subsistent dans les sociétés modernes. Son propos se positionne contre les affirmations soutenant que le développement de la communication politique tendrait à affaiblir l'importance des rituels ; d'après Abélès, par contre, les rituels (surtout ceux que l'auteur appelle les « rituels consensuels ») demeureraient actifs en dépit des transformations générales de la politique, les médias agissant comme leur chambre d'écho. Le « protocole » est, en effet, une composante importante des rituels qu'il décrit.

L'auteur nous présente deux rites d'inauguration qui adoptent un « protocole traditionnel ». Il fait par exemple, le récit d'une caractéristique fin de semaine d'un élu local en France: « Il est rare qu'il n'y ait pas une inauguration à effectuer dans l'une des communes de son territoire ; dans une autre, il va devoir participer à une commémoration ; ailleurs, il serait bon qu'il assiste à l'anniversaire du centenaire local. Dans un autre canton, on l'attend pour le vin d'honneur qui va clore la réunion du syndicat intercommunal. Ce n'est pas terminé : la finale des championnats de football des juniors a lieu ce dimanche, il serait de très mauvais goût pour un élu d'être totalement absent de cette circonstance. Il lui faut au moins se présenter pour remettre la coupe, et à l'occasion célébrer les vertus de la jeunesse. » (Abélès, 1989 : 130).

Tous ces traits sont visibles dans les cas des inaugurations. Le caractère sacré du pouvoir se manifeste, par exemple, dans la solennité des formes de prise de la parole, dans la disposition particulière de l'espace, le gouvernant étant celui qui parle debout sur l'estrade[2] et qui donne naissance, en coupant le ruban, à l'œuvre ou l'activité en question.

[2] La distribution de l'espace, l'architecture et la disposition des objets et des personnes est très significative dans les scènes rituelles. Dans un article traitant des différentes architectures de l'Assemblée Nationale en France et les débats autour de ce sujet, Jean-Philippe Heurtin (2003) montrait par exemple comment la

Il est en position de créateur. D'autre part, les actions impliquées dans les inaugurations sont répétées chaque fois. En plus, ce qui nous intéresse particulièrement ici, la personne compte moins que la fonction ou le poste, le rituel se répète au-delà de la personne qui l'accomplit à chaque occasion. La présence physique est inséparable du rituel d'inauguration. On ne peut pas accomplir une inauguration à distance. Les gestes et les symboles sont très importants aussi : le ruban, les ciseaux, font partie d'une scène codifiée en dehors de laquelle l'action d'inaugurer ne peut pas avoir lieu. Les inaugurations suivent donc un protocole qui configure une scène dans laquelle se met en évidence l'autorité du pouvoir[3].

La présence thaumaturgique

Les présences thaumaturgiques ne se guident par aucun protocole. Elles créent l'image d'une informalité et d'une spontanéité propre au contact direct. Le leader visite une localité, les gens lui reçoivent avec des applaudissements lors de son passage, il décide de se rapprocher de quelqu'un, lui serrer la main, le toucher.

Nous pouvons trouver un exemple assez récent dans le style de campagne de Carlos Ménem, l'ex-président argentin, d'accord à la description faite par Vicente Palermo et Marcos Novaro (1996). Menem inaugura certes un type de campagne appuyée sur la présence physique, sous la forme de déplacements sur le terrain, de caravanes ou de formes multiples de contact direct avec les citoyens. Citons *in extenso* la description de la campagne électorale de 1989 faite par les auteurs : « La réceptivité de leurs interpellations était étroitement liée au style de contact direct qui les caractérisait, canalisé tant à travers les médias, qu'à travers une forme particulière de rencontre en tête-à-tête. Il a mis en action une forme de mobilisation politique, inspirée peut-être du Pape Jean-Paul II et utilisée rarement jusqu'alors dans les campagnes électorales, dans laquelle le seul mobilisé était lui-même : au lieu d'essayer de convoquer et d'organiser ses électeurs comme on le faisait avec les militants partisans, il est allé les chercher dans leurs quartiers et leurs maisons dans des caravanes qui parcoururent les principales villes du pays. À bord du 'menemobile', il se livrait à un rite de fête et affectif, de rencontre et de réconciliation avec l'espace du quotidien : en plus de saluer et sourire à qui se rapprochait de lui, lançant et répétant à plusieurs reprises des bénédictions et des déclarations d'amour ('je vous bénis', je vous aime', etc.). Dans un langage verbal et gestuel qui correspondait davantage à celui

---

distribution de l'espace impliquait des principes moraux ou politiques. Les critiques relatives à la mauvaise acoustique ou visibilité de la salle se fondaient, soit sur la nécessité de bien voir et écouter le président et l'orateur, soit sur un principe égalitaire évitant que les seuls députés à voix tonitruante puissent être écoutés. La forme circulaire de la salle s'inspirait également des idées d'égalité, d'accord et d'unité, mais la fermeture du cercle pourrait être envisagée, simultanément, comme marquant une séparation entre les représentants et le peuple, entraînant la préférence pour l'hémicycle. Dans les cas de présences protocolaires des hommes politiques sur le terrain, le terrain s'adapte à la venue du pouvoir et configure aussi une scène strictement soignée.

[3] Si les présences de type protocolaire ou rituel ont toujours existé et continuent à exister, comme l'affirme Marc Abélès, il est possible observer de nos jours, des instances de brisement du protocole, qui opéreraient une mise en scène de la désacralisation du pouvoir. Les rituels peuvent être aussi inscrits dans une forme de gestualité qui les amènent à s'auto-subvertir, et de la sorte, à briser les symboles de la distance et de la dimension sacrée du pouvoir. C'est le cas des « dispositifs de participation-présence »
(Annunziata, 2012), dans lesquels pour parvenir à mettre en évidence la désacralisation, encore faut-il que le protocole soit préservé et qu'il apparaisse, simultanément, subverti. L'effort qui consiste à maintenir le protocole et à le briser simultanément, renforce l'effet de subversion.

d'une figure religieuse ou à une vedette du spectacle qu'à ceux qui étaient, jusqu'alors, caractéristiques des dirigeants politiques.» (Palermo et Novaro, 1996: 206-207).
Menem avait, en effet, donné naissance à un genre de campagne qui se caractérisait par une mobilisation et un engagement personnel des candidats à tout instant. Comme Palermo et Novaro le résumaient : « La campagne, ce fut lui-même, et il fut son seul porte-parole » (Palermo et Novaro, 1996: 210). Si nous observons au présent les stratégies de campagne électorale de différents candidats, nous voyons que la logique « d'aller chercher » au lieu de convoquer les gens semble s'avoir imposé. Notons, cependant, le style quasi-religieux des déplacements sur le terrain de Ménem : le charisme du leader devient le centre de la scène. Ce fait distingue les parcours de campagne dont la présence en jeu est de type thaumaturgique des autres campagnes appuyées sur les parcours de terrain et le contact, plus répandues de nos jours, dans lesquelles le charisme est plutôt dissimulé.
Les présences thaumaturgiques peuvent alors être bien conçues comme les déplacements décrits par Nicolas Mariot (2005) des présidents français, de C. De Gaulle à J. Chirac ou V. Giscard d'Estaing. L'image est celle d'une foule acclamante, par le bais des applaudissements et vivats, qui reçoit le leader rendant visite avec la chaleur populaire.

La présence d'écoute

Les présences d'écoute se caractérisent aussi par l'informalité et le contact direct du représentant avec les citoyens, mais ici, l'homme politique qui rend visite à un quartier, par exemple, se mêle avec les gens ordinaires sans être reçu par des vivats et des applaudissements ; il se montre comme un « homme ordinaire » parmi les autres. L'écoute l'emporte sur le discours. Dans cette forme de la présence, la parole est notamment du côté des citoyens.
On pourrait penser que l'exemple typique est celui des campagnes électorales contemporaines, les candidats qui parcourent le territoire, qui frappent certains portes, qui bavardent dans la rue avec un citoyen, qui organisent des activités de campagne dans lesquelles participent également les citoyens et les candidats, comme des balades en vélo ou des matchs de football. Les candidats se déplacent vers les espaces de la quotidienneté des gens[4].
Si les candidats en campagne ne détiennent pas un poste, c'est cependant le poste comme capacité décisionnelle qui est au centre de la scène. Les candidats en campagne aspirent à une fonction gouvernementale, mais par le biais de cette forme de présence, ils essayent de montrer la fonction qu'ils prétendent comme accessible et attentive aux gens ordinaires. La promesse qu'ils font est celle de l'écoute ; ils affichent le lieu du pouvoir comme le lieu de résolution des problèmes des citoyens, que seuls les citoyens connaissent vraiment. Les gouvernants en exercice qui parcourent le terrain, mais aussi les candidats, donnent à voir ainsi une présence qui s'organise par l'anti-charisme de la fonction.
En 2005, un article de presse en Argentine était intitulé : « La mode des candidats 'delivery' voit le jour » (La Nación, 25/09/2005). Le sous-titre poursuivait : « Les postulants de la ville de Buenos Aires du PRO parcourent maisons, sonnent à la porte et parlent avec

[4] Un précédent des campagnes électorales de ce genre, qui se déroulent dans les espaces ordinaires et non extraordinaires, le candidat se mêlant aux gens et se montrant comme un parmi les autres, peut-être celui du leader du Frepaso, Carlos « Chacho » Álvarez, qui faisait campagne dans les transports publics.

les *vecinos* pour diffuser leurs idées ». La notion de « candidats *delivery* » est suggestive parce qu'elle indique bien comment ce sont de plus en plus les candidats qui se déplacent à la quête de citoyens, et ils le font dans les espaces de leur quotidienneté. L'article continuait en décrivant comment ces candidats « …consacrent au moins deux heures à la journée, deux ou trois fois par semaine, aux contacts directs- tête-à-tête - avec des potentiels votants ».

La « mode » identifiée par cet article n'a fait désormais que se consolider. Prenons deux exemples du dernier processus électoral en Argentine. Un article de presse racontait les parcours de terrain de Francisco de Narváez de la manière suivante : « 'Regarde, qu'il est humble, il demande même d'entrer !', commentaient surprises deux jeunes femmes, tandis que Francisco de Narváez traversait la porte en plaque de la humble maison. Là-bas, Elena lui attendait, une couturière qui gagne 400 pesos au mois (…) il a entendu une par une les réclamations des gens, il a embrassait avec de la naturalité les enfants, les jeunes et les vieux (…) Celui-ci n'était pas, certes, le premier parcours du candidat pour la complexe banlieue de la Province de Buenos Aires (…) 'Prend note de la réclamation de madame', il a dit à une collaboratrice qui insistait avec une réclamation écrite dans un enveloppe » (La Nación, 12/01/2011). Un autre exemple pourrait être celui d'une activité toute particulière de campagne du candidat Mauricio Macri à Ciudad de Buenos Aires. Il rendit visite chez certains *vecinos* pour discuter d'un problème déterminé, comme celui des maternelles. Un article de presse le narrait ainsi : « Il était 7 h 23 du matin et Mauricio Macri arrivait, avec un sac de croissants, et sonnait à la porte de l'appartement de la rue Bulnes au 700 (…) Un temps après, et très détendu, Macri était en train de prendre un thé avec Paula et Pedro, deux *vecinos* du quartier d'Almagro » (La Nación, 08/07/2011).

Nous voyons dans ces exemples les traits typiques de ce que nous appelons une présence d'écoute. L'homme politique qui entre chez les hommes ordinaires, qui partage avec eux un moment, un petit-déjeuner, sur un pie d'égalité, qui profite pour écouter au lieu de parler. Sa présence est teinte d'une attitude rigoleuse et détendue. Tel que le signalent descriptions des articles de presse, ce déplacement et cette présence sont perçus comme des gestes d'humilité du pouvoir.

La présence d'empathie

Avec a présence d'empathie, il s'agit aussi d'un geste d'humilité du pouvoir, mais, cette fois, le lien personnel et intime est plus mis de relief. La présence d'empathie véhicule une compassion anti-charismatique. L'homme politique rend visite, de manière paradigmatique, à des victimes d'une tragédie et fait montre de sa capacité et disposition à comprendre les vécus des gens ordinaires[5]. Le rapport entre les hommes politiques et les

[5] Un cas de déplacement des gouvernants très fréquent actuellement qui pouvait être compris à première vue comme un cas de présence protocolaire puisqu'il s'agit de déplacements dans le cadre de la promotion ou l'ouverture d'un programme de gouvernement, est souvent plutôt une présence d'empathie. Nous parlons, pour donner quelques exemples, du Jefe de Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, rendant visite à une femme qui a utilisé le « bouton anti-panique » offert par le gouvernement pour prévenir les cas de violence domestiques. Macri bavarde avec la femme, il plaisante avec son enfant, il s'assoit à côté d'eux dans la salle à manger. Il écoute l'expérience de la femme avec une expression angoissée dans son visage. (Pour accéder au matériel audiovisuel : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&list=PLA5852A87B5536557&v=1FzFhgwt2BY). Ou bien, Mauricio Macri visite une école, dans le cadre d'un programme de « vacances à l'école », et il n'apparait pas en parlant en public, mais il se montre en parcourant les installations, en embrassent tout un

citoyens lors de cette présence est aussi de l'ordre du contact direct et physique, mais notamment affectif.

Le cas emblématique serait celui du gouverneur de la Province de Buenos Aires en Argentine, Daniel Scioli. Il est le champion des visites rendues aux *vecinos* –on pourrait même dire : le champion de l'« *être-là* »-, surtout lorsque viennent de se produire des problèmes résultant de l'insécurité qui consacrent ces *vecinos* au rang de victimes et les incitent à réclamer toujours plus de « présence » des hommes politiques sur le terrain[6]. Le journal *La Nación* racontait la visite de Scioli au veuf d'une maîtresse d'école assassinée à Derqui, dans la Province de Buenos Aires : « Le gouverneur de la Province de Buenos Aires, Daniel Scioli, nous indiqua aujourd'hui qu'il a rencontré hier soir Walter García, le veuf de Sandra Almirón, la maîtresse assassinée à Presidente Derqui. Il dit avoir rencontré un 'homme de travail et combattif dans la vie, éprouvant un amour fort pour sa femme' (…). 'Walter m'a fait parcourir chaque coin de la maison, chacun des souvenirs, même le cache-poussière, qu'il serrait dans ses bras' »[7].

Plus récemment, le cas de Candela, une petite fille de onze ans, disparue pendant plusieurs jours, puis retrouvée assassinée, a été l'occasion pour le Gouverneur Daniel Scioli de montrer qu'il est « toujours là ». Le cas a bouleversé l'Argentine ; des manifestations de *vecinos* réclamant le retour de la petite fille et des mobilisations d'artistes se sont succédé. La mère de Candela a même été reçue par la Présidente Cristina Fernández de Kirchner. Lorsque la petite fille a été retrouvée sans vie et que sa mère a dû reconnaître le corps, Daniel Scioli l'accompagnait. Le journal *La Nación* racontait, par exemple : « Hier, debout face au sac plastique foncé contenant le petit corps nu, défiguré et brutalement assassiné de Candela Rodríguez, le gouverneur n'a pu que marmotter 'Bon Dieu'. Quelques minutes plus tard, lorsque la mère de Candela est arrivée sur le terrain où on l'a découverte, situé à Villa Tesei, Scioli l'a accompagné lors de la reconnaissance du corps, le gouverneur a écouté l'avertissement lancé par cette femme dévastée, qui lui a dit : 'On a tué ma fille. Elle va être la dernière fille qu'on tue »[8]. Le gouverneur n'était pas seulement là; il était là dans un moment d'intimité bouleversante, partageant la souffrance la plus immédiate et muette de la mère. La compassion, comme l'avait déjà remarqué Hannah Arendt (2004), le laissait « sans mots »[9]. Arendt (2004) signale que la compassion n'est pas capable d'un discours sur le monde parce qu'elle ne peut pas donner lieu à la généralité, mais qu'elle s'exprime par le biais des gestes et des expressions du semblant. Les cas extrêmes des

---

chacun et, surtout, en participant des jeux avec les enfants dans la cour de l'école. Il se laisse voir, on pourrait dire, « infantilisé » et maladroit, se mettant à la place des enfants. (Pour accéder au matériel audiovisuel : http://www.youtube.com/watch?v=BN5jR1pgEZk&feature=BFa&list=PLA5852A87B5536557). Cela signifie que la présence d'empathie ne se limite pas aux visites de victimes, mais à toute visite dans laquelle l'homme politique essaie d'apparaître comme l'un d'entre tous les présents, par le biais de gestes, des mots et des actions.

[6] Cet accompagnement des victimes, cette tentative de partager leur vécu, peut s'étendre jusqu'à des situations où la responsabilité politique engagée dans l'irruption d'une tragédie ne semble pas évidente. La noyade d'un enfant survenue à proximité des côtes de Mar del Plata en janvier 2011 en atteste amplement. Dans la couverture médiatique de cette tragédie, les émissions de télévision titraient « Scioli est sur place ».

[7] *La Nación* (28/11/2009). Voir aussi à *Clarín* (28/11/2009) l'article intitulé « Scioli a rendu visite à l'époux de la professeure assassinée et a défendu son plan de limitation des remises de peine ».

[8] *La Nación* (01/09/2011).

[9] À l'occasion d'une collision de trains, par exemple, Scioli visitait le lieu de l'accident, et les journaux soulignaient qu'il était arrivé avant que les pompiers et les médecins auraient fini l'effort de récupérer les corps des victimes d'entre les fers, et qu'il avait ensuite parcouru la salle d'urgences de l'hôpital. (La Nación, 17/02/2011). Il s'avait exprimait en exclamant : « J'ai pu voir les corps, c'est dramatique » (Clarín, 16/02/2011).

présences d'empathie sont justement des cas ou la présence s'accompagne du silence de l'homme politique.
Dans ce contact avec les victimes, l'homme politique n'offre pas un discours institutionnelle, ni même une bénédiction, il vient se mettre à la place de celui qui souffre, et il essaie de trouver le mode de s'identifier. C'est dans ce sens que Daniel Scioli ne cesse pas de nous offrir des images très évidentes de la présence d'empathie. En 2008, par exemple, un jeun avait perdu son bras lors de l'attaque d'un délinquant qui voulait lui voler le portable. Dix jours après, le fait prenait état public parce que le gouverneur Scioli lui rendit visite à l'hôpital. Les journaux citaient les mots de Scioli pendant la visite : « Désormais, il faut que tu penses à une vie normale…les sportifs, nous avons quelque chose d'spécial pour sortir de l'adversité, et je vais t'aider à partir de mon expérience, parce que j'ai perdu aussi mon bras droit » (La Nación, 07/07/2008).

III. Les sens de la présence et la représentation

Nous avons identifié quatre idéaux-types de la présence des hommes politiques sur le terrain. Voyons maintenant quel est le rapport entre ces formes de la présence et la représentation.
Les deux présences charismatiques semblent s'accommoder à l'idée représentative de mandat. Quand le représentant se rend sur le terrain pour inaugurer une œuvre publique ou quand il vient toucher la main d'un humble travailleur qui l'admire, sa présence met en scène un lien construit ailleurs en tant que lien représentatif. Dans ce sens, même dans le cas de la présence thaumaturgique, il s'agit de présences rituelles, qui reproduisent une relation leaders-citoyens ou état-citoyens basée sur le mandat conféré par l'élection et par la confiance qu'elle implique. Deux dimensions fondamentales de la représentation que nous pourrions dénommer « cognitive » et « volitive ou affective » se trouvent en dehors de la présence elle-même.
Par contre, les deux formes de présence que nous avons caractérisées comme anti-charismatiques semblent s'inscrire dans l'affirmation de Pierre Rosanvallon (2008) qui ouvre ce travail, selon laquelle la présence bouleverse au présent le régime de la représentation. Tel qu'argumentait l'auteur, la présence offre une consistance « immédiate et effective » des liens qui pouvaient, autrefois, s'appuyer sur l'engagement électoral, et qui le font de nos jours de moins en moins. Au lieu de se structurer autour des notions de mandat et d'obligation, le lien entre gouvernants et gouvernés se structure autour de la manifestation du fait que les premiers comprennent et partagent les vécus des secondes.
C'est dans ce sens qu'il existe une demande sociale de présence des « hommes politiques » sur le terrain. Tel que le commentait un concejal (conseiller municipal) de Rosario lors d'un entretien, les représentants sont conscients de cette demande de présence: « L'une des grandes critiques est que les concejales ne se rendent pas dans les quartiers »[10]. La demande de présence est coextensive de la critique des hommes politiques « enfermés dans leur bureau » ou de « la politique de bureau » dont les médias se font un grand écho. Ce même concejal estimait, en effet, que la perte de légitimité de la politique traditionnelle doit se renverser en faisant de la sorte que « …la politique ne soit pas enfermée et réduite

[10] Entretien avec M. P. concejal du parti de gouvernement, 21 octobre 2009, réalisé dans le cadre de l'analyse du Concejo en los Barrios (Annunziata, 2012).

dans un bureau pour sa construction »[11]. Il soutenait que le travail d'un homme politique devrait se partager entre *le dedans* et *le dehors* du bureau, la part d'activité réalisée à l'extérieur de l'institution devant, selon lui, être la plus importante : « La seule manière de créer un projet vraiment intéressant est de parcourir la ville (…). Un collègue, quand j'ai commencé à être concejal, me l'a dit : '30 dedans et 70 dehors', parce que ceux endroits, en plus, ils tendent à t'enfermer »[12].

Si nous nous arrêtons dans le récit de cet homme politique sur la signification de la présence, c'est parce qu'il nous semble illustratif d'un discours politique et médiatique de plus en plus répandu. Interprétant les mots du concejal de Rosario, nous pourrions dire que la « politique de bureau » présenterait au moins deux défauts : l'un cognitif, l'autre politique. D'un côté, la méconnaissance de la réalité quotidienne des citoyens ; de l'autre, le manque de reconnaissance (la méconnaissance) que l'on manifeste à l'égard de leurs problèmes et souffrances. En retour, la présence sur le terrain des hommes politiques[13] se révélerait être un double remède, aidant, à la fois, à connaître et à reconnaître les situations des citoyens ordinaires. Ce même concejal de Rosario évoquait l'importance de la présence comme manifestation de la reconnaissance des problèmes des *vecinos* : si ces problèmes ne pouvaient pas recevoir de solution, à tout le moins, les *vecinos* ressentiraient que les hommes politiques se préoccupent d'eux. Il affirmait, à ce propos : « Ils me disent 'bon, mais vous, au moins, vous venez' »[14]. L'« écoute » opère, en ce sens, de la même manière que la « présence ». Le fait d'avoir être écouté compterait plus que la solution effective apportée aux problèmes posés par les *vecinos*. Elle témoignerait du lien personnel, l'attention portée à la singularité de leur vie. La présence des hommes politiques dans les quartiers sert à véhiculer cette écoute[15].

Le fait de se montrer proche, intéressé, prêt à se rendre sur place pour voir et partager un problème des *vecinos*, est interprété comme un « geste d'humilité du pouvoir »[16]. Le déplacement des représentants vers les réalités quotidiennes des citoyens apparaît comme une preuve de l'attention que l'on porte à la spécificité de chacune des situations considérées, de chacun des problèmes envisagés. L'attention devient aussi « partage » de la situation, « accompagnement ». Le représentant se montre donc comme un pair, presque comme un ami, comme un *vecino* parmi les autres qui vient chez eux pour les écouter et les accompagner lorsqu'ils affrontent une difficulté.

[11] Entretien avec M. P., concejal appartenant au parti de gouvernement municipal, 21 octobre 2009, réalisé dans le cadre de l'analyse du Concejo en los Barrios (Annunziata, 2012).

[12] Entretien avec M. P., concejal, membre du parti de gouvernement, 21 octobre 2009, réalisé dans le cadre de l'analyse du Concejo en los Barrios (Annunziata, 2012).

[13] Le concejal établissait un rapport entre présence et proximité : « La proximité, c'est parcourir les quartiers » Entretien avec M. P., concejal du parti de gouvernement, 21 octobre 2009.

[14] Entretien avec M. P., concejal du parti de gouvernement, 21 octobre 2009.

[15] Un autre concejal de Rosario le racontait ainsi : « Que le vecino sente qu'il y a une écoute véritable, qu'il sente que tu sais quel est son problème, qu'après, tu te préoccupes de l'appeler » Entretien avec M. E. B., conseiller municipale appartenant au parti d'opposition au gouvernement local, 23 octobre 2009 réalisé dans le cadre de l'analyse du Concejo en los Barrios (Annunziata, 2012).

[16] Cette idée appartient au responsable de participation citoyenne du Concejo Deliberante de Morón en Argentine ; il utilisait l'expression pour caractériser ce dispositif participatif qui déplace les sessions aux différents quartiers de la ville: « C'est un geste d'ouverture, c'est un geste d'humilité…de dire 'je vais au lieu où on dit qu'il y a un problème déterminé, je m'en fais écho, je le visualise et je m'en occupe…' » Entretien avec G. H., 25 mars 2010. (Annunziata, 2012).

Le geste véhiculé par la présence caractérise doublement l'homme politique. D'un côté, il montre un représentant qui n'attend pas[17], qui va en quête des besoins et des doléances avant qu'ils arrivent à lui : il déploie un investissement de son énergie, comme s'il pouvait être partout, tout le temps. Mais cette ubiquité n'est pas l'ubiquité du regard d'en haut : chacun des citoyens pourra ressentir qu'il est le seul -ou que son quartier est le seul- à recevoir cette visite, à être le sujet de cette attention spéciale. Son expérience est singulière ; son rapport aux représentants est aussi unique et singulier. De l'autre, il montre le représentant compassionnel, qui partage et accompagne.

La présence des hommes politiques comporte ainsi une dimension affective, elle est montre d'intérêt et de préoccupation. Nous sommes d'accord avec les appréciations de Christian Le Bart sur ce point : « Que signifie, de la part d'un politique, *être là* ? Grossièrement la présence s'analyse comme adhésion, implication, approbation (…) Les politiques sont supposés maîtres de leur agenda, choisir d'être là équivalut donc à souligner l'importance de la relation qui les unit à ceux auprès de qui ils se sont déplacés » (Le Bart, 2005 : 155, souligné à l'original)[18] Par opposition, l' « enfermement » de l'homme politique dans son bureau, tel que nous l'avons souligné, devient un signe de désintérêt[19].

Mais on voit que la présence a aussi une dimension cognitive. Elle permet d'acquérir un « savoir de l'expérience » hautement valorisé. En plus de l'idée que les hommes politiques peuvent connaître les problèmes d'un territoire parce qu'ils y habitent, c'est surtout du contact direct, quotidien, voire immédiat, avec une situation, qui semblent dériver le savoir et la connaissance. Nous venons de voir, par exemple, à partir de quelques exemples, comment l'insécurité est devenue un sujet récurrent inscrit à l'agenda politique et médiatique impliquant le gouverneur Scioli, de la Province de Buenos Aires en Argentine, et comment il se déplace d'habitude pour rencontrer les victimes de l'insécurité. Lors d'un reportage donné à Perfil, il s'exprimait de la manière suivante sur cette question: « Je suis venu pour faire face à ce sujet et le changer, et je suis ouvert à tous les secteurs de la politique, à tous les secteurs de la société, à la participation citoyenne. Parce que je parle

[17] La référence à ce « ne pas attendre » est fréquente. Elle indique, d'un côté, un rapport à l'espace : l'homme politique qui n'attend pas est celui qui sort de son bureau, il n'y attend pas l'arrivée des problèmes à résoudre. De l'autre, cette référence indique un rapport au temps : l'homme politique qui n'attend pas ne fait pas perdre son temps aux *vecinos* ; aux temps lents et bureaucratiques de l'administration, il oppose l'immédiateté de la résolution des problèmes.

[18] L'auteur poursuit : « Le fait que ce soit le politique qui se déplace, que donc la rencontre ait lieu *sur le terrain*, produit un effet de proximité singulier, bien supérieur évidemment à ce qu'il est lorsque ce sont les interlocuteurs des gouvernants qui font le chemin inverse. *Consentir à recevoir* n'est pas *aller au-devant* » (Le Bart, 2005 : 156, souligné à l'original). « La présence des gouvernants est valorisée parce qu'elle est promesse de décision » (Le Bart, 2005 : 158). « *A contrario*, l'absence est analysée comme renoncement et désintérêt » (Le Bart, 2005 : 159).

[19] En effet, l'enfermement apparaît comme un signe de distance. Comme l'affirme Christian Le Bart : « En neutralisant la proximité physique par la différenciation symbolique, l'architecture des lieux du pouvoir mobilise un imaginaire de la centralité qui n'est pas synonyme de proximité. D'où l'obligation pour les gouvernants de quitter ces lieux pour aller au-devant des gouvernés. On sait que la pratique des voyages présidentiels (…) a historiquement permis de redonner à voir un chef d'État mobile et donc de solliciter des formes d'attachement fondées sur la présence réelle, alors que l'immobilité (pour ne pas dire l'enfermement) au sein d'un bâtiment spécifié (palais, château, hôtel de ville) manifeste d'abord le souci de mettre le pouvoir à distance » (Le Bart, 2005 : 147). Les hommes politiques s'approprient de cette lecture de la dichotomie entre le dedans et le dehors du bâtiment, symbole de cette distance. Rémi Lefebvre cite, par exemple, le propos de Bernard Bosson, maire d'Annecy (France) : « On n'est jamais assez présent. Le temps est l'inestimable allié de l'élu qui règle une grande partie des problèmes des citoyens en les écoutant intensément. Et dans cette tranche de vie consacrée à la mairie, ma pire punition est d'être requis dans mon bureau » (Lefebvre, 2005: 111).

avec les victimes, j'ai vu des familles détruites, j'ai pleuré à côté du veuf de la maîtresse, à côté de son cache-poussière et son lit et l'effort de toute la vie. J'ai été avec la mère du catéchiste et je sais ce que signifie que l'on ait assassiné cette fille ; on ne me le raconte pas, je le vois. »[20] Ce qu'il importe ici de remarquer, c'est que la connaissance du terrain, de l'expérience des victimes, devient la clé de la conception des politiques publiques. Il semblerait ainsi que pour faire face au problème de l'insécurité, il vaille mieux parler et partager la douleur des victimes que de concevoir des politiques de l'« enfermement dans un bureau ».

La présence semble remplir en effet les dimensions cognitive et volitive/ affective du mandat représentatif. Les opérations gestuelles de la présence, tant cognitives qu'affectives, témoignent de ce que, de plus en plus, pour bien connaître une situation et pour s'y intéresser sincèrement, il faut *être là*. C'est dans ce sens que la présence des hommes politiques sur le terrain acquiert de nos jours la signification du remplacement du mandat[21].

C'est pour cela aussi que les champagnes électorales changent le sens de la présence. Comme nous l'avons insinué, ce sont les hommes politiques qui entreprennent d'aller chercher les gens au lieu de les amener à se mobiliser ; l'énergie qui se met en action est désormais beaucoup plus celle des hommes politiques que celle des militants ou des sympathisants. Cette évolution entretient un rapport étroit avec l'incertitude qui pèse sur les résultats des politiques, de sorte que les candidats s'engagent moins sur des mesures spécifiques que sur l'énergie qu'ils ont l'intention de déployer qu'ils montrent à voir, ce qui se lit notamment dans les campagnes ; tel que le révèle Pierre Rosanvallon, lorsqu'ils s'affichent sur le terrain, les hommes politiques font valoir « l'investissement tangible d'eux-mêmes » (Rosanvallon, 2008 : 313)[22]. Les processus électoraux, les campagnes

[20] Entretien paru dans *Perfil* (11/07/2010).

[21] Par exemple, lors que l'opinion publique et les médias sont critiques par rapport à l'absence d'un représentant lors d'un événement politique importante, ou notamment lors d'une tragédie imprévue, il attire l'attention que la question posée soit plutôt celle de « où est-il/elle ? », au lieu de « quelle décision va-t-il/elle prendre ? ». Dans un essai récent, la philosophe argentine Beatriz Sarlo signalait aussi l'importance, prenant Francisco De Narváez comme exemple caractéristique, de la tendance à une communication surtout phatique qui se déroule « …sans montrer autre chose que sa seule présence (…) la politique est jeu de présence ; le politique, au lieu de dire, se met en évidence » (Sarlo, 2011: 23-24).

[22] Nous pouvons, à l'appui de cette observation, évoquer l'exemple de Martín Sabbatella, candidat à la fonction de député national dans la Province de Buenos Aires, de la force politique appelée « Nuevo Encuentro » en 2009. Il faisait campagne « en parcourant » la Province. Les médias mentionnaient que leurs journées, faites de promenades, de visites, et de déplacements sur le terrain, étaient interminables. Un article paru dans Perfil (26/06/2009) était sous-titré « Le maire de Morón parcourt la Province dans une voiture qui est presque devenue sa maison ambulante ». L'article poursuivait: « Avant de monter dans son auto, il raconte qu'il y a quatre ans déjà qu'il parcourt la province, si bien que cette opportunité lui apparaît différente: 'C'est beaucoup plus intense; toute la journée, tous les jours' ». L'article faisait le récit des activités du candidat dans chacune des villes qu'il visitait, et citait ses mots prononcés au cours du dîner : « L'autre jour, je suis allé chez Mirtha Legrand, mais j'aime mieux manger comme ça, entouré de personnes en mangeant de la viande rôtie', dit-il à table et il va saluer le cuisinier ». Mirtha Legrand est une actrice et animatrice qui anime, depuis plus de quarante ans, une émission télévisée qui s'appelle « Almorzando con Mirtha Legrand » (« Prenons le déjeuner avec Mirtha Legrand ») où elle converse avec ses invités : des personnalités célèbres du monde du spectacle, du sport et de la politique. En affirmant qu'il préférait manger un « asado » qu'aller chez Mirtha Legrand, Sabbatella entendait donc signifier qu'il ne souhaitait pas être traité comme une personnalité célèbre. Le candidat assis à table, l'informalité, remplacent les discours plus traditionnels déclamés sur une estrade. Ce sujet du « déplacement » sur le terrain était certainement interprété comme un signe d'investissement de soi. Evoquant ces promenades de campagne, La Nación (27 juin 2009) disait:« Martín Sabbatella montre avec fierté les 18 000 kilomètres qu'il a fait avec sa voiture pendant les quinze jours précédents».

électorales au sens large, supposent, de plus en plus, l'organisation de déjeuners, de réunions impromptues dans les cafés et, en règle générale, le contact avec les électeurs et les promenades sur le terrain. La proximité, selon Leroux (2005) : « …se décline aussi dans les usages sociaux du corps : poignées de mains, embrassades, rires, rapprochements et relâchements des corps, autant de manières 'd'aller au contact' de l'électeur. L'immersion dans la circonscription est un signe en soi… » (Leroux, 2005 : 96)[23].

IV. Pourquoi peut-on parler aujourd'hui d'une « politique de la présence » ?

La présence des hommes politiques sur le terrain n'est pas nouvelle. Nicolas Mariot (2005) montre bien en effet que les voyages des hommes politiques sur le terrain ne représentent pas une grande nouveauté. L'auteur, en revanche, parle d'une « répétition » doublée d'une « amnésie » concernant cette question des déplacements des dirigeants et des contacts directs avec les gens. Tant les voyages des leaders en contact avec la foule que les inaugurations, les commémorations et les célébrations de toute sorte ont amené toujours les représentants à se rendre sur le terrain. Si on ne peut nier que ce type de déplacements a toujours existé[24], nous pensons, pour notre part, qu'ils innovent, aujourd'hui, sur un élément essentiel : ce ne sont plus des « leaders » qui viennent au contact de la chaleur populaire, on n'est plus confrontés à l'« enthousiasme » d'une foule qui « applaudit » et « acclame »; ce sont des « hommes ordinaires » qui se rapprochent de tel ou tel autre « homme ordinaire » et de son histoire singulière. D'où que, après notre parcours, nous sommes en condition d'aventurer deux premières conclusions[25]. La nouveauté réside dans les formes et dans le sens de la présence.

---

[23] Un autre exemple peut nous aider à voir comment déterminé usage du corps est interprété comme un signe de proximité. Il s'agit de l'exemple l'ex-président Nestor Kirchner, alors qu'il était candidat à la fonction de député national pour la Province de Buenos Aires, pour le Frente Justicialista para la Victoria (FPV), en 2009. Jouant de son style informel, de l'habitude qui était la sienne de se mêler aux personnes ordinaires, il apparaissait dans les médias alors qu'il parcourait l'intérieur du pays, serrait dans ses bras les citoyens, affichait une attitude de proximité corporelle, physique. Un article de Clarín (08/05/2009), intitulé « Développant sa nouvelle stratégie, Kirchner parcourt maintenant à pied Berazategui », nous en fournit une illustration idéale. Le texte décrivait ainsi ce périple : « Pendant un peu plus de deux heures de ce parcours, Kirchner a serré dans ses bras des hommes et des femmes, il a embrassé des enfants et des grand-père, il a posé pour les photos de tous ceux qui le visaient avec leurs portables, il est entré dans certaines maisons, il a pris du maté, il a signé des autographes et il a plaisanté à plusieurs reprises sur le Racing[23] et d'autres sujets. L'intention du titulaire du PJ, avec ces déplacements, est d'afficher une figure 'plus humanisée' et en contact direct avec les citoyens… ».

[24] En identifiant « proximité » et « présence », Rémi Lefebvre affirme dans ce sens : « La proximité n'est dans une certaine mesure que le nouvel habillage d'anciennes pratiques. Mais dans le contexte de plus en plus intériorisé par les élus d'une 'crise de la représentation', cette proximité est en quelque sorte réinventée. » (Lefebvre, 2005: 107). Selon notre approche, en effet, la présence n'est pas nouvelle, mais la nouveauté réside plutôt dans la « proximité » comme forme de légitimité démocratique, qui encourage deux types de présence en particulier : la présence d'écoute et la présence d'empathie.

[25] Ce travail est le début d'une recherche postdoctorale financée par le Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), sur la politique de la présence et les transformations de la représentation en Argentine. Il est donc une première réflexion exploratoire sur la question. Notre double hypothèse d'une prédominance des traits anti-charismatiques de la présence des hommes politiques sur le terrain et de la signification de cette présence comme remplacement du mandat sera testée dans le déroulement de la recherche par la constitution d'un dossier de presse plus exhaustif, et la réalisation d'entretiens approfondis à un échantillon de leaders politiques et ses équipes, complétées éventuellement par l'observation ethnographique de certains déplacements ou parcours de ces leaders sélectionnés.

Elle réside d'abord dans les formes. Les formes de la présence qui prédominent aujourd'hui et qui ont plus d'écho public sont celles que nous avons dénommé la « présence d'écoute » et la « présence d'empathie ». Tel que cela a déjà pu être signalé par Pierre Rosanvallon (2008), les gouvernants se déplacent, aujourd'hui, à l'occasion de toujours moins d'inaugurations mais toujours plus pour rendre visite à des victimes exemplaires ou pour témoigner de leur compassion à des populations qui ont subi des catastrophes naturelles ou des accidents.

Ensuite, la nouveauté réside dans le sens de la présence, qui tend à apparaître comme un substitut du mandat représentatif affaibli. Dans un contexte d'émergence de que nous avons appelé une « représentation de proximité », la présence sert à véhiculer une identification anti-charismatique représentants et représentés, par le biais de la contigüité, c'est-à-dire, sous la forme de la « métonymie ». Le lien représentatif se dissimule à lui-même parce qu'il mélange les représentants et représentés dans un même espace et dans les mêmes activités, les premiers se mettent « sur un pied d'égalité » avec les secondes, créant l'image d'une réduction de la distance représentative.

Ce déplacement des gouvernants sur le terrain en guise de démonstration de leurs intérêt et compassion, cette attention –encouragée parce que soulignée par les médias[26]- sur le fait d'« être là » des gouvernants plutôt que sur leurs discours ou décisions est un signe des transformations de la représentation politique. Et l'essor de ce rôle de la présence va de pair, comme nous l'avons remarqué, avec la critique croissante de la « politique de bureau », à laquelle on associe, en général, une « classe politique » uniquement préoccupée d'elle-même.

La représentation comme rendre présent semble, aujourd'hui, ne pas pouvoir atteindre son but; il faut être présent. La présence est devenue irremplaçable. Pour les hommes politiques, « gouverner, c'est être présent », comme l'affirmait de manière textuelle le spot télévisé de Daniel Filmus (Frente para la Victoria) lors de la campagne électorale de 2011 pour l'élection de « Jefe de gobierno » de la Ciudad de Buenos Aires.[27] Expliquons-nous. La logique de la représentation suppose que la présence puisse être remplacée. Les citoyens occupent leur place sur le terrain de leur quotidienneté mais ils ne peuvent pas être sur la place du pouvoir. Là, ils doivent être re-présentés. Les représentants sont ceux qui sont autorisés à être sur cette place, et à leur place. Ils rendent présents les citoyens qui ne peuvent pas être présents. Aujourd'hui, la présence semble irremplaçable. D'un côté, les citoyens peuvent et doivent être présents sur la place du pouvoir : de nos jours, il n'est plus acceptable que les citoyens se voient exclus de la place du pouvoir. De l'autre, les représentants ne peuvent être à leur place que s'ils sont à leur place au sens littéral, ce qui signifie, sur le terrain, là où ils se trouvent effectivement au quotidien. Une littéralité restituée de la présence s'imprime sur la représentation.

C'est donc cette double nouveauté –des formes et du sens- qui façonne ce qu'on pourrait appeler une « politique de la présence »[28]. Cette politique de la présence existe dans le cadre d'une « légitimité de proximité » qui, encourageant une identification anti-

[26] Il faut remarquer la manière dont les médias s'attachent à montrer à la totalité du public la co-présence à laquelle participent très peu de gens. Ils médiatisent l'immédiat, de sorte qu'ils contribuent à construire la proximité comme lien politique légitime. Selon les propres termes de Le Bart : « …ce souci de proximité fait l'objet d'une mise en scène elle-même médiatisée, car les témoins réels de la présence effective de l'acteur politique ne sont qu'un petit nombre. Les journalistes commentent à distance, et pour un public physiquement éclaté, la présence réelle d'un politique sur le terrain… » (Le Bart, 2005 : 152).

[27] À son tour, les citoyens préfèrent d'être présents plutôt que d'être re-présentés, c'est-à-dire, que l'« hommo democraticus » de nos jours aspire à n'être représenté que pour lui-même. (Schnapper, 2002).

[28] Nous empruntons le terme à Rosanvallon (2008). Nous avons essayé ici de développer ce concept.

charismatique entre les hommes politiques et les hommes ordinaires, mobilise l'écoute et l'empathie, et exacerbe la dimension d'identité au lieu de celle de la distinction de la représentation.

Sous le titre de *The politics of presence*, Anne Phillips (1995) avait abordé un thème différent à celui que nous analysons ici, mais qui y est certainement connecté. Elle entendait opposer la question de savoir ce qui est représenté (ou quelles actions les représentants conduisent-ils) avec celle, autre, de qui est la personne qui représente. Elle confrontait ainsi la « politique des idées » caractéristique du libéralisme, pour lequel toutes les diversités peuvent se concevoir comme des diversités d'opinions, de croyances, de préférences, à une « politique de la présence » qui envisagerait, de manière tout autre, la question de l'exclusion des différents groupes sociaux (tels que les femmes ou les minorités éthiques). La « politique de la présence » désignait donc la présence des divers groupes sociaux dans les assemblées législatives, dans les corps représentatifs. Parlant indistinctement des « demandes de présence politique » et de la « politique de la présence », l'auteure ne pensait pas à une « forme politique », comme Pierre Rosanvallon l'a fait plus tard. Il s'agissait de rendre présents des représentants dans les espaces propres à la représentation. Tandis que, pour nous, la « politique de la présence » comporte, au contraire, des présences inattendues, des présences qui sont en décalage avec elles-mêmes : il s'agit des représentants présents dans les espaces des citoyens. Elle évoque, dans ce sens, non le *what* ou le *who* (les idées et les personnes) qui appelaient l'attention d'Anne Phillips, mais le *how* : comment représenter, comment prend forme le lien représentatif.

Cependant, notre parcours, nous aide à affirmer que toute forme de présence politique ne relève pas forcément de la « légitimité de proximité » contemporaine. Les déplacements protocolaires des gouvernants, par exemple, sont un type de contact lié à la fonction, et la fonction, de son côté, est, elle-même, liée à la différence des hommes politiques qui les distingue des citoyens ordinaires. Rémi Lefebvre (2005) propose une classification très intéressante de la proximité en tant que lien élus-citoyens au niveau local. Il distingue la proximité protocolaire de la proximité informelle. Selon les propres termes de l'auteur, la proximité protocolaire est « …une proximité faite de distance à travers laquelle l'élu endosse les signes les plus extérieurs à la fonction et lui permet de 'devenir ce qu'il est', de se conformer à son identité statutaire, [elle marque que l'élu] n'est pas un habitant parmi les autres mais leur mandataire » (Lefebvre, 2005: 113-114). L'auteur les qualifie même comme des situations de « mise en majesté ». Par contre, Lefebvre décrit ce qu'il appelle la proximité « informelle » comme «…plus recréatrice, plus personnalisée, moins codifiée et routinisée. » (Lefebvre, 2005: 114). Dans ce cas, « L'élu est alors physiquement proche et palpable. L'élu n'est plus alors forcément là où on l'attend. Il est tenu même de surprendre. » (Lefebvre, 2005: 114). Nous pensons que cette caractérisation des deux formes de la présence politique est correcte, mais désignent-elles vraiment deux formes de proximité ? L'expression de « proximité protocolaire » ne porte-t-elle pas, en son sein, une contradiction dans les termes ? Par ailleurs, nous estimons que la définition que propose Lefebvre pour la proximité informelle est une bonne manière de parler de la proximité en général : la proximité est un lien élus-citoyens dont les traits demeurent toujours ceux de l'informalité, de la spontanéité, de la rupture des règles de la fonction et du protocole –à tout le moins apparents. Tandis que Rémi Lefebvre (2005) peut donc évoquer l'existence

d'une « proximité protocolaire », nous estimons, pour notre part, que la proximité est toujours une rupture du protocole et des signes de la distance[29].
Nous sommes d'accord par conséquent avec Christian Le Bart lors qu'il souligne : « L'obligation faite aux gouvernants de paraître proches s'apparente à une contrainte de rôle qui s'exacerbe aujourd'hui. L'exigence de proximité se fait de plus en plus pressante, comme si la légitimité issue de la hauteur et de la grandeur s'essoufflait » (Le Bart, 2005 : 147). Mais observer qu'il existe aussi des formes de la présence des hommes politiques sur le terrain qui transmettent la distance, contribue à mieux identifier la nouveauté contemporaine de que ce que nous appelons une « politique de la présence ».
La « politique de la présence » existe donc par une exacerbation des éléments d'écoute et d'empathie dans les présences concrètes des hommes politiques sur le terrain, et par une mutation de la représentation politique dans le sens d'une « représentation de proximité », qui encourage la littéralité des présences comme signes de connaissance et de reconnaissance des expériences et vécus des citoyens, tendant à substituer le mandat dans ses dimension cognitive et volitive/affective.

Bibliographie

Abélès, M. (1989). Rituels et communication politique moderne. *Hermes* 4 :127-141.

Annunziata, R. (2009 a). De tijeras y espejos. Política de la proximidad y elecciones 2007 en el Municipio de Morón. dans Cheresky, I. (compilateur) *Las urnas y la desconfianza ciudadana en la democracia argentina*. Rosario: Homo Sapiens Ediciones.

Annunziata, R. (2009 b). La proximidad: política del presente y de la presencia en la Argentina. Communication présentée lors du *IX Congreso Nacional de Ciencia Política « Centros y periferias: equilibrios y asimetrías en las relaciones de poder »*, Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), Ciudad de Santa Fe, 19-22 août 2009; Universidad Nacional del Litoral y Universidad Católica de Santa Fe. Publiée dans les actes du Congrès.

Annunziata, R. (2012). *La légitimité de proximité et ses institutions. Les dispositifs participatifs dans les municipalités de Morón, Rosario et Ciudad de Buenos Aires.* Thèse pour le doctorat en Études Politiques. École des Hautes Études en Sciences Sociales.

Arendt, H. (2004) [1963] *Sobre la Revolución*. Madrid: Alianza Editorial.

Bloch, M. (1983). *Les rois thaumaturgiques*. Paris : Gallimard-bibliothèque des histoires.

[29] L'auteur ajoute à ces deux formes, protocolaire et informelle de proximité, une « proximité d'interpellation », qui configure une sorte de clientélisme personnel, puisque par le biais de l'accueil dans son bureau, des appels téléphoniques ou des courriers, l'élu construit une relation individualisé d'offre de services ; et une « proximité participative », plus exceptionnelle, dans laquelle les demandes sont encadrées dans des dispositifs de concertation et d'écoute.

Bourdin, A. (2005). La proximité comme encodage politique de la vie quotidienne dans Bourdin, A.; Germain, A. et Lefeuvre, M.-P. (directeurs). *La proximité. Construction politique et expérience sociale*. Paris : L'Harmattan.

Cheresky, I. (2011). Ciudadanía y democracia continua dans Cheresky, I. (compilateur) *Ciudadanía y legitimidad democrática en América Latina.* Buenos Aires: Clacso-Prometeo.

Fleurdorge, D. (2005) *Les rituels et les représentations du Pouvoir.* Paris : éditions Zagros.

Heurtin, J.-P. (2003). Architectures morales de l'Assemblée Nationale dans Detienne, M. (directeur) *Qui veut prendre la parole ?* Le genre humain 40/41. Paris : EHESS-Seuil.

Le Bart, C. (2005). Métier politique et ubiquité : l'art d'être là. dans Lefebvre, R. et Le Bart, C. (directeurs). La proximité en politique. Usages, rhétoriques, pratiques. Rennes : Presses Universitaires de Rennes.

Le Bart, C. et Lefebvre, R. (2005). Une nouvelle grandeur politique ?. dans Lefebvre, R. et Le Bart, C. (directeurs). *La proximité en politique. Usages, rhétoriques, pratiques*, Rennes : Presses Universitaires de Rennes.

Lefebvre, R. (2005). La proximité à distance. Typologie des interactions élus-citoyens dans Lefebvre, R. et Le Bart, C. (directeurs). *La proximité en politique. Usages, rhétoriques, pratiques.* Rennes : Presses Universitaires de Rennes.

Lefort, C. (1986). *Essais sur le politique.* Paris : Seuil- Points Essais.

Leroux, P. (2005). Réenchanter les campagnes. Paradoxes et ambiguïtés de l'usage de la proximité dans Lefebvre, R. et Le Bart, C. (directeur). *La proximité en politique. Usages, rhétoriques, pratiques.* Rennes : Presses Universitaires de Rennes.

Mariot, N. (2005). Réciter des visites pour agréger des soutiens. dans Lefebvre, Rémi et Le Bart, Christian (directeurs). *La proximité en politique. Usages, rhétoriques, pratiques*. Rennes : Presses Universitaires de Rennes.

Palermo, V. et Novaro, M. (1996). *Política y poder en el gobierno de Menem.* Buenos Aires: Norma.

Palermo, V. et Novaro, M. (1998). *Los caminos de la centroizquierda. Dilemas y desafíos del Frepaso y de la Alianza* Buenos Aires : Losada.

Phillips, A. (1995). *The politics of presence.* Oxford: Clarendon Press.

Rosanvallon, P. (2006). *La contre-démocratie. La politique à l'âge de la défiance.* Paris : Seuil.

Rosanvallon, P. (2008). *La légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité*. Paris: Seuil.

Schnapper, D. (2002). *La démocratie providentielle. Essai sur l'égalité contemporaine* Paris : Gallimard.

De la contestation sociale à la prestation de services ciblés : l'organisation « piquetera » Tupac Amaru en Argentine[1]

Maricel Rodríguez Blanco

I. Introduction

Cet article a pour but de contribuer à partir de l'analyse de la trajectoire des leaders et d'une sociogenèse des organisations, à la caractérisation des fonctions politiques et sociales d'une organisation « piquetera » financée par le gouvernement fédéral, issue des événements de contestation sociale déclenchés à Jujuy vers la fin des années 1990. Après une dictature militaire (1976- 1983) dont les conséquences furent graves tant du point de vue social qu'économique et politique, l'accroissement des inégalités socio-économiques interroge le fonctionnement démocratique dans un contexte d'une démocratie électorale pourtant acquise. Afin de pouvoir comprendre les mécanismes actuels et concrets de cette démocratie, il convient d'analyser non seulement les processus électoraux et institutionnels (dans lesquels la contestation sans doute s'encadre) et le processus politique de constitution de ces groupes dans l'espace publique, mais également leur lien avec les formes non institutionnelles de cette démocratie souvent considérées à tort comme des formes anti-institutionnelles, mais qui font partie, elles aussi, d'une « vie démocratique » (Quiroga, 2010). Autrement dit, il s'agit - à partir de l'analyse des formes d'organisation territorialisées des « piqueteros » en relation avec les gouvernements – de rendre compte de certaines dimensions de ces formes non institutionnelles d'action collective et d'organisation sans pour autant les considérer comme des formes nécessairement « autonomes ». Au contraire, elles s'inscrivent dans un processus de transformation de la démocratie représentative (Cheresky, 2006a, 2006b).
Une des manifestations de la vie politique argentine non institutionnelle qui a été très étudiée est celle de l'action collective des mouvements *piqueteros*[2] (Svampa, 2003 ;

[1] La province de Jujuy est une des provinces les plus pauvres de l'Argentine. Située au nord ouest, elle a une population de 611.058 habitants, juste 1,6 % des habitants du pays, moins de la population des districts de la banlieue de la province de Buenos Aires comme la Matanza qui en elle même représente la huitième section électorale du pays, avec près de 700 mille électeurs positifs. La ville de San Salvador, avec 237.751 habitants (INDEC, *Instituto Nacional de Estadísticas y Censos*, 2001), se situe au sud de la province. Quant à son activité économique, il s'agit d'une région plutôt agraire, faiblement industrialisée, où la principale industrie s'est installée autour de la canne au sucre, avec quelques « *ingenios* » dont les propriétaires étaient très liés au pouvoir politique. La famille Blanquer par exemple, propriétaire du Ingenio Ledesma, à l'est de la province de Jujuy, dans la région du Ramal, qui est le premier employeur privé de la province.

[2] « *Piqueteros* » veut dire « ceux qui font des *piquetes* » c'est-à-dire ceux qui bloquent ou barrent les routes. Le mot a été employé pour la première fois en 1996, par la presse locale de la province de Neuquén, au sud de l'Argentine, suite à une série d'actions collectives menées par les ex employés de l'entreprise de pétrole de l'État, YPF (*Yacimientos Petrolíferos Fiscales*) ayant été licenciés. La mobilisation s'étend ensuite à d'autres catégories sociales comme des enseignants et des étudiants universitaires, et obtient l'appui des habitants des villes voisines, la majorité des manifestants étant des chômeurs (on utilisera cette catégorie pour

Delamata, 2005 ; Schuster et al., 2005, Rodríguez Blanco, 2002, parmi d'autres). Plus souvent éludés restent l'action quotidienne et les formes organisationnelles de ces acteurs de la contestation sociale qui sont devenus centraux dans le scénario politique. Ainsi, la littérature a surtout mis l'accent sur les répertoires d'action mais pas suffisamment sur la relation entre les formes d'organisation propres à ces mouvements piqueteros, l'État et les différents gouvernements. Cette absence est spécialement remarquable dans le cas des provinces argentines, où les recherches faites sont relativement limitées[3]. Si la dimension institutionnelle dans une province périphérique comme Jujuy reste prégnante, c'est la démocratie dans sa dimension non institutionnelle trop souvent reléguée que l'on voudrait traiter ici en prenant appui sur le cas d'une organisation locale *de quartier* issue des contestations syndicales et de chômeurs (nommés mouvements *piqueteros)* dans les années 1990, l'organisation Tupac Amaru. Nous reconstituerons l'histoire sociale de cette organisation (création, actions collectives menées, négociations avec les autorités publiques nationales et provinciales, etcétéra.), à partir d'analyser tout d'abord la création et structuration de l'organisation Tupac Amaru (entre 1999-2002), puis l'expansion locale sous le gouvernement de Néstor Kirchner et puis de Cristina Kirchner (2003-2009) jusqu'à l'autonomisation[4] et l'expansion nationale (2010-...). Ensuite nous allons définir l'organisation à partir de l'analyse de la trajectoire de sa leader. Cette trajectoire constitue non seulement un cas exemplaire (parmi d'autres leaders de la contestation sociale) du point de vue de l'acquisition d'un capital politique et d'organisation mais également permet de saisir les logiques d'action qui sous-tendent l'organisation Tupac Amaru, comme d'autres organisations *piqueteras*.

On tentera enfin de tirer quelques conclusions générales de cette enquête dans le but de contribuer à une sociologie politique du rapport entre organisations issues de la contestation sociale et gouvernements en Argentine.

---

désigner les personnes qui ont été licenciés ou perdu leur emploi mais qui ne jouissent pas pour autant d'un statut juridique de chômeur. Ils peuvent faire cependant des « activités » et avoir des petits boulots ou « *changas* »). Bien évidemment les revendications ne se limitaient pas à la demande de travail ; elles étaient aussi pour des nouveaux emplois, de la nourriture, des allocations de l'État, contre la corruption des élites locales, pour plus d'éducation pour leurs enfants, pour de logement, etcétéra. Ces revendications se multiplient rapidement dans d'autres provinces argentines. Par exemple, en 1997, se déclenchent des actions collectives des ex employés de YPF à Tartagal et Gral. Mosconi (province de Salta), et des manifestations des chômeurs encadrés en partie par des organisations syndicales à Jujuy. Ces mobilisations ont été nommées comme des actions collectives des *piqueteros* car la forme d'action principale était le barrage de route ou *piquete*. Mais les manifestants ont eu aussi recours à d'autres formes d'action comme la grève de la faim, les manifestations face aux institutions de gouvernement locales, les actions de *escrache* -actions de dénonce de corruption ou d'attentat aux droits de l'homme réalisées face au domicile ou lieu de travail des élus, des industriels, etcétéra, afin que ce soient connus de l'opinion publique-.

Le mot *piqueteros* a été adopté tant par la presse nationale que locale, aussi bien favorable que défavorable aux mouvements, et par les mêmes organisations *piqueteras* qui se sont progressivement autonomisées de la dénomination, considérée stigmatisante. Par ailleurs, on observe que cette dénomination a circulé très vite dans l'espace académique sans pour autant faire l'objet d'un travail de clarification concernant ce que ce terme était censé représenter sociologiquement.

[3] Parmi les analyses des processus politiques et des organisations issues de la contestation sociale dans les provinces argentines, nous pouvons mentionner l'enquête de Marina Farinetti sur le *Santiagueñazo* en 1993 (processus d'action collective à la province de Santiago del Estero) (2000), et le travail de thèse de Jacqueline Behrend portant sur le « jeu fermé » de la politique provinciale dans les cas de San Luis et de Corrientes, où elle analyse le rapport entre la contestation et le régime politique (Behrend, 2007). Concernant le cas de la province de Jujuy, nous renvoyons aux analyses d'histoire politique d'Adriana Kindgard (spécialement Kindgard, 2002).

[4] « Autonomisation » doit être entendue ici dans le sens d'une indépendance progressive vis-à-vis de la tutelle du syndicat.

Les conditions sociales de l'enquête

Cette recherche s'appuie sur une enquête principalement ethnographique menée en plusieurs étapes, entre les années 2001 et 2009 à la province de Jujuy: elle se fonde sur des observations directes et des entretiens approfondis avec des membres et des leaders de l'organisation. A cette enquête s'ajoute une analyse faite à partir d'un recueil systématique d'archives et des documents (journaux, documents des organisations, etc.).

Nous considérons que l'analyse de la situation d'enquête est une condition nécessaire à la compréhension des matériaux recueillis, et tout particulièrement, l'entrée dans le terrain et la relation enquêteur-enquêté. En effet, comme le souligne Gérard Mauger, « la présentation de soi de l'enquêté dépend de la représentation qu'il se fait de l'enquêteur et de la situation d'enquête » (Mauger, 1991: 125). Dans ce sens, il faut l'intégrer à l'objet de la recherche. Etant donné que le travail de terrain s'est développé sur plusieurs années, nous avons contribué à établir différentes relations d'enquête que nous préciserons par la suite.

Mes premiers entretiens avec la leader de l'organisation Tupac Amaru ont eu lieu en 2001 lors que Tupac Amaru n'existait pas encore, n'étant qu'un symbole de la lutté indienne contre «l'envahisseur espagnol ». Les premières réunions et entretiens avec Milagro Sala avaient eu lieu dans une petite salle de réunion à l'entrée du bâtiment de la CTA de Jujuy, au centre de la ville. C'était le secrétaire général du syndicat, Fernando Acosta, qui m'avait présentée me disant que ce serait intéressant pour moi (étant donné mon intérêt déclaré d'étudier les conflits ayant eu lieu pendant les années 1990) de rencontrer précisément quelqu'un de l'organisation issue des quartiers les plus pauvres, et donc très au courant de leur situation sociale difficile. Acosta m'avait, de plus, indiqué qu'elle était en charge du programme *Copa de Leche*, qui s'occupait de la distribution de lait chez les enfants et les jeunes. Milagro Sala s'assoit sur une petite chaise en face de moi. Une table d'école nous séparait. J'insiste tout particulièrement sur mon intérêt pour l'histoire des conflits sociaux s'étant produits récemment à Jujuy et sur sa participation à ceux-ci. A l'époque, ce qu'elle me livre durant l'entretien montre qu'elle s'identifie fortement au mouvement syndical, et spécialement les syndicats des employés de l'administration publique locale (ATE), identification dont elle se distanciera progressivement, et surtout à partir de la période où l'organisation Tupac Amaru sera en mesure de s'autonomiser vis à vis de la tutelle syndicale.

En 2007, lorsque je reviens à San Salvador de Jujuy, mon contact local qui m'amène vers Tupac Amaru et notamment sa dirigeante, Milagro Sala, sont cette fois-ci une femme institutrice, Laura, et sa famille. On s'est rencontrées avec Laura en 2000 devenant mon informatrice clé : un ami à moi, militant de la jeunesse radicale de Jujuy (UCR, *Unión Cívica Radical*), nous avait présentées (l'UCR est le parti politique dans l'opposition au gouvernement depuis 1983 - rappelons que dès lors la province est gouvernée par des péronistes-). Laura et lui se connaissaient depuis des années pour avoir travaillé ensemble dans des postes administratifs à la Législature de Jujuy dans le bloc parlementaire des députés de l'UCR, qui étaient très liés aux luttes menées par le syndicat des enseignants du secondaire, dont Laura était affiliée, et le syndicat des employés de l'administration publique (que la CTA rejoint plus tard). Les deux syndicats ont participé activement aux conflits déclenchés au début des années 1990 contre la Loi Fédérale d'Éducation et les réformes ménemistes. Après avoir fait sa connaissance,

on se voyait de temps en temps lors des événements culturels organisés par la communauté *jujeña* à Buenos Aires, où elle déménage suivant une député de l'UCR élue sénatrice de la province de Jujuy et pour laquelle elle travaille. C'était pendant les années 1990 à ATE que Laura fait la connaissance de Milagro Sala et qu'elles deviennent ainsi amies. Lors de cette seconde enquête en 2007 sur l'organisation, c'est donc Laura qui m'introduit auprès de Milagro Sala. Elle m'accompagne jusqu'à la nouvelle demeure où Milagro Sala réside. Il s'agit d'une grande maison de plusieurs étages avec un garage et une piscine (deux signes distinctifs de richesse à Jujuy), au quartier de Cuyaya, un quartier plutôt résidentiel à San Salvador de Jujuy, loin des quartiers les plus pauvres que Milagro avait fréquentés dans sa jeunesse.
Bien que cette seconde étape de l'enquête puisse constituer, via l'accès au terrain (milieu plutôt péroniste) par des militants de l'UCR, un biais pour la situation d'enquête, les observations et les entretiens réalisés avec Milagro Sala en 2001, cette-fois ci au travers la CTA, nous permettent de distinguer clairement les effets produits par les différents moments de socialisation politique.

Parmi les obstacles épistémologiques au dispositif d'enquête, figuraient ainsi les représentations sociales que les classes populaires ont des « intellectuels », le rapport à la police et à la loi spécifique à nos enquêtes, et enfin, la tentation de manipulation à la fois consciente et inconsciente du sociologue chercheur/ intellectuel, considéré comme à la fois un observateur reconnaissant et un faire-valoir symbolique. Ainsi, nous n'avons pas échappé aux représentations sociales existantes dans ce milieu sur les universitaires – étudiants et chercheurs - associés à des intellectuels. Ces derniers sont socialement perçus par les classes populaires selon deux schèmes, un assez général qui est le produit de la distance socio-économique, et l'autre plus spécifique qui relève de la distance scolaire. Dans le cadre de notre enquête, ces représentations sociales des classes populaires à l'égard des intellectuels se sont caractérisées par l'association fréquente à notre statut d'enquêteur de l'image positive de journalistes, mais aussi plus ambivalente de « fonctionnaires » (au sens de travailleurs sociaux) induisant une méfiance voire une défiance dans la relation enquêteur-enquêtés. Il est ainsi arrivé fréquemment durant l'enquête que l'on nous assigne tantôt le rôle social de fonctionnaires tantôt celui de journalistes avec les distorsions que ces rôles entraînent inévitablement dans la relation d'enquête, et qu'il s'agit dans la mesure du possible de contrôler et de mettre à profit *in situ*. Par ailleurs, l'activité d'enquête même si jamais nommée en tant que telle auprès des acteurs peut également se heurter au soupçon du risque de collaborer avec la police, surtout dans les cas où les acteurs ont des pratiques qui sont ou qu'ils jugent éloignées de la légalité ou bien dans le cas de ceux qui, ayant vécu des expériences de répression, sont extrêmement sensibles à l'infiltration de leurs organisations et à la délation ; ce qui correspondait à une partie de nos enquêtés. Enfin, les intellectuels représentent pour les classes populaires, de possibles porte-parole de leurs revendications, voire des ambassadeurs potentiels face aux pouvoirs publics, en raison de sa position privilégiée dans la production des principes de vision et de division du monde social. La plupart des enquêtés et tout particulièrement les leaders des groupes étudiés attendaient des intellectuels qu'ils « reconnaissent » de manière bienveillante leurs « bonnes pratiques », ce que nous avons pu systématiquement observé durant notre enquête auprès de l'organisation Tupac Amaru, où l'on nous prenait à témoin d'une « authenticité » incontestable et incontestée. Soulignons également que du côté des intellectuels, de nombreux biais

scolastiques (« populisme savant », « misérabilisme », « exotisme », …) formes transfigurées de pré- notions ou de préjugés sociaux structurent leurs perceptions des classes populaires. Nous essayerons dans cet article de mettre en question certains de ces préjugés[5].

II. Naissance et définition de l'organisation Tupac Amaru

La genèse de l'organisation Tupac Amaru est à analyser sous l'angle d'un double rapport, celui d'une action collective encadrée par un syndicat[6] et celui d'un lien institutionnel (ou contractuel) avec le gouvernement national et provincial. L'organisation naît en 1999 à la province périphérique de Jujuy (nord-ouest) sous la tutelle d'un syndicat, la CTA (*Central de los Trabajadores Argentinos*)[7] se trouvant à la tête des luttes suite à des revendications sociales très ciblées, portées par les employés de l'administration publique de Jujuy[8] pour l'augmentation des salaires et pour contester les réformes du gouvernement de Carlos Menem (1989-1994 et 1995-1999). Grâce à ces mobilisations et aux négociations qui en suivirent, l'organisation obtient alors des allocations et subsides, versés sans interruption à partir des années 1990 par l'État fédéral et la province de Jujuy auxquels elle doit aussi son existence et surtout sa pérennisation.

Tupac Amaru est crée sous l'impulsion de Milagro Sala, sa dirigeante actuelle, d'affinités politiques péronistes qui, ayant participé aux mobilisations collectives durant les années 1990 dans le syndicat ATE des travailleurs de la fonction publique (*Asociación de Trabajadores del Estado*), est ainsi cooptée et nommée sous-secrétaire de la CTA de Jujuy

[5] Pour un traitement de la question de la situation d'enquête et de cette illusion, voir Mauger, Gérard: « Enquêter en milieu populaire », G*enèses,* Paris, 6 décembre 1991, p. 125-143.

[6] Il n'est pas anodin de rappeler que les organisations *piqueteras* ont été souvent considérées par certains travaux (Merklen, 2009: 141; Svampa et Pereyra, 2003, parmi d'autres) comme des acteurs prenant le relais des syndicats (et des partis politiques). Cette sociogenèse prétend contribuer à une analyse qui tienne compte des articulations et des échanges entre les deux : l'origine syndicale et partisan de ces organisations (ce qui apparaît clairement lors qu'on mobilise des éléments biographiques des leaders des organisations *piqueteras*, en majorité issus des courants syndicaux ou des partis politiques), ce qui ne nous empêchera pas de distinguer aussi les ruptures avec ces structures de représentation des intérêts.

[7] La CTA, crée en 1996 par une branche du péronisme contre le syndicalisme traditionnel de la CGT (*Confederación General de los Trabajadores*), seule fédération des syndicats juridiquement reconnue, est une fédération d'organisations qui regroupe plus de 240 organisations syndicales et aussi sociales des quartiers, avec près de 860000 personnes affiliés selon les statistiques de la propre organisation. Elle constitue l'une des 1104 syndicats seulement inscrits (contre 1317 qui ont un statut juridique). Ils ont une représentativité reconnue de fait mais pas de reconnaissance juridique, *ergo* ils n'ont pas de garanties ni de protection pour son activité syndicale. Parmi les antécédents de la fondation de la CTA, il se trouve la *Marcha Federal*, une mobilisation massive réalisée en 1994 contre le gouvernement de Carlos Menem et ses réformes structurelles de l'économie qui portaient des conséquences négatives pour les travailleurs. La CTA se propose comme un « nouveau syndicalisme » avec une autonomie vis-à-vis des partis politiques et des entrepreneurs et une démocratie interne, contrairement à ce qui été critiqué du syndicalisme « traditionnel » de la CGT. La CTA prétend à la fois se faire écho des changements du statut de l'emploi, en regroupant dans ses bases non seulement des employés mais aussi des chômeurs, des jeunes, des migrants, des travailleurs précaires, etcétéra. L'affiliation est donc directe et le vote aussi. La seule condition est une contribution d'un peso par mois, sauf pour les chômeurs pour qui c'est un peso par an, selon l'information institutionnelle sur le site de l'organisation: http://www.cta.org.ar/institucional/organizac.shtml.

[8] Ces manifestants étaient organisés en syndicats, notamment le syndicat des employés de l'administration publique, ATE (*Asociación de Trabajadores del Estado*) qu'avec la CTA ont été à la tête des mobilisations sociales du FGE (*Frente de Gremios Estatales*) qui regroupait des syndicats de différents secteurs de l'administration publique).

par Fernando Acosta, secrétaire général de la CTA. L'organisation se compose de 70000 affiliés[9] en majorité chômeurs, avec une présence très importante de femmes et de jeunes qui n'ont jamais connu le statut de travailleur salarié, tel qu'il avait auparavant existé en Argentine avant les années 1990. L'organisation Tupac Amaru exprime les enjeux des transformations sociales et économiques profondes de la société dont ses effets commencent à être perçus par la population argentine vers la fin des années 1990. Rappelons que la décennie de réformes ménemistes s'achève avec une série de conséquences économiques et sociales négatives pour les franges de la population disposant des ressources les plus faibles, se traduisant notamment par un chômage massif. Les effets de paupérisation et de précarisation de ces réformes entraînent alors d'importantes mobilisations collectives de la part de certains groupes sociaux concernés (dénommés *piqueteros*) qui vont alors paralyser la province de Jujuy*10*. C'est donc dans ce contexte politique et social que l'organisation Tupac Amaru apparaît.

Profitant des « opportunités politiques » ouvertes par les premières organisations *piqueteras* depuis 1996, notamment de l'inscription dans l'agenda publique de la question du chômage et de la pauvreté, Tupac Amaru milite pour que l'État prenne en charge la situation des chômeurs *jujeños*, contre la malnutrition des enfants, pour la création de sources d'emploi, etcétéra. La presse locale apporte un appui décisif à la cause défendue (comme par ailleurs aux revendications de la CTA), publicisant les actions collectives menées et les négociations entamées. *A contrario* la presse nationale est partagée entre l'appui et la critique, voire parfois la stigmatisation des acteurs mobilisés11. L'organisation Tupac Amaru bénéficie des soutiens tant matériels que symboliques de certains élus locaux, et également (de) Ministres de Gouvernement : en effet, les ressources de ce type d'organisation étant relativement modestes, elle trouve dans le recours à des négociations personnelles avec certains élus, le moyen d'opérer une certaine pression politique (pouvant, comme nous le verrons plus tard, entraîner de réels effets électoraux tant positifs que négatifs) afin d'obtenir satisfaction concernant leurs revendications. Mais le soutien le plus important permettant à Tupac Amaru de développer du capital symbolique et politique a été celui du président de la nation à partir de 2003, à savoir Nestor Kirchner lui-même. Un groupe de représentants de l'organisation Tupac Amaru, avec à sa tête sa dirigeante, Milagro Sala, sont reçus à Buenos Aires par la Ministre de Développement Social de la nation, Alicia Kirchner, et par le propre président Néstor Kirchner plus tard : ils

[9] L'affiliation consiste en le paiement d'une cotisation mensuelle unique d'un peso argentin. Les catégories d'affiliés tel qu'elles sont définies par l'organisation regroupent « des retraités, des handicapés, des employés de l'administration publique locale, des chômeurs, etcétéra ». La majorité est constituée des personnes au chômage bénéficiaires du *Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados* (nous reviendrons sur les critères d'obtention de l'allocation et le « droit d'entrée » à l'organisation dans la partie 2.2).

[10] Du fait de s'inscrire dans les conflits *piqueteros* pour contester les réformes du gouvernement, l'organisation Tupac Amaru n'a pas pu échapper à la stigmatisation de la part de certains secteurs de la population, notamment les classes moyennes que, sauf pendant les mois qui suivirent la crise de décembre 2001 (où il y eu des expériences communes entre les chômeurs mobilisés et des secteurs de la classe moyenne urbaine), elles ont toujours été critiques des méthodes d'action des groupes *piqueteros*.

[11] Notamment, les deux journaux les plus importants de la scène locale, *El Tribuno de Jujuy* et *Pregón,* ont donné une visibilité à des actions collectives, particulièrement en ce qui concerne les mobilisations dans les villes périphériques de la province. Des journaux nationaux comme *La Nación,* en revanche, ne présentaient pas des informations sur la diversité d'actions collectives menées à Jujuy à cette période, se limitant à relever le cas de sa capitale. Par ailleurs, ils se sont positionnés contre ces mouvements considérés du premier jour comme des mouvements violents et non légitimes. D'autres journaux nationaux comme *Página 12*, surtout à partir des articles de la journaliste Alejandra Dandan et de Sandra Russo (qui a récemment publié un livre sur la vie de Milagro Sala) ont plutôt développé des positions favorables aux mouvements.

réussissent à négocier un subside destiné à la construction des logements. Tupac Amaru est ainsi parvenue à partir de l'obtention de cette légitimité politique à emporter l'adhésion d'une grande partie de la population au chômage de la ville de San Salvador de Jujuy et puis d'autres villes, autant sur la base d'un enjeu politique et social lié à la redistribution des aides et subsides de l'État ainsi qu'à la contention sociale[12], qu'autour d'un symbole identitaire (lié à la culture *colla*). En outre, des contacts favorisés surtout par l'action de Milagro Sala ont été noués avec des organisations et des mouvements proches à l'échelle nationale et internationale (par exemple, des mouvements indiens dans différentes provinces argentines, des mouvements de droits de l'homme comme l'Association des Mères de la Place de Mai, ou les mouvements d'appui à la candidature et puis à la présidence d'Evo Morales en Bolivie), constituant un réseaux d'organisations à objets sociaux multiples, se mobilisant tantôt pour appuyer le gouvernement national de Kirchner tantôt pour demander une augmentation du montant des subsides ou des allocations familiales, protester contre des augmentations des tarifs des services publics ou pour la restitution des terres des communautés indiennes.

La sociogenèse de l'organisation Tupac Amaru, vise à saisir – en explicitant sa structure spécifique, ses modalités d'action, les conflits dans lesquels elle s'inscrit, son rapport aux gouvernements et son processus d'institutionnalisation- les logiques sociales et politiques qui déterminent le processus par lequel cette organisation devient cardinale au niveau national c'est-à-dire un acteur politique incontournable sur lequel les gouvernements ont à présent des « intérêts » objectifs de s'appuyer (e.g. le gouvernement de Néstor Kirchner, 2003-2007, et de Cristina Kirchner, 2007-2011).

La question indienne

L'organisation Tupac Amaru intègre déjà dans son nom, l'allusion à une figure « héroïque » de l'histoire des *collas*, figure qui excède le territoire de Jujuy, pour interpeller les communautés *collas* de deux côtés de la frontière avec la Bolivie. Ainsi dans les symboles qui représentent l'organisation, une mémoire de luttes est récupérée où l'élément indigène occupe une place très importante. Descendant du dernier Inca décapité par les espagnols à la Place de Cuzco au Pérou, José Gabriel Túpac Amaru[13] est né à Tinta, le 19 Mars 1738. Il dirige en 1780 la révolte indienne la plus importante de l'histoire des indiens contre les vice-rois espagnols, afin de libérer les indiens du travail obligatoire dans les mines (système appelé « Mita ») et des abus des *Corregidores*. Il est tout de suite jugé et condamné à mourir écartelé par quatre chevaux attachés à ses quatre membres, mais ne pouvant pas le tuer de cette manière, il finit par être décapité. Loin d'arrêter la rébellion, cet évènement a une forte répercussion parmi les peuples révoltés. La rébellion s'étend vers la région de la *Puna* bolivienne et le nord-ouest argentin (notamment, à la province de Jujuy). Les espagnols ne réussissent pas à l'étouffer. La renommée de Túpac Amaru se fait telle que les rébellions créoles qui suivront vont invoquer souvent son nom.

On pourrait penser que la revendication identitaire de cet élément indien répond en quelque sorte à l'origine sociale de la population à Jujuy[14]. Nous avons dit que cette

[12] Comme nous le verrons plus tard, l'organisation Tupac Amaru a développé une fonction de « contention » sociale au travers une série de services destinés à couvrir les besoins insatisfaits de ses affiliés : sécurité, logement, travail, loisir, etc.

[13] Éduqué par les Jésuites, il hérite des terres et des possessions de sa famille.

[14] Selon l'*Enquête complémentaire de peuples indigènes* (ECPI) 2004 – 2005, basée sur les données du *Recensement national de la population* de 2001 de l'INDEC, la population totale d'indigènes est d'un peu plus

population est nombreuse surtout à la région de la *Puna jujeña*. Cependant le lien de la population d'origine indienne argentine avec l'identification indienne est au moins problématique. Considérée très souvent comme un stigmate (à force d'être une population systématiquement confinée aux marges économiques et politiques de la société *jujeña*), l'origine indienne de la population a été parfois refusée comme identification jusqu'aux premières contestations ayant eu lieu en démocratie dans un contexte de prolifération des revendications en termes de droit dans la région. L'organisation Tupac Amaru affirme ainsi son discours sur la condition indienne *colla,* identité qui est présentée comme celle des exclus, qui est ainsi récupérée dans le but de rendre les actions légitimes.

Nous pouvons conclure que l'un des éléments permettant de comprendre la réussite de cette organisation au niveau local, est précisément la composante indienne. Si l'on compare l'organisation Tupac Amaru avec la CCC, on peut noter que cette dernière développe un discours marxiste de classe qui se révèle incapable d'interpeller les hommes et les femmes *jujeños*, d'une société majoritairement agraire et d'origine indienne. Finalement, le contexte d'ouverture des opportunités politiques par les mouvements identitaires indiens, à l'ombre des processus politiques récents en Bolivie, entraîne des conséquences positives pour ces discours en Argentine.

II.I Entre la contestation sociale et l'action syndicale

Crée au sein du syndicat CTA (syndicat constitué par un secteur du péronisme critique du ménemisme), l'organisation Tupac Amaru se définit comme « organisation de *quartier* », ayant pour but de répondre aux besoins d'une partie de la population la plus démunie, spécialement des chômeurs[15], ainsi qu'aux nécessités de nutrition et d'éducation des enfants, de formation des jeunes, de santé, de travail. Dans ce sens, elle continue une tradition de *providence* très caractéristique du péronisme de Perón et Evita, qui s'est construite sur une politique de redistribution de revenus par l'État et de sécurité sociale, qui avait permises à la population argentine, et spécialement aux classes populaires (majoritairement issues de la migration interne), l'accès à la « citoyenneté sociale » (Romero et Gutiérrez, 2007).

Les réformes économiques et politiques des années 1990, menées par l'ex président Carlos Menem, ont eu des conséquences irréversibles sur la société en général, et tout particulièrement sur la province *jujeña* peu favorisée, mettant un terme au modèle social ayant existé depuis les années de Perón, à savoir celui d'une société intégrée16. Aux

---

de 600 000 habitants. Ceci correspond à un 1,5% de la population totale. Mais à la province de Jujuy, ce pourcentage augmente considérablement. Le critère utilisé pour déterminer l'origine indienne a été l'auto-reconnaissance ou auto- identification des personnes recensées comme appartenant ou descendant de première génération d'un peuple indigène.

Et selon les résultats d'un recensement pilote effectué par l'*Université Tres de Febrero* avec de financement de la BM et l'aide de l'INDEC, un 5% de la population argentine reconnaît au moins un ancêtre d'origine africaine.

[15] « Organisation *barrial* (de quartier) Tupac Amaru » est une dénomination indigène utilisée de manière systématique dans sa présentation publique. Cf. http://www.tupacamaru.org.ar.

[16] Pour une analyse sociologique de cette transformation de la société « intégrée » des années 1940 et 1950 vers une société des identités fragmentées, voir Svampa, Maristella (2000) (ed.), *Desde abajo. Las transformaciones de las identidades sociales***,** Buenos Aires, Biblos, spécialement les articles de Denis Merklen et de Gabriel Kessler.

transformations économiques et sociales induites par les politiques de privatisation d'entreprises publiques se sont ajoutées celles induites par les politiques de décentralisation : si les gouvernements provinciaux et municipaux ont vu élargis leurs domaines d'action, la mise en œuvre de la décentralisation n'a pas été pour autant accompagnée du budget nécessaire pour mener à bien cette réforme, entraînant ainsi de vives tensions entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux qui devaient répondre à la situation sociale existante. Une des tensions entre le gouvernement national et celui de la province de Jujuy concernait entre autres le paiement des salaires des fonctionnaires. Ainsi, en 1997, un groupe d'employés du gouvernement de Jujuy syndicalisés, et dont une part importante étaient adhérents à la CTA, revendiquent le paiement immédiat des salaires retardés : pour ce faire, ils organisent diverses actions collectives dont des occupations de rues, de ponts, de parcs, mais aussi de bâtiments publics administratifs (la Mairie, par exemple), empêchant la circulation routière au niveau de la province et national, et ce, afin de se faire entendre par les autorités. Les revendications portées par ces mobilisations contiennent, en exigeant plus largement l'obtention de subventions et d'allocations, afin de pouvoir faire face à la précarisation économique portée par les réformes, l'idée de remise en cause de la légitimité des mesures d'ajustement du gouvernement national de Carlos Menem[17]. Bien que ce sont précisément les syndicats des employés de l'administration publique (que ce soit du secteur de la santé, de l'éducation ou du personnel de la municipalité) qui ont été les premiers acteurs sociaux à contester publiquement la logique de précarisation portée par les réformes économiques de Carlos Menem, et qui, par un effet de boule de neige, n'ont pas tardé à propager et à faire croître la contestation des effets négatifs des politiques appliquées dans d'autres secteurs professionnels y compris les chômeurs plus ou moins agrégés[18]. Ainsi, plusieurs milliers de chômeurs rejoignent les mobilisations encadrées par les syndicats, protestant pour des sources d'emploi et des « conditions de vie dignes », avec une forte défiance à l'encontre des autorités publiques. Suite à cette visibilité nouvelle dans l'espace public, la presse les appelle *piqueteros*.

Ces conflits entre syndicats et organisations *piqueteras*, et gouvernement, ont eu aussi des effets politiques considérables sur les mandats électoraux et la représentation politique dans son ensemble. La démission de cinq gouverneurs[19] en sept années (alors que la durée

[17] Le président avait annoncé une série de réformes qui n'ont pas été contestées politiquement dans l'espace public dans un premier temps. Ce n'est que quelques années après qu'un ensemble de voix issues du champ politique ou de la société civile s'élevèrent contre leurs mises œuvres. Parmi ces réformes, figurait entre autres la privatisation des entreprises de services publics, et d'entreprises comme YPF, l'entreprise nationale de pétrole privatisée en 1991 et 1992. En conséquence, de nombreux travailleurs sont licenciés et s'organisent collectivement (à Salta, province voisine, et à Neuquén, lieux d'installation des usines) pour récupérer leurs emplois, puis ensuite, pour l'obtention d'allocations qu'ils réclament au gouvernement national. A Jujuy, des actions collectives menées par des employés du secteur public incluent dans leurs revendications celles issues des pétitions des mouvements sociaux de Salta, tandis que dans le reste du pays, de manière concomitante, se développent à grande vitesse les mobilisations collectives caractérisant ce que nous pouvons appeler un « cycle de protestation ».

[18] Rappelons que de la population des chômeurs, ne se définissant pas par un statut juridique mais par le fait de ne pas avoir du travail, une partie minoritaire étaient cependant organisés par les syndicats (la CTA par exemple) ou par certains partis politiques de gauche (comme le PCR, au travers l'organisation CCC ou le PO - *Polo Obrero*). Certains groupes des chômeurs (notamment à la ville de La Quiaca et puis à Abra Pampa, au nord de Jujuy) étaient organisés par un curé de l'Église catholique de Jujuy, le père Olmedo. A Jujuy, il n'y a pas eu des MTD (*mouvements de travailleurs au chômage)* comme à la province de Buenos Aires, plus indépendants en général des partis politiques et des syndicats.

[19] Un cas exemplaire est l'ex-gouverneur De Aparici, soupçonné de corruption, et qui a abandonné ses

du mandat est de quatre ans), illustre parfaitement le contexte d'instabilité politique qui a caractérisé la province durant cette période de fortes mobilisations. Ainsi, les politiques de décentralisation, en transférant vers les gouvernements provinciaux et municipaux de nouvelles prérogatives et responsabilités, ont accru les inégalités de ressources préexistantes entre les différentes provinces, et par là même rendu extrêmement difficile voire impossible l'exercice des fonctions de représentants locaux dans les provinces les plus faiblement dotées et devant précisément faire face à la contestation sociale et aux diverses demandes des syndicats et des organisations *piqueteras.*

Dans ce contexte de conflits, encadrée par la CTA, l'organisation Tupac Amaru développe progressivement des projets liés à la gestion et distribution des allocations du gouvernement national appelées *Plan Trabajar* (à défaut d'un revenu universel pour les personnes en situation de chômage) ainsi que des *bolsones* de nourriture (les ainsi appelés sacs de nourriture), en continuité avec la politique de distribution de lait chez les enfants, les jeunes et leurs familles dans les quartiers de la banlieue de Jujuy (premières activités développées). Les *Copas de leche,* subventions ayant pour finalité la distribution de lait auprès des populations de jeunes et d'enfants démunis, sont l'illustration parfaite de ce type d'allocations à dimension humanitaire. Bien que les organisations *piqueteras* à Jujuy, la CTA y compris, aient déjà touché d'autres allocations, comme le *Plan Trabajar*, ou le *Plan PEL* (programme de travail communautaire)*,* ce programme *Copas de* Leche concernant des personnes en situation de nécessité sans qu'aucune autre condition soit requise, permet à l'organisation Tupac Amaru à la fois de subsumer et de généraliser ses revendications initiales et fondatrices, et surtout, de pouvoir s'adresser potentiellement à une frange nettement plus large des couches populaires, ayant pour corollaire un accroissement exponentiel de la base des affiliés en quelques années.

Il est nécessaire de remarquer que Tupac Amaru, comme la CTA, ne relève pas d'une définition sociale et juridique classique d'une organisation politique, et que précisément celle-ci constitue l'un des enjeux dans le rapport que l'organisation entretient avec les autorités politiques (la CTA qui l'accueille pendant cette première période, n'étant reconnue que de fait comme un syndicat, à la fois par ses affiliés et dans les délibérations et négociations avec les autorités, ne jouit pas d'un statut juridique de syndicat, tel que l'est par exemple la CGT (*Central General de los Trabajadores*), seule centrale syndicale officiellement reconnue). Ce statut juridique ambigu de Tupac Amaru est étroitement lié au fait qu'il s'agit d'une organisation crée aussi -comme d'autres organisations du mouvement *piquetero*- grâce à son rôle de redistribution des ressources financières (aides et allocations) liées aux programmes de subvention accordés avec le gouvernement national.

Cela dit, dans une étape dans laquelle l'organisation Tupac Amaru mène ses actions au sein de la CTA[20], l'obtention des aides et subventions résulte, dans un premier temps, exclusivement de la négociation entre la CTA de Jujuy et les gouvernements provinciaux et

fonctions politiques se déclarant incompétent pour trouver des solutions aux conflits.

[20] Sa dirigeante, Milagro Sala, se présente dans les entretiens que j'ai faits avec elle en 2001 comme « syndicaliste » et comme « sous-secrétaire de la CTA » (poste pour lequel elle est désignée par le secrétaire général de la CTA de Jujuy, Fernando Acosta). Par exemple, quand elle fait référence aux actions collectives auxquelles elle a participé en 1997 et 2000, elle s'exprime au nom de tous les employés de l'État syndiqués à la CTA. Rappelons que la CTA émerge dans le cadre de deux processus : le changement du rôle de l'État (la décentralisation), et la crise du syndicalisme au sein des groupes ouvriers et apparentés se traduisant par une décrue vertigineuse des effectifs de syndiqués (et aussi rapide que la vitesse à laquelle les syndicats avaient autrefois intégré les travailleurs), et *ipso facto*, un affaiblissement considérable de son statut de représentant légitime de la classe ouvrière.

le gouvernement national. Tupac Amaru bénéficie dans cette période de l'expertise mobilisée[21] par la CTA qui alimente sans cesse l'expérience des leaders et membres de l'organisation, tant du point de vue de la logistique des actions collectives[22] que de l'action sociale sur le territoire. L'organisation acquiert ainsi au fil des années une expérience et un savoir-faire facilitant son élargissement, le développement d'une structure et une division du travail interne et son adaptation à des nouveaux programmes du gouvernement.
Pour donner un exemple, parmi les affiliés ayant fait partie de la CTA qui contribuent au développement de Tupac Amaru, on trouve notamment la personne qui était chargée de presse et de communication de la CTA de Jujuy, à savoir un journaliste de *La Gaceta* et de *La Nación* lié au Mouvement Humaniste de Silo[23], Raúl Noro[24]. L'arrivée de Noro dans l'organisation Tupac Amaru a été un événement décisif pour le devenir de celle-ci, présence qui sera par la suite renforcée par son mariage avec la leader de l'organisation, Milagro Sala. L'action de Noro comme secrétaire de Communication et Presse de l'organisation Tupac Amaru s'est traduite rapidement par une politique de communication interne et externe continue et efficace, du fait notamment de sa position dans le champ de la presse et surtout de sa connaissance professionnelle des mécanismes qui régissent la diffusion de l'information. Un ensemble diversifié de dispositifs de communication

[21] Cette expertise est liée à l'existence d'un corpus savant de professionnels, sociologues, économistes, historiens, ainsi que des journalistes qui constituent des équipes de travail et de recherche sur différents sujets dans la CTA. Ils développent toute une stratégie de concientisation et de publicité de leurs activités et pensée via des ateliers de formation ouverts à la société ou bien des articles dans la presse.

[22] Certaines des pratiques de l'organisation, par exemple la décision de se mobiliser afin de faire un barrage de route, sont relativement homologues aux pratiques instituées au sein de la CTA pour ce même type d'actions collectives. Ainsi, la décision quant à la nature de la mobilisation est systématiquement prise par une assemblée de délégués (nous verrons ultérieurement que ces assemblées sont loin de fonctionner selon les principes démocratiques qui sont annoncés par leurs participants). De l'assemblée résulte la division du travail suivante pour l'organisation d'un barrage de routes : les femmes se chargeront habituellement des repas, tandis que les hommes s'occupent de « l'autodéfense » (du service d'ordre) -sécurité interne-, et enfin les jeunes configurent des « groupes de choc » portant des tambours pour annoncer leurs revendications et affirmer leur présence. De même, les manifestants utilisent des *pecheras,* une espèce de chasuble qui les identifie et qui était précisément l'une des marques de reconnaissance des actions collectives de la CTA.

[23] Ce mouvement fut crée par Mario Luis Rodríguez Cobos (alias Silo), née à la province argentine de Mendoza, qui ayant fait des études de science politique et droit, développe une trajectoire en tant que guide spirituel et écrivain de sa propre philosophie, diffusée à partir de livres de philosophie, spiritualisme, psychologie, politique et société. Dans le contexte de la crise sociale et politique mondiale des années 1960, Silo lance le 4 mai 1969 à Punta de Vacas (Mendoza) face à 200 personnes ce mouvement social, politique et culturel connu par ses détracteur comme « la secte de Silo » mais suivi par des milliers de personnes dans le monde. A l'occasion il annonce l'objectif du Mouvement sous le slogan « Humaniser la terre »: se libérer de la douleur et de la souffrance de l'être humain. A partir d'un diagnostique de la violence de la gouvernance de l'économie sur la politique, il se propose d'initier une révolution pacifique pour transformer les conditions sociales d'injustice à partir surtout de la réflexion interne et personnelle. Pour cela, ils ont plus d'une trentaine de *Parcs de la Réflexion* dans plusieurs pays. L'un des livres exemplaires de ce mouvement est *Regards intérieurs*. Silo est mort cette année et Raúl Noro lui rend hommage dans un article publié en facebook: «La dimensión espiritual de Silo, el infatigable constructor argentino de la paz » (« La dimension spirituelle de Silo, l'infatigable constructeur argentin de la paix »), en http://es-la.facebook.com/notes/raul-noro/la-dimension-espiritual-de-silo-el-infatigable-constructor-argentino-de-la-paz/136310599747984. http://latercera.com/noticia/portada/2010/09/653-292627-9-fallece-silo-impulsor-del-movimiento-humanista-en-argentina.shtml et http://www.mouvementhumaniste.fr/ (page du courant humaniste français).

[24] R. Noro est né à Jujuy en avril 1943. Fils d'un pharmaceutique italien, il fait des études de droit à Tucumán qu'il ne finit pas, retournant à Jujuy où il démarre une carrière comme journaliste d'abord du Pouvoir judiciaire de Jujuy, puis comme correcteur éditorial et correspondant du journal *La Gaceta* de Tucumán, ainsi que du journal national de droite *La Nación*.

intégrant les différents supports technologiques existants afin de faciliter leur accessibilité et leur diffusion sont mis en place et systématiquement actualisés : il s'agit, par exemple, d'un site d'Internet de l'organisation[25], des pages personnelles (blog et facebook), de séries de dvd, des affiches et des dépliants où sont présentés leur histoire et racontés en détail les activités et travaux réalisés. En outre, c'est par le biais de Noro que l'organisation Tupac Amaru arrive à articuler des actions avec le mouvement humaniste (l'organisation Tupac Amaru a appuyé pare exemple la « *Marcha* Mondiale pour la Paix » et le mouvement humaniste ainsi que le Parti humaniste ont appuyé les causes de l'organisation à plusieurs reprises).
Si l'organisation Tupac Amaru se nourrit des apports de la CTA, le syndicat apprend aussi de l'expérience de Tupac Amaru. La réalisation de congrès nationaux de la CTA favorisent les liens entre des militants du syndicat et l'organisation Tupac Amaru. C'est le cas du secrétaire adjoint de la CTA de Capital Fédéral qui commence à nouer des liens avec Tupac Amaru à partir d'un congrès national de la CTA où il connaît les détails de l'expérience à Jujuy. Une des stratégies de l'organisation pour répandre ses bases à d'autres provinces et multiplier le travail dans les quartiers a été celle d'inviter des représentants de régions différentes afin de leur faire visiter les installations et le fruit du travail collectif. Tupac Amaru s'organise suivant le modèle de la CTA en commissions de travail selon des thématiques : les droits de l'homme, l'éducation, la culture, les peuples « originaires », l'Amérique latine, la santé, etcétéra.
En conclusion, la première étape de développement de l'organisation Tupac Amaru, de 1999 jusqu'au gouvernement de Duhalde (2002) met en exergue la naissance d'une organisation qui a su sous l'égide d'un syndicat, acquérir un capital d'expérience militante et d'autorité politique, et ainsi cristalliser un ensemble de « mouvements sociaux » gérant efficacement un problème social jusqu'à être en capacité de recruter de manière de plus en plus large dans le couches populaires.

II.II Protestation sociale, négociation et prestation de services

Si les premières années de Tupac Amaru se caractérisent par une action dans le cadre de la structure syndicale de la CTA, à partir de 2002 et surtout de 2003, l'organisation développe une structure propre dans un processus d'institutionnalisation. D'une part, Tupac Amaru obtient une visibilité croissante dans l'espace public (elle continue à participer tant qu'organisation Tupac Amaru- CTA à de nombreuses actions collectives). D'autre part, elle connaît pendant cette période une augmentation importante du nombre de ses membres adhérents et une multiplication des projets accomplis et des services offerts. L'affluence de nouveaux membres s'explique notamment par le fait que depuis mai 2002 un nouveau programme d'allocations fut mise en œuvre pendant le gouvernement de Eduardo Duhalde.
En effet, après les événements critiques de décembre 2001, dont la démission du président De la Rua (qui avait été élu pour l'*Alianza,* alliance entre un secteur du péronisme et l'UCR, *Unión Cívica Radical*), Eduardo Duhalde élu président provisoire avec le mandat de faire appel aux élections l'année suivante, prend une série de décisions afin de contrôler la contestation sociale. Ainsi il met en place un nouveau programme d'allocations destiné à remplacer le programme *Trabajar :* le *Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados.* Ce

[25] Sur leur site, l'organisation privilégie les images et la voix de certains affiliés considérés comme des témoins ainsi que des textes décrivant les actions développées ou les projets à venir.

programme qui, comme son nom l'indique, est 'un programme d'allocations adressé aux chefs de foyer, femmes et hommes, en situation de chômage[26] consiste à une aide personnelle attribuée selon des critères prédéfinis; à savoir: il faut être chômeur, âgé de plus de 18 ans et avoir des enfants en charge. Ainsi Duhalde répond aux revendications renouvelées des secteurs les plus démunis. Cependant cette aide n'a pas été distribuée de droit à tous les chômeurs; les seuls bénéficiaires étaient deux millions de chômeurs au niveau national. Comme conséquence de la pression effectuée par les organisations *piqueteras* sur le gouvernement national, elles réussissent à gérer elles-mêmes la redistribution des aides de l'État, qui étaient jusqu'à là gérées seulement par les municipalités, comme c'était le cas des programmes *Trabajar*. A partir du gouvernement de Duhalde, les allocations et subsides du gouvernement national seront aussi administrés par les organisations *piqueteras* comme l'organisation Tupac Amaru (et d'autres organisations, confessionnelles comme *Caritas*, par exemple, ou bien des ONG), qui commencent à regrouper des personnes étant en condition de percevoir ces aides. L'organisation devient ainsi une porte-parole des chômeurs et d'autres catégories démunies et en situation précaire, regroupant de plus en plus des individus au chômage, motivés par la contention qu'elle propose, tant « affective » que matérielle. Parfois, la seule promesse de s'inscrire dans une liste pour percevoir ces aides plus tard fonctionne comme mécanisme favorisant l'affluence des nouveaux membres, qu'encouragés par leur milieux familiaux, ou grâce aux réseaux tissés dans les quartiers, se rapprochent de l'organisation.
De cette manière, le gouvernement de Duhalde est à la charnière entre une étape de contestation accrue et une étape de stabilisation des conflits qui débute en 2003 avec le gouvernement de Kirchner.
A partir du gouvernement de Néstor Kirchner, l'organisation Tupac Amaru devient plus autonome par rapport au syndicat CTA. Ce gouvernement ouvre une nouvelle phase dans l'évolution des organisations *piqueteras* produisant une fragmentation des mouvements et des organisations sociales entre les partisans et les critiques du kirchnerisme[27]. L'organisation Tupac Amaru se positionne stratégiquement à faveur du nouveau gouvernement qui défend un modèle de syndicalisme pourtant critiqué par la CTA et la propre organisation Tupac Amaru quelques années avant.
En effet, si 2003 est l'année de la stabilisation de la démocratie après la crise de 2001, avec le triomphe de Néstor Kirchner dans les élections présidentielles (rappelons que sa candidature avait été appuyée fortement par l'ex président Eduardo Duhalde), ce n'est pas pour autant l'année de la disparition de la protestation sociale, mais de sa division. Les actions collectives se poursuivent, quoique plus limitées aux secteurs opposés au gouvernement de Kirchner. Contrairement aux gouvernements précédents, le gouvernement de Kirchner accepte de dialoguer avec les porte-paroles des organisations *piqueteras*. Ainsi le président lui même reçoit à plusieurs reprises des dirigeants reconnus comme Luis D'Elía de la FTV-CTA et Milagro Sala de l'organisation Tupac Amaru. Cependant si le gouvernement se montre disponible et plus ouvert au dialogue avec les *piqueteros* que les gouvernements précédents, il leur réserve un traitement différentié, selon l'organisation de laquelle il s'agit. Certaines organisations, comme l'organisation

[26] Le programme prévoyait une allocation individuelle mensuelle de 150 pesos argentins (environ 44 euros en avril 2004, équivalent actuellement à 27 euros).
[27] *Kirchnerisme* c'est le nom courant qui reçoit le mouvement péroniste qui reconnaît à Néstor Kirchner comme leader.

Tupac Amaru, vont jouir d'un traitement particulier très bénéfique[28], tandis que d'autres organisations comme la CCC n'auront pas les mêmes possibilités de dialogue et de négociation avec le gouvernement. Pour ces dernières, les occasions pour des négociations sont rares et la relation avec le gouvernement est plutôt tendue. Certains mouvements, comme la *Coordinadora de MTD Aníbal Verón* accusent le gouvernement de Kirchner d'avoir un traitement arbitraire et de ne pas reconnaître les organisations et mouvements minoritaires.
Dans ce contexte, l'organisation Tupac Amaru qui avait jusqu'à là cherché à construire un réseau dans les limites de la province, élargit sur le territoire national son domaine d'action, à la fois sur le plan territorial que sur le plan des questions traitées. En effet, si à l'intérieur de la CTA l'action territoriale de l'organisation Tupac Amaru se concentrait sur la question de l'alimentation des enfants et des jeunes avec le programme *Copa de Leche* et les allocations de Duhalde, en 2003, sous le gouvernement de Kirchner, l'organisation élargit ses sphères d'action.

Kirchner, le Plan Logement et l'organisation Tupac Amaru

Parmi toutes les allocations et subsides octroyés à l'organisation Tupac Amaru par le gouvernement de Kirchner, c'est le financement pour le logement qui permet de mieux visualiser la rapide évolution de l'organisation dans cette phase, ses relations avec les gouvernements et l'accroissement de son autorité locale. Le programme fonctionne par l'action coordonnée de plusieurs organismes intervenant à des échelles différentes. D'une part, à l'échelle nationale, il s'agit d'une stratégie concertée entre le Ministère de Planification Fédéral, Investissement Publique et Services, à travers le Service de Développement Urbain et de Logement, le Ministère de Développement Social, à travers l'Institut National d'associationnisme et Économie Sociale (INAES) et le Registre National des Effecteurs de Développement Local et d'Économie Sociale, le Ministère du Travail, Emploi et Sécurité Sociale, à travers de l'ANSES et d'autres services spécifiques et finalement le Ministère de l'Économie, à travers de l'AFIP. D'autre part, à l'échelle provinciale et municipale, les institutions concernées sont l'Institut Provincial du Logement (IPV), en charge de l'exécution du programme et les gouvernements locaux qui sont les responsables de l'exécution des projets du programme.
Originellement le *Plan d'Urgence de Logement (Logements par Coopératives)*, lancé le 18 septembre 2003 par le gouvernement fédéral[29] de Néstor Kirchner et financé avec $120 millions de pesos, vise à apporter de solutions à l'émergence de logement et de travail. Les destinataires de ce plan sont les personnes en situation de NBI (besoins de base insatisfaits), ceux qui n'ont pas de logement propre, et surtout des chômeurs bénéficiaires du Programme *Jefas y Jefes de Hogar Desocupados* crée par Duhalde. Le plan s'articule autour de cinq priorités[30] : « Contribuer au développement et à l'amélioration des

[28] Nous n'avons pas trouvé des chiffres sur le financement exacte de cette organisation, mais certaines informations diffusées dans la presse nationale et qui ont été confirmées par la porte-parole de l'organisation, signalent un montant de 8 millions de pesos (1 euro = 5 pesos environ) que l'organisation recevrait par mois du gouvernement national.
[29] Voir le site du Bureau des Travaux Publiques, du Ministère des Travaux Publics et de Planification. www.vivienda.gov.ar/emergencia. Pour une analyse de ce plan, voir l'article de Denis Merklen en Quattrochi-Woisson (2007).
[30] Selon l'information précisée sur le site du Ministère.

conditions d'habitat, de logement et d'infrastructure de base des foyers de revenus sous le seuil d'indigence et des groupes vulnérables en situation d'urgence ou de marginalité ; générer l'inclusion sociale des chômeurs et des bénéficiaires du Programme *Jefes y Jefas de Hogar* et de la population en émergence de logement et de travail, par la formation de coopératives de travail ; concrétiser de projets soutenables par la construction de nouveaux logements avec leur correspondante infrastructure de base ; mettre en œuvre une sortie par l'emploi grâce à ce programme et mobiliser les marchés locaux de matériaux, tant au niveau de la commercialisation que de la production. »

Dans les listes des adjudicataires la priorité est accordée à ceux qui font partie de coopératives de travail, raison pour laquelle les organisations de chômeurs déjà existantes, comme la Tupac Amaru, réussissent à négocier les subsides et pour cela, constituent juridiquement des coopératives de travail, ce qui a changé leur organisation bureaucratique interne[31]. Ces listes sont transmises par la Mairie aux services sociaux de l'IPV (Institut Provincial du Logement). Les membres de chaque coopérative ont la priorité à l'heure de constituer les listes afin d'accéder à ce bénéfice. Les coopératives de travail sont constituées par 16 membres, chômeurs et bénéficiaires du Programme *Jefes y Jefas de Hogar* : 8 titulaires du subside au chômage Programme *Jefes y Jefas de Hogar* et 8 chômeurs qui n'ont pas touché le subside. Les logements ne peuvent pas être attribués au préalable par les coopérativistes. Chaque coopérative recevait, avec le premier contrat, un subside non réintégrable de $6000 pour l'acquisition d'équipes, outils, vêtements de travail et registres comptables. Ces subsides sont non imposables. Par ailleurs, dans la mesure où les « coopérativistes » doivent être chefs de familles nombreuses, ne pas posséder d'autres propriétés, avoir de faibles revenus et d'autres variables définies par les services sociaux provinciaux correspondants, le profil des bénéficiaires est très ciblé. Cela dit, le choix du bénéficiaire reste la responsabilité de l'organisation, ce qui accroît considérablement leur pouvoir[32]. Les familles sélectionnées par les mairies peuvent intervenir seulement dans le cas où les coopératives ne remplissent pas leur quota. L'organisation travaille avec des personnes diplômées (des ingénieurs, des médecins) qui prêtent un service à l'organisation, mais ils ne sont pas payés selon des honoraires liés au marché. Souvent il s'agit du travail gratuit, sans lequel on ne pourrait pas comprendre le travail de l'organisation. Des 70000 affiliés, un total de 4600 personnes travaillent dans les usines et les projets des coopératives de l'organisation ayant des salaires à partir de 800 pesos argentins (autour de 160 euros par mois).

Dans un premier temps, Tupac Amaru aboutit à la constitution de 100 coopératives de travail, ayant par but la construction de logements pour les membres de l'organisation, dans toute la province, de la Vallée de San Francisco jusqu'à la Quebrada (ravin) de Humahuaca. Les maisons sont construites par les propres travailleurs au chômage faisant

[31] Ce programme présent à la fois de sous-programmes par coopératives, axés sur l'amélioration de l'habitat urbain, l'infrastructure et les travaux complémentaires, pour que ces coopératives ne pouvant pas temporairement poursuivre la construction de logements puissent répondre à la demande de travaux publics dans les quartiers (trottoirs, revêtement, cordon caniveau) ; des programmes fédéraux comme « *Mejor vivir* » pour l'amélioration de logements, adressés aux coopératives existantes provenant de la première étape de construction ; et des programmes pour la deuxième étape comme le CIC (Centres Intégrateurs Communautaires). Le propos de ce dernier est celui d'aider à la construction de quartiers avec un axe dans les problématiques sociales et sanitaires d'un regard intégral, avec la participation de plusieurs ministères au niveau national, provincial et local.

[32] C'est aussi le cas pour d'autres programmes de coopératives, notamment le *Plan Agua más Trabajo* (Plan Eau plus Travail), analysé dans Merklen, 2007, p. 10.

partie de l'organisation, et bénéficient à une partie des travailleurs, restant la propriété de l'organisation.
Les ressources que le gouvernement national proportionne actuellement à l'organisation (8200000 pesos par mois) sont destinées à la construction de 500 logements en 6 mois[33]. Autour de 6008/ 6200 maisons au total ont été construites, ayant chaque maison un coût final de 20 mille pesos. Depuis les premières négociations avec les fonctionnaires du gouvernement national pour l'obtention de crédit pour la construction de logements, l'organisation s'arrange pour diminuer le temps de construction des maisons et ainsi, économiser une partie des subsides octroyés par le gouvernement fédéral. En effet, l'organisation Tupac Amaru aboutit à la construction des maisons en trois étapes en moins du temps prévu par les autorités compétentes (six mois) et économisant en conséquence une partie des subsides étant par la suite réinvestis. Les maisons, limitées en nombre et insuffisantes pour couvrir les besoins de tous les affiliés, sont ainsi destinés à certains parmi eux, choisis selon un critère de justice défini par les leaders de l'organisation en fonction du taux de participation aux assemblées et aux activités proposées par Tupac Amaru. Une des normes que régulent l'acquisition pour ceux qui ont été choisis comme futurs habitants des maisons est un apport mensuel de 45 pesos argentins pendant 25 ans[34].
De cette manière, malgré le fait que la politique du programme prétend apporter une solution et au problème de logement et au problème du travail (le programme mobilise des ressources destinées à résoudre une situation d'urgence liée au chômage de masse, par la « mise en marche d'un processus productif ayant par but celui de l'intégration sociale et économique »), le plan ne constitue pas une politique publique adressée à tous les chômeurs, étant octroyé à certaines organisations, celles qui avaient acquis plus de capacité à négocier, se mobiliser et développer un savoir-faire afin de mener à terme le projet de construction des logements.

Le développement d'une économie sociale

S'agissant de financements par projet, une fois conclues les premières maisons dans les terres données à l'organisation au quartier Alto Comedero[35] par le gouvernement national,

[33] Cette information a circulé par différents organes de la presse, étant confirmée par la leader de l'organisation, Milagro Sala.
[34] Cette somme de 45 pesos par mois (équivalente actuellement à euros) permettrait aux habitants des maisons d'obtenir les titres de propriété de la maison à un coût de 67,5% du coût total de la maison (voir notamment les déclarations de Milagro Sala, leader de Tupac Amaru, dans l'entretien fait avec Hugo Krasnobroda du journal *El Tribuno* de Salta, retrouvable sur le site de l'organisation: http://www.tupacamaru.org.ar/nota.asp?wVarID=861).
[35] Ce quartier connaît depuis les années 1990 un développement vertigineux : entre le recensement de 1991 et celui de 2001 le quartier croît un 16,4% selon l'INDEC. Sa population de 47784 habitants selon le recensement de l'INDEC de 2001 a augmenté exponentiellement dans la dernière décennie. Actuellement, selon la mairie de San Salvador de Jujuy, la population est de 60000 habitants, pour l'IVUJ (Institut de Logement et Urbanisme de Jujuy), elle est de 70000 habitants, alors que selon les centres des habitants (« *centros vecinales* ») est de 80000 habitants. Selon des recherches récentes du secrétaire de planification de la mairie de Jujuy, le quartier atteint les 100000 habitants. En tout cas, Alto Comedero se nourrit de la migration provenant des quartiers du nord de la province, de la banlieue de Jujuy, ainsi que de la voisine ville de Salta, déplacés comme effet de la crise socio-économique des années 1990. Le quartier peut être divisé en deux, selon l'origine de sa population : entre des familles à faibles ressources provenant du nord de la province, souvent d'origine bolivienne, et les « jeunes générations de la capitale, qui ont débordé les logements existants et ont pu accéder grâce à leurs emplois publics à un logement, par le FONAVI ou bien

l'organisation se lance à la construction d'une série d'usines dont les bénéfices constituent la deuxième grande source de financement de l'organisation. A l'usine textile (la première à être mise en marche par l'organisation) autour de 600 affiliés fabriquent des milliers de caches-poussières pour les élèves des écoles primaires, secondaires, ainsi que pour les travailleurs des usines, selon la demande. Une majorité des femmes et quelques hommes (qui travaillent avec le cuir exigeant plus de force) ont été formés en couture par d'autres affiliés avec plus de savoir-faire. Outre des caches-poussières, ils confectionnent des t-shirts, des sous-vêtements, des tapis ainsi que des nappes pour couvrir les tables des restaurants par exemple. Un magasin ouvert en plein centre de la ville de San Salvador offre la variété de produits faits dans les usines installées dans le quartier Alto Comedero. Dans les usines les travailleurs embauchés par l'organisation Tupac Amaru n'ont pas de sécurité sociale ni font des apports. Les clients sont hétérogènes : tantôt le gouvernement national qui achète d'avantage à cette organisation la tenue pour les écoliers à partir de la signature des conventions, tantôt des entreprises privées, comme les hôtels installés dans la *Quebrada de Humahuaca*, une région très touristique de la province de Jujuy. Les ressources financières dérivées des ventes dans le marché des produits de l'usine, servent à l'achat des nouvelles machines.

Par ailleurs, Tupac Amaru a construit d'autres usines, selon les besoins internes de l'organisation, tout en considérant la demande du marché. Ainsi une usines de briques produit le nécessaire pour les murs des logements destinées aux affiliés, une usine métallurgique permet de fournir des portes et des fenêtres pour les logements (ainsi que des produits pour le marché externe), une usine de tuyaux construite avec de financement de l'organisation et du Ministère de Travail fournit de matériel pour des travaux publics de grand envergure. Finalement, une fabrique de meubles en fer répond à une demande de meubles à prix bas existante dans le marché *jujeño*.

A l'initiative du gouvernement national, l'organisation crée un CIC ou Centre Intégrateur Communautaire. Il s'agit d'un centre des services « offerts » aux membres affiliés de Tupac Amaru. Dans le cas du CIC le plus grand, construit en premier lieu dans le siège principal de l'organisation, le quartier Alto Comedero de Jujuy, les affiliés qui y accèdent sont à la fois des voisins habitant l'ensemble des maisons du quartier (remarquons que l'organisation a conservé le nom du quartier pour se référer au quartier qu'ils ont construit), à côté de l'espace attribué au CIC. Les services dont les membres peuvent profiter sans paiement *extra* concernent essentiellement la santé, l'emploi, le logement et le loisir. En effet, un centre de santé et de soins ainsi qu'une crèche fonctionnent jour et nuit pour offrir un dispositif d'attention médicale à des affiliés. Des professionnels de la médecine (une gynécologue, des ophtalmologues et des dentistes) contactés par le biais de la CTA, travaillent avec des horaires flexibles. Un laboratoire d'analyses médicales existe aussi à l'intérieur de ce centre de santé, pour répondre à la demande des membres de l'organisation, dans l'impossibilité de faire les analyses médicales nécessaires, étant donné le faible capital économique dont ils disposent. Entouré d'un espace vert de loisir clôturé avec des barbelés sur lesquels un paneau annonce « bienvenus au *cantri* des pauvres », le CIC est destiné aussi à combler les besoins de loisir avec un *polideportivo* (ensemble de

---

par un syndicat » (Bergesio et al., page 3). Bergesio, Liliana, Golovanevsky, Laura et María Elena Marcoleri : « Respuestas ocupacionales frente a la reestructuración: los casos de Alto Comedero y Palpalá (Jujuy-Argentina) », résultat d'une recherche, partie du projet « La situación social en el conurbano jujeño en los albores del siglo XXI. El caso de Alto Comedero y Palpalá », Universidad Nacional de Jujuy et Universidad Católica de Santiago del Estero.
http://www.icesi.edu.co/ret/documentos/Ponencias%20pdf/135.pdf

terrains de football, de basket, une piscine, des *quinchos* ou des toits faits en bois fournis avec des grandes tables et des barbecues pour permettre la réalisation des repas -d'*asados* pour les occasions de fête-, et un espace vert de parc pour les jeux des enfants). Un taxiphone (où fonctionne aussi la radio de l'organisation) et une église (dans des terres cédées par le président Kirchner à l'occasion de sa visite à la province le 26 octobre 2004[36]) complètent la description du quartier le plus important de Tupac Amaru.

Outre les services de loisir offerts par Tupac Amaru comme des cours de natation, de basket ou de football pour les enfants, l'organisation propose des activités culturelles diverses (comme des concerts de *cumbia*, un des styles de musique populaire très massif en Argentine, ou bien de folklore argentin). Il est intéressant de souligner en plus le fait que Tupac Amaru est devenue une source d'emploi pour une partie de ses membres (plus ou moins un membre de 14 travaille dans l'organisation), ce qui constitue aussi le troisième employeur de la province de Jujuy, après l'administration publique (qui concentre la majorité des emplois) et l'entreprise Ledesma (une des principales productrices de papier à base de l'exploitation de canne au sucre de l'Amérique du sud).

L'efficacité de Tupac Amaru pour construire du logement populaire avec le programme fédéral mentionné auparavant (c'est-à-dire la construction de plus de maisons en moins du temps de ce qui est normalement accordé par l'Institut Provincial du Logement) a encouragé les leaders de l'organisation à pétitionner au gouvernement national et provincial pour augmenter les sommes d'argent et les programmes à gérer, produisant une spirale vertueuse qui se trouve à l'origine de la multiplication de l'expérience organisationnelle dans différentes provinces du pays. Actuellement, l'organisation Tupac Amaru atteint un nombre de 70000 affiliés qui emploie 5 mil personnes dans ses usines coopératives qui a construit plus de 6000 logements populaires, 400 centres *Copa de leche,* deux écoles et un institut pour la formation des enseignants du primaire.

En conclusion, l'étape initiée en 2003 avec l'institutionnalisation de la contestation sociale et la configuration d'organisations comme Tupac Amaru qui s'affirment sur leurs fonctions de « prestataires des services » publics (éducation, emploi, sécurité) et privés (services commerciaux, vente de produits élaborés dans leurs usines aux entrepreneurs locaux). Pendant cette étape, l'organisation répand ses bases vers d'autres provinces argentines, essayant de reproduire l'expérience de Jujuy. Buenos Aires, Mendoza, Santiago del Estero, sont trois parmi d'autres 17 provinces ou l'organisation a développé actuellement des branches. Parallèlement, Tupac Amaru devient une base d'appui publique au gouvernement de Kirchner, et une ressource en termes de sa capacité de mobilisation des partisans du gouvernement. Cette phase implique aussi une indépendance de l'organisation vis-à-vis de la CTA qui se développera jusqu'à la rupture avec le syndicat, à l'occasion des élections internes de 2010 dans la CTA nationale.

L'organisation est connue publiquement au niveau national en août 2009[37]. En effet, un sénateur de l'UCR pour la province de Jujuy, Gerardo Morales accuse Milagro Sala de l'avoir agressé dans un *escrache* (manifestation consistant à rendre publique l'action d'un élu ou d'un personnage de l'élite étant suspectée de corruption ou d'attentat aux droits de l'homme). La leader de l'organisation dément l'accusation mais ne peut pas empêcher la prolifération des informations et d'analyses dans la presse prenant parti à faveur ou contre son organisation. Notamment, des débats se produisent autour de la légalité et la

[36] Voir *La Nación*, « En un avión de línea, Kirchner llegó a Jujuy para inaugurar viviendas », 26 octobre 2004.

[37] C'est en août 2009 que la presse nationale commence à parler de l'organisation Tupac Amaru alors que la presse locale de la province de Jujuy se fait écho pour la première fois de l'organisation et de sa leader dans un article paru en 2002.

légitimité des ressources provenant du gouvernement et redistribuées par l'organisation, ainsi que sur « les méthodes employées par l'organisation ». Milagro Sala commence alors une contre-campagne qui s'affirme sur les valeurs de transparence et d'efficacité.

III. La trajectoire d'une « entrepreneur de la médiation » : la porte-parole Milagro Sala[38]

Ayant défini socio-historiquement les contours d'une organisation à des fonctions sociales multiples, nous voudrions présenter ici une analyse de cas constituant un très bon exemple de la structuration de l'autorité des leaders de ce type d'organisation. Dans la partie qui suit nous allons montrer les fonctions jouées par les porte-paroles des organisations *piqueteras,* à partir de l'analyse de la trajectoire et les stratégies adoptées par Milagro Sala. Et ce, tant du point de vue de ses origines sociales et politiques comme de ses positions dans l'espace publique. Nous allons montrer ensuite les critères de sélection de ces leaders, l'acquisition d'un « capital d'expérience » et « d'autorité » ainsi que les différentes fonctions jouées au sein des organisations *piqueteras,* comme la Tupac Amaru.
Cette sociogenèse des porte-parole est fondamentale pour l'analyse et l'explication des conditions de possibilité des organisations *piqueteras.* En effet, la description des transformations socio-économiques ne suffit pas à cette analyse. Les facteurs explicatifs ne se réduisent pas au constat objectif des privations ou des inégalités économiques (conditions d'existence socioéconomique -absence de patrimoine, faibles salaires, etc....), ni des *besoins* des gens. Bien que ces facteurs –comme on l'a montré dans le premier chapitre- font partie des conditions de possibilité de la conformation des organisations *piqueteras*, nous allons montrer comment l'émergence de ces organisations est liée à un « travail de représentation » des entrepreneurs de la mobilisation sociale. Ce travail suppose la constitution des « cadres de l'action collective » ainsi que des revendications publiques (donc le développement des stratégies politiques en fonction de la conjoncture). L'analyse de la trajectoire des leaders nous permettra de montrer le processus d'acquisition de capital politique (ou d'autorité, fondé surtout dans l'expérience militante vécue) mais également de saisir les hétérogènes logiques d'action qui sous-tendent les organisations ainsi que les diverses fonctions jouées par les leaders, dont la gestion des ressources (non seulement des biens matériels mais symboliques).
Autrement dit, sans les transformations sociales et politiques profondes de la société argentine certes nous ne pouvons pas comprendre l'émergence des organisations *piqueteras*. Cependant on peut toujours trouver des possibles raisons pour la rébellion ou l'action de protestation sociale. En Argentine, une hyperinflation en 1989 laissant des conséquences économiques graves pour une bonne partie des classes populaires et moyennes, par exemple, mais qui n'a pas suscité l'organisation afin de défendre les intérêts de ces secteurs. Qu'est-ce qui explique alors que les actions collectives et l'émergence des organisations *piqueteras* aient eu lieu à certain moment et pas à un autre?

[38] Les travaux sociologiques sur les organisations *piqueteras* (définies parfois comme des mouvements sociaux des chômeurs), qu'il s'agisse d'étudier leur organisation interne ou leur dimension d'action publique collective, a négligé l'analyse des « entrepreneurs de la mobilisation » et de leur rôle. Le sujet des porte-parole de la mobilisation n'a pas été suffisamment étudié. Il semblerait donc que les organisations sont « spontanées », caractérisées par des logiques horizontales et « autonomes ». Nous allons montrer que, contrairement à cette idée, les organisations sont des groupes hétérogènes, traversés par des hiérarchies, où des biens matériels et symboliques sont en jeu, pouvant jouer des fonctions diverses selon ses caractéristiques et les contextes sociopolitiques de naissance et développement des organisations.

Vers la fin des années 1990, plusieurs processus confluent pour aboutir à favoriser l'organisation des *piqueteros*. A Jujuy, la présence d'un mouvement syndical hétérogène mais réunis sous le mot d'ordre des critiques des réformes de Menem a ouvert les opportunités politiques d'une série de protestations qui ont trouvé des appuis dans d'autres provinces argentines. Les leaders des organisations piqueteras *jujeñas* partagent une trajectoire politique récente liée aux conflits locaux variés que, depuis au moins le retour de la démocratie, caractérisent une province traversant une crise intra-élite du péronisme (l'un des éléments centraux pour une explication des conflits). Si bien ces leaders ont partagé des expériences de contestation, faisant partie des mêmes groupes politiques hétérogènes (par exemple, la « *multisectoriale* », où se retrouvaient des syndicalistes de différents partis politiques, des chômeurs et des travailleurs), ils montrent des trajectoires très diverses. D'une part, leur socialisation politique ne s'est pas produite dans les mêmes partis politiques et parfois elle renvoie à des mouvements religieux. Nous avons des leaders venant du péronisme (de différentes branches), du communiste révolutionnaire, du socialisme, du catholicisme de base, et même (dans le cas de la province de Buenos Aires) des leaders provenant des mouvements évangélistes.

Les motivations et les raisons d'agir sont différentes selon qu'on analyse le cas des leaders reconnus sur la scène nationale, principaux dirigeants des organisations, où les leaders « de quartier » beaucoup moins visibles, mais dont leur fonction est tout à fait centrale. Les motivations de ceux qui travaillent comme « dirigeants » sont en effet, très différentes de ceux qui appartiennent à des degrés divers des organisations, mais toujours en qualité des membres.

Certains auteurs ont insisté sur le caractère concurrentiel des organisations *piqueteras* par rapport aux *punteros* politiques (Svampa et Pereyra, 2003, parmi d'autres)[39]. En effet, ces auteurs soutiennent la thèse selon laquelle l'émergence des organisations *piqueteras* aurait une relation étroite avec le déclin des « réseaux clientélaires ». Plus précisément, les organisations *piqueteras* auraient émergé contre les dispositifs clientélaires existants dans le territoire. Or, les pratiques communément interprétées en termes de « réseaux clientélaires » non seulement existent toujours mais elles ont été renforcées sous le gouvernement de Kirchner, lors que des organisations de militants kirchneristes se sont constituées et mobilisé pour soutenir le gouvernement dans des événements massifs. Nous avons préféré donc de ne pas définir les pratiques caractérisant ces organisations *à priori* (et à l'aide d'un concept moralisant) comme « clientélaires » ou « non clientélaires ». Par ailleurs, lors qu'on analyse les pratiques au sein des organisations sans les distinguer idéologiquement au préalable, et l'on décrit sociologiquement les membres de ces organisations et leur rapport aux porte-paroles, on retrouve des fortes ressemblances avec le type de relation établie entre les *clientes* et les *punteros*. Ce constat nous a amené à essayer de tester une autre hypothèse, à savoir celle des organisations *piqueteras* comme expression des transformations sociales et politiques qui sous-tendent les pratiques. Ainsi les *piqueteras* seraient moins des nouveaux mouvements sociaux portant une nouvelle conception de la politique, alternative à l'existante, que des expressions réelles et concrètes d'un long processus de détérioration des conditions sociales et politiques des classes populaires en Argentine.

[39] Dans les entretiens et les discours tenus par ces leaders il était affirmé en effet, une « lutte génuine » pour les intérêts des chômeurs, lutte qui prétendait s'articuler contre les *punteros*, le clientélisme, etcétéra. Évidemment la présentation de soi ne peut qu'être positive. Ces acteurs, nés dans un contexte de crise sociale et économique avaient besoin des éléments rhétoriques pour justifier leurs demandes afin de les rendre plus légitimes vis-à-vis d'une classe moyenne historiquement très réactive aux classes populaires.

Nous avons essayé tout de même de nous distancer d'un regard moralisant sur cet ensemble de porte-paroles, qu'il soit positif ou négatif. Dans ce sens, nous avons analysé les pratiques des leaders sans pour autant les « évaluer » d'après une catégorie extrêmement moralisante, comme celle de « manipulation ».

La constitution de l'autorité du porte-parole piquetero

Nous allons donc analyser à présent le rôle du leader de l'organisation Tupac Amaru. Cette dimension est essentielle à la constitution des organisations piqueteras, raison pour laquelle il ne suffit pas de rendre compte des formes d'organisation mais il faut également décrire les processus par lesquels ces organisations se sont constituées, et tout particulièrement, celui de l'acquisition du capital politique par la dirigeante. Il s'agit donc d'élaborer un ensemble d'hypothèses sur la constitution du capital politique de Milagro Sala, en s'appuyant sur une analyse de sa trajectoire et ses stratégies politiques pour fonder son autorité politique. Étant dépourvue d'une légitimité de type statutaire, sa légitimité politique comme leader de l'organisation Tupac Amaru ne peut pas se concevoir que sur la base de l'expérience cumulée. De ce fait, si bien elle semble avoir développé une grande marge de main-œuvre sur l'organisation, elle est à la fois contrainte à une justification permanente du désintéressement et de sa cause défendue.
Les fonctions adoptées par Milagro Sala dans l'espace politique et social, comme celles d'autres leaders des organisations *piqueteras*, ne relèvent pas seulement de l'origine sociale, mais aussi de sa socialisation politique ainsi que des raisons individuelles, dimensions qui rentrent en relation avec un contexte institutionnel spécifique, tel qu'on l'a développé avant, celui d'une démocratie électorale caractérisée par des figures présidentielles fortes, un affaiblissement de la capacité des syndicats à représenter les travailleurs, parallèlement à une transformation profonde de la structure sociale argentine. Dans un moment spécifique de l'histoire (lors du conflit contre les réformes de Menem, par exemple), la naissance de Tupac Amaru et la position que sa leader adopte dans l'espace des interactions sociales et politiques de concurrence entre des organisations *piqueteras* ainsi que le degré d'institutionnalisation et de reconnaissance de l'intérêt que cette organisation met en forme, sont alors des éléments que, mis en relation avec sa trajectoire, nous permettent d'analyser la structuration de l'organisation et constater que ses caractéristiques se confirment dans la trajectoire de Milagro Sala. Ainsi, le type de relation que Milagro Sala entretient avec le gouvernement de Kirchner, le rôle joué pendant la décennie des gouvernements de Menem, ainsi que les relations d'autorité caractérisant l'organisation Tupac Amaru, doivent être comprises au croisement de ces éléments.
Le propos de cette analyse est de montrer les éléments permanents derrière l'apparence d'exception recouvrant l'histoire de cette leader et de son organisation, ainsi qu'apporter des éléments à l'élucidation des conditions qui ont rendu possible son autorité politique.
L'analyse de sa trajectoire montre bien un parcours assez typique d'une militante péroniste et de son acquisition de capital politique et de légitimité grâce à un ensemble d'éléments: une origine sociale de classes populaires, une appartenance à une communauté indienne exclue et méconnue social et politiquement pendant des siècles, un milieu culturel signé par un syncrétisme (entre un culte catholique et des croyances liées à la culture andine *colla)*, une scolarisation débouchant sur un poste dans l'administration publique de la province de Jujuy, une socialisation politique marquée par un militantisme dans le péronisme local, puis dans le syndicat d'employés de l'administration publique (comme

sous-secrétaire), puis dans la CTA, jusqu'à être désignée pour être en tête de l'organisation Tupac Amaru. Les relations inter-personnelles favorisées par l'appartenance de Milagro Sala à cette organisation syndicale, seront décisives pour la configuration de son capital politique.

Comme c'est le cas pour la majorité des leaders *piqueteros*, la carrière militante de Milagro Sala se caractérise par une socialisation politique très précoce liée aux réseaux partisans du péronisme, qu'elle rejoint à l'âge de 17 ans. Étant employée dans l'administration publique à San Salvador de Jujuy depuis les années 1980 (poste auquel elle accède grâce aux contacts noués dans le parti), elle s'implique fortement au sein d'ATE (Syndicat des employés de l'État) dans le contexte des actions collectives déclenchées par l'hyperinflation issue des mesures économiques prises en 1989 par l'ex président Raúl Alfonsín, et puis de la CTA, contre les réformes de l'ex président Carlos Menem. Ce sont toujours des contacts interpersonnels qui l'amènent à trouver des postes, étant décisif le lien noué avec Fernando Acosta[40], secrétaire de ATE-Jujuy, qui la désigne sous-secrétaire de la CTA locale.

Issue des classes populaires urbaines de la banlieue de San Salvador de Jujuy, elle achève sa scolarisation et obtient un diplôme en tant que professeur de danses folkloriques, mais son capital le plus décisif provient des expériences d'injustice vécues pendant sa jeunesse qu'elle traduira dans un langage péroniste de « justice social » dans le cadre de l'action syndical. En effet, son engagement syndical dans la CTA qui se reconnaît dans la critique du ménémisme et des conséquences de précarisation du monde social, résulte d'une série d'expériences de violence (l'abandon, car elle apprend à 14 ans qu'abandonnée par sa mère, elle a été adoptée, la prison qu'elle connaît très tôt, la pauvreté). L'identification avec les jeunes et les familles des classes populaires de Jujuy[41], ayant vécu des expériences similaires, la conduit à accepter la stratégie de la CTA de développer une conception élargie d'action syndicale déployée à travers des activités sociales dans les quartiers.

Ayant fait l'épreuve des expériences d'action collective menées en 1997 et 2000 (véritable déclencheur de son engagement) contre les réformes mises en œuvre par l'ex président Carlos Menem, elle s'est vue confier par Acosta des responsabilités grandissantes dont la gestion du programme *Copas de leche*[42] dans les quartiers. L'activité principale de ces programmes (financée par le gouvernement local et aussi par des collectes et la vente de produits fabriqués par les mères de famille) est la distribution de lait entre les enfants et

[40] Nando Acosta est fils d'un membre de la *guerrilla* argentine, tué pendant la dictature militaire (1976-1983).

[41] Des nombreuses observations dans notre enquête de terrain montrent la facilité avec laquelle la dirigeante s'adresse aux jeunes, ce qui lui permet de les guider mais aussi de les contrôler. En effet, elle s'adresse à eux avec le même langage, les mêmes mots et gestes. C'est paradoxalement ainsi qu'elle aboutit à se faire respecter parmi ces jeunes, surtout les hommes, de l'organisation (« tout le monde la respecte, ils ont peur d'elle, on a l'impression parfois que c'est un mec... », ce sont des commentaires faits par des individus qui la connaissent très bien, ayant partagé avec elle des mobilisations pendant plusieurs années, mais qui ne font pas partie de l'organisation). Un autre élément dans ce sens est la façon de s'habiller qui répond aux modèles masculins (les cheveux très courts, *jean* et *zapatillas*, des t-shirts grands, etc. Il faut noter que sa tenue vestimentaire change parfois à l'occasion de certains événements politiques, comme par exemple, l'élection d'Evo Morales en Bolivie, où Milagro Sala et une partie de son organisation et de la CTA sont allés. Dans ces situations, Milagro Sala se présente dans la tenue de la communauté *colla* pour revendiquer son appartenance à une communauté plus large et plus ancienne.

[42] Les *Copas de Leche* font allusion à l'heure du goûté (qu'en Argentine, s'appelle « l'heure du lait » pour les enfants). C'était le moment où les enfants prennent un verre de lait. Les enfants des familles très pauvres prennent normalement à l'école le verre de lait et aussi le repas. Des fois un seul repas par jour. Les écoles se sont transformées en des endroits où l'on mangeait davantage qu'apprenait. Milagro Sala arrive actuellement à gérer des centaines de *Copas de Leche,* à la province de Jujuy et aussi dans d'autres provinces.

les jeunes des familles pauvres de la banlieue de San Salvador de Jujuy, autour de laquelle se structurent d'autres activités liées aux cantines populaires, aux bibliothèques de quartier, etcétéra. Cette action lui permet de se doter d'un capital que l'on pourra appeler « capital d'autorité »[43]. Dès lors un processus de cumul de ce capital ne cessera de se produire. La charge de conduire l'organisation Tupac Amaru lui est ainsi suggéré en 1999 par Victor De Genaro, leader national de la CTA.

Les entretiens faits à un ensemble des leaders font apparaître le fait que les éléments permettant d'expliquer la prise de rôle politique des leaders sont liés et à des expériences de socialisation politique et au contexte de fragmentation et conflit à l'intérieur du péronisme caractérisant les années 1990.

Bien que le *Parti Justicialista* (PJ) et la CTA aient été les milieux de socialisation politique de Milagro Sala, sa fonction comme leader de l'organisation Tupac Amaru dépasse largement les frontières du parti et du syndicat. Il ne s'agit clairement pas de se mettre au service du PJ et d'un programme politique, mais avant tout, de devenir la porte-parole de sa communauté, des classes populaires, du « peuple », « des plus démunis »44, identifiés aussi dans cette province du nord de l'Argentine avec les *collas*. Le capital militant associatif qu'elle a cumulé se rajoute alors à une ressource particulière, celle d'appartenir à la communauté *colla,* ce qui est mobilisé par la leader aux effets de gagner la confiance de la population de ces quartiers. Ainsi la dirigeante de cette organisation réussit à se faire connaître et à cumuler un pouvoir d'organisation qui sera mis en question par des secteurs de la société *jujeña*, non seulement les classes moyennes qui voient en cette organisation (ce qui est extensible aux *piqueteros*) l'expression même des « classes dangereuses » (ce qui renvoie aussi à la mythologie argentine et à la figure du « *cabecita negra* » -tête noire-, c'est-à-dire celui qui vient occuper une place qui ne le correspond pas), mais aussi par des secteurs des intellectuels et de la presse qui représentent des préférences politiques opposées au péronisme et aux programmes populistes (incarnés par les positions des journalistes de *La Nación*).

Des liens avec le Mouvement Humaniste viennent renforcer l'appartenance de Milagro Sala à la communauté *colla,* à partir de son relation avec le journaliste de *La Gaceta*, Raúl Noro, qui sera déterminante dans la construction et évolution de l'organisation. Milagro connaît Raúl Noro en 1989 et de cette rencontre va naître une relation affective qui aboutira au mariage. C'est lui qui détient le plus de ressources universitaires et culturelles, devenant une véritable source intellectuelle pour Milagro, jouant à la fois un rôle paternel de contention, comme le souligne un de nos enquêtés: « Raúl est celui qui a la tête, il est beaucoup plus âgé qu'elle, elle est pure énergie, il l'a contient beaucoup »[45].

---

[43] En 2001, lors que je la rencontre pour la première fois, elle avait adopté quelques uns de ces enfants de la rue. Ces enfants sont devenus « les jeunes de la CTA », puis de l'organisation Tupac Amaru. Ayant participé aux activités de mobilisation et de formation au sein de l'organisation (participation active aux manifestations, aux barrages de routes précisément, formation comme « instituteurs » des enfants), ils conforment actuellement un groupe d'hommes fidèles à la leader Milagro Sala, dont certains ont par fonction (entre autres) celle de la protéger physiquement.

[44] Par exemple, Milagro Sala fait une promesse dans sa jeunesse: *« J'ai promis. C'était un compromis dans ma vie que d'aider aux plus démunis (…)... il n'y a pas de justice pour les pauvres, il n'y a pas de justice pour les enfants de la rue ».* Ou plus tard dans le même entretien, lors qu'elle affirme *« le seul délite pour ces gamins c'est d'être pauvre »* (Entretien avec Milagro Sala, San Salvador de Jujuy, octobre 2001).

[45] Entretien avec Laura. Cette enquêtée a un lien d'amitié avec la dirigeante, comme nous l'avons souligné. Elles ont fait connaissance à l'occasion de la mobilisation des syndicats de l'administration publique contre les gouvernements de De Aparici, en 1990 et après. Milagro était conseillère municipale et elle, était institutrice, et adhéré au syndicat ATE, qui était à l'époque la plus fort opposition au gouvernement. Laura, de préférences politiques liées à un militantisme radical (à l'opposé de Milagro), incarne une contradiction entre

Le capital politique acquis par Milagro Sala ne s'explique pas sans l'aide financière systématique assurée par certains hommes politiques avec qui la leader de l'organisation rentre en contact à partir de 2003, notamment, la Ministre d'Action Sociale, Alicia Kirchner, l'ex président de l'Argentine, Néstor Kirchner (2003-2007) et puis la présidente actuelle, sa femme, Cristina Fernández (2007-2011) de Kirchner. C'est le capital d'expérience cumulé qui permet à Milagro Sala de saisir les opportunités ouvertes par le gouvernement de Kirchner en 2003, avec notamment son plan de logement fédéral. Contexte très propice car un certain « militantisme populaire » lié aux années 1970 est alimenté par le gouvernement national qui développe alors une logique de soutien financier aux groupes diverses mobilisant des jeunes ou des chômeurs, des femmes ou des syndicalistes, mais susceptibles de fonctionner comme des appuis politiques permanents de la mission présidentielle, à des moments différents de son mandat (ce qui continue sous le mandat de Cristina Kirchner). Par exemple, le gouvernement national transfert des aides financières vers l'organisation Tupac Amaru et non vers d'autres organisations, tout aussi populaires, comme la CCC *(Corriente Clasista y Combativa)* ou bien le Front Darío Santillán, mais non péronistes. Le critère qui semble légitimer la décision du gouvernement est lié à l'efficacité avec laquelle la leader accomplit sa tâche. L'appui du gouvernement, en forme des biens matériels mais aussi symboliques, a permis à cette organisation d'augmenter ses ressources et à Milagro Sala d'accroître son pouvoir de recrutement, se déplaçant au centre de la scène politique locale et nationale (comme la plus importante organisation sociale). Le positionnement de la CTA dans la scène publique a aussi favorisé Milagro Sala qui s'est vu très rapidement située comme exemple même de la nouvelle direction que la politique du gouvernement kirchneriste prétendait entreprendre, configuré symboliquement en opposition au ménemisme. L'ex président Kirchner, ayant interprété et représenté le processus des mobilisations sociales de 2001 (la crise financière mais surtout la demande citoyenne pour la représentation), devint une source de légitimité qui favorisa et encouragea la mission de Sala, dans une province périphérique argentine où la figure présidentielle a une importance capitale.

Milagro a été désignée par une une autorité reconnue de la CTA, syndicat qui n'a pas une autorité statutaire cependant, mais issue de sa participation dans l'espace publique. Milagro Sala ne peut donc pas fonder son autorité dans une loi mais dans une relation interpersonnelle qui lui confère l'autorité. Ce fait est très important pour comprendre pourquoi cette autorité s'établit ensuite sur la base d'un rapport personnel avec le gouvernement national, avec la figure du président en particulier, tout en alimentant des relations interpersonnelles avec d'autres fonctionnaires du gouvernement provincial et national.

N'ayant pas les titres ou diplômes qui permettraient de fonder son autorité de manière légitime, n'ayant pas été votée, ne pouvant pas non plus disposer d'une légitimité communautaire (traditionnelle) s'appuyant sur un corps comme celui de la communauté *colla* (qui n'est pas homogène, dont une partie sont par ailleurs ouvertement critiques de Milagro Sala), la leader est contrainte de développer une action constante de justification de sa position de leader désintéressée de l'organisation, afin de la rendre légitime.

Cette contrainte s'imposant aux leaders des organisations comme Tupac Amaru est d'autant plus importante que ces leaders (ainsi que les groupes *piqueteros* qu'ils

---

le regard d'une classe moyenne formée et diplômée qui méprise et stigmatise la trajectoire et les pratiques de la dirigeante, et une enseignante engagée dans des mobilisations qui ont réuni les employés et les chômeurs de l'administration publique de manière tout à fait exceptionnelle. Ainsi, on peut expliquer qu'elle admire Milagro et essaye de la défendre face aux attaques de l'opinion publique.

représentent) font l'objet des accusations et de stigmatisations46 par des fragments des classes moyennes, par certains journalistes, par des intellectuels ou bien des élus. Par exemple, la leader de Tupac Amaru critiquée d'autoritaire47 a été accusée publiquement d'avoir en sa possession 500 armes enregistrées, ce qui s'est avéré faux, suite à la déclaration de l'institution chargée du registre d'armes en Argentine (RENAR). Cette accusation a donné lieu à d'autres: à Jujuy, des personnes de la classe moyenne commençaient à parler de la « *colombianisation* » de Jujuy. Tout de suite son organisation et sa personne sont mises en question, du fait de ses relations avec des fonctionnaires de l'administration publique et le président lui-même.
L'affaire avec le sénateur Morales (selon lequel Sala est accusée d'agression au sénateur) non seulement représente l'événement qui rend publique et reconnue l'organisation, mais celui qui à la fois déclenche des critiques et des mises en questions les plus diverses. Cette affaire montre, en tout cas, la règle à la quelle la leader de l'organisation est désormais assujettie: celle de la défense et la justification en permanence, tout en devant montrer son désintérêt d'une part (puisque celui-ci n'est pas garanti ou certifié a priori par aucune institution légitime), et l'efficacité du travail accompli ainsi que la transparence dans l'administration de l'organisation, de l'autre.
La différence entre Milagro et Gerardo Morales est fondamentale, car c'est la différence entre un élu et un leader dont sa légitimité, faite de l'expérience politique cumulée et de la mobilisation des membres de l'organisation (et d'autres), est toujours en construction. En effet, Milagro construit son capital politique, légitimé par la CTA d'abord et ensuite par un lien étroit et personnel avec le président de la nation. La légitimité de son leadership n'est pas statutaire (elle n'a pas été votée); son autorité ne dérive pas du vote mais de l'expérience cumulée, des « travaux » faits. Ce que l'organisation « fait » c'est-à-dire le bilan de la contrepartie des aides sociales reçues doit par ailleurs être *montré* en permanence comme autant de gages de transparence (et d'une relation de non manipulation) afin de combler les effets de la campagne de des-prestige qui l'associe systématiquement au clientélisme.

Magicienne ou prophète?

Nous considérons que l'acquisition de son capital politique et la manière dont elle le mobilise s'ajuste précisément aux contraintes structurales auxquelles l'organisation est soumise, ainsi que lui permet une certaine marge de main-d'œuvre. Autrement dit, les dispositions politiques acquises de Milagro Sala formant son capital politique se trouvent en adéquation à la fois objective et subjective avec la définition du poste de leader de cette organisation puisque homologue quant à cette double dépendance état-syndicat et

[46] Milagro Sala est appelé par ses détracteurs, souvent des individus de la classe moyenne, de préférence politique antipéroniste, « *cabecitas negras* »(« petites têtes noires »)Ce terme est utilisé en Argentine pour disqualifier de manière méprisante, voire raciste, un secteur des classes populaires. Le contexte d'apparition de ce mot est celui de l'industrialisation produite en Argentine dans les années 1940 qui produira l'arrivée à la banlieue de Buenos Aires des travailleurs migrants provenant des provinces argentines, en majorité d'origine indienne. De nature classiste, c'était surtout les classes moyennes et hautes de Buenos Aires auto-identifiées comme « les gens bien » qui ont employé le terme pour se distinguer les classes populaires travailleuses arrivant à la ville. Milagro Sala et les membres de Tupac Amaru ont été l'objet de nombreuses critiques, dont une bonne partie se fait dans des termes racistes.
[47] Dans ce sens, une autre nomination qu'on pouvait trouver est « *la gobernadora* » (la gouvernante).

héritage politique hybride (péronisme -Parti *Justicialista*, kirchnerisme, syndicalisme étatique, mouvement indien).
Sala est devenue une professionnelle de la gestion de la pauvreté, une « entrepreneure de la médiation » mais ambigüe: à la fois militante péroniste, leader de l'organisation sociale la plus importante du pays, jouant un rôle politique dans la scène locale fondamental, elle ne s'est jamais postulée ni présentée aux élections locales, restant dans une position marginale à la concurrence politique[48]. En revanche, les membres de son organisation ont été mobilisés à plusieurs reprises comme des appuis à des candidats (par exemple, dans les élections de 2007 à gouverneur de Jujuy). Son organisation, on l'a montré, a aussi fonctionné comme groupe de pression et de défense d'intérêts (afin de se faire entendre par les autorités locales, des manifestations, occupations de bâtiments publics, des ponts, *escraches* à des figures locales ont été organisés ou bien articulés avec d'autres organisations).
En 2010 cependant, elle se présente aux élections internes de la CTA national et emporte les élections dans une liste (ayant à sa tête Pablo Miceli), opposée à la liste appuyée officiellement par le kirchnerisme. Milagro renonce à son poste, et quitte la CTA. En conséquence, la CTA perd une quantité considérable d'affiliés, puisque l'organisation jujeña avec ses 70000 affiliés apporte un nombre très important d'électeurs à la CTA[49]. Nous pourrions lire ce refus aux résultats des élections, ce refus au poste de sous-secrétaire de la CTA nationale à partir de la crainte de perdre le financement du gouvernement. Certes, c'est un élément qui joue un rôle important, malgré le discours soutenu par la leader à propos du fait qu'elle se préparait pour le futur, étant consciente que le gouvernement ne serait pas toujours favorable. Mais il nous semble que cette interprétation ne devrait pas négliger une autre: compte tenu des pratiques analysées, la leader agit toujours sous une contrainte anti électoraliste. Ainsi pour maintenir la légitimité de son autorité vis-à-vis des membres de l'organisation, elle est obligée de refuser toute forme représentative.
L'analyse des discours et des pratiques de Milagro Sala nous mènent à la conclusion qu'elle est une leader professionnelle de la politique et de la gestion des intérêts (de la pauvreté et les plus démunis). Dans sa présentation de soi à la société un discours d'authenticité et de proximité où elle incarne les demandes des plus démunis occupe une place très importante. Elle parle au nom d'eux et prétend les représenter, légitimée par la mobilisation discursive des éléments liés à sa trajectoire populaire (liée à la violence, la pauvreté, la discrimination). Avec un discours anti-electoraliste elle obtient de la légitimité des vastes secteurs de la population des classes populaires et aussi des classes moyennes de Jujuy, méfiants des institutions et des élus.
Si l'on considère les pratiques concrètes à l'intérieur et en dehors de son organisation, Milagro Sala développe son capital politique de leader ayant un rôle de *prophète* pour ses membres, qu'on pourrait associer à des fidèles. Le type de médiation qui se met en place n'est pas de représentation mais *d'incarnation*. La leader est dans ce type d'organisation amenée à être le seul guide, le seul interprète, de tel sorte que son autorité ne peut pas être mise en question. Ce savoir qu'elle possède et qu'elle mobilise pour « résoudre les problèmes des affiliés personnellement » est un savoir qu'elle seule semble capable de

[48] Dans les entretiens ainsi que dans les discours publics elle affirme systématiquement ne pas accepter de se présenter comme candidate au gouvernement local.
[49] Par exemple, dans ces dernières élections directes et internes de la CTA, le nombre de votants n'a pas dépassé les 20000, mais une bonne partie était des voix provenant de l'organisation *jujeña* qui a 70000 affiliés.

porter dans la mesure où elle se présente comme étant l'autorité. Celle-ci est reconnue par tous. Il semblerait donc que l'organisation repose dans un *consensus tacite* selon lequel tous sont d'accord, même s'ils ne le manifestent pas ni en sont forcément conscients, pour que Milagro soit celle qui administre et gouverne.
Finalement, n'ayant pas été votée, son autorité s'édifie et s'affirme sur un capital d'expérience vécue cumulé qu'elle doit faire valider en permanence publiquement et internement au sein de l'organisation. Sa légitimité dépend ainsi de sa capacité à articuler une justification permanente de son désintéressement et des rapports d'égalité fondés sur l'identification avec les membres de l'organisation (« tous ont vécu la misère, la faim, le chômage »).

IV. Conclusion

La manifestation, la réunion publique, la grève de la faim, la pétition et surtout le barrage de route, sont les modes d'action les plus souvent usités par les participants de cette organisation et, plus largement, par le mouvement *piquetero* qui se constitue vers la fin des années 1990. Adhérant à ce dernier, l'organisation s'inscrit dans une série d'événements de contestation sociale ayant débuté à Jujuy à partir des luttes contre l'hyper-inflation en 1989, et des luttes des travailleurs de l'administration publique syndicalisés en 1997 et 2000, dont un acteur central est le syndicat CTA (*Central de los Trabajadores Argentinos*) ainsi que la CCC (*Corriente Clasista y Combativa*), réunies dans une organisation « *multisectorial* » qui intégrait chômeurs et travailleurs employés dont une bonne partie syndiqués dans le FGE ou front des syndicats d'employés de l'Etat (*Frente de Gremios Estatales*).
Ainsi nous avons montré comment l'organisation Tupac Amaru, encadrée par un syndicat, n'échappe pas à une logique qui caractérise la décennie, selon laquelle l'action collective dans la rue et, plus précisément, le mode d'action du barrages de routes, se routinisent comme formes de mobilisation collective, innovant dans ce que Charles Tilly appelle un « répertoire d'action collective » (Tilly, 1986) étant adoptés systématiquement comme éléments de pression, préalables à toutes négociations avec les autorités locales et nationales pour l'obtention de ressources financières allouées à ses membres. Par ailleurs, les négociations sont paradoxalement la conséquence d'actions collectives d'une durée de plusieurs semaines, où les manifestants s'affrontent au gouvernement, et celui-ci répond avec l'action des forces de l'ordre (gendarmerie).
Cependant la catégorie de « mouvement social » et l'analyse de ses relations avec le gouvernement simplifie le tissu des relations des organisations avec les pouvoirs publics, les partis politiques et les syndicats, et considère les organisations à priori comme des acteurs extérieurs et différents des gouvernements. Ces acteurs ainsi compris feraient partie d'un schéma *d'inputs* et *outputs*, ou bien de demandes et de satisfaction des demandes, l'action n'étant vue que comme un moyen pour la consécution d'une fin. Or loin de constituer des mouvements « extérieurs » aux gouvernements ou de constituer des manières spécifiques de construire et d'expliquer le monde social alternatives à la dominante, voire révolutionnaires, ce sont des organisations traversées par deux logiques en tension: d'une part, elles se définissent comme des organisations permettant de résoudre les problèmes des plus démunis et de les représenter : il s'agit d'être plus proche des « vrais besoins » non seulement des travailleurs mais aussi et surtout des chômeurs et de ces familles, agissant dans l'espace public collectivement au nom de ces derniers,

dénonçant à l'État comme responsable, et réclamant des réponses des gouvernements par des méthodes protestataires. D'autre part, les organisations se trouvent contraintes par une logique de dépendance financière de l'État.

On trouve ainsi dans cette dépendance paradoxale à laquelle l'organisation doit son existence et le maintien de celle-ci, l'un des principes explicatifs de la production par l'organisation d'une définition sociale foncièrement ambigüe.

En effet, comme on a essayé de montrer, l'action collective dans la rue est une des formes organisationnelles de l'organisation Tupac Amaru. Au delà de l'action dans l'espace publique, les *piqueteros,* et cette organisation en est un exemple, se sont caractérisés par une action dans le territoire, dans les quartiers que, comme l'a bien souligné Merklen (2009), est en lien avec les politiques de décentralisation et les politiques sociales d'un État qui redistribue les ressources vers la population la plus démunie avec la médiation de ces organisations. Par ailleurs, même si il y a d'autres organisations comme des ONG, des entreprises ou des Églises en concurrence pour assurer la même fonction, l'État continue quand même à avoir le monopole des ressources. Cette logique entraîne une conséquence majeure qui permet d'expliquer en partie la durée de ces organisations dans la scène sociale et politique. Faute des solutions générales pour les individus au chômage ou dans des situations du travail précaires, ces organisations sont contraintes à agir en permanence pour négocier des allocations et des subsides avec le gouvernement national (et local). Elles rentrent ainsi dans une logique de concurrence avec d'autres organisations pour l'obtention de ressources afin d'assurer leur survie[50]. Les allocations et subventions obtenues des gouvernements ne pourraient pas ne pas être comprises comme des gains de la lutte, de l'engagement, et donc perçues avec fierté par les membres des organisations. Cependant elles sont le résultat non d'un droit ni d'une loi garantissant l'accès de ces populations à ces bénéfices, mais des négociations particulières établies entre les porte-parole des organisations et les autorités nationales et locales. Ainsi la particularité de la relation entre organisations médiatrices et gouvernement installe une concurrence entre elles en termes d'efficacité et transparence afin de gagner légitimité dans les négociations avec le gouvernement national. Les organisations issues des syndicats péronistes comme Tupac Amaru, du fait de l'expérience politique et de l'autorité acquises, auront plus de chances d'être considérées comme des interlocuteurs légitimes, bénéficiaires privilégiées en conséquence dans une négociation avec le gouvernement, devant pourtant renouveler en permanence les stratégies visant cette légitimité.

Finalement, nous avons esquissé les significations de l'action de cette organisation Tupac Amaru, à la fois sociétales et politiques. Elle réactive des visions du monde de caractère mythologique et des pratiques ou manières d'agir su ce monde liées au corporatisme, où des logiques diverses rentrent en tension: d'une part, une logique de « prestation des services » où une partie des classes populaires satisfassent des intérêts de type matériel et symbolique, et d'autre part, une logique de politisation, car l'organisation élabore à la fois une explication de la situation de précarité et de chômage, ainsi que des souffrances associées de ses membres, à travers un récit exprimé dans un langage des droits, permettant aux individus les plus démunis d'inscrire leur situation de précarité en termes « d'expérience de dignité ».

[50] Sur cet aspect de la survie des classes populaires, voir Merklen, Denis (2009).

Table: Liste de gouverneurs de la province de Jujuy selon parti politique depuis le retour de la démocratie en 1983

N°	Gouverneur	Période (Président)
1º	**Carlos Snopek** (PJ)	1983 – 1987 (R. Alfonsín - UCR)
2º	**Ricardo de Aparici** (PJ)	1987 – 1990 (R. Alfonsín – 1989 C. Menem - PJ)
3º	**Eduardo Alderete** (PJ) (asume par rénonce de De Aparici)	1990- 1991 (C. Menem - PJ)
4º	**Roberto Domínguez** (PJ) (renonce)	1991 – 1993 (C. Menem - PJ)
5º	**Carlos Ficoseco** (PJ) (asume par rénonce de Ficoseco)	1993 – 1994 (C. Menem - PJ)
6º	**Oscar Perassi** (PJ) (renonce)	1994 – 1995 (C. Menem - PJ)
7º	**Guillermo Snopek** (PJ)	1995 – 1996 (C. Menem - PJ)
8º	**Carlos Ferraro** (PJ) (asume par déces de Guillermo Snopek)	1996 – 1998 (C. Menem - PJ)
9º	**Eduardo Fellner** (PJ) (asume par renonce de Ferraro, élu en 1999)	1998 – 2003 (C. Menem – 1999-2001 F. De la Rúa – Alianza -)
	Eduardo Fellner (PJ)	2003 – 2007 (N. Kirchner – FPV péronisme)
10º	**Walter Barrionuevo** (PJ)	2007 – 2011 (C. Kirchner - FPV péronisme)

Références bibliographiques

Behrend, J. (2007). *Democratic Argentina and the "Closed Game" of Provincial Politics : Protest and Persistence. DPhil thesis.* University of Oxford.

Cheresky, I. (2006ª). La ciudadanía en el centro de la escena dans Cheresky, I. (dir.). *Ciudadanía, sociedad civil y participación política.* Buenos Aires: Miño y Dávila.

Cheresky, I. (2006b). *Poder presidencial, opinión pública y exclusión social*. Buenos Aires, Manantial.

Delamata, G. (2005). (ed.) *Ciudadanía y territorio. Las relaciones políticas de las nuevas identidades sociale.* Buenos Aires: Espacio Editorial.

Farinetti, M. (2000). Violencia y risa contra la política en el Santiagueñazo : Indagación sobre el significado de una rebelión popular. *Revista Apuntes* 6.

Kindgard, A. (2002). Procesos sociopolíticos nacionales y conflictividad regional. Una mirada alternativa a las formas de acción colectiva en Jujuy en la transición al peronismo. *Entrepasados* 2: 67-87.

Mauger, G. (1991). Enquêter en milieu populaire. *Genèses* 6 (6) :125-143.

Merklen, D. (2009). *Quartiers populaires, quartiers politiques.* Paris : La Dispute.

Offerlé, M. (1998). *Sociologie des groupes d'intérêt.* Paris: Montchrestien.

Quiroga, H. (2010). *La República desolada. Los cambios políticos de la Argentina (2001-2009).* Buenos Aires: Edhasa.

Rodríguez Blanco, M. (2002) *La parte de los que no tienen parte.* La dimensión simbólica y política de las protestas sociales: la experiencia de los *piqueteros* en Jujuy. Departamento de Ciencias Sociales-Centro Cultural de la Cooperación. Cahier de travail 10.

Rodríguez Blanco, M. (2011). Participación ciudadana no institucionalizada, protesta y democracia en Argentina. *Iconos. Revista de Ciencias Sociales* 40: 89-103

Romero, L.A. et Gutiérrez, L.H. (2007). *Sectores populares, cultura y política. Buenos Aires en la entreguerra.* Buenos Aires: Siglo XXI editores.

Schuster, F.; Naishtat, F.; Nardacchione, G. et Pereyra, S. (2005) (comps.). *Tomar la palabra: Estudios sobre protesta social y acción colectiva en Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Prometeo.

Svampa, M. (2000) (ed.) *Desde abajo. Las transformaciones de las identidades sociales.* Buenos Aires: Biblos

Svampa, M. et Pereyra, S. (2003). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras.* Buenos Aires: Biblos .

Tilly, C. (2008). *Contentious Performances.* Cambridge: Cambridge University Press.

Política provincial y mediadores políticos. Un aporte al estudio de los partidos políticos en el territorio

Victoria Ortiz de Rozas

I. Introducción

Los partidos políticos parecen ya no ser los principales promotores del debate político y ya no cautivan largas masas de militantes como en el pasado, algo que ha sido señalado desde diversas perspectivas.

El debilitamiento y desagregación de los partidos políticos y la importancia adquirida por el espacio público y la comunicación política en los medios de masas supone la transformación de la vieja "democracia de partidos" en una "democracia de audiencia" o "democracia de lo público" (Manin, 1998; Rosanvallon, 2007).

Katz y Mair (2009) explican que los partidos políticos ya no son los principales intermediarios entre la sociedad y el estado. Igualmente, si el modelo de los partidos de masa está en declive, ello no significa el fin de los partidos políticos, sino el de un modelo particular de partido limitado temporalmente y contingente. Los autores describen la emergencia reciente de un nuevo modelo de partido, el partido cartel, en el que partidos competidores se convierten en agentes de estado y emplean los recursos del estado para asegurar su propia supervivencia colectiva. Las bases partidarias y la burocracia pierden importancia, lo que hace que los partidos devengan partidos de gobierno dejando de actuar como mediadores entre el estado y la sociedad (Katz y Mair, 1997).

Aceptando dichos diagnósticos, es posible notar que la evidencia empírica que proveen los estudios de caso sobre los partidos politicos en una escala de observación más cercana al territorio, permite cambiar ciertas suposiciones o al menos redimensionarlas.

Si es innegable que los partidos están compuestos de dirigentes cada vez profesionalizados y especializados, cada vez menos dependientes de su base militante para el financiamiento (en gran parte asegurado por las ayudas públicas) y su poder de atracción electoral (derivado más de la acción de los medios de masas que del trabajo en el terreno militante); ello no afecta tanto el anclaje social y territorial de los partidos políticos (Briquet y Massicard,2010).

La observación etnográfica de lo que ocurre en el territorio con los dirigentes políticos y sus vínculos con el estado y los ciudadanos permite observar cómo los partidos políticos todavía están enraizados en el territorio, oficiando un rol como mediadores políticos entre el estado y la sociedad, si bien de manera diferente que en el pasado.

En el presente trabajo se presentan las reflexiones provenientes de la realización de un estudio de caso sobre partidos oficialistas en la provincia argentina de Santiago del Estero, sobre las formas de acceso al poder político y las actividades cotidianas de los dirigentes políticos con cargos electivos una vez en el poder. Basado en un estudio de caso, el objetivo del trabajo no es hacer generalizaciones válidas para la política partidaria en todo

el país, sino contribuir a la construcción de una perspectiva teórica para evaluar el alcance del cambio en los partidos.

La democracia y los partidos políticos argentinos han registrado cambios similares a los descriptos más arriba.

Como gran parte de las democracias latinoamericanas, la democracia argentina está atravesando una metamorfosis de su formato representativo, caracterizado por el debilitamiento de los partidos políticos y la importancia adquirida por el espacio público y la comunicación política en los medios de masas. (Cheresky, 2006, 2007, 2009).

Los partidos políticos argentinos pueden ser descriptos como partidos de gobierno, en tanto sus bases y burocracia han perdido relevancia como describen (Katz y Mair, 1997) dejando de ser mediadores entre el Estado y la sociedad para convertirse en actores integrados al estado (Scherlis, 2009). Por esta razón, se ha considerado que los vínculos entre los actores partidarios son de naturaleza clientelar (Scherlis,2009), de modo que los comportamientos mediados por recompensas materiales ocuparían el lugar de las identidades partidarias.

La creciente imbricación de los partidos y el estado en Argentina ha sido observada desde otras perspectivas teóricas. Levitsky (2003), que estudia a los partidos como organizaciones, ha observado cómo el Partido Justicialista ha pasado de ser un "partido sindical" a un "partido clientelar", en el que los principales recursos son estatales. Dicho partido pudo adaptarse a los procesos de desindustrialización y de reforma de mercado de la década de los noventa, gracias a que redefinió sus relaciones con el trabajo organizado, desmantelando los mecanismos tradicionales de participación sindical y reemplazando los lazos establecidos con estos con lazos territoriales.

En la visión del Levitsky (2003), las transformaciones sufridas por el Partido Justicialista no significaron su pérdida de enraizamiento social. El autor incluso muestra cómo la transformación del partido se da en el sentido de una mayor importancia del territorio en su organización.

El presente artículo retoma la idea de que la "cartelización" de los partidos no significa necesariamente que pierden contacto con sus bases sociales y territoriales.

La segunda idea importante, íntimamente relacionada con la anterior, es la relativa al estudio de relaciones normalmente consideradas clientelares como relaciones de representación política. El hecho de que los partidos estén crecientemente integrados al estado no supone que los vínculos políticos estén exclusivamente mediados por la búsqueda de recursos materiales, en una relación desprovista de los elementos que caracterizan a los vínculos de representación política. Se cuestiona la distinción entre bienes materiales y bienes ideológicos (Kitschelt y Wilkinson, 2007) que a veces subyace en dichos análisis.

Incluso cuando todo se trata de bienes materiales, los líderes políticos y los seguidores están involucrados en una relación de representación política.

Justamente, se realiza un estudio de caso sobre los partidos oficialistas en Santiago del Estero[1], una provincia del norte argentino, cuya estructura socioeconómica gira

[1] Santiago del Estero fue gobernada por el Partido Justicialista desde el retorno de la democracia en 1983 hasta 2004 –con la interrupción de la Intervención Federal entre 1993 y 1995. Durante este período, el justicialismo santiagueño triunfó en todas las elecciones provinciales, si bien las fuerzas políticas opositoras –el radicalismo y sus desprendimientos- tenían una importante presencia territorial ya que gobernaban las dos principales ciudades, Santiago y La Banda. El justicialismo, liderado por Carlos Juárez, sólo dejó la gobernación luego de movilizaciones sociales que culminaron en Intervenciones Federales. En 2005, Gerardo Zamora, dirigente de la Unión Cívica Radical, asumió como gobernador, liderando el Frente Cívico, formado

preponderantemente en torno a los recursos estatales, lo cual tiene una gran incidencia en la política provincial.
En el artículo se muestra cómo los miembros del partido de gobierno actúan como representantes políticos territoriales, al tiempo que han accedido al poder gracias a esta condición. En primer lugar se considera el *capital territorial* como modo de acceder al poder político, luego las tareas de representación una vez que los dirigentes territoriales acceden al poder y finalmente el doble carácter de esa tarea de mediación y representación, que involucra tanto a demandas individuales como colectivas.

II. Ser representante de un territorio o tener *capital territorial* como requisito para llegar al poder

Si bien el interés es contribuir a una perspectiva que permita el estudio de los partidos políticos, en este trabajo el partido político es estudiado a través de sus integrantes, que serían así las "unidades de observación", si se quiere traducir en el vocabulario de la metodología de la investigación. De modo que al estudiar y conceptualizar las actividades de sus integrantes, se estarán haciendo interpretaciones sobre las características de su partido.
Existe gran consenso en la literatura sobre la importancia del reclutamiento de candidatos en el estudio de los partidos políticos. Los métodos empleados para seleccionar a los candidatos permiten comprender el funcionamiento interno de los partidos políticos, el comportamiento de los dirigentes políticos, así como el modo en que se relacionan con los electores y otras instituciones políticas. (De Luca, Jones y Tula, 2002; Freindenberg y Alcántara Sáez, 2009).
Estudiar los criterios de reclutamiento permite entender en qué sentido son valiosos para el partido, cuál es su contribución a él. Al mismo tiempo, permite conocer cuál es la fuente de poder del partido político, cómo establece (o no) sus lazos con la sociedad, cuál es su estrategia para ganar elecciones.
Uno de los principales hallazgos de nuestro estudio de caso es la indisputada centralidad del gobernador en la selección de los candidatos. Ser una persona de confianza del gobernador o alguien de su círculo íntimo es un requisito esencial para llegar al poder. Hemos obtenido esta información a través del estudio de las formas de reclutamiento para diversos cargos electivos en el período 1999-2011, a través de entrevistas con los personajes claves capaces de obtener información sobre los criterios de elección de candidatos, en general personas cercanas al gobernador, y también a los mismos candidatos[2]. En este sentido, nuestra evidencia empírica es coherente con estudios anteriores sobre selección de candidatos en Argentina. Los gobernadores argentinos tienen un rol clave en los procesos de selección de candidatos, como fue estudiado para el caso de los legisladores provinciales (Lodola, 2009), los legisladores nacionales (Jones, Saiegh, Spiller y Tommasi, 2002) y los partidos políticos en la provincia de Salta (Maidana, 2010). Los datos empíricos apoyan la idea de la influencia decisiva de los gobernadores en las carreras de otros líderes políticos.
Los hallazgos más originales de nuestro trabajo de campo están relacionados con la centralidad que los líderes territoriales tienen en la política provincial. Incluso si el

por radicales y dirigentes políticos del peronismo que se fueron incorporando en forma progresiva.
[2] Para una descripción y análisis detallado de la evidencia empírica, ver Ortiz de Rozas (2011, 2011a).

gobernador es el líder indiscutido, su performance electoral y la de su partido dependen altamente de los líderes territoriales. Incluso cuando algunos líderes no son de la total confianza del gobernador, cuando son los líderes indisputados de su territorio –pueblo, ciudad o departamento- son elegidos para integrar la lista de candidatos oficial.
Son mayormente conocidos o líderes populares en sus territorios pero quizás no en la provincia entera. Es una popularidad territorial, construida en relaciones cara a cara y a veces en medios locales, pero son mayormente líderes que no tienen mucha –quizás ninguna- participación en los medios de escala provincial.
Se espera que los líderes territoriales sean capaces de traer votos al partido, se supone que "tienen votos" de un modo en que si son incorporados al partido, éste se va a beneficiar de su capacidad de influenciar a los votantes.
Se trata de elegir dirigentes provistos de cierto capital político. Detentar cierto *capital político* significa entonces *ser reconocido como* competente para el oficio político. Se trata de identificar aquellas competencias sociales que identifican a quienes ejercen la actividad política y de las que otros de hallan desprovistos (Bourdieu, 1981). Los *capitales* movilizados en el oficio político son producto de las percepciones y representaciones de los diferentes actores, siendo que la elegibilidad para un cargo político depende de la "percepción por los otros de ciertas cualidades y recursos sociales escasos" (Offerlé, 2011:92).
Para identificar quién tiene *capital territorial*, se toman en cuenta diferentes criterios: los votos obtenidos en elecciones anteriores, la cantidad de personas susceptibles de ser movilizadas por el dirigente en actos e incluso en algunos casos, la realización de encuestas[3].
La identificación, la clasificación entre quienes son capaces de ganar una elección en un territorio y quienes no, es previa a la elección misma. El *capital territorial* es distinguible de los bienes o recursos materiales a los que pueden acceder en el curso de una elección. Más que bienes materiales, lo que tienen los líderes políticos son un capital de relaciones personales, de personas de quien se piensa el dirigente es capaz de incidir en su forma de votar, los que los convierte en líderes representativos.
Los líderes políticos que logran acceder al poder tienen un capital territorial, producto de una actividad política continuada. Han logrado encarnar las demandas sociales e individuales existentes en un territorio determinado y buscar "soluciones" públicas para esas demandas y al mismo tiempo crear esas demandas, "conseguir cosas" para un territorio determinado sin que esa necesidad haya sido formulada previamente.
En este sentido es que retomamos la noción de representación como un proceso en dos sentidos de Ernesto Laclau (2007). La función del representante no es simplemente transmitir la voluntad de aquellos a quienes representa, sino que el representado depende del representante para la constitución de su propia identidad; el representante no es un mero agente pasivo, sino que debe añadir algo al interés que representa.
Desde el mismo inicio de su trayectoria política los dirigentes políticos realizan tareas de mediación -cuando esas demandas ya están definidas- y de representación -cuando crean nuevas necesidades o demandas- que involucran a ciudadanos de un territorio determinado y a diversas reparticiones estatales -locales, provinciales y nacionales-.
Una vez en el poder continuarán realizando tareas similares a aquellas que les permitieron acceder a un cargo electivo, como se explica a continuación.

[3] Para una ampliación de esta conceptualización Ortiz de Rozas (2012).

III. *"Acelerar trámites", "Mover expedientes".* La tarea de los dirigentes políticos una vez en el poder.

La evidencia empírica sobre el trabajo cotidiano de dirigentes políticos que ocupan distintos cargos electivos –legisladores provinciales, legisladores nacionales, vicegobernador, concejal, intendente- muestra que, más allá de la posición ocupada, realizan tareas similares.

Por supuesto, cada posición presenta posibilidades estructurales diferentes para ejercer el rol de mediador y representante, y la manera en que es ocupado cambia con las diferentes personas que los ocupan. Las cualidades personales de cada representante inciden en la forma en que ocupa cada posición, y es por ello que es posible conceptualizar su tarea en los términos de una relación de representación. Incluso cuando la tarea involucrada implique la circulación de recursos públicos, la distinción que caracteriza a la noción de representante político se encuentra en la diferente manera de obtención, utilización y canalización de estos recursos.

Sin embargo, nuestro objetivo en este trabajo es estudiar los aspectos que tienen en común, ya que el interés principal es profundizar en el rol de mediación política que los miembros del partido desempeñan. Y ello porque uno de nuestros principales hallazgos es que incluso si cada posición tiene sus exigencias y particularidades, los roles *informales* desempeñados por los ocupantes presentan grandes similitudes.

Gran parte de la tarea cotidiana que los dirigentes políticos estudiados realizan es la de ser intermediarios entre diferentes ciudadanos o grupos de ciudadanos y diversas reparticiones estatales, en el nivel local, provincial e incluso nacional. El rol de mediadores principalmente involucra proveer información y hacer los trámites requeridos para acceder a diferentes beneficios sociales, pero también canalizar diferentes tipos de demandas relativas a obras públicas en diferentes territorios -o a veces crear esas demandas donde no existen lo cual implica crear el grupo demandante. En suma, se transforman en garantes de la circulación de los recursos públicos a los ciudadanos al mismo tiempo que se construyen a ellos mismos como representantes políticos.

Aunque no ocupen una posición en un ministerio o una secretaria, en ningún organismo en el que se administra y decide el destino de los fondos públicos, la mayor parte de los líderes políticos definen su actividad con términos de la gestión de lo público, en particular utilizan la palabra "gestionar" para definir gran parte de su actividad política cotidiana, la más importante si se quiere.

Esta tarea de "gestión" en general no corresponde con las tareas formalmente implicadas en los cargos, son tareas "no escritas" en ningún estatuto o regulación y por ello configuran prácticas que pueden ser conceptualizadas como instituciones informales[4].

[4] Se parte de una concepción de institución cercana a la del neoinstitucionalismo sociológico, que considera cómo la institución aparece impregnando las formas de hacer y pensar de sus miembros y, en función de sus trayectorias personales y particulares, los individuos realizan inversiones –sus creencias, intereses y recursos- en ellas; transformándolas y reproduciéndolas –si bien nunca de manera idéntica-. (Lagroye y Offerlé, 2010). Se aprehenden las instituciones como "tipificaciones compartidas", es decir "maneras de pensar, de ser y de hacer en principio individuales y subjetivas, devenidas colectivas y objetivas a causa de su institucionalización" (Di Maggio y Powell, 1997, citados por Lagroye y Offerlé, 2010:47). En el campo de la ciencia política Guillermo O'Donnell (2006) conceptualizó a las instituciones informales como las "pautas regularizadas de interacción que son conocidas, practicadas y regularmente aceptadas (aunque no necesariamente aprobadas normativamente) por agentes sociales que mantienen la expectativa de seguir

Son las instituciones no escritas, informales, que sólo pueden ser reconstruidas a partir de la realización de trabajo de campo, de observación de la actividad de los dirigentes políticos. Y es gracias a este trabajo de observación que es posible evaluar cómo los dirigentes políticos continúan desarrollando tareas de representación política una vez que acceden al poder, lejos de aquella imagen de separación entre sociedad y estado que presupone la transformación de los partidos en partidos de gobierno.

La rutina de trabajo semanal dice mucho sobre cuáles son las bases de sustentación de un dirigente político, como el caso de los legisladores provinciales.

Incluso si el edificio Legislativo está en la capital provincial, la mayor parte de los legisladores provinciales todavía vive en sus ciudades o pueblos natales. Ellos van a la capital para el día de sesión el martes y tal vez se quedan para el trabajo en comisiones hasta el miércoles o el jueves, y luego vuelven a casa. Los que permanecen en la capital es porque tienen allí "su gente", porque siempre han vivido en la capital o han transformado la capital en su territorio de trabajo político.

Se supone que un legislador provincial debe promulgar leyes, al menos es lo que está establecido en las normas que regulan su actividad. Sin embargo, el trabajo empírico muestra que no sólo no es la única actividad que desempeña sino que en ocasiones no es la principal.

De alguna manera la evidencia empírica refleja la idea prevalenciente en la opinión pública o el sentido común ciudadano, que los legisladores no tienen un rol protagónico en la promulgación de leyes, y que el "poder real" está en manos del gobernador. Una gran parte de los proyectos presentados son iniciativas del poder ejecutivo provincial. Esto no constituye un secreto en el mundo político provincial. Es más, tiene sentido si es que el gobernador tuvo que ver en su acceso al cargo. Los legisladores oficialistas mismos dicen que su tarea es "acompañar al Poder Ejecutivo", por ejemplo en relación a la elaboración del presupuesto provincial:

> "Nosotros aprobamos el presupuesto como lo manda el ejecutivo, no cuestionamos absolutamente nada, por qué, porque tiene que ser así, nosotros debemos responder al gobierno de turno, entonces somos mayoría y debemos aprobar". (Diputado provincial)

La pregunta que sobreviene es sobre rol que tienen los legisladores provinciales. La respuesta es coherente con la génesis de su capital político, ser los representantes de un territorio. Una vez en el poder responden al territorio gracias al cual llegaron al poder. A pesar de no tener un cargo ejecutivo, lo que hacen es "gestionar", solucionar urgencias, problemas, "conseguir cosas" para personas o colectivos provenientes de su territorio de origen.

La vía legislativa es más lenta que la de acudir directamente a las reparticiones estatales especializadas. Es por ello que continúan oficiando como mediadores entre los ciudadanos y los distintos organismos estatales. Nuevamente, ello no constituye algo ilegítimo o problemático para los legisladores provinciales, que conciben su rol en los términos de gestores sociales:

---

interactuando conforme a las reglas y normas –formales e informales– que rigen esas pautas" (O'Donnell, 2006: 10).

> "La militancia es lo que nos mantiene, el contacto con la gente, y mucho más en el caso de los diputados que somos del interior ellos no te ven que vos has sido designado a lo mejor para ordenar la legislación o los que los vaya a contener legalmente para la función, sino ellos te ven como un actor social, entonces que vos tienes que seguir haciendo la parte de acción social. Para ellos yo soy eso, y me encanta ser eso porque es por lo que yo me he jugado siempre, por la voluntad de la gente y la necesidad de ellos. Entonces, yo voy y alguno me dice 'no puedo revocar la piecita, me da una bolsita de cemento', le doy una bolsita de cemento, 'no tengo para comprar una bolsita de alimento', bueno, todas esas cosas, otras veces viene el problema de que a veces no tienen para viajar, están con los chiquitos enfermos, entonces les conseguimos el turno, lo traemos, que lo vea el médico o le tienen que hacer algún tratamiento largo, vemos cómo le conseguimos la medicación. O sea es la parte social la que nosotros atendemos allá y siempre generando cosas también que le sirvan al pueblo, a lo mejor yo en este caso para el día viernes a través del regimiento de granaderos hemos hecho la conexión que va a ir la biblioteca móvil de San Martín". (Diputada provincial)

Los legisladores provinciales no son los únicos que ofician como representantes y mediadores de un territorio, más allá de las tareas formalmente cumplidas.

Es también el caso del vicegobernador. Además de sus tareas institucionales como vicegobernador –por ejemplo asistir a inauguraciones de obras realizadas por el gobierno provincial, recibir al obispo en nombre del gobierno provincial- realiza otro tipo de tareas en la semana. Dos o tres veces por semana e incluso los fines de semana dedica su tiempo a recorrer distintos barrios de la capital provincial. Sucede que ha decidido "desembarcar" políticamente allí. Construir una base política en la capital – la más importante en términos de población - es visto como un paso previo antes de ser el candidato por el gobernador.

Sin embargo, en los primeros años de su mandato el vicegobernador no hacía "trabajo político" en la capital sino los fines de semana en ciudades y parajes en el interior. Él ha accedido al poder con el capital político de ser un "hombre del interior", donde fue intendente de su ciudad natal. Sin embargo, en la última elección municipal "su" candidato –el candidato que él había apoyado- perdió y de este modo él perdió sus posibilidades de ser al siguiente candidato de gobernador. Al perder una elección en su ciudad natal había dañado su imagen como un líder territorial.

Por eso ha comenzado a "construir" nuevas bases en otro territorio, la capital. El hecho que él políticamente "trabaja" en la capital ha traído muchos conflictos con el actual intendente, incluso si él pertenece al mismo partido político. En este punto es muy importante y revelador para describir empíricamente en qué consiste este trabajo territorial, de qué modo el vicegobernador disputa al intendente su propio territorio. Otra vez la respuesta involucra a las tareas de mediación entre las bases y el gobierno que él integra.

Su "tarea política" consiste en visitar diferentes barrios, hablar con los habitantes y presentarse –o construirse como- el representante de sus demandas. Más allá de que no le compete como vicegobernador, éste realiza reclamos al municipio o a la repartición provincial correspondiente solicitando la construcción de cloacas, el asfaltado, el alumbrado, todo en nombre de los vecinos de los barrios que visita.

El vicegobernador elige barrios donde los dirigentes políticos "no llegan", donde todavía no existen representantes políticos para hablar en su nombre, en general en los barrios

periféricos de la ciudad. Al mismo tiempo construye la diferenciación política con respecto al intendente, intentando posicionarse como el portavoz de quienes no son tenidos en cuenta por él. Se trata de una estrategia muy común que desarrollan los dirigentes políticos que buscan disputar el poder político del intendente de una ciudad, realizar trabajo político en los barrios periféricos, los que presentan mayores déficits en términos de calidad de vida.

Un integrante de su grupo político explica su tarea: *"En los barrios él habla con la gente, después de tantear la gente yo levanto los temas y vengo y hago notas. Al intendente, al ministerio de obras públicas o al presidente del Consejo*"

En las "notas" a las que se refiere el entrevistado es donde se materializa la tarea de mediación que ejerce el vicegobernador. Allí se dirige a los organismos correspondientes y hace los pedidos según las necesidades que pudo identificar en su recorrida por el territorio: cloacas, alumbrado, asfalto, becas escolares, etc. A este tipo de prácticas es a las que llaman "hacer gestiones".

"Hacer gestiones" y devenir representante de un grupo social enraizado en un territorio son dos caras de la misma moneda. Como en todo proceso de representación política, también existe la faceta "ascendente", por la que el representante crea demandas nuevas en un grupo y no se limita a tomar las ya existentes. Así, hemos observado cómo en las reuniones que mantiene con los vecinos, el vicegobernador propone nuevos temas en la "agenda" barrial, por ejemplo actividades de capacitación laboral o la solicitud de subsidios para microemprendedores, en un medio en el que lo que predomina es la demanda de empleo público.

Las tareas descriptas parecen alejadas de las estipuladas formalmente para el cargo de vicegobernador. Sin embargo, operan a modo de una especie de "curriculum oculto" que tienen los diferentes dirigentes políticos que ocupan cargos electivos.

Es el caso de un diputado nacional proveniente de la provincia de Santiago del Estero cumple, en paralelo a sus tareas propias como legislador, un rol de "acelerar trámites", "mover expedientes". Por ejemplo, para ciudadanos santiagueños que deben hacer trámites en Buenos Aires, por ejemplo en el ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social). Si existen ciudadanos santiagueños que ya han tramitado pensiones no contributivas[5].

Que el pedido se haga por intermedio de un diputado nacional aumenta sus chances de realizarse con rapidez:

> "Claro, por eso, por eso te digo que tenemos nuestros beneficios nosotros. Viene una nota presentada por el diputado nacional, te fichan por supuesto, saben quién sos y apuran las cosas." (Diputado nacional)

De este modo, los dirigentes políticos continúan realizando las mismas tareas que los convirtieron en dirigentes territoriales y les permitieron acceder a un cargo electivo. Con la gran diferencia de que como representantes consagrados por el voto popular, adquieren nuevas credenciales que en general los valorizan como interlocutores legítimos para demandar y pedir respuestas a las diversas necesidades sociales y territoriales.

Como puede desprenderse de lo descrito, gran parte de la tarea política que desempeñan los dirigentes estudiados consiste en oficiar como mediadores de problemas individuales, "solucionar", "atender" demandas y pedidos concretos cuyos beneficiarios son personas

[5] Beneficio al que se accede principalmente por vejez, invalidez o por ser una madre con siete hijos o más

particulares. Ello parecería poner en cuestión la conceptualización de esta tarea en los términos de una relación de representación y parece acercarse al concepto clásico de clientelismo, que supone el establecimiento de una relación de naturaleza particularista.
Sin embargo, la observación de la actividad cotidiana de los dirigentes políticos estudiados muestra que otra gran parte de su actividad política gira en torno a temáticas que atañen a grupos sociales vastos, generalmente inscriptos en un territorio determinado.
A continuación, describimos esta doble naturaleza de la tarea de los mediadores y representantes políticos estudiados.

IV. Mediadores y representantes de demandas individualizadas y colectivas

Cuando los líderes políticos hablan sobre su actividad cotidiana siempre emerge una historia de una persona particular que tuvo un problema y cómo ayudaron a resolverlo (conseguir materiales para su vivienda, un remedio, un empleo, un cajón para velar a un familiar). Hemos podido observar cómo mucha gente los busca para pedirles solución de temas personales.
Más interesante aún ha sido observar cómo los mismos dirigentes políticos diferencian entre temas personales o individuales y temas sociales o colectivos, no tanto como reflexión teórica si no a los efectos prácticos de dar distintos tipos de respuesta a problemas de diferente naturaleza.
El trabajo de campo ha permitido observar cómo al lado de temas de índole individual o particular los lideres políticos se ocupan de muchos otros temas que involucran a grupos o personas con el mismo tipo de necesidades. Los dirigentes políticos encarnan demandas colectivas, generalmente territorializadas, de las cuales se vuelven sus portavoces. Por ejemplo, si bien muchas veces se ocupan de "acelerar trámites", "hacer gestiones" para una persona, también lo hacen para diferentes personas con el mismo tipo de necesidad.
Por ejemplo, una diputada provincial se ocupa -no tanto a título de diputada o en lo que compete su tarea formal como tal- tanto de la organización de un festival de pesca en su pueblo como de conseguir un medicamento especial para una niña con problemas neurológicos. Se ocupa de llevar las tazas y cucharones faltantes en un comedor de su pueblo, pero también de realizar los trámites necesarios para inscribir a las personas que lo necesitan en un programa para solicitar subsidios para microemprendimientos.
Otra diputada, una vez que llega al poder, se ocupará de los trámites necesarios para construir una terminal de ómnibus para su pueblo. Y a su vez, entre sus actividades principales, recordará haber conseguido una silla de ruedas especial para una niña, a través del ministerio de desarrollo social de la provincia; así como hacer trámites para que pinten una escuela en su pueblo. Son numerosas las obras que se han hecho en la ciudad de la que proviene: una escuela, viviendas, pavimentación de rutas, electrificación, tipos de obras que benefician al pueblo en su conjunto y que podrían llamarse "bienes colectivos".
En los casos mencionados, son obras que se consiguen gracias a la intermediación de la diputada ante los organismos correspondientes. Existen otro tipo de acciones que desdibujan el carácter privado-publico de su tarea, como por ejemplo, hospedar a los policías en su casa particular, para evitar que estos gasten en hospedaje. En estos casos, la naturaleza del rol de intermediación no es individual ni particularista pero tampoco puede ser aprehendido a través de la idea universal implicada en la noción de ciudadanía. Simplificando, podríamos decir que se encuentra en algún lugar "en el medio". El trabajo empírico nos fuerza a recrear la teoría.

La naturaleza "colectiva" de la tarea de representación de los líderes estudiados es especialmente visible en los casos en los que éstos se vuelven el eslabón de la cadena necesario para la implementación de políticas públicas.

Entre las actividades de los dirigentes políticos, es posible encontrar algunas que están directamente ligadas con la implementación de políticas nacionales o provinciales. Sin tener los dirigentes la potestad formal de oficiar como mediadores o gestores de estas políticas, muchos dirigentes desempeñan ese rol.

Entre las múltiples tareas desempañadas, un diputado provincial se ocupó de "hacer los trámites" necesarios para grupos de mujeres de su pueblo accedieran a la jubilación sin aportes, un beneficio otorgado por el gobierno nacional, a través de la reforma del sistema previsional en 2005, que también se conoció informalmente como jubilación "de amas de casa". [6]

La tarea del diputado consistió –y sigue consistiendo, ya que es una tarea permanente- en sacar el turno para realizar el trámite para un grupo de mujeres provenientes de su pueblo -y alrededores-, las que luego sólo debían ir a la dependencia estatal correspondiente para firmar la solicitud de la jubilación sin aportes. "*Lo único que hacían era venir esa vez y esperaban cobrar en su casa*". El diputado les evitaba así tener que estar presentes dos veces. Se trataba sobre todo de mujeres pertenecientes a sectores de bajos recursos y a su vez de edades avanzadas, mujeres del interior para quienes incluso pagar los medios para trasladarse a la capital provincial para hacer el trámite es dificultoso. En ese sentido, la tarea del diputado también consistió en procurar los recursos para trasladar a las que así se transformaron en beneficiarias de una política pública nacional. Al mismo tiempo, se facilitó la articulación con el gobierno provincial, que había estipulado un préstamo por el dinero necesario para iniciar el trámite.

El dirigente político construye así su capital territorial oficiando como intermediario en la implementación de una política nacional y provincial.

Lejos de tratarse de una excepción, este tipo de actividades son recurrentes. Los dirigentes políticos ofician como correas de transmisión de la información, transmitiendo sobre las características y requisitos de distintas políticas públicas que pueden tener como beneficiarios a diferentes grupos de personas, que en ocasiones incluso desconocen de la existencia de nuevos derechos adquiridos.

Otro ejemplo sobre cómo las actividades informales de los dirigentes políticos están imbricadas con programas sociales de más largo alcance es el del Banco Popular de la Buena Fe, conocido como el "banquito solidario". Se trata de un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que comienza en 2004 y consiste en el desarrollo de microemprendimientos individuales con pequeños créditos otorgables a partir de una garantía solidaria y su implementación se realiza a través de organizaciones no gubernamentales.

Una diputada ha impulsado la formación de una organización no gubernamental, con la cual ha podido participar de este programa social. De este modo, en su pueblo de origen promueve la reunión de grupos de personas que luego tienen la posibilidad de solicitar un crédito y, nuevamente, es la diputada la que le "hace el trámite". Es así como va conformando su base territorial, al "conseguir cosas" para la gente de su pueblo. Y al mismo tiempo garantiza que un programa social nacional se implemente a lo largo del territorio.

[6] Esta reforma permitía obtener un beneficio jubilatorio a aquellas personas que tenían la edad requerida para jubilarse pero le faltan años de aportes –que en total son 30-, con derecho al haber mínimo.

Si se indaga sobre las actividades de los dirigentes políticos por fuera de su cargo formal, es posible encontrar en muchos casos que encabezan organizaciones no gubernamentales, cooperativas, sociedades de fomento, a través de las cuales canalizan diversos recursos provenientes de organismos provinciales y nacionales.

El hecho de que las organizaciones lideradas por los dirigentes políticos no tengan el formato de organizaciones partidarias apoya la idea del declive de la burocracia partidaria, aquella organización partidaria por fuera del estado, como lo describe el proceso de transformación de los partidos en partidos de gobierno. A su vez, muestra la clara imbricación del tejido social con el tejido estatal. Podría describirse como un partido de gobierno con una profunda imbricación socio-territorial, vehiculizada por los integrantes del partido, los dirigentes territoriales.

Al mismo tiempo, si estos representantes encarnan no sólo demandas individuales y particulares sino que a su vez son un eslabón en la implementación de políticas dirigidas a un público amplio, la caracterización de los vínculos del partido de gobierno como un partido clientelar es susceptible de cuestionamiento o al menos de revisión. Los partidos, en su nuevo formato, continúan siendo los representantes de colectivos sociales y territoriales, de un modo que debe ser estudiado empíricamente.

V. Palabras finales

La evidencia empírica presentada está claramente ligada a una estructura socioeconómica y una configuración política particular, en la que el rol del estado es central. En ese sentido, el rol que cumplen los miembros del partido oficialista está claramente signado por estas peculiaridades.

En términos teóricos, sin embargo, las reflexiones presentadas invitan a dimensionar ciertos análisis generales que visualizan el fin de la inserción social y territorial de los partidos políticos. El estudio sobre las formas en que los dirigentes políticos logran acceder a un cargo político, así como las actividades que realizan luego en el poder, son reveladores en ese sentido.

Si bien la actividad en los medios de comunicación consume gran parte de la tarea política de muchos dirigentes en nuestras democracias, vale la pena estudiar e indagar sobre otros aspectos no visibles de su actividad. Asimismo, si bien la exposición y performance de los candidatos en los medios de comunicación es muchas veces definitoria en los procesos electorales, el examen de lo que sucede fuera de los medios no debería ser desechado sin más.

De este modo, multiplicar las herramientas teórico-metodológicas permitirá realizar diagnósticos políticos complejos que tengan en cuenta diversos aspectos de los partidos políticos y nos provean de un mejor entendimiento de lo que sucede en nuestras democracias contemporáneas.

Bibliografía

Bourdieu, P. (1981). La représentation politique: éléments pour une théorie du champ politique. *Actes de la recherche en sciences sociales* 36-37.

Briquet, J.-L. y Massicard, É. (2010). Éditorial. *Politix. Revue des sciences sociales du politique* 92 (23).

Cheresky, I. (2006). *La Política después de los partidos.* Buenos Aires: Prometeo.

Cheresky, I. (2007). *Elecciones presidenciales y giro político en América Latina.* Manantial: Buenos Aires.

Cheresky, I. (2009). *Las urnas y la desconfianza ciudadana en la democracia argentina.* Rosario: Homo Sapiens.

De Luca, M.; Jones, M. y Tula, M.I. (2002). Back Rooms or Ballot Boxes?: Candidate Nomination in Argentina. *Comparative Political Studies* 4 (35).

Freidenberg, F. y Alcántara Sáez, M. (2009). *Selección de candidatos, política partidista y rendimiento democrático*. Tribunal Electoral del Distrito Federal, Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto de Iberoamérica. México.

Jones, M.P., Saiegh, S.M., Spiller, P.T. y Tommasi, M. (2002). Amateur legislators-Professional Politicians: The Consequences of Party-Centered Electoral Rules in Federal Systems. *American Journal of Political Science* 3 (46).

Katz, R. y Mair, P. (1997). *Party System Change, Approaches and Interpretations*. New York: Oxford University Press.

Katz, R. y Mair, P. (2009). The cartel party thesis revisited. *Perspectives on Politics* 7 (4) .

Kitschelt, H. y Wilkinson, S. (2007). Citizens-politician Linkages: An Introduction en Kitschelt, H. y Wilkinson, S. (eds.). *Patrons, Clients, and Policies. Patterns of Democratic Accountability and Political Competition*. Cambridge: Cambridge University Press.

Laclau, E. (2007). *La razón populista.* Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Lagroye, J. y Offerlé, M. (2010). *Sociologie de l'institution*- Paris: Éditions Belin.

Levitsky,S. (2003). *Transforming Labor-Based Parties in Latin America. Argentine Peronism in Comparative Perspective.* Cambridge: Cambridge University Press.

Lodola, G. (2009). La estructura subnacional de las carreras políticas en Argentina y Brasil. *Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales* 194.

Maidana, F. (2010). *El ascenso y el descenso de los dirigentes del Partido Justicialista (P.J.) en los cargos de gobierno durante los años 1995-2005. Relaciones entre políticos y la política en Salta con J.C. Romero*, Universidad Nacional de Salta.

Manin, B. (1998). *Los principios del gobierno representativo.* Madrid: Alianza Editorial .

O'Donnell, G. (2006). Otra Institucionalización. *Revista Ágora* 5.

Offerlé, M. (2011). Los oficios, la profesión y la vocación de la política. *PolHis. Boletín Bibliográfico Electrónico del Programa Buenos Aires de Historia Política 7.*

Ortiz de Rozas, V. (2011). *El gran elector* provincial en Santiago del Estero (2005-2010). Una perspectiva desde adentro de un "oficialismo invencible" *Revista de la Sociedad Argentina de Análisis Político* 2 (5).

Ortiz de Rozas, V. (2011a). Las formas de reclutamiento del personal político, una vía de entrada al estudio del régimen político provincial. Santiago del Estero (1999-2009) *Revista Perspectivas de Políticas Públicas* 1.

Ortiz de Rozas, V. (2012). Política provincial y liderazgos de popularidad territorial. Los "aparatos" o "máquinas políticas", un asunto de representación política. en Cheresky, I. y Annunziata, R. (comps.) *Sin programa, sin promesa. Liderazgos y procesos electorales en Argentina*. Buenos Aires: Prometeo.

Rosanvallon, P. (2007). *La contrademocracia*. *La política en la era de la desconfianza*, Buenos Aires: Manantial.

Scherlis, G. (2009). "El partido estatal estratárquico de redes. Apuntes sobre organización política en la era de los partidos no representativos" en Cheresky, I. (comp.). *Las urnas y la desconfianza ciudadana en la democracia argentina.* Rosario: Homo Sapiens.

¿Partido oficial o actor relegado? El PJ y el PT durante el gobierno de Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva

Dolores Rocca Rivarola

I. Introducción: El proceso de conformación del oficialismo en la Argentina de Kirchner y el Brasil de Lula

I.I Brasil: Tres momentos del PT: fundación, transformaciones y elecciones de 2002

El PT se funda en el último tramo de la dictadura brasilera exhibiendo una amplia heterogeneidad inicial (Ottmann, 2006; Telles, 2006; Samuels, 2004; Palermo, 2003). El nuevo partido agrupaba a activistas marxistas, miembros de la comunidad católica vinculada a la teología de la liberación -*Pastoral da Terra* y *Pastoral Operaria*, por ejemplo-, intelectuales, líderes sindicales y de movimientos sociales. Esa heterogeneidad resultó en un partido con una variedad de corrientes de opinión que terminaron siendo reglamentadas en su interior, es decir, aceptadas institucionalmente como sectores diferenciados dentro del partido y pudiendo competir y tener representación propia en las instancias de toma de decisión (Freire de Lacerda, 2002). Una de esas tendencias –*Articulação*- conformó, generando distintas alianzas con sectores minoritarios, un *campo majoritário* que le permitió controlar al partido durante varios años a partir de los noventa. Pero *Articulação* no era sólo la tendencia mayoritaria dentro del partido, sino aquella organizada en torno a Lula. Y la figura de Lula no era la de un mero dirigente partidario o conductor de una tendencia, sino la de un líder que iba adquiriendo una popularidad y un apoyo electoral que iba mucho más allá del partido, y que podía ser explotado para tejer una alianza amplia que se aglutinara centralmente en torno a su liderazgo, incluso con fuerzas reticentes al PT.

El largo proceso previo de transformaciones –tanto organizativas como discursivas y programáticas– llevadas a cabo en el PT durante la presidencia del partido de José Dirceu es central para entender la reconfiguración de la imagen pública de Lula en la campaña de 2002. El proceso de viraje transformación interna del PT ya desde la década del noventa, incluyó una moderación del discurso político, una flexibilización de la política de alianzas, una transformación del perfil socio-económico de la base del PT, una autonomización de los liderazgos ejecutivos y legislativos respecto del partido, entre otros fenómenos –analizados todos ellos por trabajos como Palermo (2003), Power (2008), Guidry (2003), Freire de Lacerda (2002), Coggiola (2003) Ottmann (2006) y Meneguello y Amaral (2008). La tendencia a la que pertenecía Lula, *Articulação*[1], también impulsaría con éxito una reforma organizativa con vastas repercusiones sobre el funcionamiento interno del PT y su composición: el establecimiento desde 2001 del sistema de elecciones directas o PED

[1] Freire de Lacerda (2002: 61) define a *Articulação* como una especie de gran centro petista, con fuerte presencia sindical, y con una diversidad interna similar a la existente dentro del partido como un todo.

[*Processo de Eleições Diretas*] para la designación de autoridades partidarias. El PT pasó así de la realización de prolongados congresos de debate y discusión con delegados para la selección de sus autoridades partidarias a elecciones internas una vez cada dos años con la participación de todos sus afiliados.

¿Cómo llegaba entonces el PT a la campaña presidencial de 2002? Algunos autores (Rubim, 2003; Knoop, 2003; Goldfrank y Wampler, 2008) subrayan los esfuerzos de Lula por exponer su "conversión" durante la campaña electoral. La alianza con el Partido Liberal (PL) y la designación de uno de sus dirigentes –el empresario y senador José Alencar- como candidato a vicepresidente de Lula era ya por sí misma todo un símbolo. La alianza con el PL, que no se tradujo en el apoyo –en términos de campaña, alianzas y candidaturas– de aquel partido a Lula en todos los Estados de Brasil, originó una marcada resistencia en algunos directorios estaduales del PT. Otro signo claro de que la campaña de 2002 planteaba cambios decisivos en los postulados del PT es la *Carta Ao Povo Brasileiro,* lanzada por el equipo de coordinación de campaña en junio de 2002 como compromiso con ciertas pautas de política económica liberal (leyes de "responsabilidad fiscal", superávit, el pago de la deuda externa, cumplimiento de los contratos y mantenimiento de la relación con el FMI). La carta fue presentada en un contexto en el que, según Rubim (2003: 4), desde los mismos medios de comunicación se habría procurado constantemente extraer de los candidatos promesas de continuidad con la política económica vigente. Asimismo, el procedimiento de presentación pública de la carta omitió las instancias de discusión al interior del PT.[2] Lo ocurrido con la carta expresaba la aguda tensión que marcaba al PT en 2002, entre la necesidad, por un lado, de mostrar a ciertos actores del mundo financiero que un gobierno de Lula no significaba una ruptura amenazante para ellos, y, por otro lado, el perfil y base electoral y militante histórica del PT. La campaña lulista de 2002 sería, asimismo, una campaña profesionalizada y transitada a partir de una lógica mucho más mediática que militante (Goldfrank y Wampler, 2008), especialmente en comparación con las campañas previas del PT (1989, 1994, 1998): *Spots* televisivos, apariciones muy ensayadas, actos de campaña musicales [*comícios*] y actividades proselitistas organizadas especialmente para su filmación como publicidad.[3]

En la segunda vuelta electoral confluyeron en un apoyo al candidato del PT fuerzas políticas que poco antes habían competido contra éste como el Partido Socialista Brasilero (PSB) , el Partido Democrático Laborista (PDT), el Partido Laborista Brasilero (PTB), lo cual no garantizaba que todos los directorios estaduales de esas fuerzas desarrollaran esfuerzos militantes efectivos para ampliar el desempeño electoral de Lula en el *ballotage:* varios de ellos manifestaron apoyo a Serra o prescindencia en la segunda vuelta.

Lula llegaría al poder en 2002, por lo tanto, con un PT profundamente transformado, diluyéndose algunas de esas cualidades que lo habían colocado como una excepción al resto del espectro partidario, por un lado, y recibiendo un enorme caudal de votos dirigidos a Lula que no se traducían en un capital electoral semejante para los candidatos del partido para las cámaras o en los Estados y municipios brasileros.[4]

Para la formación de su primer gabinete, Lula rompería con lo que Telles (2006) considera una tradición histórica en Brasil: la negociación de los cargos ministeriales con las demás

[2] Según varios entrevistados petistas (Vítor, Baltasar, Josué), aquella carta primero se había lanzado públicamente desde la coordinación de campaña de Lula, y después había sido aprobada como hecho consumado por las autoridades del PT.

[3] El documental *Entreatos* exhibe esos rasgos propios de la campaña de 2002.

[4] Por supuesto ello no niega un crecimiento sostenido del PT desde su fundación hasta 2002 en términos de votos propios en las localidades y a nivel nacional.

fuerzas. De esa manera, se conformaría un gabinete mayoritariamente formado por el PT mismo, con 13 ministerios. Otras siete carteras fueron distribuidas entre sus aliados (una para cada uno), y los restantes ministerios (cinco) fueron asignados a figuras sin filiación partidaria ("independientes"). Esta fórmula inicial, restringida a las bases de apoyo de los comicios de 2002 contrastaba con las carencias del oficialismo en la escena parlamentaria y demostraría su corta vida, a medida que el espacio político del PT en el gobierno fuera viéndose más reducido.

A nivel parlamentario, el oficialismo resultante de las elecciones de 2002 iniciaba su gestión con un formato de poder lánguido. Como resultado de las elecciones de 2002, quedaba configurada una coalición parlamentaria débil (Sallum, 2003: 6), que evidenciaba la necesidad acuciante de nuevos aliados[5]. Comparando la composición del Congreso con el gabinete de ministros de Lula, se observaba un PT mucho más influyente en el gobierno que en el Parlamento.

El escenario se tornaba más adverso tomando en cuenta que el PT sólo tenía tres gobernadores propios sobre un total de 27[6], y no controlaba muchos de los gobiernos estaduales de mayor peso (que estaban en manos del PSDB y el PMDB). Ello, en un país en el que el vínculo con los gobernadores de los estados parecía fundamental, en línea con la idea de que las escenas políticas regionales eran un factor importante, en Brasil, para el armado de coaliciones nacionales (Santos y Vilarouca, 2008: 69).

El gobierno se orientó, a través de la figura de José Dirceu[7] -que se transformaría en un articulador fundamental del conjunto oficialista-, a buscar aliados como el PMDB (amplio conglomerado fragmentado y heterogéneo) y el Partido Prorgesista (PP) –algunos de cuyos líderes habían integrado la dictadura militar. Asimismo, algunos legisladores de otros sellos partidarios que no estaban dentro de la base oficialista migrarían hacia sellos como el PTB y el PL, que sí lo estaban. Luego del primer año de gobierno, Lula ya contaba con una base oficialista que representaba 3/5 de la Cámara de Diputados (Santos, 2005).

I.II Argentina: las redes disgregadas del PJ

En Argentina, al momento de la elección de Néstor Kirchner como presidente, el peronismo organizado se encontraba desde hacía años en una profunda fragmentación que Arzadun (2008) denomina un estado de "feudalización interna", cuyo punto

[5] La base parlamentaria oficialista en la Cámara de Diputados estaba compuesta, a cuatro meses de iniciado el mandato de Lula, por el PT, el *Partido Socialista Brasileiro* (PSB), el *Partido Democrático Trabalhista* (PDT), el *Partido Comunista do Brasil* (PCdoB), el *Partido Popular Socialista* (PPS), el *Partido da Movilização Nacional* (PMN), el *Partido Verde* (PV), el *Partido Trabalhista Brasileiro* (PTB) y *Partido Liberal* (PL). Entre todos, y agregándose algunos diputados del PMDB que estaban negociando su ingreso al oficialismo, sumaban 253 miembros sobre un total de 513, no llegando así al mínimo de 308 votos requeridos, por ejemplo, para aprobar reformas en la Constitución -se necesitaba esa cantidad y en dos votaciones en cada una de las cámaras- (Sallum, 2003: 6). La situación en el Senado era aún más delicada: de un total de 81 escaños, la base oficialista contaba con sólo sólo 32 senadores. Y las dos fuerzas de oposición, el *Partido da Social Democracia Brasileiro* (PSDB) y el *Partido do Frente Liberal* (PFL, luego devenido DEM) sumaban 30 senadores.

[6] Los únicos tres estados en los que el PT consiguió elegir gobernador en 2002 eran Acre, Piauí y Mato Grosso do Sul. Perdía, a su vez, el gobierno local en estados en los que venía gobernando, como Rio Grande do Sul y Rio de Janeiro. En este último caso, Benedita da Silva, vicegobernadora de Garotinho, había asumido en su lugar cuando éste dejó la gobernación para postularse como candidato a presidente por el PSB en un frente electoral con otros sellos partidarios.

[7] Dirceu había sido presidente del PT desde 1995 y durante el primer gobierno de Lula ocupó el cargo de jefe de la casa civil, hasta que las denuncias sobre el denominado "Mensalão" derivaron, en 2005, en su renuncia.

culminante fue justamente 2003 (con tres candidatos presidenciales referenciados en el peronismo: Néstor Kirchner, Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saa). Había experimentado, asimismo, dos décadas de intensa transformación en términos de sus bases electorales y de su modo de funcionamiento interno, sobre todo a partir del avance, a mediados de los años ochenta, de la fracción denominada "renovación peronista"[8] y luego, a partir del gobierno de Carlos Menem y el consecuente debilitamiento de los sindicatos, tanto en términos de su rol en las políticas públicas, como de su espacio y margen de acción en la relación de fuerzas dentro del PJ. Este último fenómeno ha sido denominado por Gutiérrez (1998) como "desindicalización" del PJ. Esa declinación del peso del sindicalismo en la toma de decisiones dentro del justicialismo tendría lugar paralelamente a cambios en el funcionamiento del partido, especialmente, a partir de la derrota en las elecciones presidenciales de 1983. Si una fuente esencial de recursos para el PJ había provenido hasta entonces de los fondos controlados por los sindicatos, en los años ochenta, los dirigentes justicialistas accederían a una base de financiamiento alternativa: los fondos estatales, producto de la victoria en varias elecciones ejecutivas municipales y provinciales desde 1983 (Levistky, 2003: 109). De ese modo, según Levitsky (2003), las agrupaciones peronistas –agrupamientos territoriales que nucleaban varias Unidades Básicas, la organización de trabajo político de base por excelencia del peronismo– proliferarían al margen tanto del movimiento sindical como de las autoridades partidarias, con esta nueva clase de recursos estatales y siendo directamente funcionales a la construcción territorial del gobierno nacional y los gobiernos locales peronistas.

En los últimos años del gobierno de Menem y el breve período de gobierno de De la Rúa asistimos a un escenario de competencia entre distintos polos provinciales de poder dentro del peronismo, sin que ninguno pudiera imponerse sobre los demás, en esa feudalización antes mencionada (Arzadun, 2008: 70). En palabras de Leiras, después de 1999, "con Menem fuera de la presidencia y Duhalde derrotado [por De la Rua en elecciones de ese año], el peronismo se convertía en un archipiélago de organizaciones de distinto tamaño y capacidad de movilización" (Leiras, 2007: 156).

Eduardo Duhalde, antecesor de Kirchner, había sido designado presidente en enero de 2002 por la Asamblea Legislativa (reunión de ambas cámaras del Congreso) -y no por el voto directo del electorado-, en el marco de una crisis económica, política y social inédita en la historia argentina, que puso en cuestión las bases mismas del sistema de representación política en el país, e incluyó la caída del presidente Fernando De La Rúa (20 de diciembre de 2001). Duhalde asumió después de una sucesión de otros tres presidentes en menos de 15 días. Sólo algunos meses después, el 26 de junio de 2002, el asesinato por parte de la policía bonaerense de dos manifestantes piqueteros durante la represión de una protesta en el puente Pueyrredón, en la localidad de Avellaneda, aceleraría los tiempos políticos. El presidente interino anunciaba, luego del episodio represivo, la decisión de adelantar las elecciones y acortar así su mandato. Luego de un desfile de precandidatos –Carlos Reutemann, Manuel De la Sota– que, por distintos motivos según el caso, fueron descartados, el presidente se inclinaría, sólo tres meses antes de los comicios, por respaldar a otro dirigente, Néstor Kirchner, que había iniciado ya una tímida campaña

[8] El peronismo renovador ha sido objeto de numerosos análisis (Aboy Carlés, 2001; Podetti, Ques y Sagol, 1988; Altamirano, 2004; Mc Adam, 1996; Levistky, 2003). La dirigencia renovadora se proponía trazar una distancia manifiesta respecto de los sectores que habían controlado el partido desde la muerte de Perón, sin que ello significara quedar marginada de la estructura partidaria. Con vistas a ese objetivo, recurriría a una reivindicación nada nueva: autodefinirse como el verdadero peronismo.

pero con vistas a su mera instalación en la escena electoral bajo el objetivo de un eventual triunfo recién en 2007.

Hasta entonces, Néstor Kirchner contaba con un escaso peso político en la estructura del PJ (Camou, 2004: 33) y era poco conocido a nivel nacional (Cheresky, 2004a: 8). Su precandidatura era lanzada en enero de 2003 bajo el sello "Frente para la Victoria", desde la quinta antiguamente perteneciente a Juan Domingo Perón en la localidad de San Vicente, provincia de Buenos Aires –todo un símbolo de respaldo de gran parte del PJ bonaerense, que se encolumnaba detrás de Duhalde y del candidato elegido por éste. Poco después del anuncio de aquel respaldo por parte del presidente interino, los niveles de "intención de voto" a Kirchner crecían notoriamente.

Gran parte de la campaña de Kirchner transcurrió en el conurbano bonaerense, valiéndose de las redes territoriales peronistas afines a Duhalde para instalar al candidato a través de diversos actos proselitistas y una campaña marcada por el intento de asociación de la figura de Kirchner a los intendentes locales. Al igual que Lula, Kirchner llevó adelante algunas tácticas previas a las elecciones, aunque éstas no tenían el objetivo unívoco que había procurado el PT brasilero de atraerse el voto de centro sino más bien mostrar, por un lado, continuidad con la gestión de Duhalde en términos económicos (promesa de mantener al entonces ministro de economía, Roberto Lavagna, por ejemplo), y, por otro, lograr un enfrentamiento de lógica binaria con el candidato mejor posicionado, Carlos Menem, para poder enfrentarlo en una segunda vuelta electoral.

Kirchner finalmente obtendría un magro 22,24% en la primera vuelta, quedando en segundo lugar. Habiendo ganado la primera vuelta electoral con un 24,45%, Menem se rehusó a competir en el *ballotage*, consciente de antemano de su segura derrota por amplio margen dado el aglutinamiento de votos en su contra, que según las encuestas superarían el 60%.

Una vez en el poder, Kirchner contaba con un sostén parlamentario precario, en alguna medida "hipotecado", dado que parte de los legisladores provenientes del PJ necesarios para lograr mayorías parecían responder más al liderazgo de Duhalde que al de su apadrinado político. Sin embargo, a medida que Kirchner cosechaba altos niveles de aprobación en la opinión pública se producía un progresivo alineamiento de legisladores y de su voto en el Congreso en torno a las iniciativas presidenciales (Cheresky, 2004a: 10). En diciembre de 2003, el presidente tenía un nivel de aceptación del 77% (Observatorio Electoral Latinoamericano).

Para las elecciones legislativas de octubre de 2003 Kirchner procuraría instalar candidatos afines a su liderazgo en las listas del PJ en varias provincias[9]. En varios casos, esa opción se presentaba en oposición con lo que entonces era el peronismo oficial (es decir, el que controlaba el sello PJ o gobernaba) en cada uno de esos distritos. En otros, respaldaba a candidatos peronistas oficiales (es decir, que gobernaban) contra figuras impulsadas por los dirigentes que habían enfrentado a Kirchner en las presidenciales de 2003 (Menem y Rodríguez Saa). Luego de las elecciones legislativas y para gobernadores de 2003 –posteriores a las presidenciales–, Kirchner contaba con 16 gobernadores identificados como dentro del peronismo (a los que se le sumaba el apoyo no peronista al presidente por parte de los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de Corrientes); y bloques oficialistas cómodamente mayoritarios en el Congreso. De ese modo, comenzaba a consolidarse el apoyo de las redes peronistas a su gobierno, aunque no la unidad y

[9] Una de ellas fue Misiones, donde el gobernador saliente, Carlos Rovira, creó el Frente Renovador y derrotó al otro candidato peronista, Ramón Puerta, quien a la vez era apoyado por Duhalde (Cheresky, 2004b: 57).

unanimidad al interior de éstas. Las elecciones de 2005 –en las que una porción del peronismo bonaerense se enfrentó con la otra, que acompañaba la candidatura a senadora de Cristina Fernández de Kirchner– constituirían una evidencia de esa disgregación y también del carácter precario del alineamiento de una parte del peronismo bonaerense al presidente.

El primer gabinete de Néstor Kirchner no exhibía una composición caracterizada por criterios similares al de Lula. Los ministros no estaban ahí necesariamente en tanto representantes de las fuerzas políticas que habían apoyado a Kirchner –es decir, como producto de una distribución de cargos entre las fuerzas políticas de la alianza de gobierno– sino en tanto figuras de confianza del presidente (Alicia Kirchner, su hermana; Julio De Vido, proveniente del peronismo de Santa Cruz; Alberto Fernández, dirigente de peso en su estrategia de instalación presidencial; y, en menor medida, Gustavo Béliz[10]); en tanto dirigentes con continuidad respecto del gobierno de Duhalde (Roberto Lavagna, Aníbal Fernández, Ginés González García); o en tanto dirigentes sin peso al interior de las estructuras peronistas pero con buena imagen ante el electorado (Rafael Bielsa, Daniel Filmus).[11]

A la hora de caracterizar el proceso de constitución del oficialismo kirchnerista, hacer un abordaje del mismo en términos de "partidos" que lo integraron sería forzar los términos dado que el kirchnerismo fue nutriéndose con la llegada de dirigentes y grupos provenientes de distintos partidos, contasen o no con el apoyo formal de éstos. En muchos casos, se trató de fracciones de esos sellos partidarios que no se constituyeron como un partido separado (caso de lo que fue denominado por la prensa como "radicalismo K" y "socialismo K"). También de grupos numerosos de dirigentes y militantes que expresaban su apoyo a Kirchner sin que su partido de origen lo hiciera. Era el caso de Graciela Ocaña y Fernando Melillo, ambos provenientes del ARI, por ejemplo. Asimismo, varios espacios y redes que se incorporaron al oficialismo lo hicieron bajo sellos electorales cambiantes o surgidos incluso como tales con posterioridad a esas incorporaciones (Compromiso K, Partido de la Victoria, etc.).

El propio sello electoral asumido como propio por el presidente Kirchner, el Frente para la Victoria (FPV) iría representando una diversidad de realidades políticas a lo largo de su gobierno. En una ecuación que fue mutando al ritmo de las oscilaciones en la popularidad de Néstor Kirchner, el FPV fue: a) una de las tres manifestaciones del peronismo, en las elecciones presidenciales de 2003; b) un frente bonaerense formalmente opuesto al sello PJ, aunque compuesto por gran parte del peronismo organizado de la provincia de Buenos Aires, en las elecciones legislativas de 2005; c) un conglomerado bonaerense que incluía como actor de peso al PJ organizado pero también a otros sectores por fuera del PJ y en pugna con aquel sello en varios distritos al interior de la provincia, en las elecciones de 2007. Este tipo de fenómenos constituye una manifestación de la pérdida de peso de los nombres de los partidos en tanto condicionantes del voto y en tanto instituyentes de identidades ligadas a la propia organización partidaria, como ocurría en el pasado.

Durante gran parte de la presidencia de Néstor Kirchner, el PJ, fuerza de la que provenía el propio presidente, permanecería intervenido formalmente y acéfalo. No funcionaría

[10] Según Leiras (2007), quien se basa en relatos de prensa de la época, Kirchner había sido uno de los impulsores de la candidatura de Béliz para la ciudad de Buenos Aires en 1996.

[11] Ese contraste entre el primer gabinete de Lula y el de Kirchner se inscribía, en realidad, en un patrón más general de los gabinetes en Brasil, denominado "presidencialismo de coalición", en el que el presidente distribuía ministerios entre las fuerzas aliadas o dispuestas a apoyarlo, y se granjeaba así una mayoría parlamentaria (Limongi y Figueiredo, 1998).

propiamente como partido ni siquiera en los aspectos formales más básicos. Recién en 2008, una vez finalizado el mandato de Néstor Kirchner e iniciado el gobierno de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, se iniciaría un proceso que fue denominado por los propios actores "normalización del PJ" o "reorganización del PJ", y mediante el cual el ex presidente asumiría la conducción formal del partido. Los resultados y repercusiones a mediano plazo de ese proceso, sin embargo, no fueron los esperados por quienes habían promovido que Kirchner fuera su presidente (no se produjo una revitalización organizativa y del funcionamiento partidario).

Las redes territoriales y grupos de dirigentes que componían el PJ, esa estructura paralizada en términos formales por la intervención judicial, tampoco parecían sentir que el presidente los reconociera como sujeto hegemónico dentro de ese conglomerado nacional oficialista que incluía, en lugares clave, a dirigentes provenientes originalmente del FREPASO, la Democracia Cristiana, la UCR, el ARI. Otro elemento complicado de digerir para las redes y espacios dirigenciales referenciados como PJ fue el tipo de apelaciones al electorado que comenzó a ser esbozado por Néstor Kirchner una vez en el gobierno, abandonando la simbología y liturgia peronista en sus actos, campañas electorales e incluso en sus discursos.[12] Y más allá de la apelación y el discurso, el modo de funcionamiento, en la práctica, del oficialismo kirchnerista dejaba a las redes justicialistas en un lugar difícil y distinto al que podría imaginarse como producto de la llegada al poder de un dirigente proveniente del PJ. Sidicaro (2010) describía ese relegamiento del PJ durante el gobierno de Kirchner hablando de un "gobierno de líder sin partido" (Sidicaro, 2010:256).

II. La propia definición de las organizaciones: El PT y el PJ

¿Cómo definían los entrevistados del PT y del PJ a su propia organización? ¿Cómo presentaban su propia historia? Estos interrogantes guiarán las reflexiones desde aquí, que se centrarán en el siguiente argumento: los contrastes entre esas definiciones de ambos países se vinculaban con las interpretaciones que los entrevistados hacían de las transformaciones que habían sufrido sus partidos y el estado presente de los mismos en términos de dos aspectos: disciplina interna –qué implicancias tenía pertenecer al partido– y raigambre o trabajo territorial –el modo en que los entrevistados interpretaban el presente y pasado de sus respectivas organizaciones reflejaba la necesidad de resaltar el peso propio pero a través de modalidades distintas de gravitación (para el PT, el ser una referencia de la izquierda en América Latina; para el PJ, un peso territorial considerado inigualable).

II.I Fracciones internas y disciplina partidaria

En el documental *Entreatos* (2004), en el que el director, João Moreira Salles, logra una presencia casi constante en los entretelones de la campaña de Lula en 2002, una frase del candidato presidencial ilustra la forma en que la tendencia mayoritaria del PT, *Articulação* (luego devenida "Construindo um novo Brasil" o CNB), se concebía a sí misma dentro del

[12] Distintos autores han analizado este fenómeno. Entre ellos, puede consultarse a Altamirano, entrevistado en Natanson (2004). Para el caso de la provincia de Buenos Aires, Rodríguez (2005).

partido. Lula se encuentra en la peluquería y mientras se le está cortando el pelo, da una entrevista a un programa de radio por teléfono: "Nosotros escribimos una carta en junio [se refiere a la denominada *Carta Ao Povo Brasileiro*] donde dijimos que honraríamos los compromisos externos". ¿Quién constituye el "nosotros" para Lula en esa afirmación? Retóricamente, está refiriéndose al partido. Sin embargo, la carta de la que habla, que generó una nutrida resistencia dentro del PT, y que contravenía lo decidido en el último Encuentro Nacional del partido en Recife a fines de 2001, no fue consensuada o debatida, según los distintos entrevistados, en los espacios institucionales del PT antes de darse a conocer. Entonces ¿Quién es el "nosotros" en realidad? ¿Su propia tendencia dentro del PT, *Articulação*? ¿El espacio más amplio denominado *Campo Majoritário*[13], que aquella hegemonizaba? ¿El núcleo más restringido de campaña, compuesto por José Dirceu, Antonio Palocci, Luis Gushiken, el publicista Duda Mendonça, y otras figuras? ¿O el propio Lula en tanto líder que, como vimos, trascendía al PT y podía, así, imponer una nueva línea política?

Estos interrogantes cobran relevancia dada la forma en que la tendencia *Articulação* se concibió a sí misma históricamente en torno al PT. Entre los entrevistados del PT que no pertenecían a aquella tendencia (y eran de otras, o no se ubicaban en ninguna en particular) aparece la idea de que *Articulação* siempre (desde el manifiesto de los 113) se supuso a sí misma "el PT". No una parte del mismo, sino el todo. Es decir, al constituirse tempranamente como sector mayoritario, y aglutinada como tendencia detrás de la principal figura del partido, *Articulação* tendía a apropiarse de la identidad del PT frente al resto de las tendencias que lo conformaban. Mediante aquella operación de absorción de la representación del partido, esa tendencia se pretendería a sí misma con legitimidad para, durante años, transformar el modo de funcionamiento interno del PT, y, posteriormente, reformular drásticamente la campaña presidencial de 2002 e incluso el plan de gobierno del candidato presidencial, desconociendo lo anteriormente resuelto en las instancias formales del partido. Y una vez en el gobierno, esos patrones se profundizarían. Baltasar, militante de la tendencia Democracia Socialista dentro del PT, sostenía, en este sentido, que se trataba de una mayoría tan cristalizada que, en aquel período, llegó a perder "capacidad de mediación con otros sectores del partido". Y "entonces, las reuniones de la Dirección del PT eran, en la práctica, reuniones de afirmación de las posiciones de esa mayoría. No había debate, era presentación [de los informes de cada área del gobierno] y votación" (Entrevista con Baltasar, militante del PT de Río de Janeiro).

Esa consolidación de un sector como mayoría a lo largo de varios años contrastaba con las características del Partido Justicialista, que en los relatos de los entrevistados aparecía como una estructura oscilante a través del tiempo en su contenido ideológico y en las fracciones que lo controlaban o que predominaban en él (peronismo "ortodoxo" luego de la muerte de Perón, "renovador" a partir de mediados de los años ochenta, "neoliberal" durante el gobierno de Carlos Menem, o el autodenominado peronismo "nacional y popular" durante el gobierno de Kirchner). Pero más allá de esos vaivenes en la identidad del Partido Justicialista, era la cuestión desarrollada antes para el caso del PT –el efectivo control que logró *Articulação* sobre el partido antes y durante el gobierno de Lula- la que postulaba un punto relevante para la comparación, en términos de las autodefiniciones que aparecen en las entrevistas al PJ y PT: la disciplina interna.

[13] *Articulação* conducía el denominado *Campo Majoritário*, conglomerado que incluía a otros grupos y se presentaba unido en las elecciones de autoridades partidarias.

En Brasil, el funcionamiento de la disciplina al interior del partido se veía con claridad en 2003, con la expulsión del partido de legisladores –como Heloisa Helena, Luciana Genro y João Batista Araújo (Babá)- que habían mostrado sistemáticamente una oposición a medidas del gobierno Lula como el impulso de una reforma provisional, resistida por varios sindicatos, especialmente el de los trabajadores estatales. Ese proceso, y también las posteriores salidas voluntarias del PT de algunos grupos liderados por dirigentes como Ivan Valente, Chico Alencar y Plínio de Arruda Sampaio en 2005, ilustran una característica que distinguía al PT del PJ: quienes se convertían en oposición clara y sistemática al gobierno de Lula, se retiraban del partido, y hasta formaban uno nuevo o se unían a él después. Por supuesto, podía haber disidencia con el gobierno de Lula dentro del PT, pero esta disidencia podía desarrollarse al interior del partido, y no constituirse en una plataforma pública de una tendencia partidaria contra el gobierno. Y, además de tener límites estatutarios en torno a sus comunicaciones abiertas a la sociedad, las tendencias no podían tener sedes propias en los barrios o territorio, en las que desarrollaran una línea política en tanto tendencias de cara a la sociedad.

En el PJ, en Argentina, ante una situación semejante de oposición, las cosas funcionaban, desde el retorno democrático, de otra manera. La confrontación pública, desde sectores del PJ, con un gobierno cuyo presidente provenía del mismo partido no derivaba en expulsiones formales o desafiliaciones.[14] Así lo afirmaba Levitsky (2003) al examinar las agrupaciones peronistas ya durante los años noventa: las agrupaciones -y dentro de ellas, las unidades básicas (UBs)- abiertamente opositoras al gobierno de Menem no sólo permanecían abiertas y funcionando como organizaciones territoriales sino que seguían reivindicándose como parte del partido con cuyo rumbo disentían. El disenso con un gobierno formalmente apoyado por el Partido Justicialista no implicaba una salida formal del partido de dirigentes o redes;[15] no derivaba en una expulsión, ni siquiera una desafiliación voluntaria. Tampoco significaba necesariamente terminar alineándose con aquel gobierno con un criterio de disciplina. Más bien se observaban situaciones de disidencia y confrontación pública, usando una variedad de sellos a la hora de la competencia electoral, pero reivindicándose estos disidentes como peronistas (o incluso solía ocurrir que se denominaran "los verdaderos peronistas").[16] Y el período del gobierno de Néstor Kirchner fue paradigmático en ese sentido. El propio Kirchner impulsaría en 2005 la competencia de un sello propio –Frente para la Victoria– contra la sigla PJ a nivel provincial, lo que generaría la paradoja de que una parte mayoritaria de las redes territoriales del PJ en la provincia de Buenos Aires (redes aglutinadas por los intendentes de cada distrito) se presentaran en una lista opositora a la que formalmente iba bajo la denominación Partido Justicialista, constituida por los sectores que apoyaban a Duhalde en su disputa con Kirchner.

Estas escenas políticas, cada vez más difíciles de desentrañar para quien intente analizar el panorama de cada elección siguiendo el desempeño y posicionamiento político de la sigla

[14] Una excepción había sido el "Grupo de los 8", legisladores que en 1990 se separaron del bloque justicialista en disenso con las políticas del gobierno de Menem y años más tarde fundaron el partido Frente Grande (hoy sin caudal electoral propio y diluido dentro del FPV).

[15] A diferencia de las agrupaciones del PJ, las tendencias petistas debían obedecer las resoluciones del Directorio Nacional y de los Encuentros Nacionales del PT.

[16] En las elecciones legislativas de 1985, por ejemplo, Antonio Cafiero, dirigente bonaerense de la fracción renovadora, presentaría una lista por fuera del PJ (en ese momento, dominado por otra fracción), y con el nombre de Frente de Renovación para la Justicia, la Democracia y la Participación (FREJUDEPA). Con ella, obtendría más votos que Herminio Iglesias, candidato que llevó el sello Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), sello que había usado el mismo Perón en 1973.

PJ, exhibían entonces un contraste marcado con la significación que tenía para los dirigentes y militantes del PT la sigla del propio partido (más allá del peso efectivo que pudiera tener esa misma sigla para el electorado, que es otra cuestión). Si los disidentes al interior del peronismo permanecían formalmente en el partido –no se desafiliaban– no era sólo porque pudieran, sino también porque permanecer formalmente adentro del PJ –afiliado o al mando de una UB abierta-, no significaba, en el contexto argentino de los últimos años, lo mismo que en el PT en términos de obligaciones partidarias, o de vida interna de la fuerza. Todos se reivindicaban peronistas, y sin embargo eso no significaba una participación o militancia en el marco de una estructura partidaria que funcionara como tal. Entonces la decisión de permanecer o desafiliarse carecía de sentido práctico, especialmente teniendo en cuenta que ese sello (PJ) podía en un futuro tener un rumbo político más afín a ese sector que en ese momento se sentía desencantado con la política del gobierno.

En el PT, en cambio, permanecer en el partido significaba participar de elecciones internas cerradas para las autoridades partidarias, acatar lo que estas instancias partidarias decidían luego, participar de los congresos periódicos, etc. Y en términos de representación parlamentaria, permanecer en el PT era incompatible en la práctica con un voto sistemático contra las políticas de gobierno o con la formación de un bloque separado en las Cámaras. Todos estos significados prácticos estaban ausentes para los miembros del PJ que se oponían a las políticas de Kirchner y a su control de gran parte de las redes identificadas con el sello. No es que el bloque legislativo oficialista en Argentina no constituyera una unidad. Pero un legislador díscolo podía ser expulsado o alejarse del bloque (no del partido) e incorporarse a otro o crear uno, como el denominado "Peronismo Federal", sin que eso tuviera un correlato a nivel del partido.

Durante el gobierno de Néstor Kirchner, asimismo, dentro del bloque oficialista ("Frente para la Victoria"), que incluía a legisladores provenientes del PJ, de otras fuerzas o sin filiación, no había un subconjunto de legisladores del PJ que funcionaran como un bloque partidario, que organizaran un voto común a partir de una decisión en el seno del partido, como sí sucedía en el PT. Ese contraste en términos de la disciplina partidaria se observaba también en los relatos de los entrevistados, como por ejemplo entre Javier y Salvador, del PJ, y Pedro, por otro lado, del PT:

> Javier: Nosotros decimos, el que gana conduce y el que pierde, acompaña. Pero no sucede. A veces el que pierde se va, y hace una alianza con otro partido. Pero no es lo que tiene que ser. No es lo correcto. Si se pretende tener… lo que pasa es que, un partido político tiene que tener una serie de condiciones, de requisitos elementales, como para decir, somos esto… cuando no se sabe bien qué somos, como ha pasado muchas veces con el peronismo, y que me gustaría que en eso trabajemos de aquí en más, pasan estas cosas. (Entrevista N º 16 en Argentina. Segunda entrevista a Javier, militante del PJ de Matanza).

> Salvador: Con esta vieja lógica de que el Partido Justicialista es un movimiento, no un partido, entonces tiene distintas expresiones e interpretaciones históricas y coyunturales respecto de qué es el peronismo y qué es ser peronista hoy. (Entrevista N º 32 en Argentina. Salvador, dirigente del PJ en la zona norte del conurbano bonaerense).

> Pedro: En el reglamento partidario está claro, cuando hay un debate, está abierto... pero si hay una decisión de la cuestión por parte del PT, vos te sometés a lo que el partido decidió. [...] El PT tiene un reglamento, [...] que establece lo siguiente: el bloque [*parlamentario del PT*] no es una instancia de decisión, sino de representación. Entonces el bloque discute, decide, pero cuando hay una cuestión partidaria, el bloque se tiene que reunir con la Ejecutiva [*autoridad del PT*] de su distrito y tomar una decisión conjunta. [...] Cuando se cerró el tema, el bloque tiene que votar de acuerdo con aquello que fue decidido. Eso es el PT, no todo el bloque [*oficialista*], no los otros partidos. Cada partido es de una forma. El PT funciona así. Cuando no respetás esa decisión estás sujeto a ser sancionado. (Entrevista N º 9 en Brasil, Pedro, concejal del PT en San Pablo).[17]

Esas reglas de funcionamiento y esta mayor disciplina interna observada en el PT, de todos modos, no significaban que en la práctica los efectivos niveles de activismo de base de esas tendencias se mantuvieran idénticos a los del pasado, lo cual nos lleva al próximo elemento a observar en las autodefiniciones: la imagen del presente de ambos partidos y su relación con las transformaciones previas.

II.II Presente y pasado del PT y del PJ según sus protagonistas

Tanto el PT como el PJ habían sufrido transformaciones previas a la llegada de Lula y Kirchner al poder. En el primer caso, los entrevistados hacían referencia espontánea a esas transformaciones y a cómo las mismas habían incidido sobre la vida militante del partido a nivel de las bases, pudiéndose observar en estos actores una tensión implícita entre su imagen del PT en el presente y su recuerdo de lo que el partido solía ser. En el caso del PJ, aun habiendo también sufrido transformaciones, sus entrevistados no hacían referencia a las mismas en sus relatos y concebían a su propia organización resaltando su inserción y aceitado trabajo territorial, caracterizando al mismo como inalterado. Los petistas, en cambio, reconociendo que las transformaciones sufridas por el partido habían afectado esa dinámica de base en los barrios, resaltaban también el peso de su propio partido, pero no en términos de su gravitación o inserción territorial sino en tanto referencia de la izquierda en América Latina, y en tanto partido que había sobrevivido la crisis de los partidos de izquierda luego de la caída del socialismo en Europa del Este.

A pesar de aquella noción, ya analizada antes, de una efectiva disciplina interna dentro del PT, existía en los entrevistados petistas una tensión, durante el gobierno de Lula, entre la vida organizativa y de base tradicional e histórica de la organización, por un lado, y las nuevas lógicas políticas y de desarrollo de campañas electorales que lo caracterizaron desde 2002. Esa tensión era palpable, por ejemplo, en el modo en que varios entrevistados del PT enfatizaban el carácter supuestamente militante –y de activismo en las calles– de la campaña presidencial de aquel año cuando, en la práctica, esa forma de hacer proselitismo había ido perdiendo terreno y peso, como vimos antes, frente a la lógica más mediática y profesionalizada que terminó prevaleciendo en aquella campaña petista. El relato de Teresa, del PT de Río de Janeiro, era ilustrativo de esa tensión. Teresa resaltaba la

[17] Esta concepción de Pedro se basa en el propio reglamento del PT. Roma (2006) interpreta el mismo como portador de la idea de que el parlamentario debía sujetarse a las decisiones y orientaciones de los directorios para sus propios posicionamientos.

intensidad del trabajo de base desarrollado por el partido a través de los núcleos ("en completa efervescencia"), primeros contactos con las casas, y que componían "zonales" (*zonais*), vinculados éstos ya con la dirección municipal. Pero luego reconocía que ya no cubrían los barrios enteros con ese tipo de militancia puerta a puerta, que en Argentina recibía el nombre de "rastrillaje". Sin dudar, por supuesto, de la voluntad y compromiso cotidianos de Teresa con el partido, su retrato del PT era mucho más afín con la tradición pasada de construcción política de base que éste consiguió forjar que con la situación que sus mismos compañeros partidarios delineaban para el presente. Y su descripción de un PT aún fuerte en el activismo barrial a través de los núcleos[18] difería sustancialmente de la que planteaban otros entrevistados del partido en el mismo distrito, que percibían diferencias significativas con el pasado en términos de la construcción política de base del partido. Veamos dos ejemplos:

> Virgílio: Antiguamente había núcleos, estaban los periódicos del PT, que eran como organismos de reunión, tenían una vida muy activa, muy activa. Hoy no hay nada. Las direcciones regionales [*direcciones por región, por barrio*] son un chiste, no funcionan. [...] Entonces el PT es una inmensa cáscara vacía en tanto estructura orgánica. La dirección nacional, la dirección estadual, la dirección municipal, que funcionan mal, al menos funcionan. Son instancias de poder. Pero no hay vida orgánica de debate entre la militancia.
> (Entrevista N º 27 en Brasil. Virgílio, militante histórico del PT de Río de Janeiro sin cargos en el partido al momento de la entrevista).
>
> Baltasar: Hasta la década del '90 había una vida común entre las tendencias en los núcleos de base, de hacer un debate político desde la situación del barrio hasta la dirección nacional.
> Dolores: ¿Y eso cambió?
> Baltasar: Cambió mucho.
> (Entrevista Nº 24. Segunda realizada a Baltasar, dirigente del PT en RJ)

Esa puja entre lógicas tradicionales y otras nuevas revelaba una tensión implícita entre lo que el partido solía ser y lo que era al momento de las entrevistas (o más bien, durante el primer gobierno de Lula). Esta cuestión se reiteraba en las distintas entrevistas a militantes y dirigentes del PT. Aunque las preguntas no apuntasen a esa tensión,[19] la misma aparecía espontáneamente de todos modos en las entrevistas. Estos distintos entrevistados coincidían, en gran medida, en la naturaleza de esos cambios. En primer lugar, la afluencia de afiliaciones masivas pero no resultantes en un vínculo político fuerte con el partido, especialmente debido a la instauración de las elecciones directas o PED para la designación de autoridades partidarias. En palabras de Baltasar,

[18] Los *núcleos de base* empezaron como pequeños grupos de personas (desde 21) que podían organizarse por barrio, por lugar de trabajo, por categoría de trabajo, o por movimiento social. Según Guidry (2003) no funcionaban como células de un partido de izquierda, trasmitiendo las directivas de las autoridades a la base sino que se convirtieron en cuerpos consultivos, discutiendo –aunque sin posibilidad de imponer desde abajo- asuntos de relevancia para el partido (Guidry, 2003: 91) y concibiéndose como una forma de ligar al partido con la sociedad y con los movimientos sociales (Amaral, 2010a; Roma, 2006).

[19] Las preguntas de las entrevistas se centraban más bien en momentos históricos (distintas elecciones, llegada de Lula al poder, denuncias del Mensalão, reelección, etc.) y cómo habían sido vividos por los entrevistados.

> Baltasar: En 2001 la elección de las direcciones partidarias, desde tener lugar en los Encuentros del partido, pasa a ser una elección directa. Entonces lo que tenías en la construcción...necesariamente el núcleo se tenía que reunir, hacer el debate, elegir los delegados en una instancia municipal, en fin, todo ese proceso desaparece. Lo que tenés ahora es una elección directa en un día en el que todos los afiliados aparecen. Obvio que eso no viene solo. Por un lado, incorporás en el proceso de decisión de la elección al conjunto de afiliados y no sólo a los delegados al Congreso. Pero por otro lado, alterás lo que era el perfil del afiliado al partido. Pasás a tener una porción muy significativa de afiliados cuyo compromiso es sólo cada dos años elegir a la dirección. Significa que pasás a tener cualquier tipo de afiliado. Es un proceso de estímulo a las afiliaciones en masa, hechas de formas absurdamente indiscriminadas. [...] Podés ir al PED porque sos realmente una persona petista, socialista, etc. [...] Pero también podés ser del PT porque sos mi vecina o estás casada conmigo y yo te pedí que fueras al PED, y te llevo para que votes por mí, independientemente de cualquier debate político que puedas tener. Y sos electora del PT. (Entrevista N º 24 en Brasil. Segunda entrevista a Baltasar, dirigente del PT-RJ).

Mientras que, para los sectores que controlaban el partido, el PED era visto como un avance en la democratización interna, que le daba voz al conjunto de afiliados para decidir sobre sus propias autoridades, para los entrevistados de otros grupos del partido, el nuevo sistema había introducido una serie de dinámicas nocivas para la construcción política y para la vida organizativa del PT.

Una de ellas era una relación cada vez más directa entre líderes (tanto nacionales como locales) y afiliados, reduciéndose el peso y presencia de los militantes más politizados –a los que un entrevistado, Virgílio, llamaba "sargentos" y otro, Einar, denominaba "mediatura". Ese cúmulo de militantes estaba perdiendo, según los entrevistados, su tradicional función de actor intermedio entre los otros dos sectores (afiliados menos politizados y líderes o cúpulas nacionales y locales). Esa transformación, entonces, según los entrevistados, iba de la mano de una pérdida de la capacidad militante, de una declinación del funcionamiento cotidiano de las organizaciones de base, como los núcleos,[20] lo cual facilitaba una transformación desde arriba de la línea del partido.

Otro cambio que era resaltado en las entrevistas –y que ya hemos visto que ha sido analizado por distintos trabajos (Samuels, 2004; Roma, 2006; Freire de Lacerda, 2002; Hunter, 2007)– era el que refería al viraje de las posiciones políticas del partido. En las interpretaciones de los entrevistados, ese cambio había tenido repercusiones para la identidad del partido. Baltasar, dirigente del PT en Río de Janeiro, describía ese giro como un "rebajamiento ideológico". Einar, ex militante petista y, al momento de la entrevista,

[20] Amaral (2010b) enumeraba, con datos provistos por el propio PT, la cantidad de núcleos de base del partido que había en cada ciudad en el Estado de San Pablo en 2010. Podríamos interpretar esas cifras como una muestra de que los núcleos habían dejado de ser grupos por barrio o lugar de trabajo, como lo eran en los años ochenta, y como los definía Guidry (2003). En 20 ciudades del Estado de San Pablo había sólo un núcleo por ciudad. Las ciudades con más núcleos eran Diadema, Mauá y San Pablo (68, 48 y 28, respectivamente). El resto tenían entre dos y cuatro por ciudad (14 ciudades). Los entrevistados sostenían, vale recordar, por otro lado, que los núcleos existentes habían disminuido la intensidad y frecuencia de su actividad.

dirigente local del PSOL paulista, lo denominaba un "rebajamiento programático". Y Vítor, dirigente del PT en San Pablo, lo caracterizaba como "un proceso de empobrecimiento ideológico y teórico muy grande en el PT en los últimos diez años". Las lecturas que los entrevistados hacían sobre ese giro suscitaban en ellos mismos una pregunta difícil. En palabras de Vítor: "¿Hasta qué punto el PT podía moderarse sin sufrir una *descaracterização* [concepto que podríamos traducir como una dilución de su identidad]?[21]

Significativamente, como ya fue advertido, la mención y descripción de las transformaciones acontecidas en el partido en los años noventa sólo tenía lugar en las entrevistas a militantes y dirigentes en el PT. Los entrevistados del PJ, en cambio, se limitaban a insinuar contrastes con el pasado en términos del nivel de compromiso y participación, como lo hacía Maxi, que sostenía que "hay muy poco peronista que se interese… el militante en sí está en extinción", pero porque la misma sociedad se había vuelto menos participativa (Entrevista N º 21 en Argentina. Maxi, militante del PJ en La Matanza). Pero no hacían referencia a las transformaciones sufridas por el PJ en los años noventa. ¿Acaso esa omisión se debía a que muchos de ellos habían vivido la década menemista (momento histórico de profundización de las transformaciones al interior del peronismo) siendo también oficialistas, es decir, apoyando aquellas políticas de gobierno que habían perjudicado, por ejemplo, a la histórica base social del partido, los trabajadores? Lo cierto es que la cuestión de las transformaciones previas del propio partido y el origen de las mismas era un tema recurrente en los relatos de los petistas, mientras que estaba ausente en los entrevistados justicialistas. [22] Mientras que, entre los petistas, la cuestión de las transformaciones previas del partido aparecía espontáneamente para referirse al estado presente del PT y a sus problemas, los entrevistados del PJ, especialmente los de La Matanza, concebían un presente que no parecía requerir referencias a cambios previos.

Entonces, más allá de esas breves evocaciones del pasado antes citadas, la manifestación más generalizada entre los entrevistados del PJ era la de un presente con un funcionamiento aceitado del trabajo político territorial del partido. Campañas electorales muy organizadas donde las tareas se dividían en "subcomandos" de militantes. El "rastrillaje" (visitas domiciliarias en los distintos barrios del distrito) como método proselitista. Pintadas en las paredes de las calles, que cubrían el distrito entero –e incluso que diariamente tapaban las pintadas opositoras, en una suerte de diálogo donde el PJ local le mostraba a la oposición su propia imbatibilidad a través de la gran desproporción de visibilidad entre las pintadas de unos y otros. Todo ello formaba parte de la autoconcepción de estos militantes y dirigentes, de la forma en que presentaban lo que consideraban un aspecto fundamental de la solidez del partido: su peso territorial. Él relato de Salvador, dirigente de un PJ local, era bien ilustrativo de ese foco:

[21] La definición de la palabra *descaracterizar* en portugués es "Anular el carácter de algo, hacer que pierda sus características" (Diccionario Mini Aurélio, 2008. Traducción propia).

[22] Esa omisión podría explicarse, en los relatos de los entrevistados del PJ, por la tendencia a hablar poco de la década del noventa (años en los que muchos de ellos también habían sido oficialistas, y que Kirchner había demonizado en su gobierno), pero también se relaciona con la concepción que los entrevistados tenían respecto del PJ de su localidad, La Matanza. Para ellos el PJ en el distrito había funcionado en forma aceitada todos esos años y con mecanismos de proselitismo bien consolidados, casi sin cambios. Los entrevistados del PT, en cambio, introducían ellos mismos como tema en las entrevistas las transformaciones del PT desde los noventa, como intuyendo que ese proceso era un tema de interés para los académicos (y, de hecho, lo ha sido, existiendo numerosos trabajos sobre esos cambios, algunos de los cuales han sido citados).

> Salvador: Esa máquina PJ, que sirve para fiscalizar una elección, para armar una campaña electoral, pegar afiches, pintar paredes, repartir volantes, todo lo que normalmente es una campaña. […] Yo, en términos políticos, no voy a entregar al peronismo, que dentro de seis meses lo van a necesitar para que fiscalice la elección. (Entrevista N º 32 en Argentina. Salvador, dirigente del PJ en la zona norte del conurbano bonaerense)

En ambos casos, PT y PJ, por lo tanto, a partir de lecturas diferentes sobre el estado presente de sus respectivos partidos, los entrevistados enfatizaban reiteradamente el gran peso de su respectiva organización, aunque refiriéndose a distintas modalidades de esa gravitación.

En las entrevistas del PT aparecía recalcada una noción del partido como referente de la izquierda de América Latina, e incluso más allá de la región. Se resaltaba así su crecimiento desde el momento de su fundación, hasta incluso haber podido alcanzar el poder en 2002; su amplia heterogeneidad; y el hecho de no haber perdido caudal electoral como consecuencia de los cambios estructurales antes mencionados que sí habían perjudicado, según los entrevistados, a otros partidos de izquierda en el mundo. Así lo definía Gaspar, por ejemplo, dirigente del PT de Río de Janeiro: "Incluso con la flexibilización de los programas y de las alianzas, el PT aún es el gran partido de izquierda de Brasil". (Entrevista N º 30 en Brasil. Segunda entrevista a Gaspar, dirigente del PT-RJ). O Vítor, dirigente en San Pablo: "Hay algunos trabajos que explican que partidos semejantes al PT, por ejemplo en Europa, que fueron fundados en ese mismo período, se hundieron. El PT, en cambio, no se hundió sino que amplió su fuerza social, consiguiendo acompañar el proceso de mutación de su base social". (Entrevista N º 15 en Brasil. Vítor, dirigente del PT de San Pablo)

En cambio, en las definiciones entre los entrevistados del PJ sobre su propio partido en el presente predominaba la idea de un peso territorial propio único en el contexto argentino, indisputable por parte del resto de las fuerzas políticas, y que no había disminuido con el tiempo. Ésa era la ventaja comparativa del PJ, aquello que seguía -según los entrevistados- definiéndolo, y hasta distinguiéndolo de las demás fuerzas políticas, a pesar de todas las transformaciones y crisis que hubiera vivido Argentina. En el PT, siendo visible una idea de la pérdida parcial del enraizamiento territorial y del activismo de base del partido, se volvía entendible que no fuese el énfasis en el propio peso territorial lo que predominaba en esas entrevistas. Entre los entrevistados del PJ, en cambio, la noción de que era su propio partido el que poseía la mayor estructura partidaria y construcción territorial del país condicionaba el resto de sus descripciones y definiciones. En esas definiciones de otras fuerzas y organizaciones, el criterio del peso territorial –Unidades Básicas, militantes, recursos materiales, y hasta fiscales propios para supervisar una elección– le daba al PJ, según la visión de sus entrevistados, una cierta legitimidad, tanto de cara a la sociedad como al presidente, a la hora de insinuar que pretendían un lugar más importante para el peronismo dentro del oficialismo.

III. Observaciones finales

Este artículo ha analizado el modo en que los entrevistados del PT y del PJ definían a sus propias organizaciones durante los gobiernos de Lula (primer mandato) y Kirchner. Se ha argumentado que los contrastes entre esas autodefiniciones del PT y del PJ tenían que ver con cómo los entrevistados interpretaban las transformaciones que había sufrido su

propio partido en los años precedentes, y el estado presente de los mismos en términos de dos aspectos: disciplina interna y raigambre territorial.

El primer aspecto, la disciplina interna, se perfilaba como una diferencia sustantiva entre el PJ y el PT, en términos de qué implicaba en la práctica, para legisladores, dirigentes y militantes, pertenecer al partido. En ambos casos, por supuesto, estamos ante fuerzas políticas de amplia heterogeneidad interna, en las que los grupos predominantes no necesariamente representaban las mismas ideas que el resto de las fracciones internas. Sin embargo, la disciplina interna, el mantenimiento de una unidad formal y práctica a lo largo de los años entre las distintas corrientes internas había sido una característica propia del PT, en el que la corriente dominante (el denominado *Campo Majoritário*) lo había sido durante décadas. El PJ, en cambio, aparecía, en los relatos de los entrevistados, como una estructura oscilante en su relación de fuerzas y, por lo tanto, en las identidades públicas que había portado (peronismo ortodoxo, renovador, neoliberal, nacional y popular). Y en ese marco histórico, pertenecer al PJ tenía implicancias mucho más laxas que pertenecer al PT. La pertenencia formal al PJ (tener una unidad básica propia en el territorio, por ejemplo) significaba, hacía tiempo, muy poco en términos de obligaciones partidarias o de vida interna. Los dirigentes que se postulaban como opositores acérrimos al gobierno podían reivindicarse peronistas y permanecer formalmente en el PJ sin tener que militar en el marco de una estructura partidaria que funcionara como tal. Podían seguir afiliados y esperar a que, en un futuro gobierno también de origen peronista, ellos mismos se convirtieran en la fracción dominante. En el PT, en cambio, la pertenencia al partido significaba la participación de elecciones de autoridades internas, el acatamiento de lo que esas autoridades decidieran, y la imposibilidad de constituirse como abiertos opositores, desde dentro del partido, a una gobierno petista. Estas dos caracterizaciones contrastantes quedaban delineadas en el modo en que los propios entrevistados del PJ y del PT definían a sus organizaciones.

Por otro lado, un núcleo recurrente de las definiciones de entrevistados del PJ y del PT sobre su propia organización era el énfasis en el gran peso propio de ésta. Pero ese énfasis se refería a modalidades distintas de gravitación. Y esa diferencia tenía que ver, a su vez, con la lectura que los entrevistados hacían sobre la historia de sus partidos, las transformaciones que habían sufrido y el estado de los mismos en el presente. En el caso del PT, prevalecía entre los entrevistados la noción de un deterioro de la vida partidaria militante de base debido a las transformaciones del partido. Esas transformaciones incluían la desaparición de muchos núcleos, que eran los círculos de organización basista del partido; la realización cada vez más esporádica de reuniones internas de la militancia de base; el desarrollo de campañas políticas cada vez menos protagonizadas por militantes y más orientadas a los medios de comunicación masiva y llevadas adelante con empleados pagos –*cabos eleitorais*–; la introducción de las elecciones directas de autoridades, y de otros mecanismos que reducían el peso de los militantes politizados en la relación entre líderes y afiliados no militantes. Se perfilaba así una tensión, en los relatos de los entrevistados, entre lo que los petistas recordaban de la vida organizativa y de base tradicional e histórica de la organización, por un lado, y las nuevas lógicas políticas y de desarrollo de campañas electorales que lo caracterizaron desde 2002. En línea con esa lectura de un partido transformado, los entrevistados enfatizaban la grandeza del PT, pero no tanto en términos de presencia y funcionamiento del activismo de base sino como referente de la izquierda en América Latina (e incluso más allá de la región), y como partido de izquierda que había sobrevivido, a diferencia de otros similares, a la crisis post-caída del socialismo real en Europa sin perder caudal electoral.

En Argentina, los entrevistados del PJ, por su parte, aparecían menos dispuestos a analizar los cambios internos sufridos por el partido en los años previos y se limitaban a insinuar contrastes con el pasado en términos del compromiso y la participación de la gente en política. Convencidos del propio peso del PJ en comparación con el resto de los actores del espacio partidario oficialista (e incluso de fuerzas políticas opositoras), estos entrevistados –especialmente los del PJ de La Matanza– resaltaban el desarrollo territorial como el sello distintivo del partido, desarrollo visto por ellos como intacto con el paso del tiempo. Definían al PJ sistemáticamente en términos de un funcionamiento aceitado del trabajo político y territorial, y como el único garante efectivo de fiscales para una elección, de unidades básicas en los barrios para llegar a todo el electorado, etc. Sus otras definiciones (en torno a su rol dentro del oficialismo y en torno a otros actores oficialistas) aparecían incluso mediadas por esa visión del propio partido, y por ese criterio de desarrollo territorial.

Bibliografía

Aboy Carlés, G. (2001). *Las dos fronteras de la democracia argentina. La reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem*. Rosario: Homo Sapiens.

Altamirano, C. (2004). 'La lucha por la idea': el proyecto de la renovación peronista. en M. Novaro y V. Palermo *La historia reciente. Argentina en democracia.* Buenos Aires: Edhasa..

Amaral, O. (2010a). Adaptação e resistência: o PT no Governo Lula entre 2003 e 2008. *Revista Brasileira de Ciência Política (RBCP)* 4, octubre.

Amaral, O. (2010b). *As transformações na organização interna do Partido dos Trabalhadores entre 1995 e 2009*. Doutorado em Ciência Política. UNICAMP.

Arzadun, D. (2008). *El peronismo: Kirchner y la conquista del reino.* Buenos Aires: Sudamericana.

Camour, A. (2004). ¿Bipartidismo, 'bialiancismo' o partido dominante? El gobierno de Kirchner y la renovación del sistema de partidos en la Argentina. *Anuario Social y Político de América Latina y el Caribe*. FLACSO/UNESCO/*Nueva Sociedad* Año 7.

Cheresky, I. (2004a). Cambio de rumbo y recomposición política. Néstor Kirchner cumple un año de gobierno. *Nueva Sociedad* 193. Septiembre-Octubre.

Cheresky, I. (2004b). De la crisis de representación al liderazgo presidencialista. Alcances y límites de la salida electoral de 2003" en I. Cheresky e I. Pousadela *El voto liberado. Elecciones 2003: perspectiva histórica y estudio de casos.* Rosario: Homo Sapiens.

Coggiola, Osvaldo (2003). "La crisis en el PT de Brasil", *En Defensa del Marxismo*, Año 11, N º 31, Agosto, Buenos Aires, Ediciones Rumbos.

Freire de Lacerda, A. D. (2002). O PT e a Unidade Partidária como Problema. *DADOS. Revista de Ciências Sociais* 1 (45).

Goldfrank, B. y Wampler, B. (2008). From petista way to Brazilian way: how the PT changes in the road. *Revista Debates* 2 (2). Julio-diciembre.

Guidry, J.A. (2003). Not just another labour party. The workers' party and Democracy in Brazil. *Labor Studies Journal* 1 (28). Primavera.

Gutiérrez, R. (1998) Desindicalización y cambio organizativo del peronismo argentino, 1982-1995 *XXI International Congress of the Latin American Studies Association (LASA).* Chicago.

Hunter, W. (2007). The Normalization of an Anomaly: The Workers' Party in Brazil. *World Politics* 59: 440-75.

Knoop, J. (2003) El Brasil con Lula ¿Más de lo mismo? *Nueva Sociedad* 187. Septiembre-Octubre.

Leiras, M. (2007). *Todos los caballos del rey. La integración de los partidos políticos y el gobierno democrático de la Argentina 1995-2003.* Buenos Aires: Prometeo.

Levitsky, S. (2003). *Transforming Labor-Based Parties in Latin America. Argentine Peronism in Comparative Perspective.* Cambridge: Cambridge University Press.

Limongi, F. y Figuereido, A. (1998). Bases institucionais do presidencialismo de coalizão. *Lua Nova: Revista de Cultura e Política*: 44.

Mc Adam, A. (1996). *Cafiero. El renovador*. Buenos Aires: Corregidor.

Meneguello, R. y Amaral, O. (2008). "Ainda novidade: uma revisão das transformações do Partido dos Trabalhadores no Brasil", *BSP Occasional Papers,* Oxford.

Natanson, J. (2004). *El presidente inesperado*. Rosario: Homo Sapiens.

Ottmann, G. (2006). Cidadania mediada. Procesos de democratização da política municipal no Brasil. *Novos Estudos:* 74. Marzo.

Palermo, V. (2003) El PT desde la oposición al gobierno y las gestiones de Fernando Henrique Cardoso en V. Palermo (comp.) *Política brasileña contemporánea. De Collor a Lula en años de transformación.* Buenos Aires: Siglo XXI.

Podetti, M.; Ques, M. E.; Sagol, C. (1988) El lugar de la democracia en el discurso del peronismo renovador. *Crítica y Utopía:* 16.

Power, T. (2008). Centering Democracy? Ideological Cleavages and Convergence in the Brazilian Political Class en Power, T. y Kingstone, P. (eds.) *Democratic Brazil Revisited*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Rodríguez, D. (2005). Nuevas formas políticas y cambios en el Peronismo. *Séptimo Congreso Nacional de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP).* Córdoba.

Roma, C. (2006) Organizaciones de partido en Brasil: El PT y el PSDB bajo perspectiva comparada. *América Latina Hoy*: 44.

Rubim, A.C. (2003) Cultura e política na eleição de 2002: as estratégias de Lula presidente. *XII Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação (COMPÓS)*. Recife/PE.
Sallum Jr., B. (2003). Brasil. De la continuidad al cambio. *Nueva Sociedad:* 184. Marzo-abril.

Samuels, D. (2004). From Socialism to Social Democracy: Party Organization and the Transformation of the Workers' Party in Brazil. *Comparative Political Studies*: 9 (37).

Santos, F. y Vilarouca, M.G. (2008). Political Institutions and Governability from FHC to Lula en T. Power (editor) *Democratic Brazil Revisited*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Santos, R. (2005). Crise no Brasil: esquerda e política em tempo recente. *Nueva Sociedad*: 200. Noviembre-diciembre.

Sidicaro, R. (2010). *Los tres peronismos, estado y poder económico.* Buenos Aires: Siglo XXI.

Telles, H. (2006). La política brasileña después de las elecciones presidenciales. *Presentación en el Instituto Gino Germani (UBA).* 12 de octubre.

Documentales

Entreatos. [Documental] João Moreira Salles. Brasil: Video Filmes, 2004.

Cambios en la vida política argentina y la constitución de los liderazgos de Carlos Menem (1989-1995) y Néstor Kirchner (2003-2007)[1]

Darío A. Rodríguez

Sólo algún trasnochado podría negar, o ignorar, que las democracias de nuestro tiempo se han visto reconfiguradas al calor de todo un proceso de transformaciones en sus formatos representativos. Esto lo asumimos como una constatación, a esta altura, autoevidente. La constitución de lazos personalizados, la desagregación de las clásicas identidades partidarias, la emergencia de electorados fluctuantes son fenómenos que se reproducen más allá de nuestros límites nacionales y regionales, e imprimen bajo una nueva forma el despliegue de la política democrática de nuestro tiempo. Pero asimismo, es cierto también que los cambios en curso se manifiestan con diversa intensidad según las características que definen a los diferentes escenarios nacionales, e incluso, según las variadas geografías locales que los componen. En este sentido, el caso argentino se distingue, en sintonía con las realidades de otros países latinoamericanos -y a diferencia de las viejas y consolidadas democracias desarrolladas-, primero, por una particular convivencia entre el despliegue de estas nuevas formas y la recurrencia de severas crisis políticas; y a su vez, por la constitución de liderazgos políticos[2] de corte personalista y decisionista como salida de estas críticas coyunturas[3].

De este modo, el interés que anima el presente trabajo es el intento de repensar la constitución de estos liderazgos políticos, en situaciones de crisis, en el marco del proceso

[1] Cabe aclarar que en este trabajo presentamos un conjunto de reflexiones preliminares sobre el curso de este proceso. Para un análisis más detallado ver Rodríguez (2012).

[2] Entenderemos la idea del "liderazgo político" fundamentalmente como un tipo de lazo político establecido entre los representantes y los representados, mediante la acción de institución de líderes entendidos como "figuras representativas". De este modo, nos alejamos de las perspectivas psicologistas, y aquellas ancladas abiertamente en la corriente de la teoría de la elección racional, de peso notorio en los estudios anglosajones sobre el fenómeno del liderazgo, para pensar este concepto en estrecha relación con la idea de la representación política. Esto supone, en apretada síntesis, pensar la acción de los líderes mediante la interpelación y creación de un público de referencia, considerando también, por otra parte, las formas de expresión y manifestación que protagoniza la ciudadanía movilizada. Para un mayor desarrollo sobre la mirada propuesta para pensar teóricamente el fenómeno del liderazgo, ver Rodríguez (2012: 34).

[3] Es evidente que los conceptos de personalismo y decisionismo aparecen asociados a la hora de pensar un tipo de liderazgo definido por su escaso apego a las formas institucionales establecidas. No obstante, creemos que el ejercicio conceptual de poder diferenciar ambos términos es necesario. Muy brevemente, entenderemos aquí la idea del personalismo en función de su inscripción en una nueva era de lo político signada por la crisis de los partidos tradicionales y la *massmediatización* del espacio público; mientras que el concepto de decisionismo lo reservaremos, específicamente, para designar una idea de lo político en tanto capacidad de innovación y (re)composición de un orden sobre la base de nuevos principios y sentidos. A su vez, es evidente que ambos términos pueden acarrear riesgos en términos de la vigencia de los marcos institucionales presentes en todo régimen democrático, pero la atención de estos rasgos no debe llevarnos a la reducir los conceptos aludidos a la mera presentación de sus posibles consecuencias.

de mutación de los vínculos representativos que experimentó la democracia argentina en las últimas décadas. Para ello empezaremos revisando el proceso general de cambios en su vida política, indagando las particularidades que definen a los nuevos liderazgos. Luego, a modo de ilustración de dicho proceso, nos concentraremos en el análisis de cómo emergieron los liderazgos presidenciales de Carlos Menem (1989-1995) y Néstor Kirchner (2003-2007) sobre la base de los particulares escenarios de crisis que marcaron el origen de sus respectivas gestiones[4]. Volveremos aquí sobre el estudio del peronismo, presentando el proceso de cambios que experimentó esta fuerza en los últimos tiempos, y delinearemos después, aunque sea en gruesos trazos, las continuidades y rupturas entre ambos liderazgos. A modo de cierre, introduciremos algunas ideas sobre el lugar que le cabe a estos líderes en nuestros regímenes políticos, indagando en qué medida los mismos se revelan como una solución y/o problema frente a las crisis políticas que han asolado a nuestro país en las últimas dos décadas.

Distintas presunciones de carácter general organizan el presente trabajo. Primero, destacamos el lugar central que ocupan estos liderazgos en el despliegue de la vida democrática en tanto los mismos ostentan de forma renovada una notable capacidad de institución de aquellos vínculos representativos que definen la inscripción de los ciudadanos en su comunidad política. Segundo, identificamos un nuevo tipo de liderazgo distinto de los modelos del pasado y sostenemos que tanto el liderazgo presidencial de Carlos Menem, como el de Néstor Kirchner, representan ilustraciones patentes de este formato emergente. Y por último, remarcamos que si bien es posible identificar claros elementos de continuidad entre ambos liderazgos, también podemos señalar importantes puntos de quiebre que creemos se explican por los fenómenos en curso que canalizó -y las nuevas formas políticas que potenció- la crisis que acabó con el gobierno de la Alianza en diciembre de 2001[5].

I. Cambios en la vida política: ¿Qué hay de nuevo?

Hacia fines de la década del '80, buena parte de los países latinoamericanos enfrentaban el desafío de lograr conciliar la tensa convivencia entre la superación de la fase transicional del régimen democrático y la gestión de profundas crisis económicas que anunciaban los últimos estertores de la versión doméstica del modelo de desarrollo de posguerra (Torre, 1991). En este contexto, contra la tendencia vigente durante toda la década, se reclamó la constitución de ejecutivos fuertes capaces de decidir respecto de la circunstancia límite definida por la aparición, en un horizonte no tan lejano, de la amenazante disolución de la propia unidad política. Esta situación pareció aplicarse con precisa justeza al caso argentino,

[4] Aludimos con el concepto de "crisis" a dos momentos de la historia argentina definidos por su particular radicalidad y sus efectos decisivos en términos de la reconfiguración de las políticas económicas aplicadas: por un lado, la elección presidencial de Carlos Menem en mayo de 1989; por el otro, la renuncia anticipada de Fernando De La Rúa en diciembre de 2001. Aclaramos también que aunque ambos escenarios pueden delimitarse a partir de diferentes indicadores macro-económicos y sociales (inflación, pobreza, producto bruto interno, entrada y salida de capitales, etc.), o por la alteración de los plazos político-institucionales (renuncia al cargo presidencial) sus límites serán pensados, principalmente, como resultado de la acción de los liderazgos en el desarrollo del proceso de legitimación de su autoridad política.

[5] Recordemos que a fines de diciembre de 2001, luego de dramáticas jornadas de movilización ciudadana, el presidente Fernando De la Rúa, elegido para ocupar la cima del poder ejecutivo en 1999 representando una novedosa alianza constituida en 1997 entre la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente País Solidario (FREPASO), dimitió a su cargo sumiendo al país en un proceso de acelerada incertidumbre política.

donde las repetidas escaladas de precios desembocaron, para principios de junio de 1989, en una situación de crisis hiperinflacionaria que sentenció al presidente Alfonsín a dejar su cargo y obligó la asunción anticipada de su sucesor, el ex-gobernador Carlos Menem. La gestión de la crisis que comandó dicho liderazgo reveló un nuevo estilo de autoridad política definido, a grandes rasgos, por su carácter decisionista y discrecional. Pero ¿en qué sentido esta dimensión representó un rasgo específico de esta nueva época? ¿En qué medida este estilo se diferenció del encarnado por otros liderazgos personalistas que han sido protagonistas estelares de nuestra vida política en el pasado?

Al igual que otros ejemplos regionales, la constitución del liderazgo de Menem supuso una situación no menos paradójica en tanto, si bien el mismo se definió por un estilo concentrado y centralizado en el ejercicio del poder, su establecimiento permitió la garantía del formato institucional de la joven democracia argentina sin caer (como en repetidos casos de su accidentada y reciente historia política) en interregnos donde el imperio *de facto* de la autoridad militar suspendió la endeble legitimidad democrática[6]. Así entonces, la primera novedad de estos liderazgos alude a que los mismos deben ser comprendidos sobre la base del juego político estabilizado que emerge del respeto ininterrumpido de los dispositivos procedimentales en el que se funda todo ordenamiento de corte democrático. Pero a su vez, así como los cambios expresados en la dimensión institucional[7] (que protagonizó la democracia argentina desde su vuelta para quedarse en 1983) demarcaron el terreno sobre el cual operan estos nuevos liderazgos, la referencia al proceso general de transformaciones que experimentó la misma sociedad y su vida política, nos permitirá completar la caracterización de este nuevo formato.

Brevemente, aludimos con este proceso a cómo la presencia de estas nuevas figuras políticas, que condensaron las funciones representativas, se desplegó en un marco signado por la desagregación de los intereses sociales, la dispersión de las organizaciones sectoriales y la crisis de las identidades partidarias tradicionales (Novaro, 1994). Así, emergieron en este contexto liderazgos que dejaron de asentar su legitimidad en la lealtad sustancial que profesaban ciudadanos agrupados en definidas y consistentes identidades partidarias para dar lugar a un nuevo formato de apoyo ahora basado en el oscilante respaldo a una serie de popularidades evanescentes y transitorias (Svampa y Martucelli, 1997). Se desarticuló entonces la figura del liderazgo del pasado a través de cuyo lazo sustancial el pueblo se constituía y se hacía presente en el espacio público, y de ahora en más, las identificaciones entre los representantes y los representados -volátiles y pasajeras- se inscribieron en el juego procedimental que estableció la democracia representativa.

Asimismo, esta nueva configuración expresó una situación no menos dilemática, ya que al mismo tiempo que se fortalecieron las instituciones sobre las que se asentó la democracia en tanto régimen institucional, se constató la precariedad de los lazos de identificación que estos liderazgos construyeron. En este contexto, signado por la incertidumbre, los vínculos de confianza establecidos por estos nuevos liderazgos demostraron ser cada vez más efímeros, al igual que las coaliciones en las que asentaron sus bases de apoyo; y de este modo, la función representativa lejos de descomponerse, o desaparecer, se reactivó en

[6] En esta paradoja resuena el planteo schmittiano de que la autoridad soberana -aquella que decide sobre el estado de excepción- está por fuera del ordenamiento jurídico sin por eso dejar de pertenecer a él (Schmitt, 2002).

[7] Nos referimos aquí, fundamentalmente, al respeto del voto popular y la elección democrática de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno como dispositivo privilegiado de regulación de la sucesión política.

tanto lógica fundante de lo político bajo la forma de la constitución permanente de lazos de (re)identificación, escenificados y canalizados ahora por estos líderes personalistas[8].
Desde un plano conceptual, según Manin (1998), la emergencia de este tipo de liderazgos se correspondió con el ocaso de la vieja democracia de partidos[9] y el origen de un nuevo modelo de democracia, definido como la democracia de lo público[10]. En pocas palabras, los rasgos esenciales que caracterizan a este nuevo formato son: primero, la emergencia de identidades políticas que experimentaron un progresivo proceso de desarticulación, perdiendo su siempre relativa coherencia y homogeneidad; segundo, la existencia de líderes políticos que se relacionaron de manera cada vez más directa con la ciudadanía, en el marco de un espacio público mediatizado; y por último, la expresión de preferencias electorales que se caracterizaron por presentar un carácter fluctuante y selectivo[11]. Así entonces, la democracia de nuestros días se identificó con el surgimiento de un formato representativo personalizado que dejó atrás la representación partidaria en la que se fundaba la pasada democracia de masas, y en donde los procesos electorales dejaron de ser meras instancias confirmatorias de aquellas identidades preestablecidas para presentarse como verdaderos escenarios de institución de voluntades, producto de la interpelación que realizan liderazgos de tipo personalista.
A su vez, la emergencia de este nuevo formato de representación afectó la forma misma que definió a los partidos de nuestro régimen político, y en el caso argentino el pasaje de un modelo al otro presentó diferentes particularidades que vale la pena destacar.
La vida política argentina, a pesar de la tardía constitución de un formato representativo propio de la democracia de partidos, se organizó durante décadas en torno a una forma de sociedad que se correspondió con dicho modelo. En efecto, dicotómicas identidades partidarias, relativamente estables y estructuradas en torno a clivajes sociales más o menos nítidos, configuraron la escena política nacional durante largas décadas. Sin embargo, esta organización no se correspondió, hasta después de 1983, con el formato de competencia interpartidaria propio de la democracia de partidos. Fue recién luego de esta fecha

[8] Decimos que la representación se reactiva en un contexto de desagregación y fragmentación de lo social puesto que dicho concepto será aquí entendido en su capacidad creadora antes que en su mera función de presentación de algo ya existente. De este modo, nos alejamos de las concepciones expresionistas según las cuales el acto representativo aparece como el mero reflejo de una realidad dada de intereses o demandas. Ahora bien, cabe desatacar también que la idea de la representación no quedará reducida -en el exacto reverso de la concepción criticada- al momento descendente que dicha idea supone, sino que también comprenderá un momento ascendente. Así entonces, la representación supondrá un doble movimiento: de los representantes a los representados, en tanto la identidad de los segundos es siempre incompleta, y de los segundos a los primeros, en tanto ninguna decisión política opera sobre el vacío.

[9] Este modelo se caracteriza, en palabras de Manin (1998), por la existencia de un formato de representación definido por la acción de fuertes partidos de masas anclados en definidas realidades sociales. Es propio de este modelo el imperio de la lealtad y la disciplina partidaria así como los estables comportamientos electorales. En particular, las elecciones se presentan como la confirmación de una identidad previa y las campañas políticas tienen un efecto persuasivo muy limitado.

[10] Cabe aclarar que este pasaje es tan poco lineal como evidentemente problemático. Es decir, los modelos de la democracia de partidos y de lo público son definidos como tipos ideales. De esta manera, lo que observamos en los contextos históricos particulares es más bien una coexistencia y una superposición de aquellos atributos que definen a ambos dispositivos conceptuales.

[11] Merece recordarse que la definición de Manin sobre la democracia de lo público comporta también el desarrollo de una dimensión de tipo deliberativa que se despliega en el escenario político abierto por la emergencia de las lógicas mediáticas y la crisis de las pasadas identidades partidarias. Esta dimensión, propia de este nuevo modelo, nos resulta evidentemente problemática para aplicarla sin reservas a los contextos democráticos contemporáneos. Igualmente, esto no nos lleva a desconsiderar los profundos cambios que experimenta la condición ciudadana en su expresión en el marco de un espacio público de nuevo tipo.

fundacional que se desarrolló un modelo de representación política acorde con dicho tipo de democracia en un contexto donde se comenzó a evidenciar su clara crisis como forma de sociedad. Así entonces, al tiempo que se desarticuló el clivaje movimientista[12], y se normalizó institucionalmente la vida política argentina, se constató el advenimiento de un nuevo modelo de democracia que expresó la crisis del formato en el cual la dinámica política se organizaba sobre la base de los canales partidarios. En otros términos, la regularización institucional de nuestro régimen, lograda gracias a la aceptación de los comicios como fuente de legitimación democrática y de los partidos políticos como principales actores del juego político, fue acompañada por una metamorfosis tanto de su formato representativo como de sus mismos actores (Pousadela, 2005).

II. Liderazgos presidenciales en situación de emergencia

Si elegimos una perspectiva que no incorpora una mirada muy detallada, inclinándonos por una visión más bien panorámica, brotan, en este sentido, evidentes paralelos que comunican los procesos de constitución de los liderazgos de Carlos Menem y Néstor Kirchner. En efecto, los liderazgos estudiados se originaron en particulares escenarios de crisis, considerados tal vez entre los más graves de nuestra todavía joven historia política; ambos liderazgos ostentaron una misma pertenencia partidaria, elemento que reinstala el estudio del peronismo en su relación con los contextos de crisis; y por último, como ya se mencionó, los liderazgos estudiados se inscribieron en una nueva era de lo político en la que se potencia la función instituyente que los mismos cumplen, configurando identificaciones y recreando lazos representativos. Pero ahora bien, sin desconsiderar la pertinencia y relevancia de estos elementos, un enfoque más atento a las especificidades que los definen nos permite identificar también los puntos de quiebre. A continuación, nos proponemos adentrarnos, aunque sea de manera muy breve, en el estudio de los críticos contextos históricos que marcaron la emergencia de ambas gestiones con el objeto de abordar las particularidades que definieron a los mismos, identificando tanto las continuidades como las rupturas.

II.I La crisis de 1989: caos inflacionario y el origen del liderazgo menemista

Para principios de 1989, los crónicos problemas de financiamiento fiscal redujeron al mínimo la capacidad estatal de intervención generando las condiciones de acción colectiva para se efectivizase el temido despegue hiperinflacionario (Novaro y Palermo, 1996). La pérdida de la capacidad estatal de recaudación, correlato de los evidentes desajustes que expresaba el modelo de desarrollo económico vigente y del fracaso de los diferentes planes de estabilización, diluyó la capacidad de disciplinamiento del Estado respecto de los actores intervinientes y llevó a una generalizada corrida financiera que produjo gravísimas consecuencias sociales. A mediados de junio, el país se vio sumergido en una terrible crisis económica, agravada por las acciones especulativas de los principales grupos de poder, quienes favorecieron comportamientos desestabilizadores como respuesta frente al temor del regreso del populismo más básico que representaba por ese

[12] Nos referimos con dicho clivaje a un tipo de juego político en donde impera una lógica de un antagonismo radical en la cual las fuerzas políticas no se reconocen como partes del sistema, sino que por el contrario, negando la legitimidad de su oponente político, aspiran a su representación monopólica.

entonces la victoria ya consumada de Carlos Menem. En este contexto, el gobierno radical, incapaz de poder establecer las medidas necesarias para lograr encauzar la crisis, de poder decidir respecto de esta situación límite que asolaba al país, cayó de forma anticipada dejando no sólo un Estado debilitado crónicamente en su capacidad de ejercer la autoridad política, sino además, una economía ahogada en términos financieros, en plena crisis hiperinflacionaria y completamente desacelerada en lo que respecta a su desarrollo productivo. Así, el viejo orden caía, y junto con él, las promesas de crecimiento y bienestar que había incorporado la democracia partidaria en plena primavera alfonsinista.

Precisamente, la crisis en curso comprendió, más allá de la dimensión económica que difícilmente pueda ser desatendida, elementos de corte más bien políticos referidos al inicio del proceso de desarticulación del consenso edificado a partir de los diferentes triunfos radicales que se sucedieron desde 1983 hasta 1987 y organizado sobre la base de la confianza en las instituciones de la democracia y en uno de sus principales actores: los partidos políticos. Creemos entonces que la situación hiperinflacionaria explicitó los primeros indicios del proceso de desafección partidaria en curso que fue resquebrajando progresivamente el consenso alfonsinista[13] y que para mediados de 1989 fue conformando un clima de opinión definido por cierta distancia respecto de las instituciones de la democracia representativa (Novaro, 1994)[14]. De esta forma, contra la tendencia que marcó la década del '80, definida por la centralidad que tuvo la necesidad de estabilizar la democracia en su carácter procedimental, se ponía ahora el acento en la importancia de la acción del líder ejecutivista como única garantía de orden frente a la amenaza de la incontenible caída.

De esta manera, las bases de apoyo del liderazgo presidencial de Carlos Menem, así como las particularidades que lo definieron, deben ser abordadas sobre la base del escenario político que resulta de la crisis, es decir, de cómo su gobierno enfrentó la gestión de dicha situación de emergencia. Y en pocas palabras, podemos anticipar que dicho liderazgo se definió por asentar su fuente de legitimidad en el establecimiento de una solución efectiva en este dramático contexto, condensando en su rol gobernante dos figuras claves: por un lado, la imagen de un líder fuerte, con capacidad de decisión y de representación de la unidad política, y por el otro, la de *outsider* del mundo partidario que le permitió presentarse por fuera de la clase dirigente tradicional, y explotar un contacto directo y expresivo con los intereses de la gente.

Ahora bien, el estudio del devenir de la gestión menemista de gobierno nos obliga a realizar un análisis más pormenorizado de las diferentes etapas que marcaron su desarrollo. En este sentido, deberíamos examinar más detalladamente las dificultades y obstáculos que enfrentó la gestión en sus orígenes y cómo fue posible el establecimiento de una salida estabilizadora. Pero, a los fines más modestos de este trabajo, indagaremos el proceso de emergencia de dicho liderazgo deteniéndonos en una de las dimensiones que definieron al mismo y que nos permitirá entender, dada la importancia que asumió,

[13] Cabe remarcar que en la desarticulación del consenso alfonsinista no sólo operó la crisis económica sin retorno que desembocó en el caos hiperinflacionario, sino que también incidieron los problemas de la resolución de la causa militar y la incapacidad notoria que demostraron los partidos tradicionales de nuestro sistema político para lograr establecer acuerdos de cooperación política.

[14] Para dar un ejemplo de los primeros signos visibles de dicho clima, en el marco del proceso de crisis que experimentó el gobierno de Alfonsín, y durante los primeros años del gobierno de Menem, en un estudio de Catterberg y Asociados publicado en Palermo (1992: 334), se destaca el aumento de más de 20% que registra la opinión negativa en referencia a los partidos políticos, pasando de un 18% en 1988 a un 39% en 1990. Igualmente, claro está, estos serían los primeros indicadores de una crisis que se experimentará en toda su radicalidad hacia el fin de la década.

cómo se configuraron sus bases de legitimidad y qué particularidades marcaron al proceso de restablecimiento de la autoridad política. Nos preguntaremos entonces por el tipo de vínculo que el liderazgo de Menem creó en su relación con la opinión pública, identificando cuál fue la posición que ocupó, en este proceso, el Partido Justicialista[15].

En el curso de la crisis que parecía sumir al país en un abismo sin retorno, se evidenciaron los límites que experimentaron los partidos y los sindicatos en su rol de principales canales de mediación política y actores estelares de la democracia representativa. Frente a este escenario, los medios de comunicación devinieron, progresivamente, el recurso de poder privilegiado en la sostenida aspiración de Menem de reestablecer el lazo de confianza con la gente, en un contexto definido por el rol protagónico que los mismos pasaron a cumplir como generadores de diferentes climas de opinión. Se constató así la constitución de la opinión pública como sujeto político de un espacio público mediatizado en donde las representaciones tradicionales ostentaron un peso cada vez más relativo. Y en esta clave, debe entenderse cómo la expresión de la ciudadanía, a través de los sondeos de opinión, cumplió un rol central en la articulación del consenso antiestatista y pro-privatista sobre la que se fundó la gestión menemista, a contracorriente de los principios del peronismo histórico promocionados -y sobreactuados- en el desarrollo de la campaña presidencial en 1989. En concreto, Menem logró afianzar un sólido vínculo con la opinión pública, en momentos en donde los fantasmas desestabilizadores no dejaban de acechar al gobierno, sobre base de una incansable exhibición mediática a partir de la cual construyó su imagen, como ya mencionamos, a partir de una doble figura en la cual se presentó, por un lado, como aquel líder carismático que en función de sus capacidades excepcionales era capaz de reestablecer el orden y regenerar la sociedad, como aquel líder efectivo que exponía hechos consumados resolviendo los problemas, sin caer en la inercia deliberativa propia de los ámbitos partidarios e institucionales; pero al mismo tiempo, como un hombre común de lenguaje llano y coloquial que, guiado por sus pasiones, lograba encarnar los sentimientos del pueblo sin mediaciones de ningún tipo (Novaro, 2000b). La posibilidad de articular esta figura duplicada, que ostentó el líder frente a la opinión pública, demostrando capacidad ejecutiva y despertando confianza, constituyó la base de la popularidad menemista en el origen del drástico proceso de reformas que experimentó la sociedad argentina desde comienzos de los '90.

Las innovaciones establecidas por el liderazgo menemista, expresadas en el vínculo privilegiado que supo entablar con una opinión pública que hasta entonces se había mostrado siempre reacia al imaginario peronista, nos lleva a repensar cuál fue el lugar que ocupó esta fuerza política en el devenir de este proceso político. En este sentido, el PJ experimentó durante buena parte de la década del '80 un proceso de crisis y renovación.

La crisis que se desencadenó luego de la derrota de 1983, evidenció sin ambigüedades que el peronismo había dejado de ser la mayoría natural del pueblo argentino y originó, al cabo de unos años, un importante proceso de revisión y discusión interna que tuvo como objetivo la vuelta del PJ al protagonismo electoral que esta fuerza había sabido detentar en el pasado. Este proceso terminó en el enfrentamiento, durante los comicios legislativos de 1985, entre el ala sindical (los ortodoxos) y el ala política (los renovadores). Y si bien los

[15] La selección de esta dimensión de análisis no nos lleva a desconsiderar la importancia que cumplieron otros factores, como por ejemplo el hecho de haber logrado la estabilización de la economía a partir del establecimiento del plan de convertibilidad. Pero el foco de nuestro análisis en el proceso de constitución de este liderazgo se centra, más bien, en el estudio de aquellos vínculos representativos sobre la base de las cuales Carlos Menem interpeló a la ciudadanía, ya que creemos que la misma aplicación y el éxito de dicho plan, no puede ser pensados al margen de este proceso.

segundos triunfaron en esta elección iniciando un proceso de democratización del dispositivo de toma de decisiones que permitió el paulatino pero sostenido despliegue de su proceso de partidización, la victoria de Carlos Menem (antiguo renovador que se presentaba ahora representando a la línea más tradicional) re-direccionó el proceso en curso imprimiéndole un nuevo sentido. De este modo, cuando Menem asumió como presidente, en julio de 1989, el PJ venía de superar un profundo conflicto interno –uno más en su siempre accidentada historia- y había logrado establecer un mecanismo efectivo para enfrentar el crucial desafío de toda fuerza política de origen carismático: la sucesión de su líder fundador. Pero fundamentalmente, para comprender el lugar que el partido ocupó en la etapa de constitución del liderazgo menemista, si bien es importante la referencia al despliegue de sus transformaciones internas, el foco del análisis debe estar puesto, más bien, en la configuración del clima anti-partidario, que interpelado y potenciado por el liderazgo de Menem -contrarrestando así la tendencia propia de la etapa de transición a la democracia- definió el contexto de la crisis hiperinflacionaria de 1989.

Frente a la crisis de las mediaciones tradicionales y el clima de opinión opositor a la dirigencia política-partidaria, Menem desplegó un accionar innovador mediante el cual relegó al partido a un lugar secundario, privilegiando su relación con la opinión pública. Se configuró entonces un tipo de liderazgo personalista que se presentó liberado de las ataduras partidarias, y capacitado así para salvar al pueblo del trágico estado en el que se encontraba sumido. En este marco, el Partido Justicialista fue desplazado a un lugar marginal en el proceso de toma de decisión política e inclusive, en vistas de los comicios de 1991, debió tolerar la intromisión de personajes ajenos a su estructura[16]. En efecto, estos comicios se caracterizaron, en particular, por la entrada en la política de personajes ajenos a la vida partidaria cuya incorporación fue alentada por el propio Menem, incluyéndolos en la oferta política en varios distritos ya que su presentación resultaba ser mucho más redituable, en términos electorales, que la de buena parte de los referentes de su propio partido.

Pero esta relación de fuerzas comenzó a modificarse rápidamente, superados estos comicios, y el PJ demostró, luego de esta etapa de ostracismo, una sorprendente capacidad de adaptación (Novaro, 1999; Levistky, 2005). A partir de 1991 -y en el curso de un proceso que se afirmará durante los años subsiguientes- el Partido Justicialista, ya bajo la jefatura nacional de Menem, lejos de ver diluido su protagonismo, pudo consolidar -gracias a la acción misma de este liderazgo- sus recursos institucionales y reforzar tanto su rol en la competencia política como su papel como actor partidario dentro del proceso de negociación de las políticas impulsadas por el gobierno nacional. El PJ conservó y potenció así su capacidad como aparato unificado dotando al gobierno los imprescindibles apoyos institucionales para desarrollar el proceso de reformas en curso (Novaro, 2000b). Y asimismo, en este escenario, más allá de las transformaciones registradas en los formatos de competencia política[17] se constató, en línea con la tendencia ya presente en la década anterior, un proceso de consolidación del sistema partidario argentino (Abal Medina, 1995). Es decir, lo que afirmamos, en pocas palabras, es que durante esta década se

[16] Tal vez los ejemplos más paradigmáticos, en este sentido, fueron el ex cantautor popular y empresario, Ramón "Palito" Ortega, y el ex corredor de fórmula uno, Carlos Reutemann.

[17] Nos referimos centralmente a la desarticulación del esquema de competencia bipartidaria que produjo la irrupción del FREPASO en el escenario nacional en el marco de las elecciones a convencionales constituyente de 1994 y en los comicios presidenciales de 1995.

evidenciaron diferentes procesos de transformación en la vida política[18] (en sintonía con la desarticulación de un modelo de representación partidaria que ya hemos presentado) pero, al mismo tiempo, sin desatender el curso de este proceso, remarcamos que la acción del liderazgo de Menem contribuyó a restablecer el rol partidario de justicialismo y contribuir así a la normalización del sistema de competencia entre las diferentes fuerzas políticas de nuestro régimen democrático (Novaro, 1999).

II.II Diciembre de 2001. Crisis de representación y emergencia del liderazgo de Kirchner.

Si al cabo de una década la crisis hiperinflacionaria parecía superada, como consecuencia de la aplicación de un efectivo plan de estabilización, y el establecimiento de un agudo proceso de reformas suponía haber atendido los graves problemas estructurales que enfrentaba la versión doméstica del llamado modelo de posguerra, hacia fines de 2001, una nueva crisis asoló a la sociedad argentina llevando a la caída del gobierno conformado ahora sobre la base de una alianza entre la Unión Cívica Radical (UCR) y el FREPASO. Evidentemente la compleja articulación de fenómenos que llevaron a la emergencia de esta crisis no puede dejar de incluir la incidencia que tuvo el referido proceso de reforma, pero dicho análisis excede los fines de este trabajo[19]. Volviendo entonces sobre los ejes que nos propusimos abordar aquí, consideraremos a continuación cómo se desplegó el proceso de constitución del liderazgo del presidente Kirchner, emergente de esta particular coyuntura crítica.

En el curso del año 2001, los problemas que enfrentaba el gobierno de la Alianza se hicieron cada vez más notorios y, también, incontrolables. Una economía estancada y sin perspectivas de recuperar los índices de crecimiento; un Estado deficitario agobiado por los acreedores que reclaman los pagos de las irresponsables deudas contraídas; una sociedad que se veía asolada por la pobreza generalizada y el desesperante aumento del desempleo configuraban los trazos más evidentes del cuadro de situación que enfrentaba el gobierno del presidente De La Rúa por estas complicadas épocas. Y si a eso le sumamos que dicho gobierno se definía por su crónica debilidad, y por su incapacidad de reacción frente al cuadro descrito, seguramente no sean muy sorprendentes los resultados que arrojaron los comicios legislativos de 2001 donde la ciudadanía expresó, de manera contundente, su rechazo a la dirigencia política[20].

En efecto, a través del llamado "voto bronca", el gobierno aliancista, y en menor medida también los otros partidos[21], sufrieron una brusca caída en sus apoyos electorales en dichos comicios revelando la emergencia de un nuevo fenómeno. Nos referimos aquí a cómo sus resultados no sólo confirmaron el despliegue del proceso de metamorfosis de la representación en curso (el cual alude a los cambios más generales que la vida política

[18] Como ejemplo paradigmático de este proceso podemos mencionar, precisamente, la aparición del FREPASO en el escenario político argentino y su constitución como principal fuerza de oposición al menemismo.

[19] De este modo, entendemos la emergencia de la crisis de 2001 como el resultado de un proceso definido por diferentes etapas y momentos a través de los cuales se fueron evidenciando los serios problemas que produjo el plan de reformas establecido desde principios de los '90.

[20] Para un estudio de dichos comicios desde un plano general, pero también a partir de un estudio enfocado en las realidades específicas de las diferentes provincias, ver Cheresky y Blanquer (2003).

[21] Tal como destaca Torre (2003) el justicialismo, si bien perdió una buena cantidad de votos respecto de anteriores elecciones, salió relativamente fortalecido al cabo de este proceso a la luz de la notoria disminución de votos que sufrió la alianza entre el FREPASO y el radicalismo.

argentina viene experimentado desde hace más de una década) sino que también nos enfrentó a la aparición de otro fenómeno, más episódico y transitorio, de neto carácter coyuntural, y que alude, concretamente, al cuestionamiento directo del lazo representativo sobre el que se organiza toda comunidad política. Así, como nunca antes, se rechazó en este contexto la mediación política, se cuestionó la distancia que separa a los gobernantes de los gobernados dando lugar, sobre el terreno de este proceso de metamorfosis, a una situación marcada por la irrupción de una crisis de la representación política (Pousadela, 2005).

Ahora bien, esta crisis no sólo se expresó en los comicios aludidos, sino que tuvo una aparición más dramática y radical en los estallidos callejeros que protagonizó buena parte de la ciudadanía hacia fines de diciembre, los cuales llevaron a la caída definitiva del gobierno aliancista el 20 de diciembre de 2001[22]. Pasadas dichas jornadas, y luego del fracaso de los distintos intentos por restablecer la autoridad política en el país, el ex-gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, logró articular los consensos necesarios para iniciar la fase de superación de la crítica situación de emergencia que dejó la salida del gobierno de la Alianza. En pocas palabras, esta etapa, definida por su carácter transicional, se caracterizó -a grandes rasgos- por la vuelta al poder del peronismo en este caso con el justicialismo bonaerense como eje articulador[23]; por el lento y aún muy problemático reestablecimiento de la situación de normalidad (ya que en esta etapa todavía tuvieron un importante protagonismo los *piqueteros* y los *caceroleros* como actores excluyentes de las nuevas protestas públicas); y por último, por la todavía muy acompasada recuperación de los índices económicos. De cara a los comicios de 2003, y después de varios ensayos infructuosos, el gobierno presidido por Duhalde decidió respaldar la candidatura presidencial de Néstor Kirchner, ex-gobernador de la alejada provincia de Santa Cruz.

Llegamos aquí, finalmente, a nuestro núcleo de interés, y para indagar el proceso de constitución de su liderazgo, replicaremos el esquema propuesto en el apartado anterior analizando entonces qué particularidades asumió su vínculo con la opinión pública y cuál fue la posición que le tocó ocupar al Partido Justicialista en el despliegue de este proceso[24].

Al cabo de un proceso tan azaroso como inesperado, Néstor Kirchner asumió la presidencia de Nación en mayo de 2003, luego de que el otro candidato de las tres fórmulas peronistas que se presentaron en la elección, y con el que debía competir en el ballotage, decidiera abandonar la contienda[25]. El nuevo presidente ganó entonces las elecciones, pero lo hizo con un porcentaje indudablemente escaso de votos en el marco de un escenario político altamente fragmentado; así entonces, si bien estuvo legalmente

[22] Evidentemente, la emergencia de dichos estallidos no se explica sin considerar el efecto que produjo sobre el desgaste del gobierno el plan de incautación de los depósitos bancarios, aplicado a principios del mes de diciembre de 2001 en el marco de una dramática crisis de financiamiento que por ese entonces enfrentaba el gobierno aliancista. Para un desarrollo de este proceso ver Pousadela (2005) y Cheresky (2006).

[23] Se utiliza el término "bonaerense" para hacer referencia al territorio y a la población de la provincia de Buenos Aires.

[24] Tampoco ignoramos aquí la incidencia que pudo tener sobre este proceso la recuperación de la economía registrada a partir del tramo final de la gestión de Duhalde, y que se mantiene en forma sostenida hasta nuestros días, pero vale en este sentido la misma aclaración que realizamos para la gestión de Menem en la nota al pie número 14.

[25] Recordemos que en la primera vuelta la fórmula presidida por Carlos Menem triunfó con el 24.45%, quedando en segundo lugar la encabezada por Néstor Kirchner 22.24%. Así, este último fue elegido presidente luego que Menem, frente a una segura derrota en la segunda vuelta -según pronosticaban los sondeos electorales-, desistiera de presentarse en esta instancia.

investido para el ejercicio regular de sus funciones como líder presidencial, Kirchner adoleció de una legitimidad electoral muy limitada, al menos en esta primera etapa de su gobierno[26]. A su vez, como consecuencia de lo que dejaron estos comicios, nuestro sistema partidario, en línea con lo registrado en octubre de 2001, y marcando un quiebre respecto con la tendencia presente en la década pasada, vio acentuado su proceso de fragmentación alcanzando un grado inédito desde el regreso de la democracia institucional en 1983. Fue entonces este contexto crítico, definido por el déficit en la legitimidad electoral; por la configuración del clima generalizado de cuestionamiento a la representación partidaria[27], y por último, por los serios desafíos que implicaba la gestión de la crisis heredada, el que marcó a fuego los rasgos definitorios del liderazgo de Kirchner en su proceso de constitución.

Inscripto en este marco, durante los primeros meses de su gestión, el presidente Kirchner, en base a la articulación de un discurso político que parecía sintonizar con el clima post 2001, pero reinterpretando en sus propios términos el extendido reclamo de cambio y transformación, puso en marcha toda una serie de medidas que sorprendieron a una ciudadanía tantas veces decepcionada. Y en el curso de esta acción privilegió, claramente, la configuración de un vínculo de identificación con la opinión pública antes que buscar apoyo en los respaldos más tradicionales, ya sea el de su propio partido o incluso el de las corporaciones sectoriales. En efecto, en paralelo con el accionar que definió en los primeros años del gobierno de Menem, y a diferencia de la base de apoyos partidarios que logró articular su inmediato antecesor, Eduardo Duhalde, el respaldo que buscó Kirchner en esta primera etapa residió en el virtual y volátil apoyo de la opinión pública registrado a través de las encuestas[28]. Y sobre la base de este respaldo, que le reportó altísimos índices de popularidad, decidió avanzar en su empresa transformadora que se expresó en cambios concretos, principalmente, en la reorganización de la justicia y en el campo de los derechos humanos, y en una mejoría cada vez más notable en la evolución de los distintos indicadores económicos. Así, a partir de la promoción de estas medidas, el presidente Kirchner logró conquistar la legitimidad ausente en los orígenes de su gestión, presentándose como un liderazgo con decisión y capacidad para gobernar la crítica situación de emergencia que el país enfrentaba, y con el necesario poder para actuar, haciéndose eco de la voz del pueblo, contra la llamada de la política neoliberal de los '90 y las presiones facciosas de las corporaciones empresariales y las partidarias[29].

El análisis de la configuración de la figura presidencial como un liderazgo sustentado en la opinión pública nos lleva a la pregunta por la posición que adoptó el PJ en el devenir de

[26] A diferencia de Menem, cuya fuente de legitimidad fue doble: primero partidaria, luego del triunfo en las internas de 1988, y después ciudadana, gracias a la clara victoria electoral de mediados de 1989 (Ollier, 2006).

[27] Mencionemos en este sentido la encuesta realizada por la consultora Gallup 2007, según la cual, si la confianza en los partidos políticos en 1987 sumaba el 38% del electorado, en el año 2002 la misma se redujo dramáticamente al 4% (Sidicaro, 2008).

[28] La referencia a la presidencia interina de Eduardo Duhalde resulta de vital importancia para poder observar en qué medida los liderazgos estudiados pueden desplegar procesos claramente diversos en lo que respecta a la restablecimiento de su autoridad política. En efecto, mientras que la acción de recomposición de poder del ex gobernador bonaerense se centró en su práctica concreta en el lugar privilegiado dado a los actores partidarios (principalmente el justicialismo bonaerense) la de Kirchner, por el contrario, se fundó en su sostenido proceso de desgaste y desarticulación. Queda desatacada, así, la capacidad de institución de los liderazgos frente a similares contextos de emergencia.

[29] De hecho, Kirchner configuró su discurso político trazando una frontera respecto del menemismo y su política neoliberal, definiendo a esta etapa como el campo excluido y negado en oposición al cual se definió este nuevo espacio. Para un análisis sobre el proceso de configuración del discurso de Kirchner, ver Slipak (2006).

este proceso. En este sentido, es indudable que durante la década del '90 este partido experimentó una serie muy importante de transformaciones.

La década menemista imprimió cambios evidentes en el peronismo tanto en la forma que adoptó su identidad política como en su funcionamiento institucional (Novaro y Palermo, 1996). En referencia a las transformaciones que experimentó la identidad peronista, tal como lo expresan estos autores, el menemismo completó el proceso iniciado por el discurso alfonsinista y la experiencia renovadora orientados a la desactivación de la lógica de la alteridad populista. Este proceso, en apretada síntesis, permitió la sustitución de la clásica disputa entre irreconciliables enemigos sociales por la competencia ahora entre adversarios electorales, produciendo una desactivación del fundamento antagónico y revolucionario sobre el que se había estructurado el imaginario peronista tradicional. Se consagró entonces la afirmación del peronismo como actor partidario sin que esto impidiese la primacía, a la hora de pensar la composición de la identidad peronista, de un principio de identificación donde el líder pasó a ocupar un lugar central en tanto punto de referencia de un universo social marcadamente desarticulado. En concreto, la identidad peronista experimentó un nítido proceso de desarticulación, perdiendo tanto su carácter antagonista y herético como su consistencia social, y pasó a re-significarse -como marco simbólico de pertenencia- en términos de vital asistencia (Auyero, 2001).

Pero también las transformaciones en el peronismo se constataron en una dimensión más propiamente institucional y organizacional. Muy brevemente, estos cambios se relacionaron con el desarrollo de una política de tipo emprendedora en virtud de la cual los partidos y los sindicatos de base, configuradores de los históricas relaciones sociales e ideológicas con la clase trabajadora, fueron perdiendo terreno frente al avance de organizaciones fundadas en el patronazgo estatal (Levitsky, 2005). Así entonces, los lazos estructurados sobre la base del intercambio reemplazaron a los tradicionales, poniendo en evidencia el deterioro de aquellos vínculos clásicos que unieron históricamente al peronismo con la clase trabajadora, y presentando a esta fuerza como una mera máquina electoral que distribuye recursos y que, adaptándose a los distintos contextos políticos-sociales, busca fundamentalmente la maximización de los resultados en los comicios (Torre, 2004)[30]. En paralelo a este proceso, cabe destacar por último, que para fines de la década del noventa el justicialismo sufrió también un marcado proceso de dispersión. La ausencia de un liderazgo nacional unificado llevó a que esta fuerza fuese considerada como una confederación de aparatos provinciales, como un agregado sin centro, descompuesto en múltiples partes (Arzadum, 2008).

Sobre el trasfondo de estos cambios, retomemos ahora el análisis de la posición que asumió el Partido Justicialista (PJ) durante la gestión de Kirchner. En este sentido, aunque el peronismo bonaerense cumplió un rol clave en el armado de los apoyos que le permitieron llegar a Kirchner a la presidencia, el PJ no tuvo un papel protagónico en esta primera etapa de la gestión, más bien todo lo contrario. En efecto, el proyecto presidencial comprendió en sus orígenes un proceso de renovación política, expresado en el armado de una base de apoyos transversal y coalicional compuesta en su mayoría por referentes de buena sintonía en la opinión pública, que tuvo como centro de su crítica a la llamada "vieja política" que encarnaban las estructuras tradicionales de los clásicos partidos de nuestro sistema (el justicialismo y el radicalismo). De este modo, considerando que la función de los partidos en el proceso de toma de decisiones políticas apareció

[30] Para una profundización en el estudio del devenir de estos cambios, ver Novaro (1999) y Svampa y Martuccelli (1997).

notoriamente cuestionado -y con dramática agudeza desde la crisis de 2001- por buena parte de la ciudadanía, la acción del liderazgo de Kirchner, sintonizando con dicho clima, se orientó durante los primeros años de su gestión a la fragmentación y desarticulación de buena parte de los armados territoriales de estos partidos y a alentar cierto recambio en la dirigencia política. Este intento por disolver lo que quedaba del existente sistema de partidos se expresó con claridad en los diferentes comicios que se fueron desarrollando a partir del 2003 (a través de la primera fase del proyecto de la transversalidad[31]) y encontró, tanto en la disputa desplegada contra el poderoso justicialismo bonaerense en los comicios legislativos de 2005, como también en el proceso de unificación con esta estructura, consumado en las elecciones presidenciales de 2007, su acto cúlmine[32].

La etapa iniciada luego de los comicios del 2005 y de las elecciones de 2007, en las que Cristina Fernández de Kirchner fue elegida presidenta con algo más del 45% de los votos, reveló, primero, la notoria contención del proceso de renovación política iniciado (dada la incorporación poco disimulable de los actores partidarios antes denostados[33]), y también las crisis y mutaciones que experimentaron, con disímiles proporciones, los actores tradicionales de nuestro sistema[34]. En este sentido, en la nueva coyuntura política que se abrió luego de las últimas elecciones, el curso de los acontecimientos adoptó un viraje poco disimulable cuando, una vez fuera de la presidencia, Kirchner se propuso dar los primeros pasos en lo que se presentó como un proceso de recomposición del escenario político. Este proceso, que lo llevó a aceptar la presidencia del Partido Justicialista, luego de haberse negado durante todo su mandato a ocupar esta posición, pareció haberle asestado un nuevo golpe al armado más transversal (que promocionó el gobierno en diferentes comicios locales en el 2003 y durante las elecciones legislativas de 2005) o al modelo de la Concertación[35] (tal como quedó definido en el 2007) en favor del fortalecimiento y reorganización del PJ[36].

Pero igualmente, no por ello dejamos de creer que el nuevo tiempo político inaugurado luego de la crisis de 2001 alumbra un contraste directo con la experiencia menemista,

[31] Entendido como una operación político-electoral vehiculizada desde el gobierno kirchnerista y tendiente a construir un tipo de armado político que trascendiera las fronteras de los partidos tradicionales de nuestro sistema.

[32] Aclaremos, brevemente, que en las elecciones de 2005, y contra todos los pronósticos de los analistas, el presidente Kirchner decidió enfrentar a la propia estructura del justicialismo que en las elecciones de 2003 le sirvió como principal base de apoyo. Luego, en las elecciones de 2007, si bien se consumó un previsible proceso de unificación entre el armado kirchnerista y el justicialista, este mismo proceso no dejó de alentar un agudo proceso de fragmentación en las filas de este último partido. Para un análisis más detallado de estos procesos, ver Rodríguez (2006) y Rodríguez (2007).

[33] Se constata de esta manera el imperio de una lógica de corte pragmático que se corresponde con los fines de la gobernabilidad y que se articula con un proceso de territorialización de la política, expresado en la capacidad para articular una base de apoyo a través del control de los recursos que detenta el Estado en sus diferentes niveles de gestión.

[34] Este planteo se contrapone a lo sostenido por Ollier (2005), quién en su pretensión de marcar los contrastes entre las dos etapas de construcción del poder por parte del kirchnerismo, parece ignorar el proceso de mutaciones y crisis que han experimentado los actores partidarios en el devenir político que marcó a los últimos tiempos.

[35] Se llamó así al espacio transpartidario en el que se incorporó a los sectores de la Unión Cívica Radical identificados con el proyecto oficial.

[36] Destaquemos que esta tendencia, que pareció afirmarse en los primeros años de la gestión presidida por Cristina de Kirchner, fue revertida posteriormente cuando, ya en el marco de su segunda administración, se alentó progresivamente el armado de un nuevo esquema de apoyos políticos donde la estructura justicialista quedó claramente subsumida frente al protagonismo que asumieron diferentes actores políticos, entre los que se destacaron las organizaciones de la juventud.

dado el inédito grado de fragmentación imperante en la política partidaria en términos generales, pero también en razón del desarrollo de un proceso de transformación en la vida pública de nuestra democracia a partir del nuevo protagonismo público que asumió la ciudadanía. Es decir, lo que parece observarse en la actualidad, contrarrestando alguno de los principios básicos que definieron al modelo de la democracia delegativa como dispositivo conceptual de comprensión de la naturaleza de buena parte de los gobiernos latinoamericanos, según el clásico análisis de O'Donnell (1992), es la emergencia de un nuevo tipo de democracia fundado en la presencia discontinua y desagregada de la ciudadanía en el espacio público en un contexto donde los gobernantes aparecen sujetos a un proceso de relegitimación permanente de sus posiciones de autoridad (Rosanvallon, 2006; Cheresky, 2008). En otras palabras, creemos entonces que los cambios en curso en nuestra vida política, acelerados particularmente luego de la crisis de 2001, antes que ser pensados como un momento pasajero, que luego será absorbido y reconducido por las fuerzas naturales del sistema, deben más bien ser interpretados como aquellos rasgos constitutivos de nuestras nuevas sociedades democracias.

III. Palabras finales

En este trabajo nos propusimos repensar, brevemente, la forma que asumen los nuevos liderazgos en los contextos de crisis. Para ello, nos concentramos específicamente en el caso argentino y en las situaciones de particular emergencia que el país vivió en las últimas dos décadas. El abordaje de aquellas características que definen a estos líderes comprendió, en primer lugar, la presentación de los cambios que ha ido experimentando la vida política en este último tiempo. Destacamos, así, cómo las transformaciones operadas en nuestro régimen democrático -y en la forma que asumen los formatos representativos- moldearon un nuevo tipo de liderazgo definido (a diferencia de los liderazgos tradicionales) por su inscripción dentro del juego político que emerge de la estabilización de los procedimientos democráticos, y por la configuración de una base de apoyos que lejos de presentarse de manera articulada y expresar un respaldo consistente, se caracteriza por su fragmentación y su crónica volatilidad. En segundo lugar, nos abocamos, sintéticamente, al análisis de los procesos históricos de emergencia de los liderazgos presidenciales de Carlos Menem y Néstor Kirchner, a los que identificamos como patentes ilustraciones de aquellos líderes formados al calor de una nueva era de lo político. Asimismo, internándonos en el estudio de ambas gestiones, buscamos delinear los grandes trazos de aquellos paralelos que pudimos establecer entre los mismos, sin por esto desconsiderar las distintas líneas de ruptura que también nos permitieron diferenciarlos. En este sentido, pensando sus particularidades a partir de la relación establecida con la opinión pública y el Partido Justicialista, resaltamos que si bien encontramos claros elementos que los unifican, como por ejemplo el hecho de que ambos hayan detentado una innegable capacidad de iniciativa mediante la cual propusieron una salida a la crisis configurando identificaciones y recreando los deteriorados lazos representativos, o también, que los mismos hayan establecido en el origen de sus gestiones un vínculo privilegiado con la ciudadanía a través de su expresión mediante las encuestas de opinión relegando a un segundo término al partido; remarcamos, asimismo, cómo la emergencia del escenario que resultó de la crisis de 2001, definido por el grado de fragmentación imperante en nuestro sistema partidario y el nuevo protagonismo que asumió la ciudadanía, nos revelaron una distancia innegable entre ambas experiencias. En

otros términos, si bien podemos pensar los rasgos que los unifican al abordar de qué manera ambos liderazgos operaron en contextos de crisis reconstruyendo imaginarios, e imprimiendo nuevos horizontes de sentido a los procesos en curso, ambos casos se separan a la hora de identificar la localización e inscripción de ambas figuras representativas en diferentes momentos del devenir de nuestra experiencia democrática.
Por último, quisiéramos cerrar este trabajo con una pregunta no menos problemática: ¿cómo pensar el lugar que ocupan este tipo de liderazgos en el devenir que asume nuestra vida democrática? Frente a esta espinosa cuestión, diremos simplemente que si bien no desconsideramos los riesgos que este tipo de liderazgo puede acarrear, en términos de la concentración de la autoridad y el empobrecimiento del debate de tipo argumentativo, resaltamos también el rol que los mismos cumplen en tanto fuente de politización a la hora de establecer aquellas identificaciones que, principalmente en contextos de crisis, reaseguran la inscripción de los ciudadanos en su comunidad política de pertenencia. De este modo, descartando aquellas lecturas que pecan de excesivo normativismo, intentando en vano que nuestra siempre insubordinada realidad política se adapte, por fin, a un deseado modelo de llegada, nos inclinamos más bien por abordar las tensiones constitutivas que definen a nuestra joven experiencia democrática, sin por ello pretender conjurarlas.

Bibliografía

Abal Medina, J. M. (1995). La normalización del sistema partidario argentino. En R. Sidicaro y J. Mayer (comps.) *Política y Sociedad en los años del menemismo*. Buenos Aires: oficina de publicaciones del C.B.C.

Aboy Carlés, G. (2001). *Las dos fronteras de la democracia argentina. La reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menen*. Rosario: Homo Sapiens.

Altamirano, C. (1992). El peronismo verdadero. Punto de Vista 43: pp.

Auyero, J. (2001). *La política de los pobres. Las prácticas clientelares del Peronismo*. Buenos Aires: Manantial.

Canelo, P. (2002). La construcción de lo posible: identidades y política durante el menemismo, Argentina, 1989-1995. Buenos Aires: FLACSO.

Cheresky, I., y J-M. Blanquer (comps.) (2004). *¿Qué cambió en la política argentina? Elecciones, instituciones y ciudadanía en perspectiva comparada.* Rosario: Homo Sapiens.

Cheresky, I. (2006). Un signo de interrogación sobre la evolución del régimen político. En I. Cheresky (comp.) *La política después de los partidos*. Buenos Aires:Prometeo.

Cheresky, I. (2008). *Poder presidencial, opinión pública y exclusión social*. Buenos Aires: CLACSO Ediciones.

De Ipola, E. (1989). Las desventuras del peronismo renovador. En *Investigaciones políticas*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

De Riz, L. (1993). Los partidos políticos y el gobierno de la crisis en Argentina. Revista Sociedad 2: pp.

Levitsky, S. (2005). *La transformación del justicialismo. Del partido sindical al partido clientelista, 1983-1999*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Manin, B. (1998). *Los Principios del Gobierno Representativo*. Madrid: Alianza.

Mustapic, A. (2002). Del Partido Peronista al Partido Justicialista. Las transformaciones del partido carismático. En M. Cavarozzi y J.M. Abal Medina *El asedio a la Política*. Rosario: Homo Sapiens.

Novaro, M. (1994). *Pilotos de tormentas*. *Crisis de representación y personalización de la política en Argentina*. Buenos Aires: Ediciones Letra Buena.

---------- (1999). Crisis y renovación de los partidos. Una perspectiva comparada sobre los años del menemismo. En *Entre el abismo y la ilusión. Peronismo, mercado y democracia.* Buenos Aires: Ediciones Norma.

---------- (2000a). *Representación y liderazgo en las democracias contemporáneas*. Rosario: Homo Sapiens Ediciones.

---------- (2000b). El liderazgo menemista, los massmedia y las instituciones. Ecuador Debate 49.

Novaro, M. y V. Palermo (1996). *Política y poder en el gobierno de Menem*. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma.

O´Donnell, G. (1992). ¿Democracias Delegativas? Cuadernos del CLAEH 17 (61).

Ollier, M. (2005). Liderazgo presidencial y jefatura partidaria: entre la confrontación y el pacto (2003-2005). Revista Temas & Debates 9.

---------- (2006). Liderazgo presidencial y debilidad institucional en la argentina actual. Ponencia presentada en el 1º Congreso de Ciencia Política. Universidad Nacional de la República, Montevideo.

Palermo, V. (1991). Argentina: Democracia y populismo en tiempos difíciles. Algunas notas sobre la gestión menemista desde 1989. Revista de Estudios Políticos Nueva Época 74.

---------- (1992). El menemismo, ¿perdurará?. En A. Iturrieta (comp.) *El pensamiento político contemporáneo*. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.

Pousadela, I. (2004). ¡Los partidos políticos han muerto! ¡Larga vida a los partidos! En I. Cheresky y J-M. Blanquer (comps.) *¿Qué cambió en la política argentina? Elecciones, instituciones y ciudadanía en perspectiva comparada.* Rosario: Homo Sapiens.

---------- (2005). Mutaciones de la representación política en la argentina contemporánea. Tesis de doctorado, Universidad de Belgrano.
Rodríguez, D. (2006). Liderazgos y Partidos *partidos:* La fractura del justicialismo y la reconfiguración del escenario político en la provincia de Buenos Aires. En I. Cheresky (comp.) *La Política después de los partidos*. Buenos Aires: Prometeo.

Rodríguez, D. (2007). Un nuevo capítulo en la crisis de los partidos bonaerenses. Acción del liderazgo presidencial y fragmentación política en el proceso electoral 2007. En I. Cheresky (comp.) *Las urnas y la desconfianza ciudadana en la democracia argentina*. Rosario: Homo Sapiens.

Rodríguez, D. (2012). *Liderazgos en situación de crisis y el proceso de transformación de los formatos representativos de la democracia argentina. Los casos de Carlos Menem (1989-1995) y Néstor Kircher (2003-2007) en perspectiva comparada.* Tesis de doctorado, IEP, Sciences Po, Paris.

Rosanvallon, P. (2006). *La contre-démocratie. La politique á l'âge de la méfiance*. Paris: Éditions du Seuil.

Schmitt, C. (2002). *Teología política*. Buenos Aires: Prometeo.

Sidicaro, R. (2008). La pérdida de legitimidad de los partidos políticos argentinos. Temas & Debates 16.

Slipak, D. (2006). Más allá y más acá de las fronteras políticas: apuestas de reconstrucción del vínculo representativo en el discurso político pos crisis 2001. Informe Final Beca CLACSO.

Svampa, M. y D. Martuccelli (1997). *La Plaza vacía. Las transformaciones en el peronismo*. Buenos Aires: Losada.

Torre, J.C (1991). América latina. El gobierno de la democracia en tiempos difíciles. Revista de Estudios Políticos 14.

---------- (2003). Los huérfanos de la política de partidos. Sobre los alcances y la naturaleza de la crisis de representación partidaria. Desarrollo Económico 42 (68).

---------- (2004). La operación política de la transversalidad. El presidente Kirchner y el Partido Justicialista. Ponencia presentada en las jornadas "Argentina en perspectiva", Universidad Torcuato Di Tella.

Zermeño, S. (1989). El regreso del líder: crisis, neoliberalismo y desorden. Revista Mexicana de Sociología 51.

Como si el poder estuviera en otro lugar: reflexiones en torno a la "renovación" y la "nueva política" en la Argentina contemporánea

Julieta Lenarduzzi

En la actualidad, la preocupación por la "crisis de representación" corre en paralelo con diversos discursos ligados a la "nueva política" y a la "renovación". Estos discursos incorporan consignas para rehabilitar la legitimidad perdida: la promoción de un recambio generacional en las elites políticas; la emergencia de liderazgos que respondan a grupos tradicionalmente subrepresentados (mujeres, minorías étnicas, jóvenes, sectores populares etc.); la creación de nuevos partidos políticos o de nuevas organizaciones político-sociales; el "giro a la izquierda" en las políticas públicas; la mayor democratización de las estructuras partidarias para que reflejen adecuadamente las demandas ciudadanas; el énfasis en las políticas de "proximidad".[1]

El diagnóstico de "crisis" y la consigna de la "renovación" se expresaron y expresan de modo especial en el contexto argentino. Si bien se encuentran antecedentes en la tradición radical y en otros discursos políticos aislados,[2] no es sino hasta 1983 que el significante "renovación" cobra importancia en la política, principalmente en la campaña presidencial, la posterior emergencia de la "Renovación" en el seno del peronismo en los años 80' y la apelación a la "nueva política" en el discurso del Frente Grande, el Frepaso y la Alianza en la última década del siglo XX. Pero es sólo luego de la crisis de 2001 que este discurso se propaga a todo el arco político y se erige en un elemento central de la competencia electoral, al ser articulado por el kirchnerismo y otros actores en diferentes niveles de representación.

Al analizar estas experiencias comparativamente, salta a la vista es que mientras en algunos casos se trata de discursos de campaña que se agotan *al ocupar el poder*, en el último período las apelaciones a la "renovación" provienen en su mayoría *desde el poder*. A partir de este dato, la propuesta del presente trabajo es analizar la formulación del discurso público de la "Renovación" peronista, la "nueva política" en la década del 90' y el kirchnerismo en términos de la relación entre "renovación" y poder, para luego distinguir

[1] Respecto de la política de "proximidad" Ver Annunziata (2012).

[2] Entre los antecedentes encontramos el "Movimiento Intransigencia y Renovación" en el seno de la UCR los 40' y el movimiento "Renovación y cambio", fundado en 1971, también en la UCR. Durante el Proceso de Reorganización Nacional se encuentran otras menciones a la renovación: en 1978, el entonces gobernador de facto de la Provincia de Buenos Aires, Saint Jean, sostenía la necesidad de la renovación: "… señaló el general Saint Jean que es determinación del poder ejecutivo que preside realizar una paulatina renovación de los elencos municipales, colocando al frente de esas comunas –dijo- 'a hombres cuyas edades oscilen entre los 30 y 40 años'." Ver *La Nación,* (18 de junio de 1978) "Paulatina renovación de los elencos municipales". De todas maneras, la "renovación" no ocupa un lugar central en el discurso político de la época, sino sólo marginalmente. Sería interesante analizar, en otra investigación, cómo el discurso de la renovación del pasado se escenifica en contextos democráticos y autoritarios.

las tensiones que definen dicho vínculo y por último describir los giros discursivos que se verifican en la actualidad.

I. La "renovación" y la "nueva política" antes y después de diciembre de 2001

I.I De la primavera democrática a la crisis

En el marco de la transición democrática, Raúl Alfonsín y los dirigentes radicales que lo acompañaban eran caracterizados como expresiones de la "renovación" por su modo de relación con el electorado.[3] El triunfo "inesperado" de la Unión Cívica Radical (UCR) en las elecciones presidenciales[4] fue interpretado como el resultado de una campaña exitosa en la que "lo nuevo" había tenido protagonismo. En el seno del peronismo derrotado se sostenía que la elección de Alfonsín se debía a que se había presentado como lo "nuevo", mientras que el Partido Justicialista (PJ) se había mantenido aferrado a las glorias pasadas.[5] Luego de este resultado "inesperado", el peronismo se embarcó en un proceso de "autocrítica" que fue seguido por la creación de la "Renovación".[6] Aquí, la distinción entre "renovadores" y "ortodoxos" se basaba en el modo de relación de los dirigentes con el "pueblo". La atención a la voz del electorado, la horizontalidad, la participación directa y el involucramiento de los afiliados en la vida de la organización partidaria eran los pilares sobre los que se asentaba la plataforma de los "renovadores"; se trataba de un enfrentamiento entre los líderes que estaban "con la gente" y aquellos que manejaban los "aparatos". El cambio que se propugnaba provenía de "los márgenes", ascendía desde las bases hacia la cúpula, combatía a los que conservaban el "poder" -las estructuras sindicales y estatales de diversa índole. El objetivo postulado por la "Renovación" consistía lograr una transformación interna que permitiera al peronismo volver a ser una alternativa de poder y ganar elecciones. En consecuencia, la "Renovación" se dio por cerrada una vez que se cumplió el propósito de ganar la elección presidencial de 1989, y esto se evidencia en la nula mención de la "renovación" en los discursos de Carlos Menem –que había sido uno de los principales propulsores de este proyecto- una vez electo.

El período abierto en 1989 dio lugar a nuevos sentidos de la renovación, ya que parte de los "renovadores" de la década pasada comenzaron a mostrar disidencias con el partido en el gobierno y se separaron formando el conocido "Grupo de los ocho".[7] En las elecciones posteriores se sucedieron a partir una serie de Frentes –siendo los principales el Frente

[3] Para estudiar el "Movimiento Renovación y Cambio" y la "Coordinadora", ver Altamirano (1987).

[4] La cuestión del "accidente" está presente tanto en la Renovación peronista de la década del 80' como en el triunfo de Néstor Kirchner en la elección presidencial de 2003, aunque en un sentido inverso. "La derrota electoral no fue un accidente o un momento negativo en la historia de nuestra evolución política, sino por el contrario, fue un hecho histórico que nos coloca ante el imperativo de plantearnos sin censura las reformulaciones teóricas y las consecuencias políticas, que no hicimos ni extrajimos a la muerte de Perón." Ver Álvarez, C. (agosto de 1984) "El Peronismo se transforma o se muere", *Revista Unidos* N° 03.

[5] Esta interpretación se encuentra repetidamente en los testimonios de los actores. Ver Unamuno et. al. (1984): 85.

[6] Inicialmente, Antonio Cafiero lanzó el Movimiento para la Unidad, Solidaridad y Organización de la Provincia de Buenos Aires (MUSO), que postulaba su candidatura como Presidente del Partido Provincial. Entre los objetivos de esta agrupación se encontraban la creación de un "partido de renovación", la realización de una autocrítica, y la reforma del Estatuto del partido, con la incorporación del voto directo de los afiliados para la nominación de los candidatos.

[7] Integraban el Grupo de los Ocho: Germán Abdala, Darío Alessandro, Juan Pablo Cafiero, Luis Brunati, Franco Caviglia, José Carlos "Conde" Ramos, Moisés Fontela y Carlos "Chacho" Álvarez.

Grande y el Frente para un País Solidario (Frepaso)- que culminarían en la formación de la "Alianza", donde la apelación a una "nueva política" formaba parte del discurso de campaña, ligado a las denuncias de corrupción y la propuesta de una política "limpia".
Esta articulación discursiva encontró problemas para sostenerse en el gobierno, como se ve claramente en el discurso de renuncia de Carlos "Chacho" Álvarez a la vice presidencia:

> "… no renuncio a luchar, renuncio al cargo con el que me ha honrado la ciudadanía. Fundé una fuerza nueva para, entre otras cosas, cambiar la forma de hacer política en este país, en nuestro país; estoy convencido de que estamos ante una crisis terminal de una forma hacer política, en la relación entre el poder político y el poder económico, y del vínculo entre la política y la gente. Lo vengo sosteniendo, no es de ahora, sino de más de diez años, cuando me fui del Partido Justicialista. […] esta situación debe enfrentarse con una enorme cuota de decisión: o se está con lo viejo, que debe morir, o se lucha por lo nuevo, que esta crisis debe ayudar a alumbrar." (*Página 12*, 7 de octubre de 2000: 3).

En ambos casos –el de la Renovación peronista y la "nueva política" del Frepaso y la Alianza- las apelaciones a lo "nuevo" se realizaban *desde fuera y en oposición al poder*, y luego fueron abandonadas o encontraron tensiones irresolubles en el ejercicio del poder. La crisis de 2001, que de alguna manera hizo estallar el espacio del poder político, traerá cambios en la forma de concebir el vínculo entre la "renovación" y el poder.

I.II Del presidente inesperado a la presidenta reelecta

En la elección de 2003, enmarcada en el contexto de la crisis detonada en diciembre de 2001, la competencia también se formuló a partir de la oposición entre lo "nuevo" y lo "viejo", entre otras claves de diferenciación.[8] Ante las diversas alternativas de lo que podría llamarse el "arco peronista", Kirchner era considerado el referente de la "renovación", porque se oponía a las estructuras y aparatos tradicionales y había propuesto –con otros actores como Elisa Carrió- la caducidad de todos los mandatos. Como candidato, sostenía que "la política de las estructuras ya no existe porque la gente es la que vota. […] Yo nunca construí política de estructuras", y argumentaba seguidamente que era necesario "encarar un fuerte proceso de renovación institucional, construir un espacio en el que colaboren peronistas e independientes" (*DyN*, 10 de enero de 2003).[9] El sentido del resultado electoral de abril de 2003 fue dotado de un sentido particular en el discurso de asunción, donde se enfatizaba la importancia de "lo nuevo":

> "El 27 de abril, las ciudadanas y los ciudadanos de nuestra patria, en ejercicio de la soberanía popular, se decidieron por el avance decidido hacia lo nuevo, dar vuelta una página de la historia. No ha sido mérito de uno o varios dirigentes,

[8] Otras claves de diferenciación en juego eran la tradicional entre peronismo y antiperonismo (pero mucho menos operante que en el pasado), entre corrupción y transparencia, entre modelos de resolución de la crisis económica, entre liderazgos percibidos como de "derecha" y de "izquierda".
[9] Esta nota se encuentra reproducida en el Diario Los Andes bajo el título "Elecciones 2003: Duhalde se la juega por Kirchner".

> ha sido, ante todo, una decisión consciente y colectiva de la ciudadanía argentina."[10]

La estructura partidaria del PJ era definida como parte de la "vieja" política y el enfrentamiento abierto entre lo "nuevo" y lo "viejo" se escenificó en la elección legislativa de 2005 en la Provincia de Buenos Aires, cuando Kirchner planteó un enfrentamiento con los actores que habían dado su apoyo en la elección de 2003. Los candidatos kirchneristas se presentaron por fuera del PJ e insertos en el Frente para la Victoria (FPV), que había pasado de ser una etiqueta electoral a portar el *status* de "proyecto". En el lanzamiento del FPV nacional, en la Ciudad de Rosario, Cristina Fernández de Kirchner, que se postulaba a la senaduría por la provincia de Buenos Aires, hacía referencia a la "vieja" política:

> "Hay también un antes y un después en la forma de hacer política, en la forma de conectarse y acercarse de las dirigencias políticas a la sociedad, a la gente, a los ciudadanos. Antes, fue la política de los pactos dirigenciales, de las viejas dirigencias. Cuando hablo de viejas, señor Presidente, argentinos, no hablo de una cuestión cronológica: soy la que con veinte años, y miles de argentinos también, trajimos a Perón, a los 78 años, para cambiar la historia de los Argentinos. Es un problema de ideas, no cronológico, es un problema de cabeza."[11]

El triunfo electoral de 2005 en la Provincia de Buenos Aires fue presentado como un triunfo de la "renovación" kirchnerista en un espacio localizado (en un movimiento descendente desde la nación a las provincias).

En 2007, cuando se avizoraba un escenario prácticamente unipolar en que ninguno de los candidatos opositores parecía capaz de alcanzar el porcentaje de votos necesarios para disputar la presidencia con la fórmula encabezada por Cristina Fernández de Kirchner, la renovación seguía siendo postulada como bandera del kirchnerismo, bajo la consigna de "Ampliar la democracia y profundizar el cambio", aún cuando no se proponía un cambio de color político en el gobierno. En el marco de este "cambio en la continuidad", se buscaría el escenario más propicio para que surgiera lo "nuevo" como modo de legitimación de la propuesta renovadora. Las intendencias de la provincia de Buenos Aires (y otras en el resto del país), fueron los espacios elegidos. Lo llamativo fue el uso de listas colectoras –especialmente por parte del Kirchnerismo-, que permitía que candidatos pertenecientes a diferentes sectores tanto dentro como fuera de la estructura del PJ pudieran presentarse a elecciones para disputar los cargos locales (intendente, concejales y consejeros escolares) apoyando la misma candidatura presidencial y provincial. La estrategia de colectoras permitía dar lugar a la presentación de candidaturas "renovadoras" sin por ello perder el apoyo de los "aparatos" locales.

Los resultados mostraron un escenario en gran parte esperable –la reelección de la mayor parte de los intendentes que se habían presentado-, aunque en algunos casos hubo sorpresas. Los candidatos triunfantes en el Conurbano bonaerense, por ejemplo, fueron prontamente nombrados como expresiones de la "renovación".[12] En las notas periodísticas

[10] Discurso de Néstor Kirchner ante la Asamblea Legislativa, 25 de mayo de 2003.

[11] Acto de lanzamiento del Frente para la Victoria Argentina. Rosario, 24 de Agosto de 2005.

[12] En la nota periodística titulada "Caras nuevas en el Conurbano bonaerense" (*La Nación*, 4 de noviembre de 2007) además de Tigre, Lanús, Quilmes, Almirante Brown, San Miguel y San Vicente. En otras se mencionan también Esteban Echeverría, La Plata y Luján (que no forman parte del Conurbano). Una nota anterior se

se destacaba que habían vencido a intendentes que hacían uso de prácticas clientelares; que eran kirchneristas de "la primera hora", y tenían una relación distante con el PJ; y que establecían una relación más directa con el electorado (en contraste con la apelación a la simbología peronista). Aparecían como "nuevos" en la política, con un énfasis en mejoras concretas y enfrentados a "viejas" estructuras y fórmulas.

Pero el enfrentamiento al "aparato" del PJ como parte del discurso "renovador" local, que había sido eje de los procesos electorales anteriores, no se mantendría por mucho tiempo. En un contexto marcado por la baja en la popularidad de Cristina Fernández de Kirchner,[13] las elecciones legislativas de 2009 llamaron la atención por el uso de "listas testimoniales" (que postulaban a intendentes y otros funcionarios en ejercicio que al momento de ser electos como concejales o diputados era esperable que no asumieran el nuevo cargo). Si bien acentuaban aún más la continuidad con la elección de 2007 (por la repetición de los mismos candidatos), también hacían que los intendentes en funciones se vieran como candidatos cuyo lugar en el poder volvía a ponerse en juego en la elección legislativa, aún cuando no era así, con el supuesto de que es más legítimo aquel representante que se expone a la incertidumbre de la elección.

Con el liderazgo presidencial recompuesto,[14] el escenario electoral de 2011 volvió a poner el acento en los liderazgos personales. Mientras Cristina Fernández de Kirchner buscaba la reelección, los intendentes "renovadores" del Conurbano, también se presentaron a elecciones, intentando instalar la idea de "la continuidad del cambio". Los resultados electorales confirmaron el apoyo a la reelección presidencial, del gobernador y de los intendentes. Con este resultado, la "renovación", que seguía siendo postulada, adoptaba una nueva forma en relación al pasado, logrando articular la idea del cambio sin por ello implicar la circulación de las personas concretas.

En contraste con los casos anteriores, la renovación en este período no fue opositora sino oficialista. Esta combinación de negatividad y gobierno, no sólo logró continuar ocupando el lugar del poder *a pesar* de las tensiones y problemas que presenta el discurso de la "renovación", sino que parece haberlo hecho *gracias* a este mismo discurso.

II. Renovación y poder

En los discursos de la renovación analizados, en general las apelaciones se realizan *desde fuera* del poder –especialmente durante las campañas- y la renovación encuentra problemas para continuar siendo el discurso predominante una vez que los candidatos electos asumen sus cargos. Pareciera que no es posible ser "renovador" y "gobernante" al mismo tiempo. Pero la relación entre renovación y poder se presenta de manera diferente en cada escena: la Renovación en el seno del peronismo se agota claramente *al momento* de la elección de Menem como presidente, pues se ha cumplido su objetivo. La renovación de la política postulada por la Alianza se disuelve conflictivamente *durante* el ejercicio del

titula "Cuatro nuevos rostros en el Conurbano" y fue publicada por *La Nación* el 31 de octubre de 2007, luego de conocer los resultados de la elección.

[13] De acuerdo a las mediciones de Poliarquía, la popularidad de Cristina Fernández de Kirchner pasó de un 51 por ciento en enero de 2008, a una abrupta caída al 20 por ciento en junio del mismo año. Se mantuvo por debajo del 30 por ciento hasta mayo de 2010, cuando comenzó a ascender levemente para llegar al 36 por ciento antes del fallecimiento de Néstor Kirchner.

[14] Luego de la muerte de Néstor Kirchner, la imagen positiva de la presidenta –que venía recuperándose lentamente- dio un salto al 55 por ciento de aceptación (según datos publicados por Poliarquía).

gobierno, y el incumplimiento de las promesas electorales en cuanto a un nuevo modo de hacer política son determinantes, primero, en la fractura de la coalición gobernante, y luego en la dimisión del presidente. La renovación que postula el kirchnerismo, aunque es permanentemente cuestionada, parece por el contrario reforzarse *luego* de asumir la presidencia.

El contraste entre las experiencias pasadas y el giro de este último período -por el que el discurso de la renovación se reconvierte para ser evocado *desde* y no sólo *contra* el poder- requiere detenida atención. Por ello nos interrogaremos, en primer lugar, acerca de las tensiones que presentan los discursos de la renovación en el ejercicio del gobierno, a saber: la distancia, la vejez y la gobernabilidad. Luego, prestaremos atención al modo en que estas tensiones se hacen evidentes o se eluden en el discurso kirchnerista más reciente.

II.I Tensiones

Los líderes renovadores se presentan como distintos por ser más parecidos a aquellos a quienes representan. Lo que los diferencia es que están del lado de la "gente" y no de los "dirigentes" o la "clase política". Pero, al ser electos, quedan igualados al resto de los políticos y la distancia entre quienes se encuentran dentro y fuera de la política vuelve a levantarse como una barrera. Se hace visible nuevamente la distancia entre gobernantes y gobernados, por lo que se incumple la promesa de "eliminación de la distancia".

La primera tensión entre "renovación" y poder –el necesario distanciamiento del pueblo que implica la ocupación del poder- tuvo lugar de diferentes maneras a lo largo de las tres décadas de régimen democrático en Argentina. En este sentido, el caso del kirchnerismo se diferencia primero porque no hubo algo como una "oposición" en los momentos de la campaña por la presidencia en 2003, y porque no hubo algo así como el "poder" –o sí lo hubo, pero la percepción era de que el poder se encontraba vacante. Es decir que no había un modo de delimitar el vínculo entre oposición y gobierno, por lo que no había un opositor "renovador" dirigiéndose a la ciudadanía, sino que todos eran renovadores y el problema no era la ocupación del poder sino el "vacío" literal del mismo. Luego del momento electoral, la idea de poder fragilizado siguió vigente, como condición de posibilidad de la articulación de una "renovación" permanente desde el poder.

Mientras la primera tensión tiene más claramente que ver con la dimensión espacial del poder (la cuestión de que el poder es un lugar distinto y distante), la segunda tensión que se evidencia con los discursos de la renovación se vincula a la alteración de la temporalidad. Lo que es "nuevo" antes de la elección, se convierte en "viejo" al día siguiente. Lo "nuevo" es asociado a aquello contrario al poder y lo "viejo" a las relaciones de jerarquía, de mando y obediencia. Se dice que "con el tiempo, uno se vuelve conservador": lo viejo es lo conservador, y los gobernantes quieren conservar el poder, no perderlo. Así, el tiempo político se autonomiza y afecta la propia temporalidad del cuerpo. La elección puede concebirse entonces como un pasaje que acelera el tiempo, que cambia su ritmo, a partir del cual lo que era "nuevo" –lo que llega- deviene "viejo" –lo que está y va a irse- en un instante.

En la Renovación de la década de los 80', la vejez era característica de un modo "viejo" de pensar y actuar. Lo "viejo" era lo que tenía que ver con mandar y ser mandado, con obedecer y ser obedecido. Pero cuando Menem triunfó en la elección presidencial, dejó de

hacer referencia a lo "nuevo", que sería portado por otros actores. El menemismo aceptó que el poder avejenta, y aún en ese momento la vejez no era tan desvalorizada.
En el caso de la Alianza, se experimentaba una suerte de resistencia a aceptar el avejentamiento producto del poder, al mismo tiempo que se encontraba un obstáculo para redefinir la política gubernamental como caracterizada por lo "nuevo". Esta dicotomía entre nuevos que no podían gobernar con sus reglas y viejos que gobernaban con viejas prácticas, se irá agudizando con el tiempo, hasta estallar cuando el poder, que era ocupado por uno (el presidente) que a la vez era dos (su vicepresidente), fue el espacio de una derrota para lo "nuevo", como si no pudiera transformar el poder sino sólo llegar a él y ser transformado.
En el kirchnerismo también se ve la tensión producto del paso del tiempo. Las transformaciones contemporáneas de la democracia, que conllevan el hecho de que el poder se legitime permanentemente, hacen que el poder no sea siempre el mismo lugar sino que siempre sea un lugar a ser ocupado –o desocupado-. ¿Cómo ser "nuevo" siempre aunque pase el tiempo? ¿Cómo se puede conservar el poder estando dispuesto siempre a perderlo? Este contexto ofrecía la oportunidad de recrear un discurso de campaña –portando lo "nuevo"- aún cuando el poder era efectivamente ocupado. Entonces, lo que parecía incompatible –lo "nuevo" y el poder- encontró nuevas formas de puesta en escena.
La tercera tensión entre "renovación" y poder se refiere al problema de la "gobernabilidad" que, por por un lado, se basa en los medios por los cuales una sociedad se vuelve gobernable, es decir, dispuesta a ser ordenada, sin que el poder se fragilice. Por otro lado, implica que para la gobernabilidad es preciso que el poder esté controlado, regulado, sujeto a las restricciones impuestas por los derechos de los individuos, los que conforman el Estado de derecho. En relación al poder, la gobernabilidad puede pensarse a su vez como la conservación del poder en el tiempo y como la conservación del lugar propio del poder en la sociedad. Los discursos de la renovación dan lugar a la aparición de una tensión con respecto a la cuestión de la gobernabilidad, primero, porque la posición legítima del líder renovador es la de la negatividad, pero no se puede gobernar desde la negatividad; segundo, porque pareciera que para gobernar hay que hacer "vieja política".
La campaña electoral que dejó como vencedor "accidental" a Néstor Kirchner se llevó a cabo en el marco de un giro en el modo de concebir la relación entre renovación y gobernabilidad. En un contexto de *quasi* ingobernabilidad, lo nuevo era la única alternativa para gobernar, por lo que la tensión se reconvirtió y se pasó a asociar lo "nuevo" a la capacidad de gobierno, porque todo otro poder se encontraba deslegitimado. Al momento de asumir, Néstor Kirchner instituyó un discurso en busca del cambio de sentido de la "gobernabilidad":

> "Rechazamos de plano la identificación entre gobernabilidad e impunidad que algunos pretenden. Gobernabilidad no es ni puede ser sinónimo de impunidad. Gobernabilidad no es ni puede ser sinónimo de acuerdos oscuros, manipulación política de las instituciones o pactos espurios a espaldas de la sociedad."[15]

Se definía así lo que la gobernabilidad no era, dejando lo que la gobernabilidad es como un sentido abierto, ligado al hacer. El sentido de la gobernabilidad en décadas pasadas y en el presente ha ido cambiando y por ello también se ha transformado la tensión que se

[15] Discurso ante la asamblea legislativa, 25 de mayo de 2003.

percibe entre capacidad de gobierno y renovación. La renovación, como discurso instituyente que devuelve el gobierno a la política, en el momento del kirchnerismo no resuelve la tensión, sino que la postula en otros términos, ya que todo parece ser decidido y nada dado de antemano. La ingobernabilidad permanece como amenaza latente a la "renovación", permitiendo la toma de decisiones, porque el cuestionamiento a la autoridad es visto como parte de un humor destituyente.

II.II Como si el poder estuviera en otro lugar

En relación a las tres tensiones mencionadas –la de la distancia, la de la vejez y la de la gobernabilidad- el giro reciente en el discurso de la renovación nos lleva a pensar en el modo en que se pone en escena el poder en términos espacio-temporales. El giro discursivo reciente ha consistido en hacer *como si* el poder estuviera en otro lugar. A continuación se analizarán tres formas en las que esto se ha cristalizado: *la distinción entre el poder político* –vacío, frágil, indeterminado- *y los otros poderes* –encarnados, fácticos-; *el movimiento hacia lo local*, que divide al poder en porciones y niveles; y *la campaña permanente*, donde cada relegitimación en el espacio público de los gobernantes se escenifica como una nueva elección.
Respecto del primer giro del discurso (*la distinción entre poderes*), el análisis de los discursos públicos resulta ilustrativo. En un acto en un municipio del Conurbano en 2006, Néstor Kirchner leía en voz alta los carteles del público y, como en otras ocasiones, imaginaba un diálogo directo con sus videntes y oyentes:

> "En esta hermosa conversación que tenemos hoy, me dicen acá, con todas las letras, 'no al cierre del hospital Melo', así que querido Gobernador…, el Gobernador me acaba de afirmar que no se va a cerrar el hospital Melo, ¿seguro Gobernador?, sino hacemos una marcha a La Plata, voy yo adelante. Dijo que no."[16]

Más adelante, en el mismo discurso, Kirchner se dirigió al entonces intendente de la localidad para explicarle cómo se hacía para seguir avanzando con las obras en el municipio:

> "Y también, querido compañero, amigo Intendente, ahora, con el que tiene que trabajar usted es con ese señor peladito que está por acá (risas) y a él lo corre para que [se haga] en tiempo y forma la licitación y podamos ganarle a la burocracia. Así que la obra está absolutamente decidida."[17]

En ambos fragmentos el lugar del presidente como representante se distingue de aquél de "otro" poder: primero, porque se posiciona como un igual en relación a los vecinos/ciudadanos frente al gobernador –el que toma las decisiones-, convirtiendo una orden en una demanda y amenazando con una acción de protesta ciudadana; después, poniéndose a la par del intendente frente a la burocracia y al poder institucional, buscando "ganarle" a la administración, que paradójicamente él mismo encabeza.

[16] Acto en Lanús, 26 de octubre de 2006.
[17] Acto en Lanús, 26 de octubre de 2006.

El giro discursivo presente en las enunciaciones públicas de Néstor Kirchner –y veremos que ocurre lo mismo en el caso de Cristina Fernández de Kirchner- disimula la distancia representativa a través de la formulación de espacios de poder ocupados por otros, que encarnarían el "verdadero poder". Esto permite seguir postulando la negatividad, la diferencia que pone al representante, aunque esté en el poder, del lado de la "gente". El gobierno se postula como en constante lucha contra algo, ya no como una oposición contra un gobierno, sino como un gobierno contra aquellos que gobiernan la sociedad –los poderes no democráticos, sino fácticos.

El poder es formulado de manera plural: es "político", es Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de las corporaciones económicas, de las corporaciones mediáticas, de las corporaciones partidarias, etc. En el discurso de Kirchner, aparece permanentemente la definición del poder que él ejerce (el "poder civil", el "poder de origen popular", los "poderes constitucionales", el "poder que surge del pueblo en democracia") que se distingue de otros poderes no legítimos, encarnados.[18]

Si analizamos la cronología de luchas contra estos "poderes", es preciso destacar, a inicios del mandato presidencial de Néstor Kirchner, su primer discurso por cadena nacional, en el que solicitó al Congreso que instrumentase las medidas para la renovación de miembros de la Corte Suprema (*Clarín,* 4 de junio de 2003). En referencia a esta cuestión, sostuvo en otro acto:

> "… nos dijeron que era absolutamente imposible pensar en abandonar la teoría de los pactos, que acá lo mejor era no levantar olas, que había que consensuar con el poder establecido. Y yo les puedo asegurar que consensuar con ese poder establecido, que nos llevó a los argentinos a esta situación, es estar cada día peor. O apostamos fuerte al cambio o no hay salida. Por eso cuando yo salí por cadena, que a algunos no les gustó, a explicarle al pueblo -y lo voy a hacer cada vez que sienta la necesidad de explicarle a la gente que es imprescindible que nos acompañe para dar la batalla contra intereses poderosos- lo hice con el problema de la calidad, de la situación y de las acciones que permanentemente llegaban desde la Corte Suprema de Justicia hacia los distintos gobiernos."[19]

Otra escenificación del poder como ubicado en otro lugar se vio en el enfrentamiento con el Fondo Monetario Internacional. Como contaba retrospectivamente en uno de sus discursos: "Luego vino la otra gran decisión soberana de pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, de modo tal que ya nadie pudiera ser jefe de la economía argentina, que el jefe de la economía argentina se sienta acá y por decisión del pueblo".[20]

El problema con Uruguay en relación a la planta papelera Botnia, nuevamente se planteó como una lucha contra otro poder. En tono de conversación, Néstor Kirchner se dirigió al público de un acto en Mendoza, diciendo:

> "… quiero aprovechar su presencia para conversar con ustedes y con los amigos que nos miran por televisión algunos temas de actualidad. Realmente hoy veía

[18] Este enfrentamiento con "los poderosos" ya estaba presente en el discurso de campaña de la Renovación peronista: "Renovar al peronismo es también reencauzarlo en su senda, recuperar su insolencia, no claudicar frente a los poderosos, volver a sensibilizarnos en el amor a los humildes". Buenos Aires, 21 de diciembre de 1985 (Documento fundacional de la Renovación Peronista).

[19] Discurso en Rawson, Chubut, 27 de junio de 2003.

[20] Discurso frente a la Asamblea Legislativa, 10 de diciembre de 2011.

> con asombro algunos titulares de importantes matutinos de la República Argentina, de mi querida República Argentina, donde dicen que la Argentina o este Gobierno que le toca representar a la Argentina, ha tenido una nueva derrota en el campo internacional respecto a la decisión del Banco Mundial de otorgar el crédito de Botnia a la República Oriental del Uruguay. […] Yo creo que los titulares que tendrían que haber dicho esos diarios, importantes diarios, son: 'ganaron los intereses de Botnia'. Esta es la realidad, volvieron a ganar los intereses de los países centrales. Argentinos, los que me miran acá y los que me escuchan en sus casas, ténganlo bien claro, han vuelto a ganar los intereses de Botnia y del Banco Mundial. […] Tengámoslo absolutamente claro: acá no es que ganó la posición de un país o de otro país, ganaron los intereses de Botnia que evidentemente con toda la presión, la capacidad y la fuerza que tiene, los vuelve a imponer. Esto no se dice en ningún lado."[21]

Por un lado los poderes fácticos, por otro lado los poderes instalados en la esfera política, se constituían uno tras otro en el relato oficialista. En 2005, durante la campaña para las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner relataba una situación que había experimentado en la parroquia de los Palotinos del barrio de Belgrano[22]:

> "Un hombre, al que uno de los Palotinos asesinados había casado hace más de 40 años me dijo, con lágrimas, 'no se dejen intimidar'. Y yo le digo a usted, Presidente, no se deje intimidar. Le quieren torcer el brazo."[23]

Al referirse a un tercero en plural, los que "le quieren torcer el brazo", se representa un "otro" que no se identifica unívocamente, sino que abre el espacio de la significación para abarcar tanto a los medios de comunicación, los actores políticos de la oposición, el sector empresario, etc. La frase "no se deje intimidar", por otro lado, aparece repetidamente en el discurso:

> "Yo quiero decirle, en nombre de miles de compañeros y compañeras, de millones de ciudadanos y ciudadanas, siga adelante, no se deje intimidar, el pueblo lo va a ayudar, el pueblo lo va a apoyar, porque sabe que usted los está representando."[24]

Cristina Fernández de Kirchner primero mencionaba que un hombre le había dicho "no se dejen intimidar" y luego ella misma le dice a Kirchner "no se deje intimidar". El hecho de que sean dos –Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner- y que ella se dirija a él en nombre del pueblo, como una representada, vuelve a establecer una línea divisoria que separa al poder de la ciudadanía, de la que también los Kirchner formarían parte, por ser portadores del mensaje popular de "no dejarse intimidar".
Otra forma de diálogo pripartito en el que Cristina es a la vez representante y representada, se encuentra en la siguiente cita:

[21] Discurso en Mendoza, 22 de noviembre de 2006.
[22] San patricio, iglesia de los palotinos.
[23] Lanzamiento de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a senadora por la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 7 de julio de 2005.
[24] Acto de Homenaje a Evita en el Club La Unión de Berazategui, 26 de Julio de 2005.

> "Con toda la fuerza, la convicción, con la que siempre he defendido lo que pienso, ese modelo de país por el que tanto luchamos. 29 años, y a usted lo encuentra Presidente de la República, y a mí, junto a millones argentinos tratando, no de defenderlo a usted, que se defiende bastante bien solo, sino defendiéndonos a nosotros mismos porque la sociedad va a votar en defensa propia."[25]

En la misma campaña, Cristina Fernández de Kirchner se refería a Eva Perón, nuevamente marcando una línea divisoria entre el pueblo y los representantes, superpuesta a otra existente entre el oficialismo y la oposición. Tomando un símbolo de la tradición peronista, la pregunta era "de qué lado" Evita se encontraría (si con el pueblo o con los viejos dirigentes, si con ellos o con los peronistas opositores), y nuevamente emergía la demanda de que "no se doblegue, que no se entregue" similar a la antes mencionada de "no se deje intimidar", pero ahora saliendo de la boca de una Eva imaginada traída al presente:

> "Dónde estaría Evita?, ¿qué haría Evita?. ¿Lo ha pensado, usted, señor Presidente, en algún momento? ¿La imagina a Evita enojada con usted o tratando de que no pelee más con el Fondo Monetario ni con nuestros acreedores, que tenga mejores modales o al contrario, pidiéndole que no se doblegue, que no se entregue, que pelee por los intereses de los argentinos? […] ¿Dónde la imaginan a Evita, pidiendo no volver al pasado o al lado de las Madres y de las Abuelas de Plaza de Mayo? ¿Adónde la imaginan a Evita? (Aplausos) ¿Dónde estaría Evita? ¿Cómo trataría Evita a aquellos que, en nombre del peronismo, saludaron a los almirantes que derrocaron a Perón en el 55, se abrazaron con el capitán ingeniero y su emblemática hija, entregaron el patrimonio de los argentinos, les cercenaron derechos a los trabajadores? ¿Diría, como dicen algunos y comentan, 'es sólo la interna del partido del Gobierno' o, como Jesús, echaría a los mercaderes del Templo? Quiero saber dónde imaginan ustedes a esa Evita."[26]

Luego de que Cristina Fernández de Kirchner asumiera la presidencia en 2007, el conflicto con los sectores del campo, que se extendió más allá de un enfrentamiento de carácter sectorial, también era escenificado como el enfrentamiento con los poderes "fácticos". En su acto público en la Plaza de los Dos Congresos, a la espera de la decisión respecto de la ley que confirmara las retenciones, Néstor Kirchner decía:

> "… les pido que como me ayudaron a mí la ayuden a Cristina, que es una mujer con coraje, dispuesta a transformar la patria. ¿O ustedes creen que si Cristina hubiera querido quedar bien con ciertos sectores no lo hubiera hecho, como lo hicieron tantos dirigentes, dándose un abrazo en la oscuridad, fuera del aire libre, tratando de arreglar este conflicto de cualquier manera? Y Cristina dijo 'No, no vine a dejar las convicciones en mi casa. Las voy a llevar hasta el final. Vine a luchar por una patria justa, vine a luchar por la equidad, por la inclusión social, porque se consolide el nuevo modelo, por el nuevo tiempo, la nueva historia".[27]

[25] Cristina Fernández de Kirchner, La Plata, 7 de julio de 2005.
[26] Homenaje a Evita en el Club la Unión de Berazategui, 26 de julio de 2005.
[27] Discurso de Néstor Kirchner en la Plaza de los Dos Congresos, 15 de julio de 2008.

Y, el momento de la sanción de la ley de medios de audiovisuales,[28] en el discurso frente a la Asamblea Legislativa al reasumir la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner señalaba:

> "La distribución de la palabra, a través de la Ley de Servicios de Medios Audiovisuales, fue una distribución construida colectivamente con coraje, […] Y digo coraje, porque se debió enfrentar un formidable, tal vez, el más formidable aparato mediático en épocas, donde todos los sabemos, si no aparecés en la televisión o en el diario, no existís."[29]

El poder político se autorrepresentaba desposeído frente al "más formidable aparato mediático en épocas", capaz de dotar de existencia o relejar a la invisibilidad a los políticos. Y la idea del dislocamiento del poder se destacaba nuevamente en su discurso al referirse a "a quién representa" la figura presidencial:

> "… soportar cinco corridas cambiarias que las corporaciones hicieron creyendo que este Gobierno iba a ceder. Que se den por notificados: yo no soy la Presidenta de las corporaciones. Soy la Presidenta de los 40 millones de argentinos".[30]

Una primera forma en la que no se elude sino que se explota la tensión entre "renovación" y poder es, entonces, la del desplazamiento de las nociones ligadas al poder hacia otros poderes encarnados, que se construyen como el adversario del poder legítimo, que sólo "puede" en tanto es el "poder del pueblo".

Un segundo modo en el que el poder se presenta como en otro lugar se vincula con *el movimiento hacia lo local*, que caracteriza la reproducción del discurso en las elecciones que sucedieron al triunfo de 2003. Si bien se ocupa el lugar del poder al ganar una elección, hay otros –múltiples- lugares del poder político a ser ocupados, y la renovación se postula entonces como la emergencia de lo "nuevo" en diversos espacios territoriales –que son productos de la "ficción" federal- en los que el poder se encuentra ocupado por lo "viejo". Este giro discursivo tiene que ver entonces con el tiempo y el espacio, ya que en cada momento electoral se escenifica un nuevo lugar para que se efectivice la "renovación". En este caso, el discurso se transforma para hacer *como si* el espacio provincial, y luego el municipal, fueran aquello que es preciso renovar, en un movimiento progresivo e indefinido, desde lo nacional a lo local.
La renovación en el espacio local tiene dos sentidos: por un lado, se trata de renovar frente a la "anti política"; por otro, renovar frente a la "vieja política". Una escenificación clara de este movimiento se encuentra en los municipios del Conurbano bonaerense, primero como espacios privilegiados en los que "hacer política" en oposición a la idea de que la administración municipal se asemeja al espacio liberado de la "política" entendida como politiquería, es el espacio de la reproducción de la vida, del "alumbrado, barrido y limpieza"; segundo, porque allí se encuentran los resquicios de las prácticas que es preciso cambiar, de los modos de la política no democrática, corporativa.

[28] La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual fue aprobada por el Congreso 9 de octubre de 2009 y promulgada por decreto presidencial el 10 de octubre de 2009. Reemplazó a la Ley de Radiodifusión 22.285, que había sido promulgada en 1980.
[29] Discurso frente a la asamblea legislativa, 10 de diciembre de 2011.
[30] Discurso frente a la Asamblea Legislativa, 10 de diciembre de 2011.

En cada campaña electoral que sucedió al 2003, la cuestión de la "renovación" se postuló desde el lugar de quienes habían sido electos y buscaban la reelección o intentaban sumar apoyos en el ámbito legislativo o local. Como se mencionó anteriormente, en 2005 la "renovación" pasó de ser postulada en el espacio nacional para establecerse en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, sede de la "vieja política", personificada por Duhalde y el "aparato" del PJ. En el discurso se producía un movimiento que iba de lo nacional a lo local y de lo local a lo nacional, como se ve en las palabras de Cristina Fernández de Kirchner:

> "Se trata de algo más que una provincia. Se trata de Argentina. se trata de algo más que de un partido. No es cuestión de un hombre, o dos o tres, por más voluntariosos y convincentes, se trata de hacerle comprender a algunos que los Argentinos han decidido cumplir la mayoría de edad, que no quieren más tutelaje, que quieren que quien sea Presidente, sea Presidente, que quien es Gobernador, sea Gobernador. Porque está en el ejercicio democrático de ellos la voluntad del cambio.[31]

El escenario local aparecía así como el ámbito donde se jugaba la continuidad del cambio nacional. Por otro lado, era la provincia lo que había que renovar, para que allí también se diera el cambio.

El movimiento hacia lo local se vio claramente en la campaña electoral de 2007 en la que Cristina Fernández de Kirchner se candidateaba para suceder a Néstor Kirchner en la presidencia. En el Conurbano bonaerense –espacio privilegiado del movimiento hacia lo local- en los eslóganes de campaña de los candidatos a intendente se enfatizaba la relación entre el "cambio" nacional y el "cambio" local, como sucediéndose en el tiempo. Por ejemplo, en Quilmes, la consigna "por un Quilmes en serio", copiaba el lema de "por un país en serio" de la campaña de Kirchner en 2003. En la campaña para la intendencia de Almirante Brown, se presentaba el candidato junto al slogan "En Brown, ahora empieza el cambio", que implicaba que el cambio que se venía llevando adelante en otros espacios "ahora" llegaba al distrito. En Lanús, los afiches con la imagen de Cristina Fernández de Kirchner y el candidato a intendente eran acompañados por la frase "Llega el cambio, llega Darío". En los tres casos aparece en pocas palabras expresada la llegada de lo "nuevo" tiene un tiempo (ahora, después de haber producido la renovación en otros espacios) y espacio (llega claramente delimitados.

Al asumir sus cargos, los intendentes "renovadores" señalaban el pasaje de la crisis de 2001 al momento de la elección de 2007 como un proceso continuo desde lo alto hacia lo bajo:

> "El gobierno del presidente Kirchner recuperó parte de esa confianza perdida. Sin embargo, durante este tiempo, [el municipio] ha ido a contramano del proyecto nacional. Y no sólo no se ha hecho nada por reconstruir el vínculo entre el intendente y los vecinos sino que se ha pretendido imponer un pensamiento único que sólo ha acrecentado las diferencias. Hoy, cuando deberíamos estar discutiendo las formas y las herramientas para profundizar los lazos institucionales, el pueblo del [municipio] sigue reclamando lo mismo que en el 2001, cuando el país se incendiaba y la sociedad argentina estuvo a paso de desintegrarse."[32]

[31] Cristina Fernández de Kirchner, La Plata, 7 de julio de 2005.

[32] Discurso de Asunción a la intendencia de Quilmes, 11 de diciembre de 2007.

Lo que se percibía era un desfasaje entre las transformaciones nacionales y locales, una desconexión entre el "cambio" en un territorio ficcional (el país) y la "continuidad" de las viejas políticas en otro territorio (el municipio). Otros fragmentos de entrevistas remarcan esta interpretación:

> "Bueno, me parece que en el 2003 se da un cambio en la cuestión económica y esto arrastra a la situación política, y lo político lleva además a interpretar la necesidad de un cambio económico, de un modelo productivo, de acumulación, de lo que se esta desarrollando hoy. Ahora, 2003… 2008… 2007… es evidente que eso avanzó en todos los lugares y esto además genera también que la gente expresa más libertad, participa más, se moviliza más, discute más, proyecta más, etc. Pero esa cosa que la gente visualiza a nivel nación, digamos, Kirchner ahí, hoy con Cristina, no se traduce en todos los lugares igual. Para abajo no es tan así. Hay lugares donde se dio una lucha por las condiciones del cambio pero el cambio no se dio en lo político."[33]

Como mencionamos anteriormente, la renovación nacional se reproduce a partir de su desplazamiento al ámbito local, y al mismo tiempo las candidaturas locales se legitiman por su relación con el proceso de cambio que se dio a nivel nacional a partir de 2003. Lo que hace a unos y otros renovadores, es entonces, que en cada uno se expresa lo que ocurre en el otro espacio. Así es como "renovador" se llama a aquél que mejor expresa la política nacional, y la política nacional es "renovadora" porque fomenta el "cambio" en otros espacios de poder político.

Un tercero giro discursivo que subvierte la contradicción entre "renovación" y poder, es aquél referido a *la campaña permanente*. En un discurso en el que se refería a los pactos "buenos" y "malos" de la política en la historia argentina reciente, Cristina Fernández de Kirchner, sostenía que

> "Hay un nuevo pacto: el que usted firmó con el Pueblo el 25 de mayo del 2003, ese pacto que honró en las negociaciones de la deuda externa, ese pacto que honró en las negociaciones con las privatizadas, por primera vez con control parlamentario en toda la historia; ese pacto que honra todos los días cuando afirma que no va a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. Este pacto con el Pueblo es lo que le molesta a la vieja dirigencia.[34]

En un discurso de campaña –por el lanzamiento del Frente para la Victoria a nivel nacional, en el marco de la presentación de su candidatura a senadora nacional- Cristina Fernández de Kirchner explicaba cómo la elección de 2003 er un pacto entre el electorado y el presidente que se reeditaba en cada coyuntura específica, haciendo las veces de una nueva elección.
Lo interesante de la idea de "campaña permanente" es que, por un lado, en cada momento de acción gubernamental organiza una puesta en escena donde aparecen unos contra otros, donde se busca la legitimación de la opinión. Por otro lado, en los discurso

[33] Entrevista a intendente, 27 de febrero de 2008.
[34] Lanzamiento del Frente para la Victoria Argentina en el Monumento a la Bandera de la Ciudad de Rosario, 24 de Agosto de 2005.

gubernamentales se hace referencia explícita a que no se está en campaña permanente, realizando por ello una campaña en la que se opone a los que "hacen" –que "hablan" de aquello que "hacen"- de a los que "hablan" –que "hacen" campaña hablando. El discurso que condena la campaña permanente es, en consecuencia, un discurso de campaña permanente. Por ejemplo, en 2006, Kirchner sostenía en un acto en que inauguraba viviendas en La Plata que

> "… Un país no puede vivir de campaña en campaña, cuando llega la hora de las elecciones allí vamos, con toda nuestra fuerza, nuestra voluntad y nuestras convicciones. Pero ahora no nos van a sacar del camino, no voy a entrar en disquisiciones electorales, mi tarea es trabajar por el pueblo, para el pueblo, gobernar, gobernar y gobernar. Los que tienen tiempo, si quieren hacer campaña en la democracia es amplio y lo permite todo, pero nosotros, los hombres de Gobierno, querido intendente, querido gobernador y todos los hombres y mujeres que tienen responsabilidades en este país, tenemos que hacer nuestro aporte generoso, responsable, serio a la gobernabilidad, a gobernar todos los días que esto es lo que necesita la Argentina y esto es lo que están esperando todos para que esta Argentina siga creciendo."[35]

En el discurso de Kirchner aparece numerosas veces la cuestión de la campaña, a la que se le resta importancia en comparación con la acción gubernamental –que también es parte de la campaña. Nuevamente, dirigiéndose a la audiencia presente y a los televidentes, mencionaba que cuando dejase la presidencia buscaría haber alcanzado el objetivo de "salir del infierno" y pedía a los dirigentes que dejasen de lado la cuestión de las candidaturas:

> "Quiero decirles a todos los dirigentes de este país que éstas son horas de trabajo, de esfuerzo; las discusión de las candidaturas es para el año que viene. A trabajar, eso es lo que necesita el pueblo argentino. Nuestro pueblo va a decidir el año que viene sabiamente, como decide siempre, y todos los argentinos deberemos acatar la decisión como corresponde."[36]

Como hemos visto, la "renovación" postula un problema para el ejercicio del gobierno, porque al ocuparse el lugar del poder parece agotarse la fuente de la cual la renovación recibe su legitimidad –estar contra el poder, fragilizar el poder, revelar la inestabilidad de la ocupación del poder. Este problema, como mencionamos anteriormente, se presenta en diferentes variantes en la historia reciente argentina, sea porque el discurso de la renovación se ha evocado sólo durante campañas, sea porque el sostenimiento del discurso de la renovación parecía incompatible con la "gobernabilidad". Llamativamente, en el último período que se abre con la elección de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003, "renovación" y poder parecen reforzarse mutuamente. Este cambio se da a partir de un giro discursivo que implica *hacer como si el poder estuviera en otro lugar*.

IV. Reflexiones finales

[35] Acto de inauguración de viviendas en barrios de la Ciudad de La Plata, 28 de junio de 2006.
[36] Acto en Moreno, 9 de noviembre de 2006.

Las apelaciones a la "renovación" y la "nueva política", hoy más centrales que en el pasado en la competencia política, presentan una paradoja: para ocupar y permanecer en el poder, se hace hincapié en la artificialidad, perennidad y fragilidad que caracterizan a dicha ocupación. Así es como algo que podría considerarse una debilidad del poder en la democracia –su carácter indeterminado y frágil- deviene una fortaleza política y, en sentido contrario, lo que hace fuerte a un candidato en la competencia –su autorrepresentación como nuevo, joven, renovador, *outsider*- lo debilita al ocupar el poder –porque su cambio de lugar lo convierte en parte de lo "viejo", y en consecuencia, ilegítimo.

Las tensiones y los giros discursivos analizados en el presente artículo se refieren al "tiempo" y el "espacio" como categorías que instituyen la forma que adopta el poder en la sociedad democrática. Si bien es cierto que toda fuerza política o proyecto está sujeto a la perennidad, lo que hace interesante al caso de la "renovación" y la apelación a lo "nuevo" es que evidencia los problemas alrededor de la ocupación de un lugar que se figura como constitutivamente "vacío". Estos problemas son, en primer lugar, que la distancia entre representantes y representados se vuelve a hacer presente luego de la elección; segundo, que lo "nuevo" deviene "viejo" instantáneamente al pasar al poder, como si ocupar un espacio –el del poder político- alterara el ritmo del tiempo; tercero, porque gobernar implica que un cuerpo esté en el poder, por lo que no puede darse lugar permanentemente a la negatividad. Partiendo de estas tensiones, el giro reciente en el discurso político de la renovación parecería operar justamente sobre la dimensión temporal y espacial del poder –sobre la definición de ese "lugar vacío"- mediante la definición de uno o más lugares del poder y de uno o más tiempos en los que la renovación tiene lugar.

Si lo social se caracteriza por ser instituido políticamente, es decir que todo orden es contingente, entonces las dimensiones de tiempo y espacio –que son parte de la constitución de una forma de sociedad determinada, con sus particiones, lugares y ritmos- no pueden considerarse exentas de este proceso de institución. Lo que en principio valdría para todo discurso político en su sentido instituyente –la configuración de un tiempo y espacio propios, de un relato de lo que fue, lo que es y lo que será, de una representación de la "realidad"- es especialmente apropiado para definir a los discursos de la renovación, pues éstos construyen caracteres de "novedad", "juventud", "vejez", de quienes están "dentro" y "fuera", dando forma de manera permanente al fluir del tiempo y las relaciones del espacio.

Es por ello que el giro en el discurso renovador para hablar desde el lugar del poder muestra que la renovación da un nuevo sentido al "vacío". Esto podría formularse de la siguiente manera: así como otros discursos políticos, *el discurso de la renovación pone en escena la reconfiguración permanente del sentido espacio-temporal del poder como "lugar vacío"*. Primero, porque si bien los gobernantes ocupan el lugar del poder –lo llenan-, expanden dicho espacio para "representar" con sus cuerpos a la totalidad de la sociedad democrática, y a la vez figuran de manera simbólica otros poderes "llenos", "encarnados" (los corporativos) que por contraste definen al poder político como uno frágil, sujeto al cambio permanente. Segundo, porque el lugar del poder se particiona imaginariamente en porciones territoriales y en niveles, y no es uno sino muchos, por lo que la renovación está en mostrar que el poder es un lugar vacío en cada una de esas instancias, creando al mismo tiempo dicha representación. Tercero, porque la permanencia en el gobierno se

soslaya con la campaña permanente, haciendo como si el poder no estuviera ocupado hoy por la anticipación de no estar ocupado en el tiempo futuro.

Bibliografía

Abal Medina, J. (2006). Explicando las causas internas del surgimiento y crisis del Frente Grande. En *Los senderos de la nueva izquierda partidaria.* Buenos Aires: Prometeo.

Aboy Carlés, G. (1996). De Malvinas al menemismo. Renovación y contrarrenovación en el peronismo. *Sociedad*, 10: 5-31.

Altamirano, C. (2004). 'La lucha por la idea': el proyecto de la renovación peronista. En M. Novaro, M. y V. Palermo (comps.), *La historia reciente. Argentina en democracia*. Buenos Aires: Edhasa.

Annunziata, R. (2012). ¿Hacia un nuevo modelo de lazo representativo? La representación de proximidad en las campañas electorales de 2009 y 2011. en I. Cheresky y R. Annunziata (comps.) *Sin programa, sin promesa. Liderazgos y procesos electorales en Argentina*. Buenos Aires: Prometeo.

Cheresky, I. (1999). *La innovación política. Política y derechos en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Eudeba.

Cheresky, I. y Pousadela, I. (comps.) (2004). *El voto liberado. Elecciones 2003: perspectiva histórica y estudio de casos*. Buenos Aires: Biblos.

Cheresky, I. (comp.) (2006). *La política después de los partidos.* Buenos Aires: Prometeo.

Cheresky, I. (2008). *Poder presidencial, opinión pública y exclusión social*. Buenos Aires: CLACSO-Manantial.

Corral, D. (2007). La seducción del instante y el hastío de la duración. El liderazgo de "Chacho" Álvarez y el devenir de la centroizquierda en los 90'. En E. Rinesi, G. Nardacchione y G. Vommaro (comps.) *Los lentes de Víctor Hugo. Transformaciones políticas y desafíos teóricos en la Argentina reciente.* Buenos Aires: Prometeo/UNGS.

De Ípola, E. (1987). La difícil apuesta del peronismo democrático. En J. Nun y J. C. Portantiero (comps.), *Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina*. Buenos Aires: Puntosur Ediciones.

Gattoni, S. y D. Rodríguez (2009). "Créase o no: alternancia política y desagregación de los poderes locales en el conurbano bonaerense (2005-2007)". En I. Cheresky (ed.), *Las urnas y la desconfianza ciudadana en la democracia argentina*. Rosario: Homo Sapiens.

Gordillo, M. y v. Lavagno (1987). *Los hombres de Perón.* Buenos Aires: Puntosur.

Kirchner, N. y T. Di Tella (2003). *Después del derrumbe*. Buenos Aires: Galerna.

Lefort, C. (1985). El problema de la democracia. *Opciones*, 6: 73-86.

Lenarduzzi, J. (2012). La revelación del poder como lugar vacío: apelaciones a la "renovación" y la "nueva política" en la Argentina reciente. En I. Cheresky y R. Annunziata (comps.) *Sin programa, sin promesa. Liderazgos y procesos electorales en Argentina.* Buenos Aires: Prometeo.

Manin, B. (1996). *Les principes du gouvernement representatif.* Paris: Flammarion.

Maronese, L., A. Cafiero de Nazar y V. Waisman (1985). *El voto peronista. Perfil electoral y causas de la derrota*. Buenos Aires: El Cid Editor.

Mosca, G. (1992) [1896]. La clase política. En A. Batlle (ed.), *Diez textos básicos de ciencia política*. Barcelona: Ariel.

Natanson, J. (comp.) (2004). *El presidente inesperado*. Rosario: Homo Sapiens.

Novaro, M. (2000). *Representación y Liderazgo en las democracias contemporáneas*. Rosario: Homo Sapiens.

Novaro, M. y V. Palermo (1998). *Los caminos de la centroizquierda: dilemas y desafíos del Frepaso y de la Alianza.* Buenos Aires: Losada.

Podetti, M., M.E. Ques y C. Sagol (1988). *La palabra acorralada, la constitución discursiva del peronismo renovador.* Buenos Aires: FuCaDe.

Rosanvallon, P. (2007). *La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza*. Buenos Aires: Manantial.

Rosanvallon, P. (2010). *La legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad, proximidad*. Buenos Aires: Manantial.

Unamuno M., et. al. (1984). *El peronismo de la derrota*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.